

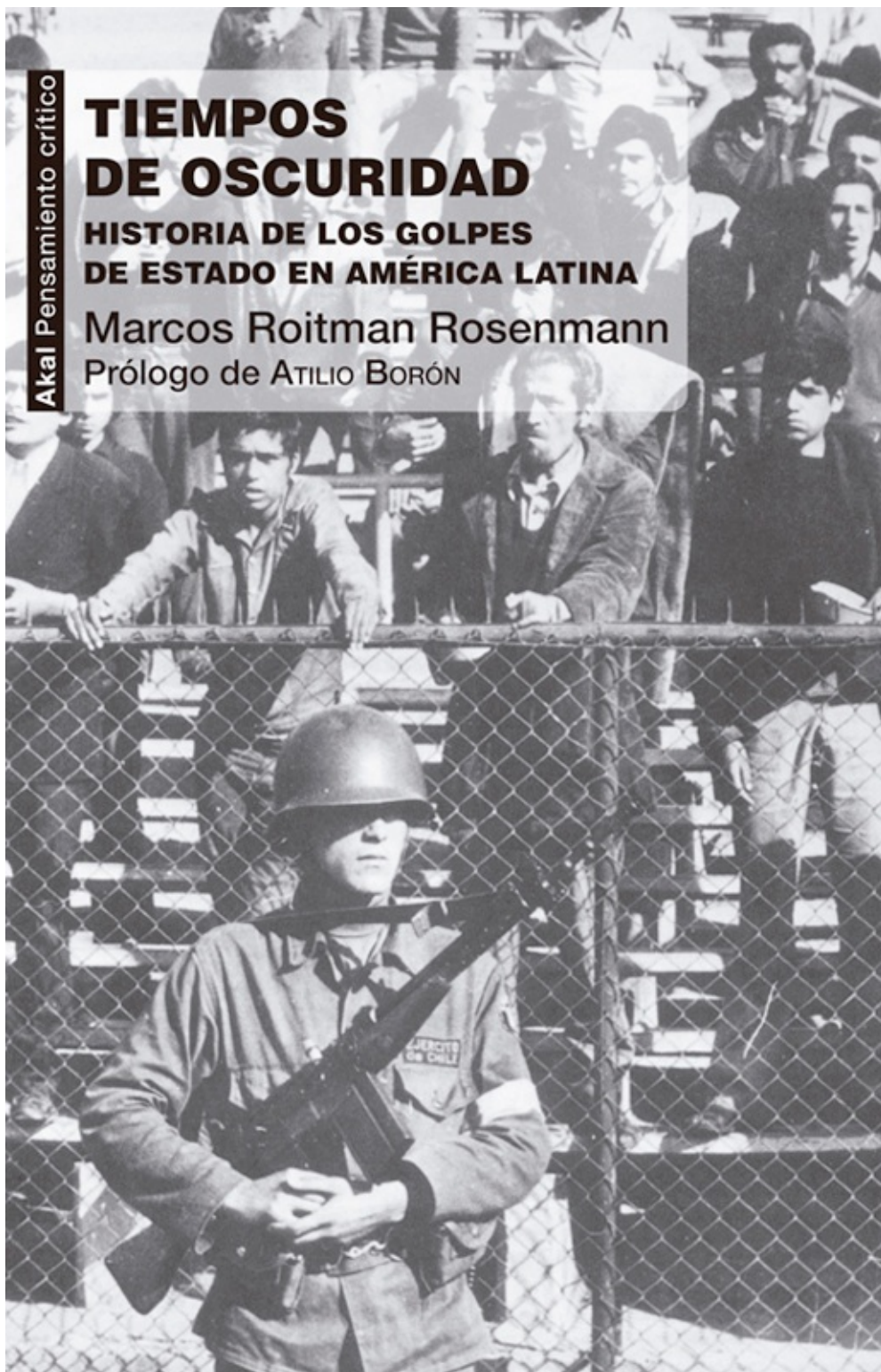
Akal Pensamiento crítico

TIEMPOS DE OSCURIDAD

HISTORIA DE LOS GOLPES
DE ESTADO EN AMÉRICA LATINA

Marcos Roitman Rosenmann

Prólogo de ATILIO BORÓN



Akal / Pensamiento crítico / 26

Marcos Roitman Rosenmann

Tiempos de oscuridad

Historia de los golpes de Estado en América Latina



Diseño de portada
Sergio Ramírez

Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.

Nota a la edición digital:

Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.

© Marcos Roitman Rosenmann, 2013

© del Prólogo, Atilio Borón, 2013

© Ediciones Akal, S. A., 2013

Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España

Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028

www.akal.com

ISBN: 978-84-460-3901-3

A todas las víctimas que sufrieron la persecución anticomunista, dieron sus vidas y combatieron la explotación capitalista. A los pueblos de Nuestra América que luchan por recuperar la dignidad y romper la dependencia imperialista.

Prólogo

Es una inmensa satisfacción para este prologuista escribir algunas líneas a modo de introducción a un libro excelente y a la vez necesario: *Tiempos de oscuridad. Historia de los golpes de Estado en América Latina*, de Marcos Roitman Rosenmann. Lo primero por su rigurosidad, la solvencia de sus fuentes documentales y la consistencia de toda su argumentación, a lo que se agrega, en sus páginas finales, una conveniente cronología de los golpes de Estado que asolaron la región. Lo segundo, necesario porque las luchas democráticas de nuestro tiempo requieren claridad ideológica para identificar aliados y enemigos a la vez que un conocimiento exhaustivo de nuestro turbulento pasado, imprescindible para una correcta praxis política del presente. Ambas cosas son las que ofrece en esta obra su autor, en su minucioso recorrido por la historia de la dominación a la que fueran sometidos nuestros pueblos: una dominación oligárquica primero, burguesa después, e imperialista siempre, y por eso mismo pautada por una ininterrumpida sucesión de golpes de Estado que conmovieron las entrañas de nuestra América.

Roitman Rosenmann demuestra claramente que el tipo de golpe de Estado clásico, protagonizado por las fuerzas armadas, ha caído en desuso: genera enormes resistencias en la conciencia política de nuestra época, que a partir de las atroces violaciones a los derechos humanos perpetradas por los militares golpistas está muy poco predispuesta a avalar la imposición de dictaduras militares o golpes de estado realizados por las fuerzas armadas con la permanente bendición y apoyo político, económico y logístico de los Estados Unidos en el tenebroso marco de la Guerra Fría. En línea con la creciente importancia que Washington le atribuye al «*soft power*» los procesos de subversión del orden constitucional en países considerados hostiles a los intereses de Estados Unidos utilizan ahora una metodología completamente diferente, misma que es examinada en detalle en la obra que el lector ahora tiene en sus manos. Instituciones fundamentales para este propósito son la USAID, United States Agency for International Development; el NED, National Endowment for Democracy; el National Democratic Institute (NDI) y el International Republican Institute (ISI) y, por supuesto, todo el andamiaje mediático internacional que en buena medida se controla desde Estados Unidos.

En fechas recientes Mark Feierstein, administrador adjunto para América Latina y el Caribe de la USAID, confirmó públicamente que su agencia disponía de un multimillonario presupuesto para ayudar a candidatos opositores o a sectores antigubernamentales en países como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y, por supuesto, para propiciar el «cambio de régimen» en Cuba. Según las declaraciones de este alto funcionario Washington prioriza el apoyo a las fuerzas opositoras que «están luchando por los derechos humanos y la democracia» en los países del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP) y otras naciones del área^[1]. Según la investigadora estadounidense Eva Golinger a través de la NED y la USAID

«Washington ha canalizado más de 100 millones de dólares a grupos antichavistas en Venezuela desde el 2002». No solo eso, «en febrero 2011, el presidente Barack Obama solicitó cinco millones de dólares en su presupuesto nacional para el 2012 para financiar grupos antichavistas en Venezuela. Fue la primera vez que un presidente estadounidense había solicitado dinero abiertamente para financiar grupos de la oposición venezolana, además de hacerlo en su presupuesto nacional, y en un momento cuando él mismo está recortando fondos para los servicios sociales de los propios estadounidenses». A partir del examen de las cifras del presupuesto de la embajada de Estados Unidos en Venezuela la citada investigadora concluye que «esos cinco millones de dólares no son sino la cuarta parte del dinero que Washington ya está preparando para enviar a la oposición venezolana en 2012»[2]. Como dice la investigadora arriba citada y como lo ratifica en su detallado análisis Roitman Rosenmann, ejemplos de esto mismo se multiplican, si incorporamos al análisis los otros países del ALBA como Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y los pequeños países del Caribe.

¿Cómo interpretar esta conducta del gobierno estadounidense? Sin duda tiene que ver con algo que se examina en este libro: Washington, vapuleado en Mar del Plata con el rechazo del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), lanza una contraofensiva restauradora en América Latina y el Caribe con el propósito no declarado pero evidente de retrotraer las relaciones hemisféricas a la situación imperante antes de la Revolución cubana. Esto no deja de ser una absurda ilusión, pero no por ello menos peligrosa para nuestros pueblos puesto que en su renovada belicosidad el imperio está dispuesto a infringir cuantas premisas éticas o normas internacionales se opongan a sus siniestros designios. Una de las tantas pruebas de ello, no siempre suficientemente destacadas en los análisis, es la ilegalidad del activo intervencionismo estadounidense en las elecciones que se libran en Latinoamérica, algo que Estados Unidos jamás consentiría en su propio territorio. Es decir, ¿que lo que allí es ilegal e inmoral, aquí se convierte en algo legal y virtuoso? Por ejemplo, la Ley Federal de las Campañas Electorales de Estados Unidos prohíbe explícitamente a cualquier extranjero, sea persona física o moral, «contribuir, donando o gastando fondos, de forma directa o indirecta, en cualquier elección local, estadual o federal». La misma ley establece que quienes violen esta norma legal podrán ser pasibles de severas multas e inclusive prisión[3]. En un craso ejemplo de doble discurso e hipocresía diplomática lo que Washington condena taxativamente puertas adentro lo practica abierta e impunemente en el resto del mundo.

Como decíamos más arriba, el golpismo contemporáneo ya no es el de antes. Pasa por una amplia variedad de formatos que han postergado –aparentemente más que para siempre– el clásico golpe militar de antaño. Si ahora hay que apelar a la coerción quien se encarga de ello es la policía, que en casi todos los países del área ha venido siendo adiestrada y equipada por diversas agencias de los Estados Unidos. Eso fue evidente en la tentativa de Golpe de Estado de Ecuador, en 2010, y posteriormente en la «inquietud» de las fuerzas policiales en Bolivia durante 2011 y 2012. Pero la coerción militar tan preponderante en el pasado cede ahora protagonismo a otras formas de presión, de ahí aquello del *soft power*: derrocamientos «institucionales» de gobernantes legítimos apelando al protagonismo de los congresos o el poder judicial, «golpes de mercado» puestos en evidencia por la fuga de capitales, huelga de

inversiones, acaparamientos y desaparición de suministros básicos, bloqueos de remesas (para el caso de países con numerosa población emigrada radicada en Estados Unidos o Europa) son algunos de los tantos dispositivos que en el pasado han demostrado poseer una extraordinaria eficacia para derrumbar gobiernos o influir en la voluntad del electorado. Recuérdese al efecto el impacto devastador que se verificó en las elecciones presidenciales del 21 de marzo del 2004 en El Salvador. En esa ocasión, el candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Schafik Handal iba liderando cómodamente las encuestas preelectorales hasta el momento en que el imperialismo, con la imprescindible colaboración de la oligarquía salvadoreña, lanzó una fuerte contraofensiva destinada a impedir su segura victoria. Primero fueron los senadores y congresistas del Partido Republicano quienes hicieron saber lo perjudicial que sería para El Salvador tener un presidente con los antecedentes radicales de Handal. Poco después fueron altos personeros de la Administración Bush –incluyendo la jefa del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, Condoleezza Rice y varios secretarios del Ejecutivo Federal– así como personalidades prominentes de la derecha norteamericana, entre los que sobresalían gentes de antecedentes tan delictivos como los del representante Lincoln Díaz-Balart, Otto Reich y Roger Noriega, todos ellos íntimamente ligados a grupos anticastristas y terroristas radicados en Miami. Esta campaña de intimidación y después de terror fue sumamente efectiva porque Handal comenzó a descender en las encuestas, hasta que desde Washington llegaron dos mandobles decisivos: primero, una filtración informativa según la cual el Departamento de Estado habría enviado un mensaje a las empresas estadounidenses radicadas en El Salvador para preparar planes de contingencia, que contemplaban un eventual abandono del país, en caso de que Handal triunfara en las elecciones. Poco después surgió el rumor de que los salvadoreños residentes en Estados Unidos –y cuyas remesas de dinero eran fundamentales para sus familiares– podrían ser deportados a El Salvador y, finalmente, en la última semana previa a las elecciones, el anuncio de un oscuro congresista republicano, Thomas Tancredo, quien declaró que presentaría ante la Cámara de Representantes una moción para bloquear las remesas de los ciudadanos salvadoreños residentes en Estados Unidos de concretarse el triunfo de Handal. Poco después, este se derrumbaba en las encuestas y caía derrotado, el día de la elección, a manos de un menos que mediocre personaje, candidato de la derecha radical y conocido peón del imperio, Elías Saca, quien se impuso con un apabullante 58 por 100 de los votos contra apenas el 36 por 100 obtenido por Handal. Podría argüirse que no todos los países tienen la vulnerabilidad de El Salvador, con su gran masa de emigrantes radicados en Estados Unidos y algunos países europeos, principalmente España. Obviamente, es una cuestión de grado, pero sin duda puede afectar seriamente a otros como República Dominicana, Haití, Jamaica y Ecuador.

De todos modos, el inmoral e ilegal intervencionismo estadounidense en las campañas electorales de los países de América Latina es un asunto que viene de lejos. En la Argentina esta conducta se hizo patente en las elecciones presidenciales de 1946, que oponía la fórmula Juan Perón / Hortensio Quijano contra José P. Tamborini / Enrique Mosca, de la Unión Democrática. Tan activa fue la intervención de «la embajada» en la campaña que Perón logró capitalizar magistralmente el sentimiento de rechazo que gran parte de las capas populares

argentinas sentían ante el desembozado protagonismo del embajador norteamericano elaborando la consigna «Braden o Perón». El resultado es archisabido y marcó para siempre la historia argentina. Pero el de Spruille Braden, uno de los dueños de la Braden Copper Company, es un caso de extrema desfachatez a tal grado que las reuniones del comando de la Unión Democrática se hacían en la embajada de Estados Unidos. Posteriormente comenzaron a apelar a formas menos aparatosas de intervención: «desinteresadas» campañas de información tergiversada o abiertamente falsa que aterrorizaban o intimidaban a la población, como las que se lanzaron en contra de la candidatura de Salvador Allende en Chile en 1958, 1964 y 1970, esta última vez sin los efectos deseados al no poder frustrar su victoria electoral. Campañas de terror que auguraban toda clase de desgracias e infortunios si es que el pueblo «se equivocaba» y elegía al candidato incorrecto.

Tal como lo corrobora el autor en este libro, en la actualidad se han ido perfeccionando nuevos dispositivos golpistas: sobresalen el amañado manejo de la institucionalidad política – sobre todo del congreso y la judicatura– y el creciente control de los medios de comunicación de masas, capaces de crear «climas» de opinión de decisiva importancia a la hora de erosionar las bases del poder de un presidente desafecto o para preparar operaciones golpistas apelando a los nuevos mecanismos arriba descritos. En síntesis, este libro demuestra que el imperio no descansa y que las luchas por la democracia y para sostener los avances sociales y políticos que en algunos países de la región se registraron en los últimos años serán cada vez más encarnizadas, debiendo enfrentar nuevas formas de golpe de Estado e inéditos dispositivos de intervención imperialista diseñados para acomodar las realidades políticas de América Latina y el Caribe a los intereses de la gran potencia. Dicho en otros términos, para acabar no solo con la Revolución cubana sino con las distintas expresiones del «bolivarianismo» como las que hoy se dan en Venezuela, Bolivia y Ecuador aunque sin olvidar la domesticación de otros proyectos políticos más moderados pero que para los halcones de Washington son «cómplices» de los primeros. «Poner la casa en orden» en una época tan crítica como la actual es la prioridad de Washington para lo que en una época no muy lejana era su obediente patio trasero.

No quisiera terminar estas líneas sin resaltar la incisiva reflexión del autor cuando introduce importantes distinciones entre el Golpe de Estado y la insurrección revolucionaria de las clases y capas explotadas de una sociedad. El pensamiento convencional de la ciencia política, nada inocentemente, confunde ambas cosas, de la misma manera que coloca en una misma categoría las experiencias históricas de la Revolución rusa y el fascismo alemán, ambos subsumidos bajo una imprecisa categoría: «regímenes totalitarios», incapaz de distinguir el significado histórico de una forma estatal capitalista que procura la restauración salvaje del amenazado orden burgués y un proyecto obrero y campesino encaminado a fundar una sociedad poscapitalista. En un caso, se trata de una reversión de la democracia burguesa hacia una forma estatal despótica pero siempre al interior del mismo tipo de estado, el capitalista. En la insurrección revolucionaria, en cambio, de lo que se trata es de construir un nuevo tipo de estado de transición hacia el socialismo, progresivamente despojado de los grilletes que la ley del valor impone a la política en la sociedad capitalista. Es muy importante

tomar nota de esta distinción, cuyos influjos se dejan sentir en buena parte del aparato conceptual de las corrientes hegemónicas de la ciencia política, invariablemente al servicio del capital.

Para concluir, un libro que aporta una prolija y muy bien documentada reconstrucción histórica del golpismo en América Latina y el Caribe, y que retrata con lujo de detalles las novísimas innovaciones técnicas de los golpes de estado que permanentemente promueve Washington para mantener esta parte del mundo bajo su predatorio control. Un libro que, como dijimos más arriba, gracias a sus virtudes se convertirá en una importante arma intelectual para las batallas políticas que se avecinan y que ha sido un honor prologar.

Atilio A. Borón
Buenos Aires, junio de 2013.

[1] Así lo consigna en su edición del 20 de junio del 2012 el diario ecuatoriano *El Telégrafo*. Véase más en <http://www.telegrafo.com.ec/actualidad/item/usa-id-admite-que-financia-a-la-oposicion-en-paises-de-la-alba.html>

[2] <http://www.cubadebate.cu/especiales/2011/08/11/eeuu%C2%A020-millones-para-la-oposicion-en-venezuela-en-2012/>

[3] Stephen Lendman, «Washington Supports Venezuelan Opposition», *Daily Censored*, Marzo 21, 2013. [<http://www.dailycensored.com/washington-supports-venezuelan-opposition/>]

Introducción

En medio de la crisis global del capitalismo, levantar la alternativa anticapitalista se considera un anacronismo. Declararse marxista y comunista concita mofa. El insulto es una práctica recurrente para descalificar a dirigentes políticos, sindicales y líderes de movimientos sociales e intelectuales, partidarios del socialismo marxista.

Sin embargo, la lucha contra el comunismo sobrepasa la ofensa verbal. El fin perseguido es aniquilar política y físicamente a sus defensores. La guerra psicológica, el miedo y las campañas publicitarias *ad hoc* presentan el comunismo como una amenaza para la familia, el individuo, la moral católica, la propiedad privada y el mercado. Por consiguiente, cuando el movimiento popular gana espacios de representación política y se constituye en una opción real de cambio social, la burguesía y sus aliados se quitan la careta. La clase dominante no tiene empacho en recurrir a la técnica del golpe de Estado para evitarlo. Cuando lo hace, abandona los principios que tanto enarbola, el *habeas corpus*, la libertad de asociación, reunión y expresión. Los golpes de Estado y el anticomunismo marchan juntos en la historia. Sus comienzos fueron inorgánicos y difusos, pero a medida que los partidos obreros crecieron, el anticomunismo se vertebró como parte de la razón de Estado.

Si hacemos historia, podemos remontarnos a la publicación del *Manifiesto comunista* en 1847 y la fundación de la Primera Internacional en 1864 para datar el inicio de la persecución de comunistas, socialistas y anarquistas. Cualquier excusa sirvió para encarcelar, reprimir, censurar y asesinar a sus militantes. La represión ejercida sobre la Comuna de París, entre los días 21 y el 28 de mayo de 1871, evidenció la inexistencia de límites cuando se trata de restablecer el orden burgués. Conocida como la «Semana Sangrienta», el ejército actuó contra los sublevados dejando un balance de 30.000 muertos y una ley marcial que se mantuvo durante cinco años.

Entrado el siglo xx, con el triunfo de la Revolución rusa y el nacimiento de la Tercera Internacional se clarificó la dirección de la estrategia anticomunista. El enemigo tomó cuerpo en el Comintern y la revolución comunista. El peligro acechaba y era obligado blindarse. No hubo vuelta atrás. Las declaraciones de la Tercera Internacional, llamando a la revolución mundial del proletariado, dieron la voz de alarma. Liberales, conservadores y socialdemócratas unieron sus fuerzas para impedirlo. Al anticomunismo se unía la guerra sucia. No importaban los métodos ni los costes con tal de salvaguardar los intereses de clase del capitalismo.

Pocos han sido los momentos en el cual la burguesía liberal y su razón cultural se sintiesen amenazadas por otro fenómeno que la desplazara del poder político. Cuando tomó conciencia de esa posibilidad, recurrió a su principal enemigo y buscó el apoyo de la izquierda marxista y comunista. Se trató de la emergencia del nazismo-fascismo en los años treinta del siglo pasado. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales abrazaron como aliado a la URSS y la resistencia partisana. El objetivo era evitar el triunfo del Tercer Reich. Fue el

concurso de la Unión Soviética, la derrota del ejército nazi en Stalingrado, lo que frenó el avance de Alemania y los países del Eje. En el recuerdo, si atemperamos datos, yacen veinte millones de ciudadanos soviéticos, entre civiles y militares, asesinados en la ofensiva nazi.

El lanzamiento de las dos bombas atómicas sobre Japón en Hiroshima y Nagasaki, el 6 de agosto de 1945, puso un dramático final a la Segunda Guerra Mundial. Los países del Eje capitularon. El enemigo había sido derrotado. Ahora, el comunismo podía volver a ser el enemigo a derrotar. Se acabaron las buenas maneras y se desataron las hostilidades. El 12 de marzo de 1947, el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, pronunció un discurso histórico, llamando a preservar la forma de vida de Occidente frente al terror comunista. Son las bases de la Guerra Fría.

La persecución de socialistas marxistas y comunistas se convirtió, en los países occidentales, en una labor prioritaria, al tiempo que se producía un acercamiento con antiguos nazis, dotándolos de identidades falsas y protegiéndolos. Estados Unidos recibiría cientos de ellos para trabajar en sus planes anticomunistas. El Juicio de Núremberg, celebrado en 1946, era historia.

Sin contemplación, se declaró la guerra a muerte a los afiliados y simpatizantes comunistas en todo el mundo occidental. Se ilegalizaron los partidos obreros y bajo el paraguas anticomunista se reprimió a las organizaciones sindicales y políticas, colgándoles el sambenito de subversivos. La tortura, el asesinato y la cárcel son instrumentos utilizados para doblegar voluntades y someter a los pueblos. En Estados Unidos, el senador Joseph McCarthy, emprendió una cruzada contra ciudadanos acusados de profesar ideales comunistas, marxistas socialistas o simplemente por ser familiar, amigo o allegado de alguien que las profesara; se conoció popularmente como la «Caza de Brujas». En 1950, McCarthy llevó al paroxismo el delirio anticomunista, indicando que en el Departamento de Estado trabajan infiltrados más de 200 agentes comunistas. Educadores, científicos, actores, trabajadores en general, miembros del Partido Demócrata o Republicano cayeron bajo el calificativo de filocomunistas. Charles Chaplin, Albert Einstein o Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, entre otros sufrieron la persecución. Oppenheimer fue expulsado de la comisión de energía nuclear. Muchos otros fueron encarcelados, deportados o perdieron sus puestos de trabajo. Como resultado, cientos de personas se suicidaron, miles se exiliaron o directamente abandonaron el país[1].

El control hegemónico de Estados Unidos cambió el eje gravitacional del poder planetario. Los países del llamado Tercer Mundo, Asia, África y América Latina, fueron utilizados como cobayas para llevar a cabo la estrategia anticomunista y de golpes de Estado. Cualquier régimen que osara plantar cara al imperialismo norteamericano sufriría las consecuencias en forma de acciones encubiertas desestabilizadoras, acciones de sabotaje y, por último, patrocinando un golpe de Estado. Nacionalizar las riquezas básicas era razón suficiente. En Irán, la CIA, junto con los servicios de inteligencia británicos, el MI6, idearon el plan que derrocó al presidente Mohammad Mosaddeq el 18 de agosto de 1953. Como recambio, se instauró una de las más férreas tiranías bajo el reinado del Sha Reza Pahlevi. En Guatemala, un año más tarde, la CIA urdió un plan para deponer al general Jacobo Arbenz, presidente

constitucional, que estaba enfrentado con las compañías bananeras. El golpe de Estado cerró el proceso democrático más avanzado conocido en la región centroamericana. La lista se hace interminable, en todos los casos está presente el asesinato político, el exilio y la persecución a los partidos comunistas.

En los años sesenta del siglo pasado, durante el proceso descolonizador en África y Asia, Estados Unidos y sus aliados extenderán el ideario anticomunista, acompañándolo de una estrategia contrainsurgente y antisubversiva, desarrollada en la Guerra de Argelia por Francia, para combatir los gobiernos nacionalistas y antiimperialistas. En 1965, Indonesia sufrió un golpe de Estado que acabó con Achmed Sukarno, líder nacionalista que gobernaba en coalición con el Partido Comunista de Indonesia (PKI). Considerado un peligro para los intereses norteamericanos y un mal ejemplo a seguir, se puso en el poder al general Haji Mohammad Suharto. Entre 1965 y 1966 este asesinó a más de medio millón de personas afiliadas o simpatizantes del Partido Comunista. Un informe redactado en Yakarta por los funcionarios de la embajada de Estados Unidos, en los inicios del genocidio, enviado al Departamento de Estado, señalaba: «El fervor musulmán en Atjeh parece haber dejado fuera de combate a casi todos los miembros del PKI y han clavado sus cabezas en estacas colocadas en los márgenes de los caminos. Se dice que han arrojado los cuerpos de las víctimas del PKI a los ríos o al mar porque los atjeheneses se niegan a contaminar con ellos el suelo de Atjeh»[\[2\]](#). La CIA proporcionó listas de miembros del PKI al nuevo régimen para proceder a su detención y muerte.

En América Latina los golpes de Estado han seguido un itinerario propio bajo la estrategia de la tensión. Primero la guerra psicológica, una cuidada campaña del miedo aludiendo a la amenaza comunista, luego la desestabilización política, el estrangulamiento económico generando un gran mercado negro, evadiendo capitales y, por último, sacando a las hordas fascistas a las calles para crear un estado social de «caos», atacando locales de partidos obreros, sedes sindicales, sabotando puentes, líneas férreas, etcétera. Todo para culminar pidiendo a las fuerzas armadas su intervención para acabar con el desorden social y la ingobernabilidad. Un llamado a salvar la patria con la excusa de existir un plan subversivo para instaurar un régimen totalitario, asesinar a opositores e imponer el terror rojo.

En Chile las fuerzas armadas apelaron a un supuesto «Plan Z» elaborado por la izquierda en dos fases, la del autogolpe y la insurrección armada. En la primera, se detendrían a los principales dirigentes de los partidos opositores, miembros de las fuerzas armadas, periodistas y connotadas personalidades anticomunistas, para, posteriormente, asesinarlos. Luego seguiría la toma de cuarteles y la insurrección popular. En el momento culmen, Salvador Allende saldría al balcón del Palacio de La Moneda para proclamar la República Democrática de Chile, izando en el mástil del Palacio la nueva bandera, toda roja con una estrella pequeña. Dicho Plan Z, publicitado hasta la saciedad desde el momento mismo del golpe, el 11 de septiembre de 1973, nunca pudo ser probado. Quienes se remitieron a él se desdicen y lo consideran parte de la guerra psicológica; eran «o ellos, o nosotros». La Democracia Cristiana participó de esta farsa. Patricio Aylwin declaró pocos días después del golpe de Estado: «Nosotros tenemos el convencimiento de que la llamada vía chilena al

socialismo, que empujó y enarboló como bandera la Unidad Popular, y se exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada, y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Salvador Allende, y por eso ellos se aprestaban a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder, en esas circunstancias, pensamos que la acción de las fuerzas armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o una tiranía comunista»[3].

Muchos fueron los incrédulos que asumieron su existencia. La Junta Militar hizo lo indecible para demostrar su autenticidad, llegando a editar un libro donde se detallaban los objetivos, se ponían nombres y definían las fases del Plan Z: *El libro blanco del cambio de gobierno en Chile*. Este imaginario Plan Z fue punta de lanza para realizar los interrogatorios tras el golpe. A título personal, recuerdo con claridad las dos primeras preguntas interrogado en el Estadio Nacional, en septiembre de 1973: «¿Dónde se esconden las armas?», «¿Cuál era tu misión en el Plan Z?».

Planes inventados, nacimiento de repúblicas democráticas, cambio de la bandera y el escudo nacional, obligación de hablar ruso en las escuelas públicas, lavado de cerebro a los niños mediante virus infectados en la leche donada por los países del Norte de Europa..., argumentos que se instalaron en el discurso oficial para lanzar diatribas anticomunistas y concitar el apoyo de una ciudadanía atónita ante las imágenes del bombardeo del Palacio de La Moneda y los colaboradores del presidente chileno tendidos boca abajo con soldados apuntándoles en la sien y tanques a centímetros de sus cuerpos. Era la ruptura del orden democrático y el fin de la ciudadanía republicana.

El final trágico de la Unidad Popular, el asesinato de miles de personas, el suicidio del presidente Salvador Allende constituyen parte de la historia de este ensayo. Fui uno de tantos jóvenes que vio truncarse el 11 de septiembre de 1973 un proyecto de vida donde no cabía la traición, la tortura, la represión y el odio. La situación era inimaginable. El fascismo, tantas veces estudiado, residual a la cultura política de Chile, tomaba las riendas y pasaba al ataque. A muchos nos pilló por sorpresa, confiamos en la «neutralidad» de las fuerzas armadas. ¿Ingenuidad?, los golpes de Estado no tenían lugar en la historia de Chile, país de tradición democrática ¿Qué mayor garantía contra el *putsch* militar? Al menos hasta 1973, las botas no vencían a los votos. Esta visión idílica se hizo añicos el 11 de setiembre de 1973.

Este año, 2013, se cumplen cuarenta del bombardeo del Palacio de La Moneda y del Golpe Militar chileno. Tiempo suficiente para borrar la imagen de no intervencionismo de las fuerzas armadas chilenas en la vida política del país. Sin embargo, en 1970 ya hubo quienes alertaron de la falsa la neutralidad y el «apoliticismo» de las fuerzas armadas. Sus tesis, lamentablemente corroboradas, fueron poco consideradas. Alain Joxe, en un estudio pionero titulado *Las fuerzas armadas en el sistema político chileno*, dejó claro el peligro de asumir una hipótesis tan benévola de las fuerzas armadas: «Hablar de una tradición continua de no intervención es transcribir por antífrasis –en el nivel ideológico– el hecho de que las intervenciones de las fuerzas armadas, después de la Guerra del Pacífico, han sido en realidad tan importantes y tan decisivas (la Marina en 1981; el Ejército en 1924), que han podido, en

cada ocasión, remodelar el Estado “en forma” con una gran eficacia, de modo que se encuentran inútiles intervenciones numerosas, y que resulta imposible la permanencia durable de las fuerzas armadas en el poder. La reconstrucción –en cada intervención exitosa– de un sistema en el cual la intervención permanente del ejército en los asuntos propiamente políticos no es necesaria, produce una ilusión óptica. Una intervención militar en Chile es perfecta. La tranquilidad política de los militares chilenos proviene de la satisfacción durable del trabajo bien hecho. Por supuesto que no se trata del mismo ejército, ni del mismo trabajo, en 1891 que en 1924/31. La noción de tradición es relativa y se evita decir que el ejército en Chile tiene por tradición intervenir cada treinta o cuarenta años. Puede intentarse explicar la tradición por la historia, pero no el sistema actual por la simple tradición».

Las fuerzas armadas se auparon al poder político. Ellos, elegidos por Dios, tomaron la «patriótica» decisión de derrocar al gobierno «marxista de la Unidad Popular y comenzar la lucha para erradicar el cáncer marxista de raíz [...] salvando a Chile de caer en las garras del comunismo». Así lo esputó el general de la fuerza aérea Gustavo Leigh, miembro de la Junta Militar a la hora de justificar la intervención golpista.

Ser socialista, comunista o militante de la Unidad Popular, a partir del 11 de septiembre de 1973, se convirtió en un delito. Proscritos y perseguidos, sus propiedades fueron expropiadas. Fueron detenidos, torturados o simplemente detenidos y desaparecidos. Aquellos que defendieron y participaron activamente el gobierno de la Unidad Popular engrosaron las filas de subversivos y terroristas a los cuales «exterminar».

Perdí compañeros y amigos. Aun recuerdo las caras de amigos hoy detenidos y desaparecidos. Gregorio Mimica, presidente de la Federación de Estudiantes la Facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica del Estado. Militante comunista, el 12 de septiembre lo vi por última vez en el patio de la facultad, junto a otros dirigentes estudiantiles. Chile entraba en una noche oscura, presagio cruel de lo que se avecinaba.

El 11 de septiembre hubiese sido, para los estudiantes de la Universidad Técnica, un día especial. Salvador Allende acudiría a inaugurar la exposición de cuadros antifascistas. La sedición nos jugo una mala pasada. El bombardeo a la Moneda estaba en su apogeo y las noticias eran inciertas. Aún creíamos que el golpe podía revertirse. Nos insuflamos ánimos, creyendo que tropas, encabezadas por generales leales, a cuyo mando estaría Carlos Prats, abortarían la asonada. Había que resistir. Mantuvimos la ilusión entre gritos de ¡Unidad Popular, venceremos! El 12 de septiembre, los militares entraron fusil en mano, disparando al aire y dando órdenes ¡Todos al suelo, boca abajo, manos sobre la cabeza y pies cruzados! El cuadro era otro.

Habían pasado tres años del triunfo electoral de la Unidad Popular, el 4 de septiembre de 1970. En la memoria, el mitin de la proclamación de Allende celebrado a los pies del cerro Santa Lucía, en la sede de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, lugar emblemático odiado por la derecha. Por su dirección pasaron grandes líderes de la izquierda chilena, entre ellos, Salvador Allende. Sus instalaciones habían sido objeto de múltiples atentados. Allende habló con cordura: «Qué extraordinariamente significativo es que pueda yo dirigirme al pueblo de Chile y al pueblo de Santiago desde la Federación de Estudiantes. Esto

posee un valor y un significado muy amplio. Nunca un candidato triunfante por la voluntad y el sacrificio del pueblo usó esta tribuna que tuviera mayor trascendencia. Porque todos lo sabemos. La juventud de la patria fue vanguardia en esta gran batalla, que no fue la lucha de un hombre, sino la lucha de un pueblo; ella es la victoria de Chile, alcanzada limpiamente esta tarde. Yo les pido a ustedes que comprendan que soy tan solo un hombre, con todas las flaquezas y debilidades que tiene un hombre, y si pude soportar –porque cumplía una tarea– la derrota de ayer, hoy sin soberbia y sin espíritu de venganza, acepto este triunfo que nada tiene de personal y que se lo debo a la unidad de los partidos populares, a las fuerzas sociales que han estado junto a nosotros. Se lo debo al hombre anónimo y sacrificado de la patria, se lo debo a la humilde mujer de nuestra tierra. Le debo el triunfo al pueblo de Chile, que entrará conmigo a La Moneda el cuatro de noviembre».

El sueño de construir un Chile socialista en democracia y libertad se hacía posible. El cinco de septiembre, la derecha ya maquinaba el plan desestabilizador. Hizo lo indecible por evitar que Salvador Allende llegara a la Moneda. Intentó secuestrar al general en jefe de las fuerzas armadas, René Schneider Chereau, si bien su plan fracasó cuando el general opuso resistencia, siendo acribillado a balazos. Así, un sector de la Democracia Cristiana, encabezado por Andrés Zaldívar y Eduardo Frei Montalva, presidente saliente, en complicidad con la embajada de Estados Unidos y la derecha fascista, activaron la vía al golpe de Estado. La trama civil, entrelazada con militares golpistas, triunfaría el 11 de septiembre de 1973.

Fueron mil días de gobierno popular. Nacionalizaciones, reforma agraria, trabajo voluntario, alfabetización, ampliación de los derechos civiles, incorporación de la mujer, la juventud, los trabajadores y del pueblo Mapuche, que vio reconocida su dignidad y respetada su historia. La vía chilena al socialismo triunfó en campo minado, la Guerra Fría. El proyecto y la figura de Salvador Allende traspasarían fronteras. Humanista, y confeso socialista-marxista, cumplió siempre con su palabra. Primero como líder estudiantil, diputado, ministro de Sanidad en el Gobierno del Frente Popular del presidente Pedro Aguirre Cerda, senador y, por último, como presidente. Muchas leyes sociales llevan su nombre. Respetado por unos y otros, fue víctima de la traición. Pagó con su vida la lealtad que el pueblo chileno le entregó el 4 de septiembre de 1970. Chile no ha tenido figura política más relevante en su historia ni más influyente para los chilenos, a pesar de la derecha.

Parte de esta historia, hasta aquí relatada, es el origen de este ensayo. Colegas, compañeros de militancia y estudiantes me han animado a escribir una breve historia del golpismo en América Latina. La idea me pareció excelente. Un reto que había que sintetizar si se quería cumplir con el criterio de brevedad y accesibilidad. Por otro lado, significaba reconstruir y abordar teóricamente la parte más negra de la historia del continente: las intervenciones militares y el anticomunismo. Acepté el reto, era una manera de evidenciar la escasa estatura moral, los delirios de grandeza y la pequeñez intelectual de tanto tirano que asoló América Latina en el siglo xx.

El ensayo es un tránsito de la historia a la política. He querido dejar constancia de cómo se aplica la técnica del golpe de Estado y se construyó –y se construye– el discurso anticomunista

en América Latina. Los caudillos militares aparecen en los capítulos del libro a la luz de sus extravagancias y métodos de control político. Para lograr una narración fidedigna he preferido que tomen ellos la palabra.

La doctrina de la seguridad nacional, el enemigo interno, la lucha antsubversiva, la noción de guerra total, las guerras de baja intensidad y las acciones encubiertas urden una trama donde el imperialismo y el complejo industrial militar de los Estados Unidos tienen un lugar de excepción. En este cuadro, el relato del libro se detiene en dos experiencias atípicas que perduraron en el tiempo, dando lugar al nacimiento del llamado reformismo militar. Han sido los casos de Panamá y Perú, ambos emergentes en 1968. Hubo otros intentos anteriores, la Revolución Juliana en Ecuador o la efímera República Socialista de Chile que duró 14 días, entre 4 y el 16 de junio en 1932. Todos tuvieron un trágico fin, al igual que la experiencia boliviana del general Juan José Torres en 1971.

En pleno siglo XXI, la amenaza comunista se disipa en la mente de los ideólogos de la guerra. Las fuerzas armadas combaten, a partir del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, otro enemigo: el terrorista universal. Sin embargo, en América Latina, los golpes de Estado siguen arguyendo el comunismo como excusa para derrocar gobiernos constitucionales, aunque los militares se mantienen en segunda línea de fuego. Así, ve la luz otro tipo de golpe de Estado, menos sangriento, pero capaz de torcer la dirección de los acontecimientos históricos y políticos, encabezado por el poder legislativo o el poder judicial. Son golpes de guante blanco. Igualmente, empresas transnacionales, bancos de inversión, Goldman Sachs o Agencias de Calificación, «los mercados», ajustan sus estrategias para dar golpes de Estado que cambian el rumbo de las decisiones, siendo los artífices de una nueva arquitectura de la política conspirativa.

La nueva red de actores golpistas crea un conglomerado que compromete a los medios de comunicación con empresas transnacionales, partidos políticos, ideólogos, fundaciones y con políticos neoliberales, conservadores o socialdemócratas. Dos ejemplos recientes: Honduras en 2009 y Paraguay en 2012. Las intentonas frustradas en Venezuela, Bolivia o Ecuador muestran que la derecha latinoamericana no acepta la derrota electoral cuando sus intereses son amenazados. Igualmente en México, donde el fraude electoral puede constituirse en un golpe de Estado cuando se altera la voluntad popular de las urnas, como en el caso del gobierno ilegítimo del PRI con Carlos Salinas de Gortari en 1988, Felipe Calderón en 2006 y Peña Nieto en 2012. El Instituto Federal Electoral hizo caso omiso de las acusaciones de fraude, a diferencia de Venezuela que ha escrutado a petición del candidato perdedor, Henrique Capriles, el 100 por 100 de las mesas, despejando cualquier acusación de fraude, sea fundada o imaginaria. En México la máxima institución electoral prefirió secundar y legitimar el golpe de Estado, haciendo oídos sordos de la petición de conteo de papeletas.

Esta breve historia busca sacar a la superficie la memoria política y social del siglo XX latinoamericano. Revisar el pasado y buscar respuestas. Generaciones enteras han sido víctimas de golpes de Estado. Miles de jóvenes, hombres y mujeres sufrieron la tortura y aún se vive la desazón de los detenidos desaparecidos. Impunidad e ignominia cubren las vergüenzas. Así, nos encontramos con países donde no es posible juzgar a los militares y

civiles imputados de crímenes de lesa humanidad. Sea por cobardía, complicidad, miedo o pérdida de dignidad, lo cierto es que siguen en la calle, sin ser detenidos.

No es asumible que un general, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Ibérico Saint-Jean, espete por su boca, arguyendo la doctrina de la seguridad nacional, que «primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después... a sus simpatizantes, enseguida... a aquellos que permanecen indiferentes y finalmente mataremos a los tímidos».

Pero tampoco una amnesia rayana en la estupidez, como la de Alejandro Foxley, exministro de Asuntos Exteriores de la presidenta socialista Michelle Bachelet, quien afirmaba en el año 2000: «Pinochet realizó una transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo, descentralizar, desregular, etcétera. Esa es una contribución histórica que va a perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos con algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar».

Enunciarlo y no ruborizarse, es perder la dignidad, creérselo, una falta de respeto al pueblo chileno, las víctimas de la dictadura y sus familias. Foxley se mantuvo en el cargo. Estos comportamientos alientan nuevas aventuras golpistas. Noches oscuras que en pleno siglo XXI, amenazan los países de nuestra América.

Mientras redactaba pensé en el sentido que tiene escribir una historia del golpismo y del anticomunismo. Encontré respuesta en la necesidad de exponer a contrapelo la versión dominante que existe en América Latina, pero también en los estudiantes de la especialidad de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid, a quienes he impartido clases durante más de tres décadas. A ellos se les hurta el conocimiento de nuestra América bajo enseñanzas tópicas y versiones anticuadas de anticomunistas viscerales. Es la colonialidad del saber.

Concluida la primera versión, la hice circular entre antiguos estudiantes de licenciatura y posgrado, quienes se tomaron la lectura como un reto, aportando sugerencias e información. Como han sido muchos, a todos ellos doy las gracias, pero no puedo dejar de mencionar a Eduardo Fort, exalumno, licenciado en Ciencias Políticas, flamante profesor colaborador en el Departamento de Estructura Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense. Y en segundo lugar a Julia Marchetti, promesa de las ciencias sociales, profesora de Sociología Latinoamericana en la Universidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, a quien conocí en Madrid mientras realizaba su estancia de investigación. Vive la academia con auténtica vocación. Sus observaciones me han estimulado y sus notas se han incorporado al texto, espero que las reconozca. También a Mario Casasús, gran periodista latinoamericano, conocedor profundo de la realidad latinoamericana,

nerudiano confeso, sus comentarios fueron de gran ayuda. A Jaime Pastor, colega y amigo, cuyos consejos espero los vea incorporados en la edición. Sin duda a Francisco Ochoa de Michelena, editor y sobre todo lector cuyas aportaciones a la redacción y sintaxis han mejorado mi castellano y aligerado el texto. También a José Manuel Martín Medem, cuyas observaciones me hicieron comprender algunos comportamientos de las fuerzas armadas en los países que hoy viven procesos revolucionarios. También a Frank Rubio, atento lector quien desde la distancia me hizo ver la importancia del texto.

Por último, reconocer el apoyo de Aurora, compañera de toda una vida, ella me aporta tranquilidad y cariño para no desfallecer en el intento, y de Talía, hija incisiva en sus argumentos. Ambas son coautoras intelectuales.

A ellas dedico este libro.

[1] Véase Cedric Belfrage, *La inquisición democrática en Estados Unidos*, México, Siglo XXI de México, 1972.

[2] Vijay Prashad, *Las naciones oscuras. Una historia del tercer mundo*, Barcelona, Península, 2012, p. 261.

[3] Vease YouTube: www.youtube.com/watch?v=IoLiEnWTyBo&feature=relatec

Capítulo I

El siglo ^{xx} latinoamericano, una historia de ida y vuelta

«De mí sé decirle que con ley o sin ley, esa señora que llaman Constitución hay que violarla cuando las circunstancias son extremas.»

Diego Portales. Forjador del Estado chileno.

A fines del siglo ^{xix}, las guerras de independencia no habían cerrado su ciclo, el Caribe iba a remolque y una nueva potencia entraba en liza, Estados Unidos. La guerra hispanocubana, y norteamericana, en 1898, despojaba a España de sus últimas posesiones. Puerto Rico y Cuba pasaban a ser neocolonias. En 1899, ambas islas serían ocupadas militarmente por Estados Unidos. También Filipinas formó parte del botín. Los instigadores de la revolución de independencia norteamericana, en 1776, se sentían tocados por la mano de Dios para dominar el mundo, empezando por el continente americano. «John Quincy Adams estuvo dispuesto, desde 1811, no solo a apoyar la expansión a la costa del Pacífico, sino también a pedir la unidad política a través de toda la anchura de América. “Todo el continente de Norteamérica”, escribió a su padre, “parece *destinado por la Divina Providencia* a ser poblado por una *nación*, a hablar un idioma, a profesar un sistema general de principios religiosos y políticas, acostumbrado a un tenor general de usos y costumbres sociales. Por lo común felicidad de todos ellos, por su paz y prosperidad, considero indispensable que se asocien en una sola Unión Federal”»[\[1\]](#). El mito del «destino manifiesto» se hizo carne en la Doctrina Monroe. Una nueva geopolítica cobró fuerza. El presidente de la Universidad de Yale entre 1795 y 1817, Timothy Dwight, conjuró «un futuro en que Norteamérica dictaría leyes al mundo: ¡Salve, Tierra de luz y alegría! Tu poder crecerá. Vasto como el mar que rodea sus regiones. Por los enormes ámbitos de la tierra se extenderá tu gloria, y naciones salvajes ante tu cetro se inclinarán. En torno de playas heladas navegarán tus hijos. O extenderán tu estandarte en los ámbitos del Asia»[\[2\]](#).

El siglo ^{xix} vaticinó tormentas. Los grandes libertadores de América Latina visualizaron el peligro que suponía una hegemonía en manos de Estados Unidos. Simón Bolívar dejó constancia de ello en la frase que sigue siendo enarbolada como estandarte de la lucha antiimperialista: «Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad». También el cubano José Martí, fundador del Partido Revolucionario, artífice de la guerra de independencia cubana y muerto en combate en mayo 1895, señaló: «Los pueblos de América son más libres a medida que se apartan de Estados Unidos...Ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia»[\[3\]](#).

El itinerario diseñado por las potencias imperialistas, hacer del subcontinente una región atomizada y sin poder en el campo de las relaciones internacionales, se cumplía a rajatabla. Inglaterra, Francia y Estados Unidos, cuyos gobiernos habían apoyado las luchas de

independencia, sin otra razón que favorecer sus intereses políticos y económicos, se convertirán en los amos de la región. «Gran parte de los empréstitos no se entregaban en efectivo sino un 50 por 100 en maquinarias y mercancías, cobrando altas tasas de interés. Por ejemplo, el empréstito de 3.200.000 libras esterlinas contraído por México en 1824 con la banca inglesa Goldschmidt, solo se recibió en efectivo la mitad. En Argentina, de un millón de libras esterlinas del empréstito de la casa Baring, se entregaron en efectivo 570.000, el resto en mercancías [...] En Chile, el gobierno contrajo un empréstito en 1822 con la casa Hullet de Londres por un monto de un millón de libras esterlinas y solo se recibieron en efectivo 675.000. No obstante el pago de amortizaciones, después de 20 años se adeudaban 1.690.000 libras esterlinas»[4].

El ideario atomizador encontró aliados naturales en las clases dominantes criollas compuestas por comerciantes, mineros, banqueros y terratenientes. Las guerras de independencia cedieron lugar a las batallas intestinas por controlar el Estado. Los caudillos regionales querían su botín de guerra. A fines del siglo XIX y principios del XX, la oligarquía terrateniente asentaba su poder en toda la región. El desarrollo de una plutocracia rentista afirmó una economía primaria exportadora, consolidando la vía oligárquica dependiente desarrollo del capitalismo y el carácter excluyente y concentrador del régimen político. Las reformas liberales afincadas en el «dejar hacer, dejar pasar» dieron al traste con las propuestas democráticas y progresistas defendidas por la insipiente y débil burguesía nacional. Las ideas federales y confederales levantadas por criollos ilustrados afrancesados, protestantes, masones y librepensadores, fueron perseguidas. Sus líderes encarcelados, asesinados o derrotados militar y políticamente.

En el siglo XIX, Francisco Morazán sintetiza el esfuerzo por mantener la unidad territorial en Centroamérica. Combatido por los conservadores y la Iglesia, en 1838 emprende el exilio. Las oligarquías locales desmantelan la República Federal Centroamericana, dando lugar al nacimiento de cinco Estados: Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica. Morazán, mas tarde presidente de El Salvador y Jefe Supremo de Costa Rica, acaba fusilado un 11 de septiembre de 1842.

El Virreinato de Nueva Granada, sigue la misma senda. A la naciente gran Colombia se oponen intereses espurios de mantuanos, caudillos y latifundistas. Simón Rodríguez, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, entre otros, habrían arado en el mar. En 1829 se produce su desintegración. Nacen, Ecuador Colombia y Venezuela.

Otro tanto sucede en el mundo andino. El virreinato del Perú, afectado por reformas borbónicas del siglo XVIII, del cual emerge el virreinato del Río de la Plata, acaba en el siglo XIX dando lugar a la formación de Chile, Perú, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los movimientos de integración fueron rechazados por las potencias extranjeras. El divide y vencerás se convirtió en la estrategia para evitar la emergencia de un continente poderoso y soberano.

El Caribe y las Antillas, sufre los embates de todas las potencias imperiales que se disputan la supremacía mundial. España se verá obligada a compartir su dominio a regañadientes. En 1713, Felipe V firma el Tratado de Utrecht reconociendo la hegemonía de

Inglaterra en el mar Caribe. Desde ese instante, su presencia al igual que la de Francia y Holanda se consolida.

Piratas, corsarios y filibusteros habitaron sus mares. La esclavitud se extendió, convirtiendo las islas en cárceles esclavistas. Fama lograron sus plantaciones, sobre todo de azúcar, que se nutrirán del comercio de esclavos para solventar la mano de obra. Los ingleses serán los mayores productores y consumidores de azúcar del mundo, urdiendo los nexos entre esclavitud, comercio de esclavos y la economía antillana de plantación. «Por lo tanto, la esclavitud negra no tiene nada que ver con el clima. Su origen se puede rastrear en tres palabras: en el Caribe, el azúcar; en el continente, el tabaco y el algodón. Un cambio en la estructura económica produjo una transformación correspondiente en el suministro de fuerza de trabajo. El hecho fundamental fue la creación de una organización socioeconómica inferior de explotadores y explotados. El azúcar, el tabaco y el algodón requerían la gran plantación y hordas de fuerza de trabajo barata [...] En barbados, el tabaco de las pequeñas granjas fue desplazado por el azúcar de las grandes plantaciones. El surgimiento de la industria azucarera en el Caribe fue la señal para un gigantesco desposeimiento del pequeño agricultor. En 1645, Barbados tenía 11.200 pequeños agricultores blancos y 5.680 esclavos negros; en 1667 había 745 propietarios de grandes plantaciones y 82.023 esclavos [...]»[5].

Cuba, Puerto Rico, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, República Dominicana y Haití serán transformadas en fortalezas militares y nichos de esclavitud. Las luchas independentistas y emancipadoras tendrán un marcado acento antiesclavista. En Haití, la revolución encabezada por Toussaint L'Ouverture, la convierte «en la primera república negra fuera del continente africano y en la segunda sociedad poscolonial de la era moderna (después de Estados Unidos). En el proceso, los antiguos esclavos –sus ejércitos, sus líderes, sus guerrillas– habían derrotado a los ejércitos invasores de Inglaterra, España y Francia. Fue una inversión sorprendente, no solo del poder ejercido por las armas europeas, sino también de los fundamentos raciales que sostenían el sistema trasatlántico. Los dueños europeos habían sido derrotados por sus siervos africanos en un vuelco sin precedentes de los destinos raciales. Los propietarios de esclavos comprendieron, y temieron, las consecuencias de lo acontecido en Haití. De este modo se materializó, en un contexto explosivo de rivalidades internacionales, enfrentamientos raciales y luchas ideológicas, la peor pesadilla de los plantadores; la de unos esclavos dueños de su propia igualdad, armados y capaces de derrocar al mismo tiempo a los plantadores y al gobierno colonial»[6].

Su final fue trágico. La represión contra los esclavos se hizo patente en sus formas extremas. Descuartizados, empalados, degollados, quemados vivos y sus mujeres violadas. Durante el siglo XIX, solo dos colonias del Caribe, Haití en 1804 y República Dominicana en 1865, obtienen la independencia. El resto acceden a la misma durante el siglo XX. Cuba adquiere su carta de independencia en 1901, pero entra en el escenario como república neocolonial. La necesidad de mantener el control político y militar sobre la isla por parte de Estados Unidos obligó a introducir en su naciente constitución la enmienda impulsada por el senador norteamericano Orville H. Platt: «El gobierno de Cuba consiente que los EEUU puedan ejercitar el derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el

mantenimiento de un gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba, han sido impuestas a los EEUU por el tratado de París y que deben ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba»[7].

Dos años más tarde, en 1903, Panamá, desgajada provincia de Colombia, se convertía en Estado independiente, sufriendo el mismo destino intervencionista que Cuba. Sus constituyentes serán obligados a incorporar una versión *ad hoc* de la enmienda Platt en el artículo 136 de su carta magna: «El gobierno de los Estados Unidos de América podrá intervenir en cualquier punto de la República de Panamá, para restablecer la paz pública y el orden constitucional si hubiese sido turbado en el caso de que por virtud de tratado público aquella nación asumiere, o hubiese asumido la obligación de garantizar la independencia y soberanía de la república»[8].

Las Antillas y el Caribe vieron consolidar su papel exportador de productos agrarios al mercado mundial, fortaleciéndose las estructuras latifundistas y el trabajo precario. El poder de los terratenientes locales o compañías extranjeras determinó tanto las estructuras sociales como las formas de lucha emancipadora –que puso en primera línea la necesidad de una reforma de la propiedad agrícola y la recuperación de los enclaves, las plantaciones, en manos de las compañías extranjeras.

«Estos elementos que condicionaron las formas de penetración del capitalismo mundial, sin embargo, se fueron adaptando a la compulsiva vinculación neocolonial. La sujeción financiera, bancaria y el clásico esquema colonial en materia comercial lograron neutralizar poco a poco las tendencias internas que buscaban mayor identidad nacional y desarrollo de proyectos autonomistas reales. Las clases dominantes se convirtieron en instrumentos de la dominación externa y manifestaron una total obediencia al orden mundial creado por los países del capitalismo central. Esta condición de dependencia queda sellada con la intervención y la ocupación militar de estos países por el imperialismo: Cuba lo fue desde 1898 a 1903, República Dominicana durante los años 1908 y 1916-1924, en Haití desde 1915 hasta 1934, y en Puerto Rico, desde 1898 hasta la fecha»[9].

Así, en toda América Latina y el Caribe, las batallas por la emancipación política se trasforman en luchas antioligárquicas y antiimperialistas. Una historia que enlaza el siglo XIX con los proyectos liberadores y populares que se extienden por el ancho siglo XX latinoamericano. La independencia política del siglo XIX se transforma, en el siglo XX, en una dependencia política, estructural, socioeconómica y cultural.

Las oligarquías gobernaron con mano de hierro. «La implantación de este tipo de régimen a lo largo y ancho del continente latinoamericano es algo más que una coincidencia, incluso cronológica. Obedece, sin la menor duda, a la conformación de un nuevo tipo de Estado acorde con las necesidades, también nuevas, de la evolución económica y social de nuestros países. Tal Estado, que en síntesis no es más que la expresión de un proceso de acumulación originaria de poder capitalista, con la consiguiente concentración del mismo, emerge de una manera sinuosa y conflictiva, a través de un movimiento que por otro lado se encarga de supeditar a los elementos de poder precapitalistas, por la fuerza cuando es menester, y por

otro lado de aniquilar, *manu militari* casi siempre, a los elementos democrático-burgueses que levantan una alternativa progresista de desarrollo capitalista»[10].

Serán los ejércitos el arma utilizada para frustrar la revolución democrática. La consolidación de una cultura autoritaria demostró el miedo de las clases dominantes a cualquier medida de apertura política progresista, marginando a los sectores más avanzados de la burguesía. La democracia fue considerada una forma política no apta para los pueblos latinoamericanos.

«Las repúblicas de origen español han dado hasta ahora más de un ejemplo funesto de los excesos a que los pueblos se entregan cuando no se ha procurado de antemano ilustrar su inteligencia y desenvolver los elementos que puedan constituir su riqueza [...] Por no comprender estas sencillas nociones, es que el sistema democrático ha degenerado en muchos puntos del continente [...] Centroamérica, Buenos Aires y Bolivia se han visto entregados a la dirección estúpida de masas ignorantes y de ningún modo preparadas para desempeñar el rol en que se las ha visto figurar [...] Preguntad a esos gobiernos qué es lo que han hecho para preparar a sus pueblos para la vida activa de la democracia. Preguntarles si es posible por una ilusión óptica, si por un encantamiento incomprensible se puede cambiar en un instante la túnica del colono en el vestido del ciudadano. La respuesta será desconsoladora»[11].

El carácter del voto censitario daba cuenta del poder ejercido por la oligarquía y del paripé que representaba tener instituciones como el parlamento y el senado. A fines del siglo XIX, el promedio de participación electoral no sobrepasaba el 1,5 por 100 de la población. En el siglo XX, las cifras de participación electoral para toda la región se mantuvieron por debajo del 15 por 100 hasta muy entrada la década de los treinta, donde la proporción se acercó al 30 por 100, excluyendo la mujer, claro está. En Chile, en las elecciones presidenciales de 1924 –país con una población total de 3.874.008 habitantes, de los cuales 2.171.481 eran personas adultas, hombres y mujeres– solo estaban inscritas en el censo electoral 302.000, de los cuales acudieron a las urnas 197.143, es decir un 5 por 100 del total[12]. En el Caribe, ya en 1865 en Jamaica «la Asamblea tenía 49 miembros, todos blancos, elegidos por 1.457 votantes, porcentaje ínfimo del total de la población que era de 400.000 personas. Las asambleas se disolvieron en esa época, ante el temor de que las personas de color pudieran votar, y el control quedó totalmente a cargo del gobernador»[13].

Durante las dos primeras décadas del siglo XX las oligarquías viven su máximo esplendor amasando sus fortunas, en calidad de dueños, socios, administradores de las minas, plantaciones, haciendas o representantes de casas comerciales. Las oligarquías garantizaron las inversiones extranjeras mediante gobiernos represivos, en el convencimiento de cumplir una misión civilizatoria, «al transformar sus países, de salvajes como eran, en países, que sin negar su matriz latina en general, ibérica en particular, tienden a desarrollarse a la inglesa. Esta imagen la proporciona también la historiografía corriente, confirmando una vez más que la misión de los historiadores ha sido siempre la de crear mitos colectivos, susceptibles de ser utilizados por la clase dominante en el poder»[14].

Vivir a la inglesa, más que desarrollarse a la inglesa, fue la realidad. El *ethos* oligárquico pasó por reproducir las formas de vida del *gentleman* inglés. Hizo del lujo, el despilfarro y la

ostentación su principal preocupación. Mansiones imitando palacios venecianos, teatros calcados de la *Scala* de Milán. Cristalería de Murano y de Bohemia, cuberterías londinenses, cuadros, mobiliario y objetos de arte comprados en París, Berlín o Ámsterdam. Las mujeres de la oligarquía vestían a la moda, con medias de seda, encajes, escote y complementos. Para ellos, zapatos italianos, levita, bastón y sombrero hongo. La capa española perdió peso a favor del abrigo o sobretodo inglés. Cambiaron las costumbres. Abandonaron la merienda española del chocolate y la mistela, hábito de las familias criollas del XVIII. La influencia inglesa y francesa copó el espacio social de la vida cotidiana de terratenientes y oligarcas. El té, el café, el whisky y el champagne dejaron de ser excentricidades. La oligarquía pasó a comunicarse preferentemente en francés e inglés, símbolos de poder y distinción. Sus hijos se educarán en las capitales europeas, siendo objeto de envidia y admiración.

Despreciaron la cultura de los pueblos originarios, considerándola un resabio de salvajismo. Bajo el mito de la superioridad étnica y racial, y con el eufemismo de guerras civilizatorias, se apoderaron de sus tierras en nombre del progreso. La matanza de indios fue el campo de batalla donde se foguearon los ejércitos latinoamericanos. Sus intervenciones marcan hitos de crueldad. Característica incólume hasta nuestros días cuando se trata de reprimir al pueblo mapuche, maya o guaraní.

«Y el ejército tiene una grande y larga tarea que desempeñar entre nosotros. Cada diez años se hacen entradas a los indios; los indios se retiran al Sur a la aproximación de nuestras fuerzas, y en cambio de los cien mil pesos que ha costado la expedición, nuestros expedicionarios vuelven con algunos centenares de ovejas tomadas a los indios y algunos individuos de chusma por trofeos; concluido lo cual, los indios reaparecen en nuestras campañas y siguen sus depredaciones. En gobierno previsor debe obrar de otra manera. Desde Bahía Blanca hasta la cordillera de los Andes, apoyándose en la margen del río Colorado, debe de diez en diez leguas erigirse un fuerte permanente, y dispuesto de modo que sirva de núcleo a una ciudad. Esto no haría más que quince o veinte fuertes, los cuales formarían una línea final a la República por el sur. Las tribus salvajes que quedasen cortadas por esta línea de puestos avanzados no resistirían largo tiempo a la amenaza de ser aniquiladas, cogidas entre dos fuerzas y diezmadas»[\[15\]](#).

Las oligarquías plutocráticas controlaron las débiles instituciones públicas. Jueces, parlamentos, fuerzas armadas, universidades y ministerios. Los apellidos de la vieja aristocracia criolla se reproducen en la sociedad republicana. Copan el poder político, económico, religioso y militar. Son dueños de la tierra, estancieros, banqueros, comerciantes y mineros. La gran familia oligárquica se consolida mediante matrimonios, acuerdos y enlaces espurios; así impiden la atomización de su poder, al tiempo que «integraron sus intereses económicos con aquellos que sobrepasaban el nivel local mediante una variedad de arreglos: sociedades, tenencia de acciones, operaciones de sucursales, servicios profesionales, incorporación y agencias de representación. En muchos casos, estos arreglos se hacían en el interior de las redes familiares y entre ellas y, en creciente medida, sobrepasaban las fronteras locales y aún provinciales. También se establecieron conexiones con los recién llegados, ya fueran extranjeros o nacionales, con nueva riqueza y posición política. Las redes de notables

adoptaron y difundieron cada vez más los nuevos principios de dirección practicados por empresarios del atlántico norte al establecer sus arreglos comerciales. El casamiento a veces daba permanencia a estos lazos comerciales. Las conexiones políticas se formaban del mismo modo. Varios miembros de la familia emprendían carreras políticas, y ocupar un cargo se convirtió en una responsabilidad que exigía dedicación exclusiva. La expansión de sus posesiones económicas y su poder político se reforzaba mutuamente y los nuevos principios directivos servían de común denominador en el desarrollo de estructuras comerciales y de gobierno»[16].

La plutocracia disfruta de un mundo exclusivo, vedado al pueblo y a los sectores medios. Practican la extravagancia y se sienten los dueños del territorio nacional. El poder de la familia oligárquica del siglo XIX llega hasta nuestros días. En pleno siglo XXI conservan las propiedades y el poder y siguen siendo un factor decisivo en el orden político. Entrelazadas por vínculos consanguíneos, representan una minoría consistente. De ellas salen presidentes, diputados, senadores, banqueros, intelectuales, deportistas de elite, terratenientes, jueces, militares o sacerdotes. Hombres y mujeres que dan lustre a las historias nacionales. En Costa Rica, por ejemplo, «la clase política ha consistido en los descendientes de un pequeño grupo de familias hidalgas de la época colonial que luego se transformaron en grandes cafetaleros, dueños del capital comercial y de los procesos de preparación del grano. Grandes pero pocas familias que tuvieron en el pasado el control del gobierno y de sus instituciones, ejerciendo el poder personalmente, a través de sus más brillantes hijos y no a pesar sino por medio de una democracia paternal. Treinta y tres de las cuarenta y cuatro personas que han ejercido la presidencia de la república desde la independencia pertenecen a descendientes directos de tres familias (las del conquistador Juan Vázquez de Coronado, la de don Nicolás de González y Oviedo y la de don Antonio Acosta Arévalo [...] y solo de esta última han salido 18 presidentes y aproximadamente 230 diputados»[17].

Mientras la plutocracia pudo vivir de las exportaciones y amasar grandes fortunas, las relaciones entre las burguesías metropolitanas y las oligarquías locales funcionaron. No hubo preocupaciones. En los enclaves bananeros, plantaciones, minas, maestranzas o industrias manufactureras, imperaban los castigos corporales y el sistema de deudas. Las voces de protesta se acallaron reprimiendo.

La sobreexplotación, la miseria, el hambre, la marginación y las condiciones de extrema dureza en que se desarrollaba la actividad laboral de las clases trabajadoras creaban un paisaje «triste y desconsolador [...] Estacionadas en todo sentido, se suceden sus generaciones sin dar un paso adelante, y la familia del nieto es copia fiel de la del ascendiente [...] Los medios de vida de que dispone son tan escasos, que al trabajo del jefe de familia debe unirse el de la madre y el de los hijos, muy tiernos por lo general, para hacer frente, a medias, a los horrores del hambre y la intemperie»[18].

La total ausencia de derechos políticos de la clase obrera, el campesinado, en una sociedad preeminentemente rural, inaugura la historia de las protestas obreras y las reivindicaciones democráticas de las nóveles organizaciones del proletariado. Su aparición supuso el amanecer de la «cuestión social». Las dos primeras décadas del siglo XX estuvieron plagadas de

reivindicaciones sociales y políticas. Las huelgas se generalizaron y el proceso político de articulación del movimiento obrero se aceleró. Las oligarquías tuvieron miedo de perder su poder omnímodo y ante las demandas populares acudieron a la solución más fácil, utilizar el ejército para aplacar los gritos de democracia. Las tropas salían a la calles en estricta formación, instalando ametralladoras y disparando a mansalva bajo la atenta mirada de sus instructores alemanes, británicos, italianos o franceses.

Las fuerzas armadas se transformaron en el brazo ejecutor de los intereses de la oligarquía. La carrera militar, para el cuerpo de oficiales, estuvo reservada a las elites, pero abrió sus puertas a los sectores medios. Era una manera de conseguir el apoyo de una escasa población que disfrutaba de las migajas del poder. Solo podían entrar en las escuelas militares cadetes que supiesen leer y escribir, y que fuesen hijos legítimos. En una sociedad donde más del 60 por 100 de la población adulta era analfabeta y muchos hijos naturales, la selección imponía un rasgo altamente discriminatorio.

Los primeros dictadores del siglo *xx* fueron fieles guardianes de la plutocracia. Si no pertenecían a sus redes, procedían de los sectores medios y debían su ascenso a los favores otorgados por las oligarquías. En Cuba, el dictador Gerardo Machado se convirtió en ejecutivo de la compañía General Electric y «basaba su poder en el ejército, al que había sobornado con éxito mediante una táctica de amenaza y de corrupción a la vez. Todos los oficiales difíciles habían sido designados para el desempeño de puestos sin importancia o se había prescindido de ellos por completo; los demás recibían una paga abundante [...] El pillaje y la malversación eran dueños del ejército. Una sola firma obtuvo en 1926 el derecho de aprovisionamiento y lo mantuvo hasta 1933. Dios sabe qué cifra cobraría Machado»[\[19\]](#).

Estado y nación oligárquica eran la misma cosa. Los países fueron administrados como haciendas particulares y sus habitantes considerados esclavos o inquilinos, nunca ciudadanos. La plutocracia se sentía ama y señora del territorio. Eduardo Matte Pérez, patriarca de una de las familias chilenas más poderosas, a la sazón diputado liberal y ministro en varias ocasiones, pronunció una frase histórica: «Los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo; lo demás es masa influenciabile y vendible; ella no pesa ni como opinión ni como prestigio».

Pero nada dura eternamente. La estructura social del orden oligárquico se resquebraja al tiempo que las clases trabajadoras se organizan y ganan protagonismo. Las demandas de apertura política y democracia consolidan un movimiento popular, democrático, nacionalista y antioligárquico. La Revolución mexicana, en 1910, se convierte en paradigma de las luchas antioligárquicas. Porfirio Díaz, considerado adalid del progreso, y modernizador del México colonial, es derrotado en el campo de batalla. Los ejércitos insurgentes del sur, formados por campesinos, liderados por Emiliano Zapata y del norte, comandados por Francisco Villa, asestán el golpe definitivo al ejército de la dictadura. Porfirio Díaz morirá exiliado en Francia en 1915 a la edad de 84 años. Había permanecido en el poder desde 1876 hasta 1910.

La Revolución mexicana fue una yuxtaposición de proyectos burgueses y populares, enfrentados en el plano ideológico, político y también militar. La burguesía anti-porfirista se parapeta bajo el Plan San Luis de Potosí, defendido por Francisco Madero. El proyecto acota

las reivindicaciones políticas exigidas al Porfiriato: «Sufragio efectivo y no reelección». Por otro lado, las clases populares elaboran su alternativa, el Plan de Ayala. En forma de manifiesto, su redacción se atribuye a Emiliano Zapata y Otilio Montaña, siendo firmado por todos los generales, coroneles y capitanes revolucionarios agrupados en el ejército insurgente del sur. En él queda planteada la devolución de las tierras a los campesinos, la expropiación a los latifundistas y la nacionalización de las empresas extranjeras. Su lema: «Reforma, libertad, justicia y ley».

La Revolución mexicana ha tenido una gran influencia en las luchas democráticas latinoamericanas, por ello sufrió, desde sus inicios, los embates del imperialismo norteamericano. Nunca dejó de conspirar e intervenir, apoyando generales y caudillos que le pusiesen fin, devolviendo a México a su posición neocolonial. Apoyándose en la figura de Victoriano Huerta, general traidor, el gobierno norteamericano alienta, desde su embajada, el desembarco de marines en Veracruz el año 1913, si bien las fuerzas mercenarias serán derrotadas por los ejércitos revolucionarios. El triunfo determina el camino de la revolución, al menos en principio, dando paso a un proceso constituyente, celebrado en Aguascalientes. De sus entrañas saldrá promulgada una de las constituciones más progresistas de la época, al enunciar la propiedad pública e inalienable de las riquezas existentes en suelo y subsuelo. Lamentablemente, la conspiración y los deseos de ultimar los sectores populares de la revolución, acaban tomando los mandos del proceso político. Emiliano Zapata en 1918 y Francisco Villa en 1919 serán asesinados. La revolución queda interrumpida.

Aun así, las oligarquías latinoamericanas vieron con temor lo sucedido en México. La revolución les aturde y se repliegan sobre sí mismas. Para contrarrestar las luchas democráticas y las demandas de justicia, libertad, y ley, inauguran una nueva fase de dominación. Se vuelven adictas a la técnica del golpe de Estado. Las alusiones a la amenaza del socialismo-marxista, la izquierda social y el comunismo toman cuerpo y se reflejan en primeras soflamas golpistas. América Latina vive el reacomodo de un orden mundial consternado por la Primera Guerra Mundial, la Revolución rusa y la crisis de los años treinta.

Las exportaciones de materias primas sufren los efectos. La inestabilidad política se generaliza en la región. El mantenimiento del orden oligárquico solo puede ser garantizado si la plutocracia acude a las fuerzas armadas. La Iglesia dispara las primeras balas desde los púlpitos alertando del peligro socialista, sus pastorales asumen un tono apocalíptico. Monseñor Alfonso Belloso y Sánchez, arzobispo de El Salvador, en su pastoral de 1927 *El presente momento social*, señala: «El socialismo así como aborrece las ideas de propiedad familiar, estado, religión, así también abomina de la idea de Patria. Las fronteras se le antojan coacción y tiranía, y ha jurado borrarlas; el hombre ha de ser ciudadano del universo; en el mundo socialista no habrá naciones, habrá sindicatos. Por consiguiente, en la geografía socialista no contaría la república de El Salvador, sino la Confederación de Camaradas Salvadoreños»[\[20\]](#). En México estalla la Contrarrevolución cristera. En Roma, el Vaticano, despliega su artillería. La Iglesia será un soldado eficiente en la campaña contra la izquierda y el socialismo.

En contraposición, emerge una generación de intelectuales antiimperialistas. A un siglo de

la independencia, en medio de las celebraciones del centenario, con la Revolución mexicana triunfante, la rusa en ciernes y un movimiento antibelicista por la paz y contra la Primera Guerra Mundial, se promulga en Argentina la Ley Sáenz Peña de Sufragio Universal, Secreto y Obligatorio para varones mayores de 18 años. Ello supondrá el triunfo de Hipólito Yrigoyen y su partido, la Unión Cívica Radical (1916-1922).

En 1918, en la conservadora y aristocrática provincia de Córdoba se produce un hecho de significancia trascendental en América Latina, la rebelión de los estudiantes de Educación Superior contra la universidad decimonónica. Son los comienzos de la llamada reforma universitaria. Se proclama la autonomía del campus, la cátedra libre, la participación de los estudiantes en la elaboración de los planes de estudios y elección de las autoridades del claustro y el rector. La reforma universitaria, según sus impulsores, debe cumplir una misión social acorde con la época. Su manifiesto inicial dirigido «a los hombres libres de Sur América» tiene eco en todo el continente: «Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten: estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana [...] acabamos de romper la última cadena que, en pleno siglo xx, nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica [...] se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo sus banderas a todos los hombres libres del continente»[\[21\]](#).

Chile, Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador, Paraguay, México o Bolivia se hacen eco de la propuesta. El debate propuesto por los estudiantes inaugura la discusión sobre el proyecto democrático, profundizando la crítica al orden oligárquico y proponiendo su disolución. La izquierda se ve reforzada. El desarrollo del pensamiento marxista, el socialismo y el comunismo aparecen en la agenda del movimiento estudiantil latinoamericano. Nombres que más adelante tendrán enorme importancia en sus respectivos países participan de la polémica. Alejandro Korn, José Ingenieros, Julio V. González, Germán Arciniegas, Julio Antonio Mella, Víctor Raúl Haya de la Torre, Aníbal Ponce, Manuel Ugarte, José Carlos Mariátegui, Alfredo Palacios o Deodoro Roca.

Fue un momento álgido, coronado por la gesta antiimperialista que enfrentaba al «general de Hombres libres» en Nicaragua, Augusto César Sandino, contra las tropas de intervención estadounidenses apostadas en su territorio y apoyadas por un gobierno neocolonial. Toda América Latina clama contra la intervención imperialista. La formación del APRA (Partido Acción Popular Revolucionaria Americana o Alianza Popular Revolucionaria Americana) en 1927, por uno de los principales dirigentes estudiantiles peruanos, Víctor Raúl Haya de la Torre, sintetiza en el sentir de toda una generación. Su programa contenía cinco puntos irrenunciables: 1. Acción contra el Imperialismo; 2. Por la Unidad Política de América Latina; 3. Por la nacionalización de tierras e industrias; 4. Por la internacionalización del Canal de Panamá; y 5. Por la solidaridad con todos los pueblos y las clases oprimidas del mundo.

El final de una época se masca en el ambiente, el régimen oligárquico agoniza. Son tiempos contradictorios. Emergen militares progresistas, con credo socialista, democrático y antioligárquico en sus proclamas. Con el nombre de «tenentismo» jóvenes oficiales emprenden la lucha contra la República «Velha» en Brasil. De 1925 a 1927 se enfrentarán a las fuerzas

federales, sumando el apoyo de gauchos y campesinos. En sus filas está el capitán Luis Carlos Prestes, apodado «caballero de la esperanza». La experiencia acaba en derrota. Años más tarde, el mismo, funda el partido comunista. Los militares ecuatorianos viven una propuesta señera en la región. Se adelantan a su tiempo. Un proyecto progresista y democrático, liderado por el general Eloy Alfaro, será abortado por la oligarquía dando al traste con las reformas. La conspiración de la plutocracia afincada en Quito y Guayaquil acabará con su gobierno. Detenido, Alfaro fue linchado, su cuerpo quemado y arrastrado por las calles de Quito, un 28 de enero de 1912. En 1925, habrá otro intento de ruptura oligárquica, contra el clericalismo, la oligarquía financiera y la plutocracia, el 9 de julio de 1925, toma el poder político una junta militar bajo el liderato del teniente coronel Luis Telmo Paz y Miño. Su gobierno será conocido como «la Revolución juliana». En 1931, el coronel Luis Larrea Alba puso punto y final al proyecto[22].

En Chile, el 4 de junio de 1932, oficiales y militares progresistas, abanderados del socialismo, inauguran la *República Socialista*. El comodoro del Aire, Marmaduke Grove asume la presidencia durante 14 días. El 16 de ese mes otra junta civil, apoyada por militares pro-oligarquía recuperan el poder. La historia es caprichosa. En los 14 días de gobierno socialista ven la luz un conjunto de leyes nunca derogadas. Gracias a ellas, en 1971, Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular podrán realizar la expropiación de la gran minería del cobre en propiedad de las empresas norteamericanas. El 21 de mayo de 1971 se nacionaliza la gran minería del cobre, declarándose Día de la Dignidad Nacional. Quien fuese impulsor de la república socialista en 1932, Marmaduke Grove, funda junto a otros dirigentes obreros y de la izquierda, en 1933 el Partido Socialista chileno, en su primer Comité Central, un joven le da la mano, Salvador Allende.

Pero el orden oligárquico se resiste a morir. Emplea toda la fuerza contra el movimiento obrero, los partidos populares y las voces que piden apertura política. La crisis de entreguerras tuvo un fuerte impacto sobre las plutocracias. Primero, restringió la demanda de los productos de exportación, lo cual trajo una disminución de ingresos en unos gobiernos acostumbrados al despilfarro y «que dependían en gran medida de los impuestos pagados por las empresas exportadoras. Incluso en aquellos productos que se siguieron exportando hubo una baja en los precios, al disminuir la demanda. Ello tuvo como repercusión una ola de paro, tanto entre los empleos que dependían del sector exportador como de la administración pública. En Argentina, 20.000 empleados del Estado quedaron sin trabajo entre 1930-1931. Los trabajadores en las plantaciones de azúcar de Cuba, del café en América Central, Colombia y Brasil, y del salitre en Chile estuvieron entre los principales afectados. Además, la crisis afectó la capacidad de importación, ya que los países latinoamericanos se encontraban con menos divisas. El valor de las exportaciones de los cinco países centroamericanos que en 1930, último año normal, había sido de 169 millones de dólares, bajó rápidamente, pasando a 105 millones en 1933 y a 54 millones en 1936»[23].

Sin opciones de mantener las prebendas a sus aliados internos, las plutocracias ven cómo su poder omnímodo se resquebraja. Un pujante movimiento antioligárquico, nacionalista, afincado en la generación antiimperialista, es suficiente excusa para que la oligarquía llame a

la puerta de los cuarteles, y los militares acuden a su llamado. Así cobran vida las dictaduras oligárquicas del siglo xx: Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944); Gerardo Machado en Cuba (1925-1933); Augusto Leguía en Perú (1919-1930); Getúlio Vargas en Brasil (1930-1945); Anastasio Somoza en Nicaragua (1937-1956); Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador (1932-1944); Tiburcio Carías en Honduras (1933-1944); Juan Vicente Gómez en Venezuela (1908-1935); Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana (1930-1961); Jose Luis Terra en Uruguay (1933-1938); Carlos Ibáñez del Campo en Chile (1927-1931); y Jose Félix Uriburu en Argentina (1930-1932).

En otros países la inestabilidad política se hace norma. Sin acuerdo entre las facciones de la oligarquía, sufren continuos golpes de mano. Paraguay, desgarrado por la Guerra del Chaco entre 1932 y 1939, se aboca a sufrir gobiernos de vida efímera. En algunos casos no cumplen siquiera los treinta días y son depuestos por otros que mantienen la misma tendencia. En 1940 se pone fin al trasiego de presidentes con el advenimiento de la dictadura de Higinio Morínigo que sobrevive hasta 1948. En Bolivia, José Daniel Toro (1936-1937) inaugura la era de las dictaduras con características similares.

A pesar de la represión, el régimen oligárquico se ve obligado a reconocer, dado la gran presión social, derechos sociales mínimos a las clases trabajadoras. Igualmente, la mujer pasa ser protagonista, incorporándose de lleno a la lucha política y sindical. Su papel deja de ser testimonial, ganando peso en el interior del movimiento obrero. Los avances son discontinuos pero marcan un itinerario. Al final del ciclo oligárquico nueve países han reconocido el derecho a voto de las mujeres, conquistado a sangre y fuego: Ecuador en 1924, Brasil y Uruguay en 1932, Cuba en 1934, El Salvador en 1942, República Dominicana en 1944, y Guatemala y Panamá en 1945. Tras la Segunda Guerra Mundial, el voto femenino se reconoce en Venezuela (1947), pudiendo votar las mujeres mayores de 18 años y analfabetas. Chile y Costa Rica lo incorporan en su legislación en 1949; Bolivia se suma tras la revolución de 1952; Colombia y México en 1954; Honduras en 1955; Argentina en 1957; y Paraguay en 1961.

La conclusión de la Segunda Guerra Mundial inaugura una nueva etapa política en América Latina, esta vez bajo la hegemonía del imperialismo norteamericano. Su dominio se asienta en la dependencia industrial-tecnológica. «Hasta el año 1940, el principal sector de actividad lo constituyen los sectores primarios y los ferrocarriles. Esto resultaba del carácter colonial-exportador de la economía latinoamericana a la cual se integraba el capital extranjero. Incorporábase este en una economía productora de materias primas y productos agrícolas, complementada por los medios de transporte para su exportación»[\[24\]](#). A partir de los años cincuenta la tendencia se revierte. Las inversiones directas norteamericanas se trasladan al sector de la manufactura, la industria de sustitución de importaciones, la metalmecánica y la petroquímica y también amplía su presencia en el sector estratégico petrolero.

En el año 1936 Estados Unidos invirtió en dichos sectores 2.803 millones de dólares; en 1950, la cifra fue de 4.445 millones; y en 1967, superó los 10.200 millones de dólares. Desde 1960 a 1967, las manufacturas constituyen el principal rubro de la inversión norteamericana en América Latina. En 1960 representan 19 por 100 del monto total de las inversiones directas

norteamericanas en América Latina. En 1967 pasan a representar el 32 por 100. Entre los años 1951 y 1961 el flujo de inversiones de capital estadounidense en el petróleo alcanzan el 33 por 100 del total; la manufactura el 31 por 100, integrándose definitivamente como parte del tejido industrial local. «En 1967, el sector industrial que tenía el más alto valor de inversiones directas de EEUU de América Latina era el de las industrias químicas y derivados, que correspondía a 682 millones de dólares, es decir, el 27 por 100 del valor de las inversiones. Enseguida venía la industria de transportes y equipos con 428 millones de dólares, es decir, el 17 por 100 de esas inversiones. Las industrias de máquinas eléctricas y no eléctricas sumaban los 334 millones, correspondiendo al 13 por 100 de esas inversiones. Un poco por debajo se encuentra la industria de productos alimenticios, que no siempre es de las más tradicionales y que absorbe 315 millones, es decir, otro 13 por 100. Las industrias que siguen son las del caucho, 7 por 100, metales primarios fundidos, 6 por 100, el papel y derivados, 2 por 100 y otra cantidad de industrias varias con un 14 por 100»[\[25\]](#).

El capital monopolístico norteamericano se ubicó en la franja moderna y dinámica de las industrias latinoamericanas. La dependencia industrial-tecnológica supuso un cambio de alianzas. La nueva división internacional de la producción, los mercados y el trabajo, facilitó que las empresas multinacionales ejercieran el control monopolístico sobre la industria pesada, las aplicaciones tecnológicas y el proceso de automatización. El imperialismo se redefine bajo parámetros del capital monopolístico y la formación de oligopolios.

En este contexto, las burguesías modernizadoras latinoamericanas se asocian al capital norteamericano de manera subordinada, renunciando, definitivamente a un proyecto de desarrollo nacional. «Tras la Segunda Guerra Mundial, la penetración de las empresas multinacionales en América Latina se hizo más intensa, especialmente en los países que ya habían alcanzado cierto desarrollo industrial [...] En tal sentido, el proceso de formación de una clase nacional de empresarios industriales quedó interrumpido. Dada su poderosa situación financiera, la empresa multinacional extiende poco a poco su control sobre los sectores más dinámicos de la actividad industrial. Los mejores talentos de la industria local fueron absorbidos en la nueva clase dirigente [...] La clase empresarial nacional e independiente se vio reducida, en el curso de este proceso, a actividades secundarias o a empresas de carácter pionero que, a largo plazo, acabaron por abrir nuevos espacios a la futura expansión de la empresa multinacional [...] La eliminación de la clase empresarial excluye, por tanto, la posibilidad de un desarrollo nacional sostenido por los propios países, de acuerdo con el desarrollo capitalista clásico»[\[26\]](#).

Las redes familiares funcionaron a la perfección, las nuevas generaciones de las clases dominantes tomaron el relevo, haciéndose con el control político. Los cambios se suceden. La población urbana crece y las ciudades se masifican. Disminuyen las tasas de analfabetismo y la mortalidad infantil. La migración campo-ciudad crea las grandes metrópolis urbanas. Santiago, por ejemplo, pasa de tener 950.000 habitantes en 1940 a 1.907.000 en 1960. Similar tendencia experimentan Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Asunción, Montevideo, Río de Janeiro, São Paulo, Caracas o Bogotá. El transporte público, las carreteras y los sistemas de comunicación van lentamente cambiando la fisonomía y su imagen de países atrasados. La

población rural disminuye. El PIB crece y la estructura social se diversifica: «El contexto económico de la época favoreció a aquellas clases que vivían de las actividades urbanas, sobre todo en la industria. En conjunto, la agricultura perdió la primacía que había ostentado hasta mediados del siglo xx como fuente de empleos, ya que en 1960 solo el 46,7 por 100 de la población activa del conjunto latinoamericano trabajaba en el campo, cifra que había sido del 61,6 por 100 en 1940. En las ciudades, los profesionales, empleados y obreros asalariados cobraron cada vez más importancia, mientras declinaba el número de artesanos»[27].

Afloran las contradicciones. La ciudad masificada que nace, al amparo de la modernización política, muestra un desequilibrio estructural en la utilización del espacio y pone en evidencia la enorme desigualdad social que la atraviesa. En ella coexisten la riqueza y la opulencia con la pobreza y la marginalidad. Son ciudades duales, divididas, donde se viven culturas paralelas. Los asentamientos marginales, conocidos como favelas en Brasil, callampas en Chile, villas miseria en Argentina, ciudades perdidas en México, pueblos piratas en Colombia y, genéricamente, rancheríos, son habitados por las clases trabajadoras que emigraron del campo y que no tienen acceso a viviendas en la ciudad. Los asentamientos «espontáneos» conllevan una segregación «ecológica en el sentido que ella manifiesta al mismo tiempo la segregación residencial del espacio urbano y la incapacidad del sistema de producción de viviendas para tomar en cuenta las necesidades sociales cuando la demanda no es rentable»[28]. Los barrios populares carecen de un servicio adecuado de infraestructuras, transporte, recogida de basuras, alcantarillado, centros médicos, escuelas. La utilización del espacio y la distribución de bienes y servicios se polarizan. Es el nacimiento de la ciudad masificada y de una sociedad escindida: «En aquellas ciudades donde se produjo la concentración de grupos inmigrantes la conmoción fue profunda. Muy pronto se advirtió que la presencia de más gente no constituía solo un fenómeno cuantitativo sino más bien un cambio cualitativo. Consistió en sustituir una sociedad congregada y compacta por otra escindida, en la que se contraponían dos mundos. En el futuro, la ciudad contendría –por un lapso de imprevisible duración– dos sociedades coexistentes y yuxtapuestas pero enfrentadas en un principio y sometidas luego a permanente confrontación y a una interpenetración lenta, trabajosa, conflictiva, y por cierto aún no consumada»[29].

El proceso de acumulación de capital articulado a la industrialización por sustitución de importaciones se refleja en la transformación de la estructura productiva y la inversión interna bruta de capital. Este crece a un promedio anual del 7,4 por 100 desde 1950 hasta los años setenta, según las estadísticas de CEPAL para el periodo. Pero también demuestra la adopción de un estilo de desarrollo concentrador inherente a la dependencia industrial-tecnológica que no puede resolver los problemas de desigualdad social, pobreza, marginalidad y exclusión. América Latina sigue el patrón de acumulación, dependiente de las exportaciones primario-exportador y de bajo valor agregado.

La tan anhelada transición de la sociedad rural de base latifundista no alteró el poder real de las oligarquías terratenientes. La modernización no cuestionó la constelación latifundio-minifundio ni la forma de tenencia de la tierra. Es más, la denominada «Revolución verde»,

que modernizó la agricultura latinoamericana en cuanto crecimiento de la producción y la productividad, lo hizo a costa de una gran concentración de la riqueza y el ingreso, y una masiva migración de la población agraria a las ciudades. «Asimismo, el uso intensivo y sostenido de suelos frágiles desencadenó problemas ambientales de erosión y desertificación, a lo que se agrega la propagación abusiva de las variedades vegetales modernas de maíz, trigo, arroz, café y otros cultivos, que ha reducido gravemente la diversidad genética de las variedades autóctonas o aclimatadas durante cientos de años. La repercusiones de estas pérdidas por carencia de diversidad genética en los espacios modernos de plantaciones ya es notoria [...]»[30].

El capitalismo latinoamericano se remoja sin revolución burguesa. La opción política que abrazaron las burguesías locales fue el populismo. Así pudieron cooptar, frenar y absorber las demandas sociales de las clases populares, pasando a controlar los tiempos del cambio social, bajo un discurso nacionalista, antioligárquico, obrerista y de renegociación de la dependencia. En este contexto, la política amplía el espacio de participación de las clases trabajadoras, favorece el sindicalismo amarillo y la negociación colectiva. Los partidos políticos de la izquierda, al menos mientras no cuestionaron el proceso de modernización, gozaron de un verano de corta duración. El invierno, sin embargo, no tardará en llegar.

La oligarquía se retiró a sus cuarteles de invierno, acomodándose a su nuevo papel, actuar tras bambalinas. «Resalta su disposición para acomodarse a nuevas situaciones, cambiando la lucha frontal de un comienzo por la retirada posterior a líneas más fuertes, susceptibles de cuidar sus intereses primordiales. Para el éxito de esa conducta ha sido decisiva la expresión social de ductilidad, esto es, la aptitud para atraer y recibir elementos que sobresalen en los cuadros ajenos y que, por supuesto son asequibles. En Chile ha hecho historia y ha pasado a ser un personaje característico de una constelación política el joven rebelde de pequeña o mediana burguesía, por lo general provinciano, que es progresivamente “asimilado” por la derecha, aunque ello no implique mudanza en su filiación partidaria. El fenómeno, como es evidente, se aceleró y extendió grandemente con los cambios en el “balance de poder”. La vieja oligarquía abrió sus puertas, consciente de que por ese medio podía contrarrestar su debilitamiento y abrirse paso más expedito hacia las oportunidades creadas por la intervención estatal. Los otros, a su vez, siguiendo, antigua tradición, no vacilaron en trocar influencias o poder por lustre social»[31].

La Guerra Fría ubicó los países de América Latina en la esfera de Estados Unidos. El centro hegemónico gravitacional del poder se traslada a Washington. Occidente se enfrenta a un nuevo orden mundial. Derrotados los países del Eje, el enemigo de Occidente serán el comunismo mundial, la Unión Soviética y sus aliados. Nace la Doctrina Truman de las compensaciones. Al igual que la Enmienda Platt fue una garantía para la intervención de Estados Unidos en Cuba y Panamá, la Doctrina Truman fue la fórmula de enfrentar la expansión y consolidación de la izquierda marxista, los partidos obreros y los sindicatos de clase en la región, y la excusa perfecta para controlar militarmente el espacio geopolítico.

Bajo el cartel de «la amenaza comunista», los estrategas estadounidenses fundan

organismos regionales de contención «comunista»: en América Latina, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR, 1947) y la Organización de Estados Americanos (OEA, 1948). El TIAR funciona como una alianza militar, permitiendo a Estados Unidos intervenir en el hemisferio sur, si el alto mando considera que puede tener lugar un ataque extracontinental. Su artículo tercero explicita: «Las altas partes contratantes convienen en que un ataque armado de cualquier Estado contra un estado americano será considerado como un ataque contra todos los Estados americanos y en consecuencia cada una de dichas partes contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque en el ejercicio del derecho inmanente de la legítima defensa individual y colectiva que reconoce el artículo 51 de la Carta Magna de las Naciones Unidas»[32]. Y la OEA se convierte en la institución garantista de la política de seguridad hemisférica de Estados Unidos. No por casualidad sus países miembros aprobaron en 1954, a petición del Secretario de Estado norteamericano Dulles, la siguiente declaración: «[...] la dominación o control de las instituciones políticas de cualquier Estado americano por el movimiento comunista internacional [...] constituiría una amenaza para la soberanía e independencia de los Estados Unidos». La creación de ambas instituciones corrió paralela al cambio de política militar de seguridad, donde la estrategia de guerra total y peligro hemisférico se ve complementada por la estrategia de guerra limitada y la emergencia del peligro interno, incorporando la población civil como un objetivo militar.

Desarrollo dependiente y seguridad militar fueron los lindes impuestos por el imperialismo norteamericano para llevar a cabo la modernización, tratando de poner límites al cambio social y controlando el desborde social y político. La Alianza para el Progreso, política de ayuda económica diseñada por el gobierno Kennedy tratará de poner coto a las demandas de reforma agraria. Cualquier alternativa popular y democrática autónoma será tachada de izquierdista, marxista, socialista o comunista. La doctrina de la seguridad nacional hace acto de presencia acompañada de «leyes de defensa de la democracia» que ilegalizan los partidos obreros y mandan al cadalso a las izquierdas marxistas y socialistas, persiguiendo a sus afiliados. Dichas leyes se conocieron popularmente como «leyes malditas».

La Guerra Fría se institucionaliza. Costa Rica es el laboratorio perfecto para poner en funcionamiento las estrategias de guerra anticomunista. En dicho país centroamericano gobierna una alianza popular desde 1940 con el partido comunista y el arzobispo Víctor Sanabria, hombre de pensamiento progresista. El presidente Calderón será derrocado bajo una supuesta guerra civil. Sus políticas habían debilitado la oligarquía costarricense.

En Colombia, el 19 de abril de 1948 se produce el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Su muerte dio lugar a una gran explosión social, conocida como el «Bogotazo». Dicho movimiento popular de repulsa por el asesinato del Gaitán, condujo al presidente de turno, Ospina Pérez, a crear un frente anticomunista, facilitando en 1953 el golpe de Estado al general Rojas Pinilla.

En Venezuela, otro golpe de Estado derrocará a Rómulo Gallegos en noviembre de 1948. En Perú, el general Manuel Odría se encarga de reprimir y perseguir a la izquierda, marxistas-socialistas y comunistas, incluidos los militantes del APRA, nada tachables de izquierdistas. En Bolivia, tras la revolución nacionalista, el Movimiento Nacionalista Revolucionario

(MNR), a los pocos meses de consolidarse en el poder, 1952, considera necesario dotar el país de una institución militar, las fuerzas armadas, disueltas en primera instancia por el poder popular y las organizaciones obreras y mineras que habían participado del movimiento reformista. «La reorganización del ejército es una de las condiciones del reconocimiento por parte del imperialismo. Puesto que su propia existencia y la totalidad de su equipamiento provinieron de los Estados Unidos, es un ejército que se organiza en los términos de aquellos que existen bajo el control neocolonial norteamericano y así ocurrirá aun en aspectos de tanta inferencia local como lo que se llama su doctrina militar»[\[33\]](#).

En 1954, una expedición militar alentada desde Honduras, encabezada por el coronel Castillo Armas e instigada por Estados Unidos, derrocará en Guatemala al gobierno democrático del general Jacobo Arbenz. El imperialismo acota, democracia sí pero sin cuestionar ni alterar la dimensión subordinada de los países latinoamericanos al bloque occidental. Lo cual suponía poner un freno a las políticas de reforma agraria antilatifundista, a las nacionalizaciones de las riquezas básicas, las expropiaciones del capital multinacional y las proclamas socialistas. No hay lugar para la formación de gobiernos populares y anticapitalistas. La política de seguridad hemisférica diseñada por el imperialismo se debe cumplir a rajatabla, de lo contrario se recurre a la invasión o el golpe de Estado.

En Cuba se lucha contra Fulgencio Batista. El rechazo a su figura aglutina las fuerzas democráticas. La insurrección popular y la creación de un ejército rebelde, capaz de enfrentarse a un ejército regular y derrotarlo, supone un punto de inflexión en la Guerra Fría. Su triunfo, el 1 de enero de 1959, trae nuevos aires en las luchas emancipatorias. Su influencia se dejará sentir en todo el continente. Cuba cierra medio siglo de historia de luchas nacionalistas y abre el ciclo de las revoluciones anticapitalistas, socialistas y de liberación nacional. El antiimperialismo se redefine al interior del proyecto socialista.

La Primera Declaración de La Habana, leída el 2 de septiembre de 1960, ante el pueblo cubano, aclara: «La Asamblea General del Pueblo de Cuba proclama ante América: el derecho de los campesinos a la tierra; el derecho del obrero al fruto de su trabajo; el derecho de los niños a la educación; el derecho de los enfermos a la asistencia médica y hospitalaria; el derecho de los jóvenes al trabajo; el derecho de los estudiantes a la enseñanza libre; experimental y científica; el derecho de los negros y los indios a la dignidad plena del hombre; el derecho de la mujer a la igualdad civil, social y política; el derecho del anciano a una vejez segura; el derecho de los intelectuales y artistas a un mundo mejor; derecho a la nacionalización de los monopolios imperialistas, rescatando así las riquezas y los recursos naturales; el derecho de los países al comercio libre con todos los pueblos del mundo; el derecho de las naciones a su plena soberanía; el derecho de los pueblos a convertir sus fortalezas militares en escuelas, y armar a sus obreros, sus campesinos, a sus estudiantes, a sus intelectuales, al negro, al indio, a la mujer, al anciano, a todos los oprimidos y explotados, para que defiendan, por sí mismos, sus derechos y sus destinos [...] La Asamblea General del Pueblo de Cuba reafirma su fe en que la América Latina marchará pronto, unida y vencedora, libre de las ataduras que convierten a sus economías en riqueza enajenada al imperialismo norteamericano, y quienes impiden oír la verdadera voz en las reuniones de los cancilleres

donde domesticados hacen de coro infame al amo despótico. Ratifica, por ello, su decisión de trabajar por ese común destino latinoamericano, que permitirá a nuestros países edificar una solidaridad verdadera, asentada en la libre voluntad de cada uno de ellos y en las aspiraciones conjuntas de todos. En la lucha por esa América Latina liberada frente a las voces obedientes de quienes usurpan su representación oficial, surge ahora, con potencia invencible, la genuina voz de los pueblos, voz que se abre paso desde las entrañas de las minas de carbón y de estaño, desde las fábricas y centrales azucareros, desde las tierras enfeudadas, donde rotos, cholos, gauchos, jibaros, herederos de Zapata y de Sandino, empuñan las armas de su libertad, voz que resuena en sus poetas y en sus novelistas, en sus estudiantes, en sus mujeres y en sus niños, en sus ancianos desvalidos»[34].

Sin embargo, la Primera Declaración de la Habana tendrá un efecto directo en las fuerzas imperialistas y las burguesías locales desatando la contrarrevolución. Estados Unidos atacará con todo su arsenal. Desde invasiones, financiación de ejércitos mercenarios, apoyo militar y logístico, sabotaje y sobre todo elaborando un plan de adoctrinamiento político, ideológico y cultural.

En América Latina, Estados Unidos reproducirá su política de «acciones encubiertas» desarrollada en Irán, Egipto y Guatemala, cuya definición incorpora «toda actividad clandestina con el fin de influir en gobiernos extranjeros, acontecimientos, organizaciones o personas, en apoyo a la política exterior de Estados Unidos, realizada de tal forma que no se advierta la participación de Estados Unidos»; y, de acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad, dichas actividades, debían «planificarse y ejecutarse de tal forma que para las personas no autorizadas no exista evidencia de la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos y que si se descubren, el gobierno de Estados Unidos pueda rechazar de forma convincente cualquier responsabilidad por ellas»[35]. La primera de ellas fue a impedir la consolidación de la Revolución cubana. Se diseña durante la administración de D. Eisenhower y se ejecuta por el gobierno de John Kennedy. Se aleccionan fuerzas mercenarias, entrenadas por la CIA para desembarcar en la isla, buscando ganar una cabeza de playa para el posterior desembarco de tropas. El plan se lleva a cabo en la Bahía de Cochinos, Playa Girón, el 15 de abril de 1961, terminando con un sonoro fiasco. Sus jefes serán detenidos e intercambiados por mermelada para el consumo del pueblo cubano.

Las burguesías desarrollistas se pliegan a la doctrina de la seguridad nacional. El miedo a los movimientos de liberación nacional les atenaza. Los golpes de Estado son la alternativa, pero comprometen institucionalmente a las fuerzas armadas instruidas y entrenadas en la zona del Canal. Las dictaduras de la seguridad nacional compartirán espacio con regímenes pseudodemocráticos donde impera un presidencialismo bipartidista o monocolor como son Colombia, Costa Rica, Venezuela, México, Uruguay, México o Chile. En 1965, la República Dominicana será invadida por más de 20.000 marines acabando con la resistencia popular.

Los movimientos guerrilleros nacidos a la luz de la revolución cubana se extienden: el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua (1961); el Movimiento 13 de Noviembre en Guatemala, fundado por un oficial entrenado en la lucha contrainsurgente, Antonio Yon Sosa; o en Perú, cuya guerrilla campesina tendrá como fundador a Hugo Blanco

(1961). Colombia, Bolivia, Brasil, Venezuela, México y Argentina viven experiencias similares. «Estos primeros intentos al inicio de los años sesenta expresaban un momento de ascenso del movimiento popular. Ascenso que era, por una parte, resultado de la propaganda y de la euforia que despertaba en el continente la victoria de la Revolución cubana, y por otra, correspondía al fin del periodo de desarrollo que se había iniciado en Latinoamérica en la posguerra, el que empezaba a agotarse debido a las contradicciones generadas por el proceso de industrialización que se realizó dentro de los marcos de la integración monopólica mundial»[36].

Asimismo surge una generación de intelectuales en todos los ámbitos de la cultura. Influenciados por la Revolución cubana comienza la elaboración de un pensamiento crítico que gana terreno en la literatura, la antropología, el arte, la sociología, la ciencia política, la filosofía o la historia. Nombres como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Benedetti, Carlos Fuentes, Octavio Paz o Mario Vargas Llosa se convierten en referentes. En las ciencias sociales, Pablo González Casanova, Sergio Bagú, Theotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Octavio Ianni, Rodolfo Stavenhagen, Vania Bambirra, Ruy Mauro Marini, Celso Furtado, Enzo Faletto, Aníbal Pinto, Antonio García, Costa Pinto, Florestan Fernandes, Leopoldo Zea, José Nun, Paulo Freire, Oswaldo Sunkel, René Zavaleta Mercado, Anibal Quijano, Tomas Amadeo Vasconi, Adolfo Gilly, José Aricó, Suzy Castor, José Agustín Silva Michelena, Edelberto Torres Rivas, Daniel Camacho, Pedro Vuskovic, Gerard-Pierre Charles, Agustín Cueva, Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Maria Concepción Tavaré o Gregorio Selser. La lista es extensa. Es un momento dulce para la creación intelectual y se refleja en la gran producción teórica de los años sesenta y setenta.

De igual forma, Estados Unidos, pone en funcionamiento una estrategia de guerra donde contempla la formulación de escenarios revolucionarios, para el control del espacio y el control social. Entran en juego las ciencias sociales. Se buscan modelos para aplicar a la guerra subversiva en América Latina. Estados Unidos ya tenía experiencia en este tipo de acciones, en la Guerra de Vietnam había utilizado los estudios geográficos sobre los diques del río Rojo elaborados por antropólogos, geógrafos, ingenieros y topógrafos. Los bombardeos constantes tenían como objetivo anegar las poblaciones ribereñas y cortar las vías de comunicación fluvial. Las denuncias internacionales en 1965 lograron frenarlos, aunque el gobierno de Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger los retomarán en el año 1972.

Para América Latina, en 1964, el Departamento de Investigación y Desarrollo del Ejército de Estados Unidos solicitará a la Oficina de Investigaciones de Operaciones Especiales de la American University el desarrollo de un plan donde se mida y detecte: «1) Las potencialidades de guerra interna: un medio para identificar, medir y prever el potencial de guerra interna; 2) estimación de los efectos de reacción: como medio para estimar la eficacia relativa de varias posiciones, prácticas y niveles de acción de carácter militar, donde estas estuviesen envueltas y su resultado sobre una amplia gama de condiciones medioambientales; y 3) recolección de información y manipulación de sistemas: medios y procedimientos para una rápida recolección de información, su acumulación y recuperación de datos, acerca de las

potencialidades de guerra interna y de efectos de la acción gubernamental, con consideraciones apropiadas acerca de las facilidades existentes y que puedan surgir en el futuro para su procesamiento y análisis». Esta estrategia, conocida como Plan Camelot, será denunciada por intelectuales y académicos latinoamericanos en 1965, al recibir invitaciones a participar del proyecto[37].

La guerra contrainsurgente tendrá éxito en Colombia y Bolivia. Camilo Torres, jefe político y militar del Ejército de Liberación Nacional, cae en combate el 15 de febrero de 1966 y Ernesto Che Guevara es fusilado el 9 de octubre de 1967 por las fuerzas armadas bolivianas. Ambos sucesos marcan un punto de inflexión en las estrategias foquistas. La guerra contrainsurgente da frutos a costa de centenares de muertos, tortura y represión. La Guerra de Vietnam, nuevamente fue un referente.

«De hecho, el Pentágono creó un arsenal nuevo completo en respuesta a la guerra de guerrillas en Vietnam. Este armamento tecnológico iba desde la durable y liviana radio para un hombre hasta ataques de aire, mar y tierra dirigidos electrónicamente contra puestos enemigos. En resumen, Vietnam se convirtió en un conejillo de indias para la nueva tecnología militar. Lo que se produjo fue un concepto conocido como “campo de batalla electrónico” del cual el senador conservador Barry Goldwater dijo: “Personalmente creo que hay posibilidades que sea el más grande paso adelante en la guerra desde la pólvora”»[38].

Una sombra de pesimismo se cierne sobre la vía insurreccional. Las fuerzas armadas, pertrechadas con el material tecnológico más avanzado realizan una labor de exterminio minuciosa de poblaciones campesinas y organizaciones guerrilleras. Un conjunto de aparatos de última generación en tecnología armamentística comenzaron a ser comunes en las operaciones militares. Por ejemplo: el uso de detectores olfatrónicos (el análisis mecánico del olor, fue refinado por el Pentágono para localizar cuerpos humanos), de detectores infrarrojos (otro medio para ubicar las fuerzas guerrilleras escondidas en la selva), de detectores acústicos (micrófonos pequeños pero altamente dispersos en áreas determinadas que podían distinguir ruidos humanos de ruidos normales de fondo), de detectores sísmicos (aparatos podían notar la presión producida en el suelo por una persona caminando), de detectores magnéticos (aparatos, generalmente llevados en avión, que registraban la presencia de una concentración no habitual en el campo, bosque o selva), de radares de vigilancia (capaces de detectar objetivos en movimiento, incluyendo soldados a pie), y de aparatos para visión nocturna.

La región padece numerosos golpes de Estado. Los gobiernos encabezados por las burguesías locales reformistas tratan de hacer frente a los primeros fracasos del desarrollismo. En Chile, la «Revolución en Libertad», eslogan con el cual gobernó el partido democristiano, entre 1964-1970, buscó neutralizar las alternativas socialistas que miraban hacia Cuba. Estados Unidos avaló el proyecto. El deterioro institucional y el desgaste se acrecientan. Los movimientos de liberación nacional se redefinen.

Las alternativas al subdesarrollo se enmarcan en la crítica al desarrollo capitalista. La dicotomía, en términos políticos, se expresa en la contradicción subdesarrollo o revolución. Los cambios de fachada para modernizar política, social y económicamente la región no

rompen las estructuras del atraso y dejan intacto el edificio de la dependencia industrial-tecnológica. Ahora se cuestiona el estilo de desarrollo capitalista transnacional. La salida, en términos económicos y sociales, se piensa bajo los principios de desarrollo socialista. El imperialismo se transforma en el principal escollo. Las empresas y intereses norteamericanos serán considerados parte del proceso desnacionalizador que profundiza la dominación social, política y cultural, aumentando la brecha entre centros hegemónicos y periferias dependientes. El subdesarrollo se considera un fenómeno específico del desarrollo capitalista.

El 3 de octubre de 1968 las fuerzas armadas peruanas, bajo el mando del general Juan Velasco Alvarado asaltan el palacio presidencial destituyendo a Fernando Belaúnde Terry, oligarca conservador y empresario terrateniente. Ocho días más tarde, el 11 de octubre de 1968, en Panamá, la Guardia Nacional no reconoce el triunfo fraudulento de Arnulfo Arias en las urnas y, seguidamente, una junta de coroneles asume el poder. Omar Torrijos destaca entre sus miembros. Ambos son gobiernos militares y se declaran nacionalistas, progresistas, respetuosos de los derechos humanos y las libertades políticas. Es el comienzo del reformismo militar. Su origen, la crisis del desarrollismo.

La década de los setenta trae una sorpresa. El 4 de septiembre de 1970, se abre una nueva ventana en la historia de las luchas democráticas de América Latina. Apoyado por una coalición de partidos de izquierda, laicos, cristianos, marxistas, socialdemócratas e independientes, Salvador Allende, médico, adscrito al marxismo-socialista, es aupado a la presidencia de Chile. La vía chilena al socialismo comienza su andadura. Sus enunciados dejan claro el sentido democrático del proyecto. Institucionalidad, legalidad y libertad política. Sin restricciones a los derechos civiles, públicos y privados, y respetando el monopolio legítimo de las armas en poder de las fuerzas armadas. El camino no es insurreccional, sino adscrito a la lenta y continuada reforma del sistema político, buscando aunar voluntades para un proceso constituyente capaz de profundizar los cambios democráticos y socialistas, entre otros, la socialización de los medios de producción, bajo la fórmula de una economía productiva fundada en tres áreas: el área de propiedad social, el área mixta y el área de propiedad privada.

Tras la victoria, la burguesía chilena y Estados Unidos profundizan las acciones encubiertas, iniciadas con anterioridad al triunfo. Ahora su objetivo es impedir a toda costa que Allende asuma la presidencia. Henry Kissinger, Secretario de Estado de Richard Nixon, esputó esta frase: «No veo por qué debemos estar pasivos y ser observadores de cómo un país se vuelve comunista debido a la irresponsabilidad de su propio pueblo».

Durante los mil días que duró el gobierno popular, la derecha conspiró hasta conseguir su objetivo: romper la institucionalidad de las fuerzas armadas. Pero en los tres años que duró el gobierno de la Unidad Popular se alcanzaron los mayores logros sociales, culturales, económicos y políticos que ha registrado la historia de Chile. La juventud, la mujer de las clases populares, el pueblo mapuche y los campesinos se transforman en sujetos de su historia y pasan a ser dueños de su futuro. Se suben los sueldos y salarios, se emprenden obras de infraestructura, se profundiza la reforma agraria, se entregan viviendas sociales y se recupera la soberanía en el ámbito internacional, restableciendo relaciones con Cuba y abriendo otras

en el ámbito socialista. La vía pacífica al socialismo como camino democrático para romper el capitalismo dependiente. El 11 de septiembre de 1973, el bombardeo al palacio presidencial pone un fin trágico a la experiencia chilena. En su lugar, se aúpa una sangrienta dictadura que asola Chile durante 17 años. La muerte, la tortura, y la ignominia serán sus métodos de gobierno. Le seguirá el olvido y la traición. Los culpables de crímenes de lesa humanidad no serán juzgados.

En los años setenta, el golpe militar de Chile tiene su correlato en diferentes dictaduras militares o cívico-militares. Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Ecuador. Existen pocos gobiernos legitimados en las urnas, y su existencia no es símbolo de respetar las reglas de la democracia representativa. En México, la guerra sucia impone su ley. La matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, de campesinos en la sierra de Guerrero, la persecución y asesinato de los militantes del Ejército de los Pobres, fundado en 1967 por el maestro de escuela Lucio Cabañas –muerto en combate en 1974– contó con el asesoramiento de los Estados Unidos, dejando al descubierto la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional.

La historia jugaba en contra de los proyectos democráticos. La caída de la Unidad Popular rompió muchas expectativas. La vía electoral no germina en tierra estéril, donde el imperialismo y las burguesías locales imponen la ley del golpe de Estado. Sin embargo, al concluir la década, en 1979, una subregión, considerada marginal, Centroamérica, apodada despectivamente por sus gobiernos despóticos «repúblicas bananeras», emerge dando un nuevo impulso a las luchas democráticas. Nicaragua se levanta contra la tiranía de los Somoza. No se trata de un foco guerrillero, tampoco de una unidad de partidos de izquierda. El Frente Sandinista de Liberación Nacional promueve la integración de todas las fuerzas opositoras bajo un programa único. Nace el Movimiento Popular. Dicha estrategia culmina en el Movimiento del Pueblo Unido. Campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes, intelectuales, artistas, independientes y pueblos originarios dan vida al proyecto nacional, democrático, antiimperialista, popular y de economía mixta. El 19 de julio de 1979, el Ejército Sandinista entra en Managua. El dictador huye a Paraguay junto a su amigo Stroessner, en el poder desde 1954. Mientras tanto, la burguesía nicaragüense se une a los planes imperialistas para desestabilizar y derrocar al nuevo gobierno popular.

La revolución sandinista fue posible, entre otras causas, por la coyuntura internacional favorable. La presencia del gobierno del Partido Demócrata de James Carter en Estados Unidos y su política exterior tendrá una enorme repercusión en los acontecimientos regionales. Durante su mandato, por primera vez, la Casa Blanca realiza una crítica a la violación de los derechos humanos cometidos por las dictaduras militares. La congelación de fondos a los países que no respetasen los derechos humanos fue una voz de alarma para las dictaduras. La primavera duró poco. La elección del republicano Ronald Reagan en 1981 sepultó sus principios. La revolución sandinista pasa a ser considerada una amenaza para los Estados Unidos. James Carter es acusado de procomunista, por apoyar el triunfo de los sandinistas y de entregar el Canal de Panamá a otro gobierno hostil encabezado por el general Omar Torrijos. Ambos hechos, son la punta de lanza para proponer un cambio doctrinal en la Casa Blanca. Se impone el neoconservadurismo. Una visión apocalíptica se apodera de los análisis.

En 1980, los estrategas norteamericanos ligados a la plataforma republicana redactan el documento, fundamental para la política exterior hacia América Latina, conocido como «Documento de Santa Fe». Fue una pieza clave de la política exterior de Estados Unidos en la década de los ochenta y noventa del siglo xx.

«La política exterior de Estados Unidos debe comenzar a contrarrestar (no actuar en contra de) la teología de la liberación tal como esta es utilizada en América Latina por los clérigos de la “teología de la liberación”.[...] Estados Unidos debe rechazar la suposición errónea de que puede fácilmente generar e imponer alternativas democráticas de estilo estadounidense a los gobiernos autoritarios, y también dejar de lado la creencia igualmente fuerte de que en tales situaciones el cambio es per se inevitable deseable, y de interés para Estados Unidos. Esta creencia ha inducido a la administración Carter a participar activamente en la caída de regímenes autoritarios no comunistas, a la vez que se mantenía pasivo frente a la expansión comunista. [...] El de los derechos humanos, que es un concepto cultural y político relativo que la actual administración ha utilizado para intervenir en procura de cambios políticos en países de este hemisferio, afectando de manera adversa la paz, la estabilidad y la seguridad de la región, debe ser abandonado y reemplazado por una política no intervencionista de realismo político y ético»[39].

Se reanuda el apoyo a las dictaduras y se financia, de forma abierta y con el aval del congreso estadounidense, la lucha contrainsurgente para revertir los procesos ya comenzados. El dinero se destina a comprar armas, formar ejércitos mercenarios, corromper la clase política o enriquecer las cúpulas militares. Guatemala y El Salvador, países cuyos movimientos políticos de liberación nacional poseían una larga tradición de lucha democrática, serán el objetivo de esta nueva estrategia bautizada con el nombre de Guerras de Baja Intensidad.

La crisis centroamericana copa la atención en los años ochenta, solo la crisis de la deuda externa y las reformas neoliberales compiten en relevancia. En Guatemala, las fuerzas armadas bombardean con napalm a los pueblos mayas y las comunidades indígenas. «Entre 1980 y 1984, 460 aldeas del altiplano occidental son aniquiladas en la estrategia de “tierra arrasada” y cobrará trágica fama el triángulo Ixil [...] Los testimonios son espantosos: incendios de templos con todos los aldeanos dentro, decapitación de niños ante la vista de sus padres; introducción de la cabeza de los niños en el vientre de las madres ejecutadas, ante la vista del padre y abuelos. Testigos refieren que adultos indígenas debieron presenciar, antes de su ejecución, un partido de fútbol jugado por los soldados con la cabeza de los infantes»[40]. Los propios victimarios relatan sus acciones de crucifixión y empalamiento: « [...] cuando los sentaban en las estacas la gente gritaba, y al poco tiempo ya no se oía, ahí se quedaban sentados. Eso era parte del grupo de matadores a los que vi. Fueron esas cuatro personas, y cinco mujeres también, de las que hicieron uso los oficiales y las mataron sobre estacas [...] Yo estoy tranquilo al morir de un balazo, ya que de una vez se muere, pero sentarlo a uno en una estaca que llega hasta el estómago y le salga a uno, imagínese qué gritos [...] yo me sentía mal, pero qué podía hacer [...] Como recibía órdenes...»[41].

El responsable de este genocidio cometido durante el llamado «quinquenio negro» 1978-

1983, fue el dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983). Miembro de la Iglesia Evangelista del Verbo Divino, creó las patrullas de autodefensa civil y los grupos paramilitares cuya misión consistía en lograr el exterminio de la población campesina maya. En enero de 2013, Ríos Montt, se sentó en el banquillo de los acusados por crímenes de lesa humanidad. En abril, los jueces tumbaron la acusación. Tras un breve interregno, en mayo sería condenado a 80 años de prisión. Sin embargo, las fuerzas armadas guatemaltecas siguen incólumes, la impunidad sobre los mandos que participaron en la guerra sucia y el genocidio no se altera.

Las guerras de baja intensidad son el arma para revertir los procesos de liberación nacional. Su modalidad no establece diferencias entre fuerzas beligerantes, ejércitos, y población civil. Ya nadie queda fuera del conflicto. Así, los ataques de las fuerzas armadas se ceban con la población civil centroamericana. Entre 1980 y 1992 serán asesinadas 75.000 personas en El Salvador. En Guatemala la cifra sube a 200.000. En Nicaragua, durante la etapa de acoso, desestabilización y derrota electoral del Frente Sandinista, entre 1984 y febrero de 1990, los muertos superan las 35.000 personas[42]. En Panamá, el 20 de diciembre de 1989, los marines invaden el país. Las fuerzas de despliegue rápido, acompañadas de 26.000 soldados, dejan un saldo de 3.500 ciudadanos asesinados. Mientras esto ocurría en las calles de la capital y los barrios populares la noche del 20 de diciembre, en otro lugar de la ciudad, con premeditación y nocturnidad, jura el cargo de presidente, en la base norteamericana de Fort Clayton, Guillermo Endara.

Estados Unidos seguirá prestando su apoyo a las dictaduras militares, considerándolos gobiernos autoritarios defensores de la libertad de Occidente. En medio de esta ola involucionista, los años ochenta del siglo xx pasan a la historia de América Latina como «la década perdida». Los gobiernos democráticos casi desaparecen del mapa continental. La desigualdad se acrecienta y se destruyen derechos políticos, sociales, étnicos y culturales. En lo económico se imponen las políticas de austeridad. La deuda externa estrangula las economías sometiéndolas a draconianos planes de ajuste diseñados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En 1989 ve la luz el documento que orienta las políticas estadounidenses hacia el mundo. América Latina lo sufrirá en sus carnes. «El consenso de Washington», cuyo decálogo incluye: disciplina presupuestaria, reordenamiento del gasto público hacia el sector privado, reforma impositiva a la baja, liberalización financiera, desregulación de los mercados, apertura comercial, fin del proteccionismo, privatización, reforma laboral y protección de la propiedad privada. Venezuela es el primer país en ser afectado por los planes de ajuste. El segundo gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez acepta, en febrero de 1989, un paquete de medidas al respecto, a cambio recibirá un préstamo del FMI estimado de 4.500 millones de dólares. Debía liberalizar precios, subir el transporte público, el agua, el teléfono, la electricidad, el gas doméstico y la gasolina. Su aplicación se tradujo en una protesta social espontánea. A las pocas horas, las ciudades más importantes fueron objeto de revueltas populares. El gobierno aplacó el descontento sacando a las fuerzas armadas a reprimir. El resultado, 3.500 personas asesinadas. La masacre pasa a la historia de Venezuela como «el Caracazo».

El neoliberalismo latinoamericano cosecha víctimas. El Caracazo fue premonitorio. Durante los años noventa, los gobiernos neoliberales se adueñan del espacio político y económico. Los planes de ajustes se complementan con reformas constitucionales para adecuar el sistema político a la economía de mercado. La pobreza extrema, la desigualdad social, la exclusión y la marginalidad son sus resultados.

El triunfo de la Revolución sandinista había levantado esperanzas e ilusionado a la izquierda latinoamericana. Su derrota electoral, en las postrimerías del siglo xx, bloqueó el proyecto antiimperialista, democrático, popular y nacional y sobre todo anticapitalista. En sus maletas una generación marcada por la guerra y la desesperanza.

Los grandes problemas que habían dado lugar a las luchas de liberación nacional: la pobreza, la desigualdad social, el latifundismo, la corrupción institucional, la violencia estructural, la dependencia, no fueron resueltos. La crisis centroamericana se cerraba en falso. Los procesos de negociación y paz no incluyeron la justicia social, si el derecho a la vida, un triunfo considerable, pero insuficiente a dos décadas del fin de la guerra.

La caída del Muro de Berlín hizo albergar esperanzas. La guerra nuclear se alejaba del horizonte. La disolución del Pacto de Varsovia y el mantenimiento de la OTAN se consideró el principio del fin de la Guerra Fría. En América Latina, las dictaduras militares resultaban incómodas a los ojos de un mundo que abrazaba la globalización. Su papel de guardianes del «mundo libre» y representantes de «la lucha anticomunista» perdía adeptos. Mejor iniciar procesos de transición controlados por las propias fuerzas armadas, bajo el atento control de Estados Unidos.

Durante décadas la tarea despolutizante, la represión hacia el movimiento obrero, la desarticulación de los partidos de izquierda y el asesinato de los dirigentes políticos, sindicales y campesinos, llevada a cabo por las fuerzas armadas, facilitó el terreno para una transición «indolora». En Paraguay, el general Alfredo Stroessner, dictador desde 1954 era derrocado en febrero de 1989 con la anuencia de Estados Unidos y la complicidad del general Andrés Rodríguez Pedotti, a la sazón, consuegro de Stroessner. Como en la mayoría de los casos no será juzgado por crímenes de lesa humanidad. Vivirá exiliado en Brasil hasta su muerte en 2006. La actitud condescendiente hacia los dictadores será el sello de identidad de las transiciones, el pago exigido por los militares para dejar el poder político y regresar a sus cuarteles.

La ideología de la globalización fue la herramienta para modernizar los sistemas políticos. La euforia por el triunfo del capitalismo y el llamado «fin de la historia» requería otra manera de gobernar. Se anuncian más políticas liberalizadoras. América Latina se convierte en laboratorio donde experimentar y mostrar las virtudes del neoliberalismo.

Estados Unidos recupera la política del buen vecino para construir democracias de baja intensidad. En el poder, gobiernos civiles neoliberales. Colombia resiste el embate de las transiciones democráticas. Solo un intento antes de la caída del Muro. En 1986, las FARC y el ELN dieron un paso adelante. El gobierno de Belisario Betancur toma el testigo y se abre un proceso de paz y negociación, tras décadas de violencia. La derecha, el ejército y los grupos

paramilitares muestran su descontento y boicotean los acuerdos. Entre 1986 y 1990, son asesinados más de 4.000 militantes de Unión Patriótica, formación política donde se congregaron antiguos guerrilleros, marxistas-socialistas, del partido comunista, e independientes de izquierda. Hubo más de 500 cargos electos asesinados. Entre ellos, dos candidatos a presidente, ocho senadores, trece diputados, setenta concejales y once alcaldes. En 1990, el gobierno de César Gaviria reanuda las acciones contrainsurgentes. Los Estados Unidos acuñaron un concepto, narco-guerrilla, para unir narcotráfico y fuerzas insurgentes. Su objetivo participar en las políticas de seguridad nacional colombianas. La DEA (Drug Enforcement Administration) cobrará un protagonismo inusual. Su actuación fue preludio de su presencia en todo el continente. Perú, México, Bolivia, Ecuador, Venezuela o Paraguay. En 1999, bajo la administración Bill Clinton tomará un nombre específico: «Plan Colombia».

En 1986, en los últimos estertores de la Guerra Fría, caerá en Haití una de las dictaduras más sangrientas instaladas en el Caribe desde 1957. Padre e hijo, François Duvalier, Papá Doc, y Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, sembraron la muerte y el terror. En las primeras elecciones libres celebradas en 1991, accede a la presidencia el antiguo sacerdote Jean-Bertrand Aristide. Vinculado a la teología de la liberación su mandato será interrumpido por un golpe militar encabezado por el general Raoul Cédras, viejo colaborador del dictador. Aristide emprende viaje al exilio. Después de tres años de estancia en Venezuela y Estados Unidos, la administración Clinton y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acuerdan, en 1994, enviar una fuerza militar de 20.000 marines con la misión de reponer al presidente destituido. El nombre de la misión no deja dudas del nuevo momento histórico «Restaurar la democracia».

Con el enemigo interno derrotado, el discurso se centró en hacer cumplir las políticas de «austeridad». Reducir el gasto público y apretarse el cinturón. Pero el estilo neoliberal ahogó las economías. Los resultados no fueron los previstos. Los problemas de marginación, pobreza y desigualdad se agudizaron haciéndose crónicos. La corrupción política y económica ve aumentar sus niveles, impregnando todos los espacios de la vida social.

En Venezuela, a comienzos de los años noventa –en 1992–, un golpe de Estado dio la voz de alarma al neoliberalismo. Carlos Andrés Pérez será objeto, el 4 de febrero de 1992, de una insurrección militar. Un intento fallido de golpe de Estado impulsado por jóvenes oficiales, reclaman un cambio de rumbo y poner fin a las políticas de austeridad. El Caracazo, la corrupción, la deuda externa y los planes de ajustes del FMI fueron los argumentos para alzarse en armas. Hugo Chávez, la cara visible del golpe, es encarcelado y en 1994 amnistiado. Allí comienza su andadura política, un peregrinar en el desierto. Antiguo golpista y militar no eran buenas cartas de recomendación. En 1998 presenta su candidatura a presidente contra los partidos que dominaban el escenario de Venezuela desde 1958, AD (Acción Democrática) y COPEI (Comité de Organización Política Electoral Independiente). Su triunfo es algo inesperado. Electo, impulsará las transformaciones democráticas más importantes del siglo XXI en América Latina. Desde ese año hasta su muerte el 5 de marzo de 2013, contará con el apoyo de su pueblo, siendo reelegido para el cargo en los procesos

electorales más transparentes que recuerda la historia latinoamericana.

La pérdida de soberanía corrió paralela a la eliminación de las barreras arancelarias. Los tratados de libre comercio fueron el medio para debilitar los Estados y las políticas nacionalistas. México abandona su tradicional política antiimperialista, convirtiéndose, junto a Chile, en los dos ejemplos de reforma liberal triunfante. El gobierno del PRI (Partido Revolucionario Institucional) durante el mandato espurio de Salinas de Gortari, define su proyecto como «liberalismo social». Corren tiempos de privatizaciones, venta de activos nacionales, evasión de capitales, lavado de dinero e inversiones extranjeras libres de impuestos. La brecha entre ricos y pobres crece.

En México, nacido del fraude, el PRI logra hacerse con la presidencia en 1988. Gobierno de Salinas de Gortari. Su mayor éxito es la firma, con Estados Unidos y Canadá, del Tratado de Libre Comercio (ALCA). El 1 de enero de 1994 entra en funcionamiento. Todos los focos estaban en los discursos, los parabienes y las felicitaciones. Era un acuerdo de máximos. México dejaba de ser el vecino pobre. Sin embargo, ese mismo día, una insurrección popular hace tambalearse el discurso oficial. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional irrumpe en el escenario denunciando el carácter espurio del gobierno del PRI y reivindicando un proyecto constituyente democrático. Desde la selva Lacandona, Chiapas, los pueblos originarios, oprimidos, pero no vencidos, redefinen la historia, la lucha contra el colonialismo interno y el neoliberalismo. Así lo deja entrever el comunicado al pueblo de México el EZLN:

«[...] el nuevo espacio de relaciones políticas debe tener como base la justicia, la garantía de las condiciones de vida digna para todos los mexicanos: techo, tierra, trabajo, alimentación, educación, salud, independencia, libertad, democracia, justicia y paz [...] Un gobierno de transición democrática es un gobierno con un programa político de democratización de la vida del país. Un gobierno que se comprometa a abrir todos los espacios de participación política legal y pacífica para que las distintas fuerzas políticas, partidarias o no, puedan manifestarse, presentar sus propuestas de sociedad y competir, en igualdad de circunstancias, por el apoyo popular. Con un gobierno de transición, la participación política no se limitará al aspecto electoral. Porque existen, en nuestro país, realidades que no tienen figura legal para reconocer el derecho de existencia de las comunidades indígenas, como la creciente participación política de grupos no partidarios, como la necesidad de consultar toda la sociedad decisiones que atañen a los intereses de la nación [...]»[\[43\]](#).

La presencia del EZLN se convierte en un revulsivo para los movimientos sociales y políticos de la izquierda latinoamericana y mundial. Heterodoxo en el lenguaje, con una concepción de la democracia que incorpora las experiencias políticas de resistencia y lucha de los pueblos originarios, constituye un aporte a la construcción de alternativas populares. Es el ideario del neozapatismo, democracia, libertad y justicia. «Donde la libertad se refiere al carácter del cambio revolucionario. Se trata de un carácter que incorpora métodos diferentes, frentes diversos, formas variadas y distintos grados de compromiso y participación. Esto significa que todos los métodos tienen su lugar, que todos los frentes de lucha son necesarios,

y que todos los grados de participación son importantes. Se trata de concepción incluyente antivanguardista y colectiva. La democracia se refiere al objetivo y al resultado de esa revolución. Se trata de lograr construir la antesala del mundo nuevo, un espacio donde, con igualdad de derechos y obligaciones, las distintas fuerzas políticas se “disputen” el apoyo de la mayoría de la sociedad. Más no se trata de la conquista del poder o de la implantación (por vías pacíficas o violentas) de un nuevo sistema social, una revolución “impuesta”, sin el aval de las mayorías, termina por volverse contra sí misma. Y la justicia, trata de las características no ya de la revolución, sino de su resultado. El espacio resultante, las nuevas relaciones políticas, deberá cumplir con tres condiciones; la libertad, la democracia y la justicia. Estamos proponiendo pues, una revolución que haga posible la revolución [...]»[44].

Por esta razón, entre otras, el EZLN fue atacado, buscando primero su exterminio. El clamor del pueblo mexicano, copando las avenidas evito la tragedia. Pero en estos veinte años se le combate lateralmente, con planes de contrainsurgencia y hostigamiento en los territorios liberados, los Municipios Autónomos de Rebeldía Zapatista. El racismo y el colonialismo interno se han convertido en armas para aislar y minimizar su aporte al pensamiento emancipador latinoamericano. Hoy todavía resiste.

Sin dictaduras, los gobiernos constitucionales nacidos de las transiciones llevan el sello de las reformas neoliberales. Ningún país se escapa, salvo Cuba. La última década del siglo xx, destaca por la personalidad de sus presidentes, provengan de la derecha o la socialdemocracia. Todos se declaran defensores de la economía de mercado. Carlos Menem en Argentina, 1989-1999; Fernando Henrique Cardoso en Brasil, 1995-2000; Eduardo Frei Ruiz-Tagle en Chile, 1994-2000; Alberto Fujimori en Perú, 1990-2000; Gonzalo Sánchez de Lozada y Hugo Banzer en Bolivia; Zedillo en México; Violeta Chamorro en Nicaragua; Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti en Uruguay.

Las sucesiones presidenciales no acarrear cambios estratégicos. En Centroamérica, la paz firmada en El Salvador y Guatemala, deja como legado, por primera vez en su historia, el traspaso de poder de un presidente al siguiente. Podrán cumplir sus mandatos sin sufrir un golpe de Estado. Axioma roto en Honduras en 2009. Aunque los cargos electos debemos subrayar, sean ocupados, como en Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador por antiguos militares o civiles comprometidos con la violación de los derechos humanos.

Ecuador sufre un periodo de inestabilidad tras el gobierno de Sixto Durán –de 1992 a 1996–. Las convulsiones sociales se apoderan del país. Entre 1996 y el año 2000 desfilan tres presidentes. Abdalá Bucaram, 1996-1997; Fabián Alarcón, 1997-1998; y Jamil Mahuad, 1998-2000. Los conflictos maduran. Las voces de protesta se generalizan. Las políticas de ajuste, los planes de austeridad y las reformas laborales se ceban con las clases trabajadoras y los sectores medios. Se practica una política económica de exclusión social. La desnacionalización y las privatizaciones debilitan el Estado desarrollista construido en la posguerra. Las constituciones, muchas de ellas vigentes desde principios del siglo xx, se reforman para recibir el credo neoliberal. La adición de nuevos artículos *ad hoc*, son la puerta de entrada para la venta de los recursos estratégicos, considerados hasta ese instante propiedad del Estado. Tras los cambios, se les puede privatizar o vender al capital extranjero.

Bajo el pretexto de la «capitalización», la desnacionalización se extiende a los sectores estratégicos como la energía, el petróleo, las selvas, los bosques y los recursos hídricos. Las empresas transnacionales juegan su papel. Los megaproyectos se popularizan y el descontento crece. El fin del siglo xx coincide con un estallido social cuestionador del neoliberalismo.

En Venezuela no serán los partidos tradicionales quienes ganen las elecciones presidenciales en 1998. Un movimiento, surgido en los extramuros de la política y liderado Hugo Chávez Frías, triunfa contra pronóstico. El declive de los partidos políticos tradicionales, las frustraciones, la corrupción, el aumento de las desigualdades son, junto a las políticas neoliberales aplicadas durante una década, causa suficiente para votar abajo y a la izquierda. La llegada a la presidencia de Hugo Chávez conlleva el fin de la IV República. Época donde gobernaron, desde 1958, dos partidos, el socialcristiano COPEI y el socialdemócrata AD. Los cambios y las reformas iniciadas por el gobierno de Chávez se concretan en la refundación de la nación y el Estado, dando origen a la V República. Una nueva constitución, aprobada en referéndum en 1999 legitima el proyecto bajo el principio de la democracia participativa. Desde 1999 hasta las recientes elecciones presidenciales, celebradas en abril de 2013, el proyecto bolivariano ha pasado por varias etapas. Un golpe de Estado fallido en abril de 2002, un referéndum revocatorio, perdido por la oposición, y un referéndum para modificar la constitución, perdido por Hugo Chávez, y la muerte del propio presidente electo Hugo Chávez en marzo de 2013, produciéndose el relevo en la figura de Nicolás Maduro. Quien plantea una revolución dentro de la revolución, dando un nuevo impulso a los proyectos y misiones de participación popular, las políticas sociales de vivienda, de educación pública gratuita y a programas de infraestructura e investigación. La fuerza del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) fundado en 2007 es el punto de inflexión que facilita la organización y da un plus de articulación política al proyecto de socialismo democrático iniciado en 1998.

El poder y la legitimidad de los gobiernos neoliberales se resquebraja. En Bolivia su presidente, el exdictador Hugo Banzer, ve cómo la sociedad civil se manifiesta contra la privatización del suministro de agua, entregada a la empresa multinacional Bechtel. Durante cuatro meses, entre enero y abril de 2000, las movilizaciones populares en Cochabamba suscitan la declaración del estado de sitio. La llamada «Guerra del Agua» fue un punto de inflexión. La lucha de las organizaciones sociales populares revertió la privatización e impidió una subida del 50 por 100 en las tarifas. En medio de la crisis, un diputado, Evo Morales, único parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS) cobra protagonismo al lado de la organización sindical de cocaleros. Expulsado del congreso en una orquestada pantomima parlamentaria, será elegido presidente de Bolivia en 2005 y reelecto en 2009. Hoy Bolivia es un Estado plurinacional, su constitución se organiza bajo los principios de soberanía, dignidad y buen vivir. Se han nacionalizado las grandes empresas de hidrocarburos e hidroeléctricas, profundizado la reforma agraria y legislado en materia de jubilación, desempleo y derechos laborales. Por primera vez en la historia de Bolivia un representante del pueblo aymara ocupa la máxima magistratura. Sus éxitos le valen el reconocimiento internacional y también el rechazo que le profesa la oligarquía boliviana que, desplazada del

poder político, ha promovido golpes de Estado y procesos desestabilizadores, dando muestras de su intolerancia al advenimiento de un gobierno democrático.

En Argentina el sueño neoliberal es una pesadilla. Entre los años 2001 y 2004, pasarán por la Casa Rosada seis presidentes. Fernando de la Rúa, tras aplicar la Ley de Restricción de la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y de ahorro, conocida popularmente con el nombre de «corralito», ve cómo la ciudadanía sale a la calle y ataca las sedes bancarias. Bajo presión, declara el estado de sitio. Los militares intervienen sin contemplación. Se producen 27 muertos y más de 2.000 heridos. Renuncia en diciembre de 2001. Hasta la elección de Néstor Kirchner en 2003, una acefalia política caracterizada por la renuncia de tres presidentes, Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño, dará cuenta del descalabro neoliberal. Será Eduardo Duhalde, elegido por la asamblea, quien convoque las elecciones que dan el triunfo al peronista Néstor Kirchner, cuyo mandato se extiende hasta 2007, dando un giro nacionalista y antiimperialista. Su mayor éxito es la política de derechos humanos, al sentar en el banquillo de los acusados a todos los militares implicados en la guerra sucia. Le precede en el cargo Cristina Fernández, su esposa, quien opta por dar continuidad a las políticas nacionalistas y populares. Será en el año 2001 cuando aparezcan «los piqueteros», organización producto de la unión de movimientos barriales, parados y trabajadores, cuya emergencia insufló fuerzas al movimiento popular.

En Ecuador, el 9 de enero de 2000 el gobierno de Jamil Mahuad anuncia la dolarización del país. El Sucre, moneda nacional, pasará a mejor vida. La pérdida de soberanía monetaria trajo mayor pobreza, exclusión y desigualdad social. Son los comienzos de la inmigración masiva. Los movimientos de pueblos originarios, CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) y Pachakutik, ganan protagonismo. A partir de ese momento tendrán un papel destacado en el proceso político y social. Sus acciones se miden por la capacidad de quitar y mantener presidentes. Quien no cuente con su respaldo se enfrenta a un grave problema. En este contexto, al igual que sucediera en Venezuela y Bolivia, se consolida una organización política que recoge el descontento en medio de una profunda crisis política y económica. Rafael Correa lidera una nueva alianza en la cual participan el Partido Socialista, el Movimiento popular Democrático, Pachakutik, Partido Roldosista, Izquierda Democrática y Partido Comunista (la Alianza PAIS). Gana las elecciones presidenciales de 2006 en segunda vuelta; en 2008 convoca un proceso constituyente, siendo reelecto en 2009. El proyecto se define bajo el principio de ciudadanía activa y buen vivir. La constitución de 2008 abre las puertas al desarrollo armonioso con la naturaleza para crear un sistema de inclusión y equidad con respeto a la biodiversidad. Es la «revolución ciudadana».

Una nueva realidad emergente hizo pensar en un giro a la izquierda a principios del siglo XXI: el triunfo electoral de coaliciones o partidos políticos cuya vida se desarrolló en la clandestinidad y cuyos miembros sufrieron las consecuencias de la guerra sucia, la represión, la cárcel, la tortura o el exilio, aupados ahora a la condición de presidentes. En Brasil, un obrero metalúrgico, fogueado en la lucha sindical de los años setenta, ligado a la teología de la liberación, Luiz Inácio Lula da Silva, gana las elecciones presidenciales en 2003. Su gobierno, lleno de contradicciones y enfrentamientos con el Movimiento Campesino de los Sin

tierra, ha tenido continuidad en 2011. Tras ser electo en dos ocasiones, cede el testigo a su compañera de partido, Dilma Rousseff. Hoy sufre una crisis de identidad dado el aumento de la corrupción, el descrédito de la elite política y las contradicciones que supone gobernar en alianza con empresarios liberales y en connivencia con el gran capital.

En Uruguay, la izquierda obtiene un triunfo tan destacable como el logrado por Lula en Brasil. Tras doscientos años de hegemonía bipartidista, una coalición, el Frente Amplio, fundado en 1971, donde confluyen el Partido Comunista, Socialista, el Movimiento de Participación Popular, la Alianza Progresista o la Asamblea de Uruguay, logra imponerse sobre el Partido Blanco y Partido Colorado. En 2005, el Frente Amplio, perseguido durante décadas, enarbola la candidatura de Tabaré Vázquez, alcalde de Montevideo. Su buena gestión en el ayuntamiento le da la victoria en las presidenciales. En 2010, el Frente Amplio volverá a triunfar, presentando a José Mujica, antiguo militante del grupo guerrillero Tupamaros, y que previamente, había sido ministro y senador de la República. Detenido en los años setenta, sufrió cárcel de aislamiento durante once años hasta 1985. Su comportamiento ético y su quehacer político le aupó como uno de los grandes estadistas de América Latina.

El mapa de América Latina, ya no es monocolor. En Nicaragua, los sandinistas recuperan el gobierno central. Con rupturas, grandes deserciones y, sobre todo, con un pasado de corrupción y enriquecimiento de algunos de sus dirigentes, Daniel Ortega vuelve a la presidencia. En El Salvador, en marzo de 2009, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), gana las elecciones con un candidato independiente, Mauricio Funes. Su triunfo supuso el fin de la hegemonía de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), organización de extrema derecha que encubre y amnistía a los militares acusados de crímenes de lesa humanidad. A esta ola de cambios se suma Perú. Tras ser derrotado en las presidenciales del año 2006, el antiguo capitán del ejército y de la Escuela de las Américas, Ollanta Humala, de gran protagonismo en la guerra contra Sendero Luminoso y líder del partido nacionalista Peruano, se presenta en 2011, triunfando en segunda vuelta. Hoy gobierna en Perú.

El Caribe se transforma, ya sea el anglófono, el español o el francés. Gobiernos nacionalistas o progresistas se asoman y cambian la correlación de fuerzas. El tiempo se acelera. En 2010, treinta y tres presidentes y jefes de Gobierno crean un nuevo espacio de integración, el mayor de América Latina, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, proyecto que deja fuera por primera vez a Estados Unidos y Canadá. Los avances de integración exclusivamente latinoamericano se disparan en todos los ámbitos de la vida política, económica, cultural y social. MERCOSUR (Mercado Común del Sur), UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), Telesur o Banco del Sur. Son una respuesta colectiva al neoliberalismo, el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), la OEA (Organización de Estados Americanos) y los tratados de libre comercio.

Hoy coexisten todo tipo de gobiernos en América Latina: neoliberales, progresistas, nacionalistas, conservadores, populistas, de izquierdas y anticapitalistas. Sin embargo, algo permanece con fuerzas renovadas, el poder de las oligarquías, las burguesías gerenciales, las

transnacionales, y el imperialismo norteamericano. Todos juntos redefinen la estrategia para enfrentar nuevos retos conspirativos. Su mano está presente en los golpes de Estado de Honduras, en Paraguay destituyendo al presidente Fernando Lugo o alentando procesos desestabilizadores en Bolivia, Ecuador y Venezuela. También en los megaproyectos, traficando con alimentos transgénicos y queriendo mantener el control militar hemisférico del continente, instalando bases militares desde México a Chile.

La historia de América Latina sigue abierta, su futuro no está diseñado. La acción emancipadora siempre reaparece. Salvador Allende lo expresó en su discurso del 11 de septiembre de 1973, mientras era el palacio de gobierno era bombardeado: «La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa que será superada. Este es un momento duro y difícil: es posible que nos aplasten. Pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza para la conquista de una vida mejor».

[1] Reginald Horsman, *La raza y el destino manifiesto. Orígenes del anglosajonismo racial norteamericano*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 126 (cursivas del autor).

[2] *Ibidem*, op. cit., p. 123.

[3] José Martí, «Nuestra América», en *Antología Mínima*, La Habana, 1972, tomo I, p. 238.

[4] Luis Vitale, *Los principales periodos de la historia de América Latina. Contribución al debate del Bicentenario*, Santiago de Chile, Ediciones LOM, 2009, p. 47.

[5] Eric Williams, *Esclavitud y capitalismo*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1975, p. 20.

[6] C. L. R. James, *Los jacobinos negros. Toussaint L'Ouverture y la revolución de Haití*, Madrid, Turner, 2003, p. 14.

[7] Véase Gregorio Selser, *Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina. Tomo III. 1899-1945*, México, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2009, p. 59.

[8] Universidad de Panamá, *Constituciones de la república*, Panamá, 1970, p. 45.

[9] Gerard Pierre-Charles, *El pensamiento sociopolítico moderno en el Caribe*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 15.

[10] Agustín Cueva, *El desarrollo del capitalismo en América Latina*, México, Siglo XXI de México, 1977, p. 130.

[11] «Fragmento del Manifiesto del Partido Conservador chileno a la nación», en José Luis Romero y Luis Alberto Romero (comp.), *Pensamiento Conservador (1815-1898)*, Caracas, Ayacucho, 1978, pp. 184-185.

[12] Véase Julio Hesie, *El Periodo Parlamentario. 1861-1925*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1982, pp. 198 y ss.

[13] José Del Pozo, *Historia de América Latina y del Caribe. Desde la independencia hasta hoy*, Santiago de Chile, Ediciones LOM, 2009, p. 74.

[14] Marcelo Carmagnani, *Estado y sociedad en América Latina: 1850-1930*, Barcelona, Editorial Crítica, 1984, p. 98.

[15] Faustino Sarmiento, «Argiropolis o la capital de los Estados confederados del Río de la Plata», en Leopoldo Zea (comp.), *Pensamiento positivista latinoamericano*, vol. I, Caracas, Ayacucho, 1980, p. 71.

[16] Diana Balmori, Vos Stuart y Worman Miles, *Las alianzas de familia y la formación del país en América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica, 1990, pp. 66-67.

[17] Edelberto Torres Rivas, «Historia del proceso político centroamericano», *Centroamérica Hoy*, México, Siglo XXI de México, 1976, pp. 74-75.

[18] Hernán Ramírez Necochea, *Historia del movimiento obrero en Chile*, Santiago de Chile, Austral, 1955, p. 108.

[19] Hugh Thomas, *Cuba*, Barcelona, Debate, 2004, p. 430.

[20] Citado por Jorge Arias Gómez, *Farabundo Martí*, San José de Costa Rica, Educa, 1972, p. 45.

[21] «La juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud América», en *La reforma Universitaria*, Caracas, Ayacucho, 1979, pp. 3-7.

[22] Véase Jaime Breilh y Fanny Herrera, *El proceso juliano. Pensamiento, utopía y militares solidarios*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2011.

- [23] José del Pozo, *Historia de América Latina y del Caribe*, cit., p. 147.
- [24] Theotonio Dos Santos, *Socialismo o fascismo. El nuevo carácter de la dependencia y el dilema latinoamericano*, Buenos Aires, Periferia, 1972, p. 22.
- [25] *Ibidem*, p. 25.
- [26] Celso Furtado, *La hegemonía de los USA y América Latina*, Madrid, Cuadernos para el Diálogo, 1971, p. 130.
- [27] José del Pozo, *Historia de América Latina y del Caribe*, cit., p. 156.
- [28] Magaly Sánchez, «Estructura social y política de vivienda en el área metropolitana de Caracas», en Manuel Castells (comp.), *Estructura de clases y política urbana en América Latina*, Buenos Aires, Ediciones SIAP, 1974, p. 145.
- [29] José Luis Romero, *Latinoamérica. las ciudades y las ideas*, México, Siglo XXI de México, 52001, p. 331.
- [30] Pedro Cunill, *Las transformaciones del espacio geohistórico latinoamericano, 1930-1990*, México, Fondo de Cultura Económica / El Colegio de México, 1995, p. 129.
- [31] Anibal Pinto, «Desarrollo económico y relaciones sociales», en *Chile Hoy*, México, Siglo XXI de México, 1974, p. 24.
- [32] Jorge Tapia Valdés, *El terrorismo de Estado. La doctrina de la Seguridad nacional en el Cono Sur*, Caracas, Nueva Sociedad, 1980, p. 57.
- [33] René Zabaleta Mercado, *Clases sociales y conocimiento*, La Paz, Los amigos del Libro, 1988, p. 46.
- [34] «Primera Declaración de La Habana», en *Cinco Documentos*, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales. Instituto Cubano del Libro, 1971, pp. 123-124.
- [35] Frances Stonor Saunders, *La CIA y la guerra fría cultural*, Barcelona, Debate, 2001, p. 65.
- [36] Vania Bambirra, *Diez años de Insurrección en América Latina*, Santiago de Chile, Prensa Latina, 1970, p. 30.
- [37] Ignacio Balbontín Arteaga, «Las posibles consecuencias de un pensamiento belicista con apariencia científica: el plan Camelot», en AA.VV., *Subversión y Contrasubversión*, Ediciones CISEC, Santiago de Chile, 1978, p. 78.
- [38] Rex Wingerter, «El fracaso de la violencia en Vietnam», en *Subversión y Contrasubversión*, cit., p. 29.
- [39] Gregorio Selser, *El Documento de Santa Fe, Reagan y los derechos humanos*, México, Editorial Alpa-Corral, 1988, p. 50.
- [40] Jorge Solares, «Guatemala: etnicidad y democracia en tierra arrasada», en Pablo González Casanova y Marcos Roitman (coord.), *Democracia y Estado multiétnico en América Latina*, Universidad Nacional Autónoma de México México Ediciones La Jornada, , 1996, p. 182.
- [41] Prudencio García, *El genocidio de Guatemala a la luz de la sociología militar*, Madrid, Sepha, 2005, p. 169.
- [42] Véase Luis Suárez Salazar, *Madre América. Un siglo de violencia y dolor (1898-1998)*, La Habana, Editorial Ciencias Sociales, 2006.
- [43] «Comunicado del Ejército zapatista de Liberación Nacional al pueblo de México que participa en la Primera sesión de la Convención Nacional democrática», diario *La Jornada* (México), 31 de julio de 1994, p. 17.
- [44] EZLN, *La guerra por la palabra. a siete años de la lucha zapatista*, México, Rizoma, 2001, pp. 48-49.

Capítulo II

Guerra, golpes de Estado y fuerzas armadas

«Voy a entrar en el ejército y no me detendré hasta ser su jefe.»

Leónidas Rafael Trujillo. Dictador de la República Dominicana.

El siglo xx ha sido, nos recuerda Hobsbawm, «el más sangriento en la historia conocida de la humanidad. La cifra total de muertos provocados directa o indirectamente por las guerras se eleva a unos 187 millones de personas, un número que equivale a más del 10 por 100 de la población mundial de 1913. Si tomamos el año 1914 como punto de partida, el siglo xx ha sido un siglo de guerras casi ininterrumpidas, a excepción de algunos breves periodos sin conflictos armados organizados en todo el planeta»[\[1\]](#).

En América Latina estas cifras se vuelven aún más aterradoras si consideramos solo los muertos y los desaparecidos a causa de la represión, la guerra contrainsurgente, las dictaduras y los golpes de Estado perpetrados entre 1945 y 1990. Así, en Argentina hubo 46.000 entre 1974-1983; la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba sumó 20.000 muertos entre 1952-1958; en Colombia la cifra se eleva a 300.000 desde 1946 al fin de la Guerra Fría; en Chile, durante la dictadura de Pinochet, entre 1973-1989, fueron 3.065 los asesinados; en El Salvador, entre 1980 y 1992, conocido como periodo del «terror blanco», se contabilizaron 75.000. Las diferentes dictaduras en Guatemala, desde 1960 hasta 1994 elevaron sus cotas a 200.000; en Haití, durante la dictadura de Duvalier, 1958-1985, se contabilizaron 45.000. Durante la dinastía Somoza y la «guerra sucia» desarrollada por Estados Unidos en Nicaragua, entre 1984 y 1991, hubo 70.000 muertos; Perú presenta una estadística de 69.000 hasta la era Fujimori; Panamá, 3.000, solo en la invasión de 1989; República Dominicana otros 6.000, víctimas de la invasión de Estados Unidos en 1965[\[2\]](#). Países como México, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay, Honduras, Costa Rica, Uruguay o Venezuela ocultan sus datos. Pero podemos estar hablando de aproximadamente dos millones de víctimas para la región. Cifra que no considera las matanzas obreras, la represión cotidiana o quienes sufrieron la tortura, la cárcel y el exilio.

Conspiraciones, atentados, ruido de sables, maniobras militares, estados de excepción, magnicidios, se vinculan a la guerra y los golpes de Estado. No hay que ir muy lejos para recordar que la Primera Guerra Mundial tuvo como pretexto el asesinato, en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, del archiduque Francisco Fernando y su esposa, herederos de la corona austro-húngara. Estados Unidos siempre encuentra alguna excusa para invadir, provocar o apoyar golpes de Estado en América Latina. El hundimiento del *Maine* en 1898, desató la guerra hispano-cubana-norteamericana. En siglo xx, el conocido «incidente del golfo de Tonkín», el 2 de agosto de 1964, fue la argucia de Lyndon Johnson para declarar la Guerra a Vietnam. Un supuesto ataque de lanchas norvietnamitas al destructor USS Maddox bastó para

iniciar los bombardeos. Según la Doctrina del destino manifiesto, los Estados Unidos son un pueblo pacífico y su misión consiste en proveer al mundo de instituciones democráticas, salvaguardar la paz mundial y combatir los enemigos que la acechan. Su gobierno solo responde a las provocaciones exteriores.

El capitalismo se caracteriza por promover guerras y hacer de la industria bélica un gran negocio. Fue un general cinco estrellas y presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, quien destacó el papel del conglomerado industrial-militar. Un *lobby* que pesaba en el campo de la inversión y tecnología de guerra. En su discurso de despedida de la Casa Blanca, recalcó el significado de otorgar autonomía total al *establishment* militar y la gran industria armamentística: «[...] debemos guardarnos de la adquisición de influencia injustificada, sea buscada o no, por el complejo militar-industrial [...] Nunca debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades o proceso democráticos: No se puede dar nada por sentado. Solo una ciudadanía alerta e informada puede obligar al engranaje de la inmensa maquinaria industrial-militar de defensa con nuestros métodos y objetivos pacíficos a salvaguardar la libertad». Aunque el propio Eisenhower no desconocía que tan noble propósito debía estar supeditado a proteger la civilización occidental del comunismo: «Una ideología hostil –de ámbito mundial–, de carácter ateo, implacable en su propósito e insidioso en sus métodos».

Para hacer frente a este enemigo hostil, los gobiernos occidentales hicieron de las fuerzas armadas la institución adecuada para abordar, bajo la lente ideológica-política de la Guerra Fría, todas las guerras, cuyos tiempos, estrategias y fines son antagónicos. No será lo mismo enfrentarse militarmente una guerra revolucionaria, que de liberación nacional, partisana o popular. Las guerras construyen enemigos, ocupan medios militares y psicológicos acordes al objetivo a combatir. Fue la Guerra Fría el nicho donde la guerra subversiva toma cuerpo y se define. La incorporación de las fuerzas armadas a la lucha antisubversiva facilitó la militarización de las sociedades, dio pie al militarismo y provocó los golpes de Estado institucionales. La doctrina de la seguridad nacional sirvió de pantalla.

Las fuerzas armadas, como organización, según Finer, en *Los militares en la política mundial*, reúne cinco características, cuya confluencia orgánico-institucional las hace idóneas para cumplir la tarea encomendada de mantenimiento del orden social. Dichos factores se hicieron presentes a medida que los militares recogían las experiencias de Argelia y Vietnam. Ahora se trató de aplicarlas en la guerra contra las izquierdas, la subversión y el comunismo. ¿Cuáles eran estas cinco virtudes? 1) Poseer un comando centralizado, 2) asumir una jerarquía única, 3) poseer un alto nivel de disciplina, 4) desarrollar técnicas de intercomunicación capaces de organizar una acción colectiva en un reducido espacio de tiempo, y 5) Poseer *esprit de corps*, característica que la dota del necesario aislamiento y un amplio nivel de autosuficiencia.

La vieja afirmación de Clausewitz: «La guerra es la continuación de la política por otros medios», será invertida por Michel Foucault a principios de los sesenta: «La política es la guerra continuada por otros medios». Más acorde con el siglo xx, la guerra se transforma en relaciones tendientes a mantener la dominación política, ganada en el campo de batalla y

trasferida al ámbito del Estado, los grupos, las clases sociales y los individuos[3].

Tras el lanzamiento de la bomba atómica en Japón, sobre las poblaciones civiles de Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto de 1945, la relación espacio-tiempo de la guerra se altera abruptamente. La disuasión no depende del número de portaaviones, tanques, submarinos, tropas de infantería o aviación. El poder lo establecen las ojivas nucleares capaces de provocar la hecatombe en el planeta. Sin embargo, esta espada de Damocles no fue inconveniente para patrocinar y desarrollar la guerra convencional en escenarios regionales. Un nuevo contexto las reubica al interior de la Guerra Fría incorporando los procesos descolonizadores africanos y asiáticos. La experiencia francesa en Argelia e Indochina constituye un punto de inflexión en la elaboración de estrategias y tácticas militares. Nace la guerra contrainsurgente.

La Guerra Fría se presenta con un enfoque bipolar, Occidente cristiano versus Oriente comunista. Dos bloques político-militares e ideológicos se reparten el mundo, ejerciendo presión sobre los países aliados, subordinados y enemigos. La Unión Soviética y Estados Unidos se erigen como líderes de ambos bloques. Los ideólogos de la guerra cambian los relatos. Las luchas de liberación nacional son reinterpretadas a la luz de estrategias y tácticas de guerrillas y guerra anticomunista.

«El comunismo debe ser considerado no solo como un movimiento en sí mismo sino también como una fuerza que explota y expresa razonadamente las llamadas “aspiraciones nacionalistas”, y que provee orientación organizativa y política a todos los elementos anti-EEUU aunque es una facción minoritaria en el área, actualmente es un serio peligro en Guatemala y posiblemente crece en forma preocupante en Brasil y otros países. Fuera de la ley en varios países, posee no obstante las potencialidades peligrosas que caracterizan su presencia en otras partes del mundo. Su doctrina, que es paralela a la doctrina nacionalista en importantes aspectos, tiene un fuerte atractivo entre intelectuales y obreros, con el resultado de que han sido penetrados las escuelas y sindicatos»[4].

El coronel francés Roger Trinquier se convierte en el teórico más relevante de la guerra moderna a partir de los años cincuenta. Sus reflexiones constituyen un salto en el abordaje de las acciones contrainsurgentes, destacando su concepto de subversión, donde incluye los aspectos psicológicos de una guerra concebida total y globalmente. La guerra subversiva, dice: «Compromete a un conjunto de acciones de todo tipo (políticas, económicas, psicológicas, armadas, etcétera) que pretenden la toma del poder y el reemplazo de un sistema establecido por otro [...] En la guerra moderna es mucho más difícil definir el enemigo. Ninguna frontera material separa los dos campos. El límite entre los amigos y los enemigos atraviesa el seno mismo de la nación, de un mismo pueblo, en ocasiones una misma familia. Con frecuencia es una frontera ideológica, inmaterial, que sin embargo debe estar fijada de forma imperativa, si queremos alcanzar y vencer con seguridad a nuestro adversario»[5].

Esta noción de guerra moderna no tardó en formar parte de la doctrina de la seguridad nacional y justificar la presencia activa de las fuerzas armadas en la aplicación de las políticas antsubversivas en América Latina. Así reclamaron un protagonismo en la lucha contra las revoluciones, la izquierda marxista-socialista y comunista. La guerra antsubversiva

no era solamente un problema militar. En las academias de guerra sus instructores explicitan la visión global de la lucha contrainsurgente: «De estrictamente militar la guerra se ha convertido en una guerra total, una guerra tanto económica, financiera, política, psicológica y, científica como una guerra de ejército, flota y aviación; de la guerra total a la guerra global y de la guerra global a la guerra indivisible y, por qué no reconocerlo, a la guerra permanente»[6].

Bajo este paraguas, la guerra contra el comunismo, adopta un tomo mesiánico. Quienes la llevan a cabo se comprometen con la salvaguarda de los valores católicos, la defensa de la familia cristiana y la patria, amenazada por enemigos infiltrados que buscan su desintegración. Trinquier y otros generales franceses forman en el interior de las fuerzas armadas francesas «la cité Catholique», organización secreta católica y ultranacionalista. Sus principios se expanden por América Latina. En Argentina toma cuerpo a principios de los sesenta. Sus miembros tendrán bajo la dictadura de Videla una actuación destacada. En 1961, «el presidente argentino Arturo Frondizi inaugura el Primer Curso Interamericano de Guerra Contrarrevolucionaria, organizado en la Escuela Superior de Guerra [...] El curso contaba con el asesoramiento de los generales franceses [...] Al inaugurar el curso, el director de la Escuela Superior de Guerra dijo que versaría sobre un nuevo tipo de guerra “que podríamos calificar de guerra interna” que se libra “sin reparar en medios, sin escrúpulos ni principios éticos”. No tiene límites geográficos y entre los enemigos figuran la demagogia, la inmoralidad, los vicios, las bajas pasiones, que son utilizados por la “dialéctica de acción comunista” que fomenta “oposiciones y contradicciones”. El mundo libre debe comprender que está en operaciones». La ceremonia fue bendecida por el entonces cardenal Antonio Caggiano, quien invocó la ayuda de Dios para que «los militares encuentren el sendero recto para defender la paz de nuestros pueblos»[7]. El enemigo anida en el Estado, se esconde bajo el hombre y la mujer corriente. Infiltrados en las instituciones, los sindicatos, las fuerzas armadas, tratan de imponer su macabro plan consistente en la anular sus libertades, realizar un lavado de cerebro e imponer una dictadura marxista y totalitaria.

La psicología y las técnicas de control mental se reivindican como asignaturas en las academias de guerra, evidenciando el hándicap de no incorporarlas a sus cursos: «Las escuelas militares que enseñan las doctrinas clásicas de la guerra muestran factores de decisión más o menos numerosas: la misión, el enemigo, el terreno, los medios. Por el contrario, en general se hace abstracción de un factor que es esencial en la conducta de la guerra moderna: el habitante [...] El control de las masas por medio de una estricta jerarquía o con frecuencia por muchas jerarquías paralelas es el arma de la guerra moderna»[8].

La guerra psicológica incorpora estudios etológicos y de la conducta aplicados a la población civil. El uso militar de la psiquiatría se extiende. El miedo y las llamadas campañas anticomunistas en cine, radio y novelas se transforma en un campo de batalla. Nada está fuera de esta guerra total y global. En los cómics, el enemigo ataca las mentes, quiere la sumisión, el control absoluto de los individuos, crear un mundo de autómatas sin libertad. Los héroes se presentan como salvadores de la civilización occidental y los valores cristianos[9]. Nace la amenaza y la infiltración «comunista».

Durante el macartismo, se difundió en Estados Unidos, como más tarde en América Latina,

esta visión para ilegalizar los partidos comunistas y perseguir a sus militantes. En un folleto redactado por la CIA, el *Manual comunista de instrucciones para la guerra psicopolítica*, se plantea la posibilidad de infiltración comunista en el sistema nacional profesional de la salud con el fin de hacer que América sea «más loca». Los comunistas tratarían de reclutar médicos y psiquiatras para desquiciar la vida de la población por medio de «tratamientos» que la vuelvan neurótica, que alienten el suicidio y que «mantengan alta la mística de la locura»[\[10\]](#). Al mismo tiempo, la conspiración comunista buscaba destruir la libertad: «[...] los comunistas han desarrollado una elaborada técnica científica, calculada y dirigida a inutilizar a la juventud estadounidense por medio de ataques al sistema nervioso, promoviendo el deterioro y el retardo mental [...] La música destructiva de los Beatles simplemente refuerza el sistema excitatorio de la juventud en el punto donde se cruza el sistema inhibitorio: todo esto debilita el sistema nervioso del joven y lo hace sufrir una neurosis artificialmente inducida. Lo horrorizante, y aún fatal, de este estado de destrucción mental, es que estos adolescentes, una vez que han entrado en este estado de excitación e hipnosis pueden ser dirigidos para hacer cualquier cosa, y lo harán»[\[11\]](#).

Los golpes de Estado y ruido de sables en el Tercer Mundo han tenido ese denominador común. Las fuerzas armadas se arrojan la salvaguarda de los valores y el honor patrio ante la amenaza comunista. La institución militar se presenta como el instrumento perfecto para cumplir esta misión. Además de las cinco características enunciadas, «las fuerzas armadas poseen tres grandes ventajas políticas con respecto a las organizaciones civiles: una notable superioridad en la organización, una condición simbólica en la cual intervienen elementos sumamente emocionales y el monopolio de las armas. Constituyen una corporación o una orden prestigiosa, que goza de gran superioridad en cuanto a las maneras de emplear la fuerza. La duda, por lo tanto, no está en el motivo por el cual se rebelan contra sus amos civiles, sino la razón por la cual la obedecen alguna vez»[\[12\]](#).

A pesar de la propaganda estadounidense, dando a entender las ambiciones ocultas de la Unión Soviética por apoderarse de América Latina, circunstancia que justificó incrementar los gastos militares y contingentes, los servicios de inteligencia y el Pentágono tenían una visión menos catastrófica: «en 1948 que en los veinte países de América Latina el conjunto de militantes de partidos comunistas eran unos 360.000, equivalente al 0,25 por 100 de su población. Diez años después su número total era rebajado a unos 200.000, de los cuales 80.000 estaban en Argentina, 40.000 en Brasil y muchos menos en Chile y Perú [...] Y en la documentación del Departamento de Estado se había anticipado en junio de 1948 que “el comunismo en las Américas es un peligro potencial, pero con quizás unas pocas excepciones no es un peligro serio en estos momentos”»[\[13\]](#).

Aun así, desplegaron todo el potencial político e ideológico para desatar la estrategia psicológica del miedo y atemorizar a la población. El supuesto enemigo interno está en todos los sitios. De esa manera, los golpes de Estado cumplen una función liberadora a la par que una catarsis. Esta concepción de la guerra psicológica «está presente en la llamada “doctrina de la seguridad nacional”, es decir, aquella que considera a las propias clases populares como objeto del dominio. En el ámbito de la “paz” política se trata de imponer un “universo

cultural” que organice la totalidad de lo real desde las fuerzas armadas. Están así aliadas y unidas en una misma acción con los poderes que abarcan todos los campos de la información, de la política, de la economía, de la religión, de las relaciones sociales, de la educación y hasta de las relaciones sexuales. Creo que aquí se pone de relieve la estructura fundamental que organiza en un todo orgánico la complicidad de los diversos órdenes de dominación integrados al poder, que abarcan la totalidad de la vida civil, organizada desde las fuerzas militares. Este plan expresa el fundamento estratégico vigente durante la “paz”, es decir, allí donde aparentemente impera el dominio de la política como campo de debate y libre decisión ciudadana. Estamos entonces en presencia de los fundamentos visibles y declarados, explícitos de esa estrategia. El plan guerrero de “acción psicológica” es el fundamento descarnado y visible de la estrategia de dominio de todo el sistema del capitalismo imperial en tiempos de paz –que son también– como ellos mismos declaran, de guerra. El fundamento, en fin, del endocolonialismo»[\[14\]](#).

Las primeras escaramuzas militares

Los golpes de Estado y la presencia de los militares en la política latinoamericana tienen una larga data. La escusa de la subversión no precedió la actuación de las fuerzas armadas. El fantasma del comunismo, la izquierda totalitaria y el marxismo-socialista son argumentos posteriores al triunfo de la Revolución rusa. Influenciados por la Tercera Internacional, la llamada a la revolución mundial y la creación de un aparato clandestino destinado a promover la insurrección popular, la lucha de clase contra clase, en los bisoños partidos comunistas fundados en los años veinte del siglo pasado, supuso un cambio cualitativo. Previamente, los golpes de Estado adujeron motivos más peregrinos. Riñas entre familias de la oligarquía, desavenencias al interior de unas fuerzas armadas poco institucionales e incluso la acción concertada entre las compañías multinacionales y algunos sectores proclives al chantaje, la corrupción y el deseo de riquezas.

Los golpes de Estado y la presencia de los militares entroncan la historia de América Latina desde la independencia política. En un estudio realizado a fines de los años ochenta, se analizan 1763 gobiernos desde la independencia hasta 1984, detallando que hubo más gobernantes militares (44,8 por 100) que civiles (38,4 por 100) y que los militares gobernaron más tiempo (47,6 por 100 del total) que los civiles (42,5 por 100). Considerado por etapas, la proporción de gobiernos militares y cívico-militares es la siguiente: 1801-1830 (57 por 100); 1831-1880 (55,7 por 100); 1881-1944 (42,0 por 100); 1945-1963 (34,3 por 100); 1964-1977 (50,5 por 100); 1978-1984 (48,1 por 100). En total del periodo el 48,8 por 100 de los gobiernos estuvo a cargo de militares y de juntas cívico-militares[\[15\]](#).

Concluidas las luchas de independencia, los ejércitos eran controlados por caudillos locales o regionales. Sus galones ganados en el campo de batalla eran aval suficiente para demandar la presidencia del país. Pasada la primera mitad del siglo XIX y concluido el llamado periodo anárquico de formación del Estado Nacional, se hizo necesario

profesionalizar los ejércitos. Había llegado la hora de educar a los militares en técnicas de combate, estrategias de defensa y ataque, y dotarles de una ideología garante de la paz y la seguridad territorial. El caudillismo de primera generación debía ser reemplazado por unas fuerzas armadas con miras elevadas: la defensa de la soberanía. En estas condiciones se produce la «revolución de la profesionalización». De esta tarea fueron solicitados los servicios de los grandes ejércitos europeos de la época. Así, llegan al continente las primeras misiones encabezadas por militares alemanes y franceses. Los regímenes oligárquicos dedicaron tiempo y dinero a dicha labor.

«Uno de los primeros casos es el de Chile, donde el comienzo de la segunda mitad del siglo XIX arriba una misión encabezada por Emil Koerner, que encara un profundo plan de modernización referido al armamento y la creación de una verdadera red de apoyo logístico (maestranzas, abastecimientos y arsenales), a la enseñanza de nuevas formaciones de batalla (abandonando la formación en cuadro de la infantería chilena); a la creación de una escuela de guerra para oficiales superiores, al envío de muchos de ellos a perfeccionarse en Europa, y a la creación de un estado mayor: estas misiones alemanas también estuvieron en los ejércitos de Argentina, Bolivia y Uruguay, aunque en estos dos últimos países también tuvieron una fuerte influencia las misiones francesas. Por su parte Brasil, Perú, y Guatemala contrataron técnicos militares franceses y, poco después, la influencia militar germana se hizo sentir en Paraguay, Ecuador, Colombia, Venezuela (que luego tendría su fuerza aérea entrenada por pilotos italianos), El Salvador y Nicaragua, a través de los instructores chilenos que viajaron a esos países o de los oficiales de éstos que estudiaron en la academia de guerra de Santiago de Chile»[\[16\]](#).

Bajo el influjo de las oligarquías primario-exportadoras, las fuerzas armadas actuaron como gendarmes del proceso de acumulación de capital. Asimismo, no olvidaron apoyar las políticas expansionistas de sus gobiernos plutocráticos. Basta mencionar la Guerra del Pacífico, del Acre y del Chaco, en el Cono Sur. En ellas, Bolivia perdió su salida al mar y la mitad de su territorio. En Centroamérica su actuación en el siglo XX, hasta el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua en 1979, sirvió para crear un nacionalismo chauvinista. La guerra entre Nicaragua y Costa Rica durante la dictadura de Somoza, tapó la represión interna. La Guerra del Fútbol entre Honduras y El Salvador en 1969 acentuó el patriotismo de ambos países y de paso ocultó la política represiva hacia los campesinos salvadoreños afincados en la frontera hondureña durante años. Por su importancia, vale la pena reproducir, como Ryszard Kapuscinski, el corresponsal de guerra polaco, relató *in situ*, la Guerra del Fútbol de las cien horas: «La verdadera causa de la Guerra del Fútbol radicaba en lo siguiente. El Salvador, el país más pequeño de América Central, tiene la densidad de población más alta de todo el continente americano (más de 160 personas por kilómetro cuadrado). La gente se agolpa en un espacio tremendamente reducido, máxime cuando la inmensa mayoría de la tierra está en manos de catorce poderosos clanes de terratenientes. Incluso se dice que “El Salvador es la propiedad particular de catorce familias”. Mil latifundistas poseen exactamente diez veces más extensión de tierra que la que poseen cien mil campesinos juntos. Dos tercios de la población rural no tienen ni un acre. En unas migraciones que se han prolongado durante años,

una buena parte de este campesinado ha emigrado a Honduras, donde había grandes extensiones de tierras sin dueño. Honduras (112.000 kilómetros cuadrados) es casi seis veces mayor que El Salvador, al tiempo que tiene una población dos veces menor (alrededor de dos millones y medio de habitantes). Se trataba de una emigración bajo cuerda, ilegal, pero tolerada por el gobierno de Honduras durante años. Los campesinos de El Salvador se establecían en Honduras, fundaban sus aldeas y llevaban una vida algo mejor que la que dejaban atrás, su número alcanzó unos trescientos mil. En los años sesenta se manifestaron los primeros síntomas de malestar entre los campesinos hondureños, que reclamaban tierras en propiedad. El gobierno proclamó un decreto de reforma agraria. Al ser un gobierno al servicio de la oligarquía terrateniente y ejecutor de la voluntad de Estados Unidos, el decreto no preveía ni la fragmentación de los latifundios ni el reparto de las tierras pertenecientes al *trust* estadounidense United Fruit, que posee grandes plantaciones bananeras en territorio de Honduras. El gobierno pretendía entregar a los campesinos hondureños las tierras ocupadas por los campesinos salvadoreños. Eso significaba que trescientos mil emigrantes salvadoreños debían regresar a su país, donde no tenían nada. A su vez, el también oligárquico gobierno de El Salvador, se negó a recibirlos, llevado del temor de una revuelta campesina. El gobierno de Honduras insistía y el gobierno de El Salvador se negaba. Las relaciones entre los dos países se volvieron muy tensas. A ambos lados de la frontera, los periódicos llevaban a cabo una campaña de odio, calumnias e insultos. Mutuamente se tachaban de nazis, enanos, borrachos, sádicos, sabandijas, agresores y ladrones. Organizaban pogromos e incendiaban comercios [...] El fútbol ayudó a enardecer aún más los ánimos de chovinismo y de histeria seudopatriótica, tan necesarios para desencadenar la guerra y fortalecer así el poder de las oligarquías en los dos países. El salvador fue el primero en atacar»[\[17\]](#).

Los ejércitos también fueron utilizados para reprimir a los pueblos originarios, tomando un cariz «civilizatorio». El objetivo, combatir y exterminar razas inferiores, renuentes al progreso, no aptos o con escasas aptitudes para el trabajo. Así, podían ser gauchos, vagos y mal entretenidos, cuanto campesinos, mapuches, tehuelches, pampas, mayas, incas, patagones o cimarrones. La solución, combatirlos sin piedad.

«En relación con los indios araucanos de la Pampa, las ideas de Sarmiento y las de la oligarquía ganadera, no podían encontrarse dentro de una mayor coincidencia, al punto de que en Chile, el autor de *Facundo. Civilización o barbarie* había llegado a escribir: “Porque es preciso que seamos justos con los españoles; al exterminar a un pueblo salvaje, cuyo territorio iban a ocupar, hacían simplemente lo que todos los pueblos civilizados hacen con los salvajes [...] las razas fuertes exterminan a las débiles, los pueblos civilizados suplantán en la posesión de la tierra a los salvajes. Esto es providencial y útil, sublime y grande”. Y repetía: “Sobre todo, quisiéramos apartar de toda cuestión social americana a los salvajes, por quienes sentimos sin poderlo remediar una invencible repugnancia, y para nosotros Colocolo, Lautaro y Caupolicán, no obstante los ropajes civilizados y nobles de que los revistiera Ercilla, no son más que unos indios asquerosos, a quienes habríamos hecho colgar o mandaríamos colgar ahora, si reapareciesen en un guerra de los araucanos contra Chile, que nada tiene que ver con esa canalla”. Y, siendo presidente de la República Argentina, prosiguió la guerra contra esos

mismos “indios asquerosos” en nuestras pampas, con la saña y ferocidad de siempre»[18].

El mismo autor reproduce la célebre recomendación, que por escrito hiciera Sarmiento a Bartolomé Mitre: «No trate de economizar sangre de gaucho. Este es un abono que conviene hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos». Y acota: «A Sarmiento le tocó enfrentar y exterminar a los caudillos del interior de Argentina, poniendo punto final a la tarea que Rosas había hecho posible y que prosiguió Mitre, es decir, finalizando lo que él llamó la lucha entre la civilización y la barbarie, que era, en realidad, la lucha entre el capitalismo y el precapitalismo»[19].

Los ejércitos asumieron su función civilizatoria, fogueándose en el arte de la guerra. Por consiguiente, las primeras intervenciones realizadas por los ejércitos latinoamericanos consistieron en desposeer de sus tierras a los pueblos originarios. Para la oligarquía, el uso de la fuerza militar tuvo como objetivo la ampliación de los grandes latifundios y consolidación de la clase terrateniente.

En Brasil, durante la etapa de la «pacificación», entrado el siglo xx, con el fin de ampliar la frontera agrícola latifundista, se llevó a cabo un genocidio que hoy, en la rentable zona de economía agrícola se reconoce la «proporción más alta de tribus extinguidas, pues el 60 por 100 de los grupos registrados en 1900 ya no existen. En todos estos casos se trata de tribus que consiguieron sobrevivir aisladas en fajas que hasta el siglo xx permanecieron inexploradas, próximas a la costa atlántica, en los estados de Minas, Espírito Santo y Bahía. Nos referimos a los indios batocudos, baenân, pataxo y kamakân, que se mantuvieron hostiles hasta el primer cuarto de siglo, aunque reducidos a pequeños bandos atemorizados y totalmente descaracterizados por un siglo de choques sangrientos con los civilizados». Entre 1900 y 1957 existían «en áreas de economía extractiva 47 grupos, de los cuales quedan seis, de los demás, 27 pasaron a otras etapas de integración y 14 desaparecieron. Estos últimos comprendían, principalmente tribus de la región del Juruá-Purús que habían enfrentado en los últimos años del siglo pasado el más potente movimiento de expansión experimentado por la industria extractiva en el Brasil. Nos referimos a la oleada de extractores de caucho, balata y goma que subió aquellos ríos hasta el Acre, en los años de más alta cotización comercial de aquellos productos, y avanzó sobre los grupos tribales como una avalancha de destrucción»[20].

El etnocidio de los pueblos originarios se entendió como el triunfo del orden y progreso. Los ejércitos fueron el brazo armado de las clases dominantes y el capital multinacional. La aparición y desarrollo de las academias de guerra favoreció las ansias de grandeza de los militares en su labor purificadora de la patria amenazada. Las fuerzas armadas se consolidaron como defensores «naturales» del Estado oligárquico, volviéndose un protagonista habitual en la esfera política.

El desarrollo de los enclaves mineros, agrícolas y la explotación de las riquezas básicas, en poder de las oligarquías y el capital multinacional, requería un sistema de explotación estable, controlado férreamente. Mantener la sumisión, evitar las huelgas y reprimir las organizaciones obreras se entendió como misión prioritaria de las fuerzas armadas. Se consideraron «apaciguadores» de las protestas sociales y diques de contención natural contra

los dirigentes sindicales que llamaban a la organizarse y resistir. Así nace una tríada. El poder político queda en manos de la oligarquía, el orden entregado a los militares y el progreso al capital extranjero.

El incipiente accionar del movimiento obrero y las revueltas campesinas se convirtieron en el objetivo predilecto de las fuerzas armadas. La represión política forma parte del triste historial que lucen las fuerzas armadas latinoamericanas. No hay país donde no hayan protagonizado masacres, llevándose por delante centenares de vidas de trabajadores, militantes obreros, mujeres y niños. Un prototipo de actuación fue la Matanza ocurrida en la escuela «Santa María» de Iquique, en Chile: «El 16 de diciembre de 1907 estalló en Iquique en un gran movimiento, en el que participaron diez mil trabajadores. Pedían aumentos de salarios, seguridades en las faenas (colocación de rejillas metálicas en torno a los cachuchos hirvientes, a fin de impedir las frecuentes caídas de los obreros y su muerte horrorosa) y comercio libre que pusiera fin a la explotación de las pulperías de las compañías salitreras. Las autoridades, en vez de entender sus justas demandas, ordenaron ametrallarlos, siendo muertos más de dos mil hombres, mujeres y niños. Esta feroz represión fue autorizada por el presidente Montt y llevada a cabo por el jefe de las fuerzas militares, comandante Silva Renard. La prensa al servicio de la oligarquía atenuó la matanza y el congreso cometió la indignidad de aprobar la conducta de las autoridades; apoyaba en todo al gobierno de Montt, en una coalición disfrazada con el nombre “tregua doctrinaria” y en la que nacionales, radicales, conservadores y liberales doctrinarios daban su consentimiento a las más vergonzosas iniquidades [...] Luego los niños debieron asistir a clases pasando por sobre las enormes costras de sangre, parte de ella proveniente de sus propios parientes»[\[21\]](#).

Otros episodios similares han sido registrados en todo el continente. La «semana trágica» de 1919 en Argentina, la matanza en los bananales de Santa Marta, Colombia, en diciembre de 1928, en Bolivia, la masacre minera de Uncía en 1923 y de Chayanta contra la población indígena sublevada por la expropiación de tierras comunal y que afectó a los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca y La Paz, en 1927. Estas operaciones no pasan al debe de las fuerzas armadas. Tampoco, el exterminio de las poblaciones campesinas en la guerra contrainsurgente de los años sesenta y las atrocidades cometidas por las dictaduras militares. El honor de la institución está a salvo bajo el recurso de «obediencia debida». Todos sus crímenes han sido subsumidos en la historia general de la represión, exculpando a las fuerzas armadas como institución. Ellos cumplían un sagrado deber, no son responsables.

A medida que el modelo primario exportador y el régimen oligárquico pierden fuelle, y la protesta social crece, las fuerzas armadas asumen la dirección política del orden social. Las intervenciones militares se generalizan como medio para retardar la crisis del orden oligárquico.

Durante los años treinta surgen las dictaduras militares que se erigen como la solución a los problemas de la dominación oligárquica. Carlos Ibáñez del Campo en Chile (1927- 1931), Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador (1931-1944), Jorge Ubico en Guatemala (1931-1944), Gerardo Machado en Cuba (1925-1933), Tiburcio Carías Andino en Honduras (1933-1948), Anastasio Somoza García en Nicaragua (1937-1956), gobiernos provisionales

militares en Paraguay a partir de la década; Luis Sánchez Cerro (1931-1933) y el mariscal Óscar Benavides (1933-1938) en Perú; Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana (1930-1962), Gabriel Terra (1933-1938) y Alfredo Baldomir (1938-1943) en Uruguay; Juan Vicente Gómez (1909-1935) e Isaías Medina Angarita (1935-1939) en Venezuela; José Félix Uriburu (1930-1932) y Agustín P. Justo (1932-1938) en Argentina; Juntas Militares en Bolivia, como las de Toro Ruilova (1936-1937) y Germán Busch (1937-1939); Golpe de estado en Brasil en 1930 y militarización del poder bajo la dictadura de Getúlio Vargas hasta 1945; Alberto Enríquez en Ecuador (1937-1938).

Salvo excepciones, los golpes de Estado tuvieron como objetivo salvaguardar el equilibrio perturbado del orden oligárquico. La figura del militar con lustrosos trajes repleto de medallas hacen acto de presencia. Las fuerzas armadas, pese a la profesionalización iniciada a fines del siglo decimonónico, no cubre todas las expectativas, muestra fisuras.

Dictaduras oligárquicas y caudillos

Las primeras dictaduras dejan huella por lo siniestro de los personajes que las encarnan. Inmortalizados en grandes novelas, el tirano está presente en la obra de Augusto Roa Bastos: *Yo el supremo*. Alejo Carpentier: *El recurso del método*. Mario Vargas Llosa: *La fiesta del Chivo*. Miguel Ángel Asturias: *Señor Presidente*. Gabriel García Márquez: *El otoño del patriarca*. En ellas se retratan los excesos, fobias, vicios y relaciones de Juan Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, Gerardo Machado en Cuba, Leónidas Trujillo en República Dominicana o Manuel Estrada Cabrera en Guatemala. Momentos de horror, muerte, exilio, persecución y miedo, han sido registrados en la literatura de los dictadores.

El historiador venezolano, Germán Carrera Damas, describe la personalidad de uno de los más representativos de su país, Juan Vicente Gómez, en el poder desde 1908 hasta 1935: «Tenacidad, alto grado de adaptabilidad, ausencia de límites éticos, moralidad ordinaria, concentración de la personalidad en el ejercicio del poder, crueldad sistemática y reservada, estricta separación entre la función pública y la vida privada con absoluta subordinación de esta última, bajo nivel cultural y ausencia de inquietud en este sentido, fuerte personalidad sexual, fuerte sentido de pertenencia a un sector de la sociedad, cultivo de la soledad como garantía y escudo de la autonomía de acción, conciencia de la fundamentación económica del poder, consecuente aplicación del principio “premio-castigo” ejemplarizante, clara diferenciación entre ejercicio del poder y administración pública, desconfianza respecto “al mundo exterior”, vigoroso sentido de la paternidad, llevado hasta la práctica del paternalismo, codicia, astucia, parco en el uso de las palabras, sentido de mando, impredecibilidad, inaccesibilidad y omnipresencia, rencor frío, horror a la indeterminación»[\[22\]](#).

Con pequeñas variaciones, sobre todo religiosas, es posible extrapolar este muestrario a quienes se erigieron dioses en la tierra. Dictadores omnímodos, autócratas que transitaron desde el liberalismo positivista al conservadurismo doctrinario. Nada escapó a sus designios. Los ejércitos respondían a la visión del «jefe supremo». Porfirio Díaz en México (1876-1910)

será un ser odiado y respetado. Su manera de ejercer el poder le granjeó el miedo de sus adversarios y cortesanos. Sus allegados podían disfrutar de sus favores o caer en desgracia. Finalmente en la cúspide, en el entorno de Díaz y entre sus más sólidos apoyos –gobernadores, jefes militares, ministros– predomina un tipo de relaciones fundadas sobre la devoción y la fidelidad. Surgidas indudablemente de los lazos militares de las épocas de guerra, han adquirido, gracias a la larga permanencia en el poder del presidente y a la exaltación de su figura, un carácter que las aproxima al vasallaje o, al menos, a las que ligan a un rey con los grandes señores. Carlos Pacheco, secretario de Fomento y gobernador de Chihuahua, se dirige así al presidente en 1887: «La bondad de usted y los favores que me prodiga son inagotables, y verdaderamente me tiene usted obligado con ellos y ansioso de demostrar con hechos reales cuánto lo estimo, cómo le pertenezco y cómo, señor, le estoy agradecido y dispuesto a todo por Usted»[23].

Los ejércitos y las fuerzas armadas hacían la voluntad del dictador. Actuaban a sus órdenes, convirtiéndose en guardias pretorianas. El caso de Tiburcio Carías en Honduras es modélico: «El ejército, durante el periodo aquí estudiado, careció de dinámica propia que lo convirtiera, como en diversos países sudamericanos, en el factótum de las relaciones entre las diversas clases sociales. Por el contrario, estuvo subordinado y al servicio del mantenimiento en el poder de Tiburcio Carías [...] En forma deliberada, Carías logró mantenerlo en un estado no profesional, con excepción de unidades elites. Ello fue así, ya que él desconfiaba, y los hechos tendieron a confirmarlo, de un ejército con una estructura organizativa autosuficiente, con el necesario poder en sus manos como para erigirse en el árbitro de la política hondureña»[24].

En Nicaragua, Anastasio Somoza García, en el poder entre 1937 y 1956, fecha de su ajusticiamiento, fue un hombre romo, cuyo ascenso se debió al asesinato del general de hombres libres, Augusto César Sandino, y a sus «supuestas» dotes de seductor. Entre sus conquistas se suma la mujer del embajador de Estados Unidos, quien le facilitó el acceso a la legación diplomática. Se ganó la confianza del embajador cornudo y pasó a ser visto como una opción política para las autoridades estadounidenses. Así, será nombrado jefe de la Guardia Nacional, creando un entramado de favores y lealtades sobre los cuales levantaría su imperio. «Además de los elementos ínsitos en la disciplina castrense, el sistema de lealtad reposaba sobre bajos salarios de rasos y oficiales acompañados de tática vista gorda frente a los modos extralegales en que los militares, desde el primero hasta el último de la escala jerárquica, se valían para obtener, con exacciones abusivas, prebendas disimuladas y obsequios intermitentes, la diferencia de paga entre lo que hubiera debido percibir en un régimen de orden distinto. Cada quien con su parcela de extorsión al prójimo, los más altos oficiales imbricados en negocios de hotelería prostibularia o de comercio mejor vistos o disfrazados, se trataba de una red de obtención indirecta de ingresos apoyada sobre la tolerancia y el guiño autorizador que manaba desde el poder supremo. La complicidad en la rapiña establecía así el rédito de la lealtad, en vicioso círculo que anudaba y aceitaba los engranajes del sistema. La Guardia robaba y extorsionaba porque el gobierno le pagaba poco y mal; el gobierno malpagaba a la Guardia para inducirla al latrocinio y la fechoría, cuyo ejercicio

automáticamente asociaba al ladrón y el extorsionador con los superiores que los toleraban; los guardias debían, pues, ser los primeros defensores del sistema gracias al cual obtenían magros sueldos legales y sus ingresos extras nada legales pero sí consentidos a todos los niveles»[25].

Hubo caudillos civiles que sojuzgaron a las fuerzas armadas asesinando a sus mandos opositores. El dictador guatemalteco Manuel Estrada Cabrera es buen ejemplo. Abogado y notario, llega a presidencia por un golpe de suerte. Su antecesor Reyna Barrios es asesinado mientras visitaba a su amante, la actriz Josefina Roca. Cabrera, ministro de Gobernación, un desconocido provinciano, será nombrado presidente en una rocambolesca batalla por el poder. Desde ese momento y hasta el final de su dictadura «comenzó el largo reinado de Estrada Cabrera: entre las sombras de la noche y junto a una charca de sangre se alzó la dictadura más cruel en la historia de América [...] A los militares temibles por su carácter o prestigio rondábales de cerca la desgracia; a los galonados por el favor, muchas veces como recompensa de crímenes, se les destinaba a las cabeceras departamentales o comandancias de distrito, jefes de prisiones, sicarios despreciables o criados personales verdaderos [...] Como un tirano, Cabrera sentía la necesidad de que no hubiese carácter varonil ni prendas personales sobresalientes ni caudales de importancia; pues todo lo que signifique fuerzas vivas de la sociedad parece amenaza contra el poder irrestricto de los dictadores. Si alguno de sus propios servidores se alzaba más de lo prudente, pronto le hacía pagar con humillaciones su temeraria vanidad; y en la prensa –para todos muda, menos para repetir como eco la voz del amo–, se le injuriaba impunemente hasta el sarcasmo: sabiendo las víctimas que no se movía la hoja del árbol sin la voluntad de Cabrera, tenían que aguantar las afrentas con la sonrisa en los labios y la hiel en el corazón. El triunfo del talento constituía falta grave que de alguna manera se había de purgar; la riqueza pagaba sus esplendores con la persecución del capital y con litigios adversos; hasta las prendas personales, fueran gracia, bondad, hermosura, nacimiento, elegancia –aun color–, parecían culpas ante la rencorosa envidia cabreruna, cual si la naturaleza no debiera prodigar más dones que a los que a migajas dispensara la condescendencia oficial. Todo lo que es brillo en la sociedad y gaje de adelanto en las naciones, debía ocultarse como si fuera delito. ¿Qué iniciativa, qué progreso, qué labor intensa y proficua pudiera si surgir? El miedo fue otro elemento de dominación combinado con el interés. Por interés y por miedo, amigos y familiares desamparaban al caído. Nunca peste mortal causo más desolación en torno de un hogar que la persecución política: ni la amistad, ni gratitud, ni sangre, nada valía: todos huían pálidos y trémulos y no paraban hasta no protestar adhesiones no pedidas y reniegos desdorosos»[26].

Otros caudillos se consideraron abanderados regeneracionistas. Imbuidos de un halo mesiánico decidieron cambiar el sistema educativo, crear una moral y fomentar el culto a su persona. En este casillero podemos ubicar al dominicano Leónidas Trujillo, quien redactó, se dice que bajo un estado de iluminación divina, el texto oficial que los estudiantes de enseñanza primaria debían leer como parte de su formación integral. Todo joven dominicano estaba obligado a conocer y recitar la *Cartilla cívica para el pueblo dominicano*. En ella encontramos los principios que guían la actuación del presidente: «Guardián de la República y

procurador del orden donde prevalece la paz, anida el progreso y es posible la felicidad. Padre de todos los dominicanos, no descansa y está atento, guiado por un espíritu superior, se rodea de empleados y de un ejército para hacer cumplir la ley, garantizando el disfrute de la vida de esa gran familia que es el pueblo. Como se ve, el presidente trabaja incesantemente por la felicidad de su pueblo. El mantiene la paz, sostiene las escuelas, hace los caminos, protege al trabajo en toda forma, ayuda a la agricultura; ampara industrias; conserva y mejora los puertos; mantiene los hospitales, favorece el estudio y organiza el Ejército para garantía de cada hombre ordenado [...]»[27].

En este singular mundo de dictadores y autócratas no faltaron aduladores, ideólogos y quienes deseaban granjearse los parabienes del caudillo. En torno a sus figuras se fueron tejiendo interpretaciones que justificaban su peculiar manera de ejercer el poder. Sus estudios han quedado como un referente para comprender las raíces del pensamiento conservador de la derecha racista latinoamericana que defiende las dictaduras «como el gobierno adecuado para crear el orden interior, desarrollar la riqueza y anular las castas enemigas»; haciendo del dictador, un César capaz de ejercer la coerción represiva como un gendarme último, asumiendo su condición real de autócrata despótico, buscando la estabilidad y la paz con métodos poco ortodoxos pero eficaces. El nuevo caudillo, travestido en *César*, encarnó los parabienes y su figura se ensalzó como la respuesta al desorden, el caos y la anarquía. Laureano Vallenilla Lanz, desarrolló la tesis del cesarismo democrático para dar legitimidad al dictador venezolano Vicente Gómez: «En todos los países y en todos los tiempos se ha comprobado que por encima de cuantos mecanismos institucionales se hallan hoy establecidos, existe siempre, como una necesidad fatal, el gendarme electivo e hereditario de ojo avizor, de mano dura, que por las vías de hecho inspira el temor, mantiene la paz, es evidente que en casi todas estas naciones de Hispanoamérica, condenadas por causas complejas a una vida turbulenta, el caudillo ha constituido la única fuerza de conservación social, realizándose aún el fenómeno que los hombres de ciencia señalan en las páginas de interacción de las sociedades: los jefes no se eligen sino que se imponen. Y citando a García Calderón, en su aporte a la definición de cesarismo democrático, “la historia de estas repúblicas se reduce a la biografía de sus hombres representativos. El espíritu nacional se concentra en sus caudillos, jefes absolutos, tiranos bienhechores. Ellos dominan por el valor, el prestigio personal, la audacia agresiva. Ellos representan lo vivo de la democracia que los deifican [...] Los dictadores como los reyes feudales abaten a los caciques locales, a los generales de provincia; así lo hicieron Porfirio Díaz, García Moreno, Guzmán Blanco [...] Y las revoluciones se suceden hasta la aparición del tirano esperado que domina, durante veinte o treinta años la vida nacional”. Y Vallenilla concluye, tras este párrafo de apoyo “El César democrático es siempre el representante y el regulador de la soberanía popular, es la democracia personificada, la nación hecha hombre. En él se sintetizan estos dos aspectos al parecer antagónicos: democracia y autocracia, es decir Cesarismo democrático; la igualdad bajo un jefe...”»[28].

Igualmente, hubo quienes llamaron directamente al golpe de Estado para salir de la apatía en la cual estaban inmersos los pueblos latinoamericanos. Leopoldo Lugones, poeta y escritor argentino, fascista y admirador Benito Mussolini, afirmaba que no se podía esperar nada

bueno del liberalismo decimonónico, el futuro solo contará si está en manos de los ejércitos. Los militares educados en las virtudes espartanas propias de su profesión –aduce– tales como el orden, la disciplina, el sentido de honor y del sacrificio, son los últimos depositarios de los supremos valores de la patria. Al cumplirse el centenario de la batalla de Ayacucho –9 de diciembre de 1824– pronuncia en Lima un discurso para los militares argentinos: «Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada [...] El sistema constitucional del siglo XIX está caduco. El ejército es la última aristocracia; vale decir la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica»[29].

Los caudillos se mantuvieron en el poder gracias a farsas electorales. Pocos prescindieron de las urnas. Eran militantes, se afiliaron o fundaron partidos exprofeso. Los utilizaron y se valieron de ellos para su beneficio, desplegando las redes de poder y control político. Anastasio Somoza García, dictador nicaragüense padre de la dinastía, fue conservador y más tarde liberal; a sabiendas que contaba con el beneplácito de los Estados Unidos y del presidente Roosevelt, espetó: «Pienso permanecer en la presidencia no menos de cuarenta años. Pero si los Estados Unidos me hicieran la menor insinuación de abandonarla, lo haría inmediatamente, pidiendo solamente garantías completas para mí persona»[30]. Y en Argentina, otro militar, el general, Agustín P. Justo, presidente entre 1932 y 1938 declaró sin rubor alguno que su triunfo se debió al fraude. Al reconocerlo, eso sí, lo adjetivó como «fraude patriótico».

Bajo banderas partidarias, sobornaron, compraron opositores y partidos enteros. Las escenas de fraude y la eliminación física de adversarios no levantaron quejas en la oligarquía. Sacaban tajada y se enriquecían en un clima de terror. No les importaba que los caudillos y dictadores amasaran fortunas de la nada, era un pacto perfecto. Paz para explotar y deshacerse de quienes denunciaban la felonía y la traición. Sindicalistas, militantes obreros, demócratas radicales, progresistas, liberales y conservadores honestos, que los hubo, caían en el saco de indeseables, siendo víctimas propicias para el asesinato político. La plutocracia vivió sus últimos momentos al amparo de los Trujillo, Somoza, Gómez, Estrada Cabrera, Ubico, Maximiliano Hernández Martínez o Machado. Ellos encarnan el fin de una época donde el anticomunismo pasó a ser la excusa perfecta para mantenerse el poder.

[1] Eric Hobsbawm, *Guerra y paz en el siglo XXI*, Crítica, Barcelona, 2009, p. 23.

[2] Datos tomados de Luis Suárez, *Madre América*, cit., p. 11.

[3] Véase Michel Foucault, *Genealogía del racismo*, Madrid, La Piqueta, 1992, pp. 29 y 30.

[4] Documento del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos: «U.S. Objectives and Courses of action with Respect to Latin America», 6 de marzo de 1953. Citado por Joan Garcés, *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*, Madrid, Siglo XXI de Madrid, 2012, p. 93.

[5] Citado por Armand Mattelart, *Comunicación e ideologías de la seguridad*, Barcelona, Cuadernos Anagrama, 1978, p. 76. Véase Roger Trinquier, *La guerra moderna y la lucha contra las guerrillas*, Barcelona, Herder, 1965.

[6] General Golbery do Couto e Silva, *Geopolítica del Brasil*, Buenos Aires, El CID Editor, 1978, pp. 67 y ss.

[7] Horacio Verbitsky, *El Silencio. De Paulo VI a Bergoglio. Las relaciones secretas de la Iglesia con la ESMA*, Buenos Aires, Sudamericana, 2005, pp. 38-39.

[8] Armand Mattelart, *op. cit.*, p. 77.

[9] Véase Ariel Dorfman, *La última aventura del Llanero Solitario*, San José de Costa Rica, Editorial Educa, 1982 y

Patos, elefantes y héroes. La infancia como subdesarrollo, Madrid, Siglo XXI de España, 2002.

[10] Véase Peter Watson, *Guerra, persona y destrucción*, México, Nueva Imagen, 1982. Sobre todo capítulo IX y siguientes.

[11] Citado por John Saxe-Fernández, «los fundamentos de la derechización en los Estados Unidos»; en *Tiempos Conservadores. América Latina en la derechización de Occidente*, Quito, Editorial El Conejo, 1987, pp. 65-80.

[12] Samuel Finer, *Los militares en la política mundial*, Buenos Aires, Sudamericana, 1969, p. 17.

[13] Joan Garcés, *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*, cit.

[14] León Rozitchner, «Efectos psicosociales de la represión», en Ignacio Martín-Baró (coord.), *Psicología social de la guerra*, San Salvador, UCA Editores, 1990, p. 112.

[15] Gustavo Emerich, *Ejercicio del poder y carácter del régimen de gobierno en América Latina*, México, 1987, citado por Pablo González Casanova, *Los militares y la política en América Latina*, México, Océano, 1988, p. 12. Las categorías residuales y sus porcentajes son: gobiernos de juntas cívico-militares (4,0 por 100); eclesiásticos (0,5 por 100); desconocidos, mixtos o confusos (12,4 por 100) para el carácter de gobierno.

[16] Nelson Minello, «Ejército y poder en América Latina», *Cuadernos Políticos* 6 (1975), México.

[17] Ryszard Kapuscinski, *La guerra del Fútbol y otros reportajes*, Barcelona, Anagrama, 2008, pp. 284 y ss.

[18] Liborio Justo, *Pampas y lanzas. Fundamentos históricos-económico- sociales de la nacionalidad y de la conciencia nacional argentina*, Palestra, Buenos Aires, 1962, p. 169.

[19] *Ibidem*, p. 168.

[20] Darcy Ribeiro, *Las fronteras indígenas de la civilización*, México, Siglo XXI de México, 1971, p. 74.

[21] Julio César Jobet, *Ensayo crítico del desarrollo económico y social de Chile*, Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1951, p. 122.

[22] Germán Carrera Damas, «Juan Vicente Gómez: personalidad evasora», en Julio Labastida (coord.), *Dictaduras y dictadores*, México, Siglo XXI de México, 1986, p. 193.

[23] François-Xavier Guerra, *México: del Antiguo Régimen a la Revolución*, México, Fondo de Cultura Económica, 1992, vol. I, p. 154.

[24] Mario Argueta, *Tiburcio Carías. Anatomía de una época. 1923-1948*, Tegucigalpa, Guaymuras, 21990, p. 123.

[25] Gregorio Selser, *Nicaragua de Walker a Somoza*, México, Editorial Mex-Sur, 1984, p. 262.

[26] Rafael Arévalo Martínez, *Ecce Pericles. La tiranía de Manuel Estrada Cabrera*, San José de Costa Rica, Editorial Educa, 1983, pp. 125-126.

[27] Citado por Euclides Gutiérrez Félix, *Trujillo: monarca sin corona*, Santo Domingo, Editora Corripio, 42009, pp. 120 y ss.

[28] Laureano Vallenilla Lanz, *Cesarismo democrático y otros textos*, Caracas, Ayacucho, 1991, pp. 94, 127 y 145.

[29] Miguel Ángel Scenna, *Los militares*, Buenos Aires, Editorial Belgrano, 1980, p. 153.

[30] Gregorio Selser, *Nicaragua de Walker a Somoza*, cit., p. 241.

Capítulo III

Golpes de Estado, subversión y anticomunismo

«No se mueve ninguna hoja en este país si no la estoy moviendo yo, que quede claro.»

Augusto Pinochet Ugarte. Dictador chileno.

Guerra global, el golpismo y el soldado transnacional

Tras la Segunda Guerra Mundial las intervenciones militares se caracterizarán por un alto grado de homogeneidad ideológica. Los ejércitos del continente se reciclan en la lectura de manuales que ponen en práctica en cuanto pueden. La derrota del eje aúpa a los Estados Unidos como potencia líder del «mundo libre». Europa pierde el control político-militar de «Occidente». Estados Unidos, se yergue victorioso. La crisis greco-turca enciende la mecha de la Guerra Fría. El discurso pronunciado por el presidente estadounidense Harry Truman ante el congreso de los Estados Unidos, el 12 de marzo de 1947, sienta las bases de un nuevo tiempo histórico. La cooperación económica y militar se presenta como la opción para evitar el avance de las izquierdas a nivel mundial y de los proyectos articulados al socialismo-marxista. «Si dejamos de ayudar a Grecia y Turquía en esta hora decisiva, las consecuencias, tanto para Occidente como Oriente serían de profundo alcance. Debemos proceder resuelta e inmediatamente [...] Pido al Congreso la autorización para ayudar a estos dos países con la cantidad de cuatrocientos millones de dólares [...] Si vacilamos en nuestra misión de conducción podemos hacer peligrar la paz del mundo.»

El enemigo tiene rostro. En el discurso, Truman definirá los valores que, a su juicio, se presentan como parte constituyente de la identidad sobre la cual se erigen los modos de vida en el mundo libre y el mundo comunista. «Uno de dichos modos de vida se basa en la voluntad de la mayoría y se distingue por la existencia de instituciones libres, un gobierno representativo, elecciones limpias, garantías a la libertad individual, libertad de palabra y religión, y el derecho a vivir sin opresión política. El otro se basa en la voluntad de una minoría impuesta mediante la fuerza a la mayoría. Descansa en el terror y la opresión, en una prensa y radio controladas, en elecciones fraudulentas y en la supresión de las libertades individuales. Creo que Estados Unidos debe ayudar a los pueblos que luchan contra las minorías armadas o contra presiones exteriores que intentan sojuzgarlos. Creo que debemos ayudar a los pueblos libres a cumplir sus propios destinos de la forma que ellos decidan. Creo que nuestra ayuda debe ser principalmente económica y financiera, que es esencial para la estabilidad económica y política»[\[1\]](#).

La amenaza comunista, y la debilidad de los países aliados son el pretexto idóneo para realizar dos maniobras tendentes a frenar el avance de las fuerzas de izquierdas en el mundo occidental. Primero conceder apoyo financiero y económico a sus aliados. En julio de 1947 se aprueba el Plan Marshall, más de veinte mil millones de dólares de la época para reconstruir

la Europa devastada por la guerra, y en segundo lugar, fundar la primera organización militar anticomunista occidental, la OTAN, el 4 de abril de 1949, creando un escudo armado capaz de disuadir al enemigo.

Las fuerzas armadas latinoamericanas se integran de manera subordinada a esta nueva visión mundial. Como parte del «mundo libre», se le asigna la defensa de «la civilización occidental y cristiana» en el subcontinente. Considerada, América Latina, el patio trasero de la política de seguridad de Estados Unidos, se firma el Tratado de Chapultepec en 1947, origen, un año más tarde, en Río de Janeiro, del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca (TIAR). Dicha firma, se anticipa dos años a la creación de la OTAN.

El nuevo enemigo, la URSS, define el campo de batalla y amplía la cobertura de actuación de las fuerzas armadas, quedando entre sus funciones, proteger la democracia, fomentar el desarrollo económico y garantizar la seguridad hemisférica. Defensa de la democracia y lucha anticomunista confluyen. Las fuerzas armadas son la avanzada de la lucha anticomunista, con una misión añadida, coadyuvar a los Estados Unidos a combatir a la URSS. El general Eisenhower había dicho en su campaña presidencial de 1952: «No podremos descansar nunca hasta que las naciones del mundo esclavizadas tengan en la plenitud de la libertad el derecho de elegir su propio camino, porque entonces, y solo entonces, podremos decir que hay un modo de vivir pacífica y permanentemente con el comunismo»[\[2\]](#).

Será uno de los más grandes estrategias de la doctrina de la seguridad nacional, el general brasileño Golbery do Couto e Silva, en *Geopolítica de Brasil*, quien señale la nueva dimensión del problema: «Lo que nos amenaza hoy, como ayer, no es una amenaza propiamente dirigida contra nosotros, sino directamente contra Estados Unidos de América, la cual, incluso si queremos subestimarla dando mayor énfasis a la practicabilidad todavía bastante discutible de un ataque transártico, no por eso resulta insubsistente, a mas de que, de ninguna manera, puede desmerecer la importancia estratégica del nordeste brasileño, no para nosotros, sino para Estados Unidos, que ya se han comprometido en la defensa de Europa»[\[3\]](#).

Se asiste al nacimiento de un sistema de seguridad hemisférico donde se fomenta el fluido intercambio de información, educación y entrenamiento de oficiales latinoamericanos en las academias de guerra norteamericanas. Los programas de asistencia militar, la dependencia tecnológica, el adiestramiento en la lucha antisubversiva en la Escuela de las Américas (Fort Gulick, Panamá), favorecen la emergencia de un nuevo tipo de acción militar. Un ejército dependiente, convencido de ser objetivo militar y político de la Unión soviética se convierte en escudo ideológico contra la nueva amenaza de la civilización occidental.

«Apenas en 1959, los voceros del Pentágono afirmaron que “la amenaza más rotunda a la seguridad del hemisferio es la acción submarina en el Caribe y a lo largo de la costa de Sudamérica”. La mayoría de las armas transportadas a Latinoamérica en este periodo (barcos de guerra sobrantes, aviones patrulleros, cazas interceptores, etcétera) reflejaban esta apreciación de la imagen de la seguridad. Y, si bien América Latina nunca ha enfrentado la amenaza verosímil de un ataque proveniente de fuera del hemisferio, las fuerzas armadas de las principales potencias latinoamericanas han acabado por parecer una versión a pequeña escala de los ejércitos estadounidenses en Europa, el cercano oriente y Asia»[\[4\]](#).

El corolario, un soldado educado para hacer frente a la lucha anticomunista. «Los nuevos dictadores transnacionales son semejantes al subconjunto de un aparato estatal que echa sus principales raíces en el capital monopólico, en el gobierno norteamericano y en las fuerzas burguesas locales, oligárquicas y neocoloniales. El enorme aparato enfrenta diferentes contradicciones internas y no funciona como un simple dispositivo mecánico. Frente a las fuerzas democráticas alcanza una considerable unidad: está coherentemente organizado para controlar las reacciones del pueblo, y a quienes quieran encabezarlo cada vez que este se oponga a una política que lo empobrece y lo priva de sus derechos individuales y sociales. Pero en cada país y en cada región el aparato militar actúa según las circunstancias, con un sentido pragmático y flexible»[5].

La doctrina de contención del comunismo y defensa de la democracia, amenazados por un poder «extracontinental» se expande, a tal extremo que los gobiernos democráticos existentes en la región, serán considerados incapaces de enfrentar la guerra ante un enemigo cuya potencialidad para subvertir el orden desde sus entrañas, es casi infinita. El marxismo-leninismo y sus variantes, argumentan desde los centros de poder estadounidenses, el Pentágono y la Casa Blanca, tienen capacidad para socavar los fundamentos del Estado de derecho, la libertad y destruir la democracia representativa. Las fuerzas armadas deben estar alertas para evitar que los enemigos del orden democrático instauren regímenes totalitarios. Por consiguiente, nace la necesidad de articular ejércitos que mantengan vivos los valores de civilización occidental, garanticen la defensa de la patria y el Estado, y sean al mismo tiempo motor del desarrollo, la supervivencia y la seguridad nacional.

Nuevamente Golbery do Couto e Silva, el general brasileño, define, el carácter de la amenaza comunista en Brasil y América Latina: «Lo cierto es que hoy en día las amenazas más probables se limitan a la guerrilla, los conflictos localizados, y sobre todo, la agresión comunista indirecta, que capitaliza a su favor el descontento local, las frustraciones que engendran el hambre y la miseria, y las justas aspiraciones nacionalistas[...] América Latina enfrenta ahora amenazas más reales que nunca, amenazas que pueden conducir a la insurrección, a los estallidos de violencia que procuren implantar (aunque no abiertamente) un gobierno favorable a la ideología comunista, constituyéndose en grave e inminente peligro para la unidad y seguridad de los americanos y del mundo occidental»[6].

El vínculo entre desarrollo y seguridad se convierte en el primer eslabón de la cadena para la militarización de las sociedades. Robert McNamara, Secretario de Defensa del presidente John Kennedy perfila el núcleo de la doctrina: «La seguridad es desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad. Un país subdesarrollado y que no se desarrolla jamás alcanzará nivel alguno de seguridad por la sencilla razón de que no puede despojar a sus ciudadanos de la naturaleza humana. Efectivamente, si se necesitan condiciones previas a la seguridad deberían ser un mínimo de orden y también de estabilidad. Ahora bien, sin una evolución interna, por mínima que sea, el orden y la estabilidad son imposibles ya que la naturaleza humana no puede estar frustrada indefinidamente. El hombre reacciona entonces, porque debe hacerlo [...] Al insistir en el hecho de que la seguridad es la hija del desarrollo, no niego que un país en vías de desarrollo pueda verse afectado por una revuelta interna o una agresión externa o una

combinación de ambas cosas. Esto sucede, y para poner remedio a las condiciones que permiten este estado de cosas es preciso que este país tenga una potencia militar que responda a este problema específico. Pero el poder de las armas no es sino una faceta menor del vasto problema de la seguridad. Una fuerza militar puede ayudar a asegurar el orden y la ley, pero solamente si estos reposan ya en una base aceptable dentro de la sociedad de que hablamos y si la población está dispuesta a colaborar con ella. La ley o el orden constituyen el escudo tras el cual puede desarrollarse un país y por consiguiente asegurar en gran parte su seguridad. El desarrollo es el progreso económico, social y político»[7].

Los procesos de modernización deben controlarse. Las burguesías locales, pro-imperialistas y desnacionalizadoras deben asumir la dirección de los procesos de cambio social. Los proyectos nacionalistas que escapan a su dominio sufrirán los embates de la Guerra Fría, siendo contrarrestados por sendos golpes de Estado. Un año antes del golpe de Estado que derrocara al general Jacobo Arbenz en Guatemala, el Consejo Nacional de Seguridad de EEUU, alertaba de las consecuencias de un nacionalismo infiltrado por el comunismo: «El comunismo debe ser considerado no solo como un movimiento en sí mismo también como una fuerza que explota y expresa razonadamente las llamadas “aspiraciones nacionalistas”, y que provee orientación organizativa y política a todos los elementos anti-EEUU aunque es una facción minoritaria en el área, actualmente es un serio problema en Guatemala y posiblemente crece de forma alarmante en Brasil y otros países. Fuera de la ley en varios países, posee no obstante potencialidades peligrosas que caracterizan su presencia en otras partes del mundo. Su doctrina que es paralela a la doctrina nacionalista en importantes aspectos, tiene fuerte atractivo entre intelectuales y obreros, con el resultado de que han sido penetrados las escuelas y sindicatos»[8].

Solo de esta manera se comprende la acción, en 1954, contra el gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala. Se trata de un plan piloto en la región, donde participa por vez primera la CIA, cuyo director, Allen Dulles califica al gobierno guatemalteco de «una cabeza de playa soviética en América». Mientras tanto, el Pentágono y el Departamento de Estado inauguran las acciones encubiertas, bajo el subtítulo de «guerra sucia». Desde la llegada de Arbenz a la presidencia, en 1951 se pondrá en marcha el Plan Fortune para llevar a cabo un golpe de Estado y acabar con las reformas fuera de los marcos admisibles de la seguridad y el desarrollo en el contexto de Guerra Fría[9].

«A pesar de la naturaleza claramente capitalista de la “revolución”, los intereses estadounidenses llegaron a considerarla, cada vez más una amenaza. En primer lugar, la “revolución” emprendió la tarea de regular, y más adelante expropiar con indemnización algunas propiedades estadounidenses [...] En segundo lugar, los inversionistas privados estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos se inquietaron por la creciente radicalización de la “revolución” guatemalteca bajo Arbenz. Desde el principio, y a lo largo de esos diez años, no había duda que la “revolución” era controlada y dirigida principalmente por la burguesía nacional y la pequeña burguesía de Guatemala. Sin embargo, la base de la “revolución” fue una alianza entre esa burguesía y ciertos sectores de la clase obrera y el campesinado. Sobre todo después de que el gobierno de Arbenz promulgó una reforma agraria

de gran alcance en 1952 [...] En este sentido, Estados Unidos llegó a percibir a Guatemala no solo como una amenaza a intereses estadounidenses específicos sino también una amenaza general para el orden capitalista internacional. Para empeorar las cosas, la “revolución guatemalteca” se daba en un momento en que Estados Unidos estaba en lo más acentuado de la paranoia macartista de la Guerra Fría, y en que los intereses privados estadounidenses se estaban expandiendo rápidamente en el extranjero y, por consiguiente, eran muy susceptibles acerca de cualquier amenaza de expropiación. Estos hechos crearon una situación o contexto en el cual Estados Unidos respondió mediante la intervención de 1954»[\[10\]](#).

Apoyado y financiado por Estados Unidos, tropas mercenarias al mando del coronel guatemalteco Carlos Castillo Armas, exiliado en Honduras, despegan de Tegucigalpa y bombardean Ciudad de Guatemala, Puerto Barrios y Puerto San José. El 3 de julio de 1954, Castillo Armas entra en Ciudad de Guatemala en el avión propiedad de la embajada norteamericana. Cinco días más tarde, el 8 de julio, se autoproclamaba presidente con el beneplácito de la OEA y el TIAR. La derrota del gobierno de Arbenz marca ese punto de inflexión donde se pone en práctica la estrategia de Washington para la seguridad hemisférica.

Comienzan, en América Latina, a sucederse un conjunto de golpes militares, cortados por el mismo patrón, es decir financiados y apoyados por Estados Unidos y ejecutados por unas fuerzas armadas dependientes formadas en los centros de adoctrinamiento norteamericanos. A continuación presentamos el itinerario seguido en la mayoría de los países de la región.

Honduras, país considerado paradigma de la inestabilidad política, con una presencia habitual de los militares en la vida política se enfrenta a los avatares de la Guerra Fría. Con una economía de enclave, controlada por la United Fruit Company (UFCO), multinacional norteamericana del banano y una clase dominante subordinada a su voluntad, cualquier gobierno que ponga en cuestión su poder será sometido a presiones y amenazas. Las políticas reformistas son abortadas, llegando a ser imposible que una propuesta democrática cuaje. Así lo relata un funcionario de los Estados Unidos: «La United controla el gobierno hondureño en una extensión sin precedentes e increíble. Es seguro que no hay importante funcionario del gobierno de su zona en la Costa Norte que no esté bajo las obligaciones de la compañía de una u otra manera. No solamente están los funcionarios bajo la influencia, sino que a través de un gran número de personas que están en sus plantillas, o bajo su dominio en otras formas, mantiene un efectivo control sobre los medios de acción así como sobre las fuentes de información»[\[11\]](#). Este tipo de dominio omnímodo tuvo su máxima bajo la dictadura del general Tiburcio Carías (1933-1948). Para el dictador el ejercicio del poder consistía en eliminar cualquier tipo de oposición. Sus postulados fueron «encierro, destierro y entierro». Para evitar malos entendidos sobre la posible apertura democrática y crear falsas expectativas sobre una posible retira del general, el presidente del parlamento de las época, Plutarco Muñoz, advierte: «Solamente el general don Tiburcio Carías Andino es el ciudadano capacitado que, alejado de todos los vicios mundanales y portando una honradez mácula, puede conducir nuestro pueblo por el sendero de la paz y del engrandecimiento nacional. Se ha hablado aquí de pecados sin explicar si son pecados capitales o veniales pero [...] Dios me perdonará, porque hasta el mismo Dios es continuista porque no ha tenido alternabilidad en el

poder».

Tras la Segunda Guerra Mundial, son los intereses de las compañías bananeras, que en su día auparon a Carías al sillón presidencial, quienes deciden darle la jubilación forzosa al viejo general. La nueva política exterior del Departamento de Estado norteamericano sirve como excusa. Había llegado la hora del relevo. Democracia y desarrollo fueron las banderas enarboladas en medio de la Guerra Fría, para contrarrestar las posibilidades de una alternativa popular y socialista. Sin traumas y de manera ordenada accederá a la presidencia el ministro de Guerra y abogado de la United Fruit, Juan Manuel Gálvez (1948-1954). El anticomunismo es la bandera que acota las reformas. En esta etapa se da prioridad a la modernización de las fuerzas armadas. Sus mandos no pueden depender de febriles déspotas que ejercen el total control sobre la institución militar. Bajo este nuevo proyecto, se firman los convenios militares de cooperación con Estados Unidos, garantizando la formación e instrucción de oficiales. Hasta 1969, gracias a los programas de asistencia militar, fueron entrenados un total de 391 oficiales y 689 soldados en la zona del canal[12].

Las fuerzas armadas hondureñas nacen bajo la dirección del Pentágono tanto en lo orgánico como en lo tecnológico. Tras la presidencia de Gálvez, el gobierno conservador de Julio Lozano durará escasos dos años. El 21 de octubre de 1956 las fuerzas armadas deciden ponerle fin. Sus mandos asestan su primer golpe de Estado de la era anticomunista. En su proclama llaman a restaurar el orden y celebrar elecciones. Esto último fue recurrente en todos los pronunciamientos militares. Las elecciones se reivindicaron como un ritual legitimador de la intervención castrense. En 1957, asume la presidencia el liberal Dr. Villeda Morales «quien recrudesció el anticomunismo que practicaba subrepticamente y acató con disciplina los dictados emitidos desde Washington, a través de la administración Kennedy». Su gobierno cae de lleno bajo el influjo de la Revolución cubana. En 1959, Villeda Morales, declara la prohibición de editar y facilitar la «circulación de publicaciones escritas o habladas que prediquen y divulguen doctrinas disolventes que socaven los fundamentos del estado democrático». El 3 de octubre de 1963, se pone fin al gobierno liberal de Morales. La decisión estaba tomada. La proclama de las fuerzas armadas no deja lugar a dudas. Había que ser más enérgico contra el comunismo. «La siniestra amenaza que representa la infiltración de agitadores comunistas y de guerrilleros de tal tendencia, cuyas actividades han sido denunciadas en vano al gobierno de la República, las cuales ponen en serio peligro nuestra vida institucional y la paz y tranquilidad de las Repúblicas vecinas de Centro América»[13]. Y por primera vez, se alude directamente a la revolución cubana como un factor desestabilizador en la región, para justificar la intervención. Así aparece en el mensaje del nombrado jefe de Gobierno, el coronel Oswaldo López Arellano: «La infiltración de elementos marxistas en las esferas del gobierno, hecho denunciado con fundamento fuera y dentro de Honduras; la actividad contra la democracia desarrollada en forma sistemática; oír periódicos hablados y escritos, mediante mítines de sectores universitarios y por medio de la amplia e incontrolada difusión de propaganda comunista; la permanente amenaza de frustrar los ideales de conciliación de la familia hondureña que siempre han querido convertir en realidad las fuerzas armadas; el viaje constante de elementos hondureños hacia Cuba, la Unión Soviética y los

países tras la cortina de hierro [...] Todo era indicativo de que el país se encaminaba hacia una segura agresión de las fuerzas comunistas, con el consiguiente peligro para la democracia representativa»[14].

En Paraguay, otro proceso similar, se desencadena. Su historia hunde sus raíces en las estructuras de poder nacidas y reforzadas tras la Guerra del Chaco (1932-1935). El ascenso de Alfredo Stroessner en 1954 se produce ante un continuo ir y venir de golpes de Estado. Hasta el *stronato* podemos recapitular la historia de Paraguay partiendo de la revolución inaugurada el 19 de febrero de 1936, encabezada por el coronel Rafael Franco, militar reformista que introduce los derechos laborales y sindicales, dando inicio a un tibio proceso de reforma agraria. Ambas políticas, reforma agraria y derechos laborales a las clases trabajadoras, fueron interpretadas como marxistas y comunistas. Su puesta en marcha acarrió la contrarrevolución conservadora, instaurándose un régimen tiránico en 1937. Una de las primeras decisiones fue el asesinato de cientos de militantes comunistas y febreristas, como parte de la estrategia restauradora. En 1940 se aprueba la constitución neofascista bajo José Félix Estigarribia. Su muerte a los pocos meses lleva al poder a otro militar, Higinio Morínigo. Partidario de un régimen fascista, puso en marcha campos de concentración donde afinó, torturó y asesinó a los militantes de izquierda, socialistas, comunistas y opositores. Tras la Segunda Guerra Mundial, en un intento por mantenerse en el poder, introduce reformas y busca aliados. Sin embargo, el inicio de la Guerra Fría le hizo cambiar de parecer: «Sensible a los cambios de la política exterior norteamericana, el dictador eliminó a los febreristas de su gabinete, reimplantó el estado de sitio y entronizó el terror»[15]. La creación de comandos anticomunistas y de milicias regulares supuso la aniquilación de gran parte de los militantes y simpatizantes de la izquierda paraguaya. En 1949 se hará con la presidencia interina Federico Chaves. Elegido en 1950, su gobierno toma un giro nacionalista, se enfrenta a las políticas del Fondo Monetario Internacional y en un alarde de autonomía, abre espacios democráticos, liberando a los presos políticos. Asimismo favorece la sindicalización de campesinos y trabajadores. Los Estados Unidos consideran su actitud un agravio, al igual que lo fuese el proyecto de Jacobo Arbenz en Guatemala. Comienza el plan desestabilizador. La política exterior norteamericana liderada por John Foster Dulles tuvo un peso decisivo en el golpe de Estado de 1954.

«Ya en 1953 el departamento de defensa norteamericano invitó al entonces comandante en jefe de las fuerzas armadas, general Alfredo Stroessner, a visitar unidades militares de los Estados Unidos [...] El logro de los objetivos golpistas consiguieron la neutralización de posibles factores adversos y contaron con el apoyo de la política exterior norteamericana que estaba desarrollando su propia estrategia de defensa para un potencial conflicto convencional con la Unión Soviética»[16]. El golpe militar de Stroessner el 4 de mayo de 1954 lo entronizará como presidente hasta 1989. En 1955 y ya como presidente: «Promulga la ley de defensa de la democracia que permitía a la policía efectuar registros domiciliarios y detener comunistas sin tener una orden judicial, a la vez que se reservaba para el gobierno la decisión de quien era comunista. El congreso también amplió indefinidamente el estado de sitio, lo cual le permitió al ejecutivo suspender el hábeas corpus, impedir que se celebraran mítines

políticos y censurar la prensa»[17].

La política anticomunista llegó a Costa Rica tempranamente, corría el año de 1948. Sus estrategias ponen en funcionamiento uno de los planes más elaborados que se conocen en la región. El objetivo acabar con la alianza popular que gobierna el país desde 1940, en la cual participa el partido comunista, la iglesia y la burguesía progresista. Como siempre, el caballo de batalla del gobierno progresista fue la reforma agraria, base real del poder de la oligarquía cafetalera costarricense. La plutocracia llamó a las puertas del pentágono y alertó del peligro de tener una Costa Rica convertida en un país comunista. Con el plácet de Estados Unidos, el partido socialdemócrata creado en 1945 y liderado por José Figueres, anticomunista de pro, comienza la labor desestabilizadora. Durante tres años combate en alianza con el Partido Demócrata, representante la derecha reaccionaria y pro-fascista al gobierno de Teodoro Picado.

Así, «no se moderaron en su abierto boicot contra el gobierno por todos los medios a su alcance: desde la manipulación económica hasta la violencia. La culminación del boicot vino con el cierre empresarial conocido como al “huelga de brazos caídos”, realizado por la mayoría de los empresarios en 1947. Este cierre empresarial paralizó la economía del país»[18].

El miedo de la población, tejido bajo una campaña de terror y descrédito del gobierno de Picado, fue el punto de inflexión. El anticomunismo el pretexto para reconducir las reformas populares. A los pocos días de hacerse con el poder, se puso en evidencia el sentido oculto del golpe de mano: «Inmediatamente la Junta de Figueres arrestó varios cientos de comunistas, y en julio de 1948 proscribió el Partido Comunista. La asamblea constituyente, reunida en 1949 [...] aprobó el artículo 98 el cual prohibía: “La formación y funcionamiento de partidos que, por sus programas ideológicos, métodos de acción y conexiones internacionales, tiendan a destruir las bases de la organización democrática de Costa Rica, o que ataquen la soberanía nacional”. Esta disposición estaba claramente dirigida contra el Partido Comunista, Vanguardia Popular»[19].

Figueres se convirtió en el adalid de la represión y la desestructuración del movimiento obrero y sindical. La historia de Costa Rica, transformó este momento de ignominia en un relato épico de «guerra civil». Una guerra civil contra los «caldero-comunistas». Para rematar la maniobra, disuelve las fuerzas armadas declarando a Costa Rica, el primer y único país latinoamericano que disuelve sus fuerzas armadas, adoptando el mote de «la suiza de Centroamérica». La realidad es muy otra. No hubo guerra civil, fue una guerra anticomunista. La oligarquía cafetalera podía estar tranquila, ni abría una ruptura ni reforma agraria que afectase su poder, esta vez, se enrocaba, dejando que fuesen los sectores modernizantes quienes tomaran las riendas del país y lo limpiasen de la amenaza subversiva[20].

En Colombia, el asesinato el 9 de abril de 1948 de de Jorge Eliécer Gaitán, es otro referente histórico para la región. Militante liberal, fundador e impulsor del partido socialista colombiano, había logrado captar el sentido común del pueblo colombiano, ávido de transformaciones democráticas. En poco tiempo su prestigio lo encumbraba como posible presidente desde la alcaldía de Bogotá, convirtiéndose en un peligro que debía ser eliminado.

Estados Unidos entra en liza y apoya la acción. Para despistar, en la guerra de información, achaca al asesinato a los comunistas, buscando con ello, una razia que les facilite la labor de aniquilamiento, bajo la formación de hordas callejeras. Nada más conseguido el objetivo, los partidos conservadores comenzaron a perseguir a los socialistas-marxistas y los comunistas. «El bogotazo, como se conoce la explosión social siguiente al asesinato de Gaitán, se atribuye al comunismo desde las primeras horas [...] En su mensaje, Mariano Ospina Pérez, presidente, lo ratifica oficialmente. Los cuadros conservadores hacen un llamado a la formación de un frente anticomunista que reúna las fuerzas de orden que existen en el país, con el fin de defender los principios tutelares de la nacionalidad y los valores de la civilización cristiana»[21]. En 1953, tras reprimir al movimiento obrero y sindical, se preferirá pasar a la técnica del golpe de Estado para asegurar el control del país. El general Rojas Pinilla asume el poder del Estado, desplegando una de las políticas de lucha antsubversiva más violentas que se conocen. En 1958, un acuerdo entre liberales y conservadores permitirá en elecciones fraudulentas el bipartidismo, asentado, curiosamente en un estado de sitio permanente.

En Perú, la oligarquía y los militares favorecen la llegada al poder de Manuel Odría (1948-1956) por la vía rápida del golpe de Estado. Su primera medida, como no podía ser diferente de sus contemporáneos regionales, será declarar ilegal al partido comunista, al APRA y las organizaciones populares antiimperialistas. «El nuevo gobierno presidido por Odría puso en práctica todas y cada una de las exigencia oligárquicas [...] Para crear el necesario clima de confianza persiguió descarnadamente a los movimientos antioligárquicos y al partido comunista, así como a las organizaciones populares que se habían creado en el corto lapso democrático»[22].

En Argentina, el general Juan Domingo Perón, nacionalista y hombre que coqueteó con el fascismo como agregado militar en la Italia de Benito Mussolini entre 1939 y 1941, había sido vicepresidente y ministro de Trabajo durante la década infame. Elegido en las elecciones de 1946 hasta 1952, reelecto para un segundo mandato que no pudo concluir por un golpe de Estado llevado a cabo en septiembre de 1955. Exiliado primero en Paraguay, pasó a Panamá, para radicarse definitivamente, hasta su regreso en 1973, en la España franquista. Durante su primer mandato, dejó claro el límite de las reformas y su ideología política, haciendo uso del discurso anticomunista, bajo el concepto de enemigo múltiple: «Los descamisados han anulado el empeño de los comunistas y socialistas por infiltrarse en sus masas y sabotear, con huelgas y maniobras inconfesables, la conquista del pueblo [...]. Si las masas obreras que me apoyan han vencido a aquellos otros elementos en todos los terrenos, es porque su fe es superior a todo espíritu del mal que domina a las fuerzas rojas ocupadas en lanzar el veneno del caos sobre los pueblos»[23]. Esta visión se complementa con la doctrina justicialista de la sociedad organizada, que tendría como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía nacional, armonizando los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Con una fuerte influencia de la Falange española y su fundador José Antonio Primo de Rivera, Perón apunta: «Buscamos suprimir la lucha de clases, suplantándola por un acuerdo justo entre obreros y patronos, al amparo de la justicia que emane del Estado»[24].

Bolivia seguirá el ejemplo de Costa Rica, configurando una alianza anticomunista y antirreformista. La insurrección de abril de 1952, origen de la revolución boliviana, se desprende de los sectores populares, obreros, socialistas que habían participado en ella, logrando poner en jaque el orden oligárquico. Entre 1953 y 1956 el proceso sufre una involución. Luchas internas entre los sindicatos obreros y los partidos de clase, facilitan la dirección del proceso revolucionario a un partido nacionalista que aglutina la mayoría de las fuerzas insurgentes: el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), fundado en 1945. Sus dirigentes, fervientes anticomunistas, reconstruyen el poder político desde los principios de la seguridad nacional, enarbolando un discurso nacionalista y antioligárquico. «Como es clásico en este tipo de revoluciones, el nuevo poder desarma a las masas que le han dado el poder. La reorganización del ejército es la forma que adquiere ahora el desarme de las masas, la sustitución de un aparato represivo por otro. La fase semi-bonapartista, que cumple con el doble papel de suprimir la crisis económica [...], se asienta en la alianza entre la burocracia civil (MNR) y la burocracia militar. De hecho ya se trata de una dictadura [...] La reorganización del ejército es una de las condiciones del reconocimiento por parte del imperialismo. Puesto que su propia existencia y la totalidad del equipamiento provinieron de los Estados Unidos, es un ejército que se organiza en los términos de aquellos que existen bajo el control neocolonial norteamericano y así ocurrirá aún en aspectos de tanta inferencia local como lo que se llama doctrina militar»[25]. Paz Estenssoro y Siles Zuazo, fundadores del MNR, reprimen al movimiento obrero y a su dirigente más carismático, Juan Lechín. El general René Barrientos seguirá los pasos en 1964. Instauro una dictadura con el beneplácito del MNR y la embajada de Estados Unidos. Más tarde, otro general, Alfredo Ovando le sucederá. Ambos se reivindicán doctrinariamente del MNR. La historia de Bolivia, sus quiebres e inflexiones, durante la Guerra Fría se vuelve la historia de los golpes de Estado. «Un golpe de Estado desencadenó la insurrección de abril de 1952 y un golpe de Estado puso fin al proceso de la revolución Nacional iniciado por esa insurrección [...] El acto de masas que fue huelga de hambre en 1977 puso término a la dictadura de Banzer mediante golpe de Estado que indujo y otro golpe de Estado como este sepultó la impostura de Pereda, que la había sustituido. Golpe también fue el de García Meza que rompió la breve fase del auge democrático representativo que se había iniciado con aquella memorable huelga de hambre de las mujeres mineras. Por eso importa tan poco la forma *coup d'état* y tanto, como contraparte, lo que cada uno de ellos convoca, contiene o remata»[26].

La mayoría de los gobiernos reformistas siguen la misma suerte de Costa Rica en 1948 o Guatemala en 1954. Por esos años, comienzan a tomar cuerpo las primeras concepciones eurocéntricas del desarrollo. Las ciencias sociales son otro receptáculo para introducir las visiones del anticomunismo. En los años sesenta W. W. Rostow, historiador de la economía, a solicitud del presidente Kennedy, asume la tarea de elaborar una estrategia alternativa al desarrollo socialista. En 1963 ve la luz, *Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no comunista*, obra que marca un antes y un después en los estudios e interpretaciones sobre el desarrollo. Será manual en todas las universidades del mundo y organismos internacionales durante décadas. Así entiende Rostow el problema: «Marx,

llevado –en palabras de su padre– por un “egoísmo demoníaco”, por una identificación con los desvalidos y un odio hacia los mandamases, pero disciplinado también en cierta medida por una pasión por ser “científico” en lugar de sentimental, Marx creó su notable sistema, un sistema lleno de fallos, pero también de ideas parciales, una gran contribución formal a la ciencia social, una monstruosa guía para los poderes públicos. Uno de los fallos del sistema de Marx comenzó a ponerse de manifiesto antes de que muriera, y no supo cómo resolverlo. Hay quienes piensan que el reconocimiento interno de este fallo es el responsable del hecho de que *El Capital* sea un libro inacabado. El fallo se puso de manifiesto con la subida de los salarios reales industriales en Europa Occidental y con el hecho absolutamente evidente de que las clases trabajadoras de Gran Bretaña y Europa occidental se sentían inclinadas a aceptar las mejoras, a aceptar los términos del capitalismo democrático en lugar de concentrar sus esfuerzos en la sangrienta confrontación última, en apoderarse de las propiedades y entregárselas al Estado, el cual podría ser controlado, entonces, según Marx, por los trabajadores [...] Los líderes sindicales le volvieron la espalda a Marx y trataron de introducir reformas graduales dentro de sus propias sociedades. Y de esa forma Marx, y Engels, terminó teniendo una idea algo desilusionada del obrero industrial con el que tanto contaba para hacer realidad su dialéctica: el trabajador se conformaba con un poco de progreso bastante estable; tenía la sensación de que las cosas estaban mejorando para él y para sus hijos y de que, en general, estaba recibiendo una parte justa de lo que producía la sociedad en su conjunto; estaba dispuesto a luchar por lo que él deseaba dentro de las reglas de la democracia política, en un sistema de propiedad privada; tendía a identificarse con su sociedad nacional más que con el mundo abstracto de obreros industriales supuestamente oprimidos de todos los lugares; estaba dispuesto, a pesar de los conflictos y de falta de equidad, a vivir con sus semejantes, los hombres, en lugar de conspirar para asesinarlos. Y es ahí donde comienza la historia de Lenin y del comunismo moderno»[\[27\]](#).

No olvidemos que este cuadro pintado por Rostow fue el vademécum utilizado por economistas, politólogos, historiadores y sociólogos para explicar el desarrollo capitalista en las universidades, instituciones internacionales y organizaciones gubernamentales. De sus páginas se extraen los conceptos de «países en vías de desarrollo», «guerra preventiva» o la nada neutral «ayuda al desarrollo del 0,7 por 100». Los presidentes Roosevelt y Kennedy cooptaron «toda clase de sociólogos norteamericanos. La ayuda que el historiador de Harvard Arthur Schlesinger Jr., prestó al desarrollo de los países subdesarrollados, no consistió sino en escribir el ahora famoso *Libro blanco* sobre Cuba, que trataba de justificar la próxima invasión de ese país a través de Playa Girón. Posteriormente, él admitió haber mentido con respecto a la invasión en beneficio del “interés nacional”. El economista de Stanford Eugene Staley escribió *The Future of Underdeveloped Countries* y llevó sus ideas a la realidad del famoso plan Staley-General Maxwell. Taylor, para encerrar 15 millones de vietnamitas en los campos de concentración, bautizó el proyecto con el nombre de “aldeas estratégicas”. [...] El historiador económico del MIT, Walt Whitman Rostow [...] escribió –sobre las etapas– en el Centro para Estudios Internacionales financiado por la CIA situado en río Charles, Boston, y ha estado manejándolas en el río Potomac en calidad de director de política y planificación

del Departamento de Estado, nombrado por el presidente Kennedy y como consejero sobre Vietnam del presidente Johnson»[28].

La caída de Fulgencio Batista en Cuba, el 1 de enero de 1959, a manos del Movimiento 26 de Julio, precipita decisiones e inaugura un segundo momento en los golpes de Estado y la lucha contra las izquierdas en la región. En primer lugar, la revolución cubana pasa a ser la última gran revolución nacionalista del continente y en segundo término, por declarar inmediatamente su carácter socialista, popular y antiimperialista. Las lecciones para el imperialismo estadounidense son claras. No habrá una segunda Cuba en el continente. Si el proceso de reformas se escapa de las manos, mejor un golpe de Estado que permitir el ascenso de revolucionarios y comunistas.

El primer país en sufrir el cambio de estrategia será Ecuador. Desde 1948 hasta 1960, tres gobiernos, cuyas ideologías transitan del progresismo modernizador –Galo Plaza (1948-1952)– al liberal-populismo anticomunista –Velasco Ibarra (1952-1956)–, llegando a reincidir en el conservadurismo tradicional –de Camilo Ponce (1956-1960)–, se dan el relevo. En 1960, el triunfo de Velasco Ibarra desata la intranquilidad en las fuerzas armadas. Para algunos, sobre todo la derecha clerical, su anticomunismo debería haber sido suficiente garantía. Ibarra lo expresó por activa y pasiva, uniendo su aversión al marxismo. No hubo discurso en el cual no lo dejase claro: «Lo primero que haría el marxismo triunfante –como lo demuestran en la Europa Oriental las llamadas democracias populares– sería eliminar con el asesinato, la prisión y el destierro a los cristianos que hoy lo proclaman, si no los sintiera anteriormente adictos al simplismo y maquiavelismo marxista: la conciencia es el resultado de lo económico, para el triunfo de la regulación económica marxista son lícitos todos los medios incluyendo la traición y la mentira. He aquí en su esencia la doctrina marxista. Entre el marxismo y el cristianismo hay esencial y radical oposición [...] Para el cristiano, la conciencia es cosa del espíritu y es capaz de determinarlo todo, es capaz de crearlo todo y determinarlo todo. Es [...] la voluntad del inspirado, del enamorado, del amante, del artista, del apóstol, de Héctor, de Aquiles, ha realizado milagros y permitido que los hombres se sientan señores, árbitros de la familia de Dios»[29].

Velasco Ibarra, caudillo populista, intelectual y católico, apodado «papá Velasco», era, a los ojos de la oligarquía, una mezcla explosiva, incontrolable. Aún gobernando para la plutocracia terrateniente, esta no se sentía segura. El siete de noviembre de 1961 es obligado a dimitir. Velasco señala «me precipite a las botas de los militares». Temporalmente el poder pasa a Carlos Julio Arosemena, su vicepresidente. A poco de su andadura, perderá la confianza de militares y oligarcas, siendo acusado de mantener posiciones filocomunistas. Considerado un peligro en ciernes, deberá hacer frente a una virulenta campaña anticomunista e histérica, alentada desde la embajada de los Estados Unidos. La mano ejecutora recaerá sobre la Iglesia y el clero. Los jefes militares depusieron al presidente, inaugurando una nueva dictadura[30]. La junta militar que sustituye a Carlos Julio Arosemena, el 11 de noviembre de 1963, no deja dudas de la inspiración ideológica que la inspiró. «Les digo que estamos en el poder en virtud de un imperativo superior de Seguridad Nacional que obligó a las fuerzas armadas a salirse de sus específicas funciones para salvar al país del deshonor, del

comunismo y del caos. La junta militar [...], se propone erradicar completamente el comunismo, salvando así al país de la confusión y el desorden»[31].

Agustín Cueva, uno de los más destacados intelectuales ecuatorianos del siglo xx, apunta: «El clero se encargó de encabezar la cruzada, organizando manifestaciones gigantescas, especies de procesiones destinadas, dizque, a desagraviar a Dios por las ofensas del comunismo y pedir el rompimiento de las relaciones con Cuba [...] Arosemena rompió relaciones con Cuba en abril de 1962, pero no fue suficiente. La escalada continuó el 11 de julio de 1963, los militares asumieron directamente el poder. En realidad este golpe no fue sino una de las tantas medidas “contrainsurreccionales” acordadas por el pentágono y los monopolios en defensa de los intereses imperiales. Como la estrategia comprendía, además de las medidas específicamente represivas, ciertas acciones de carácter económico y social, se imprimió a la nueva dictadura no solo una orientación anticomunista sino también una tónica reformista conforme a los planes de la “Alianza para el Progreso”. Por ello, al mismo tiempo que se encarcelaba, desterraba o torturaba a los hombres de izquierda y clausuraba universidades y sindicatos, la junta militar de gobierno anunció una serie de reformas estructurales que, para marcar tono de tragicomedia, empezó por la nacionalización de las altas cumbres andinas»[32].

En 1964 Brasil se convirtió en el prototipo de golpe militar nacido al interior de la doctrina de la seguridad nacional post-revolución cubana. Para hacernos una idea cabal de esta afirmación, comencemos haciendo un repaso de su historia política. Desde la independencia a fines del siglo xix, su poder se entrecruza con alianzas cívico-militares. Se puede, al igual que en Bolivia, asumir la propuesta de René Zabaleta, no son los *coup d'état* lo que amerita un estudio, sino lo que cada uno de ellos contiene, convoca o remata. Costa Pinto, escribía aludiendo a los golpes de Estado en Brasil: «Las clases dirigentes de Brasil, como “partido del orden”, en nombre del “ultraorden” habían promovido el desorden institucional, estableciendo en 1937 una dictadura de tipo fascista, con fuerte respaldo militar, abandonando su viejo lema “libertad, igualdad y fraternidad”, por “Caballería, infantería y artillería”. En 1946, pasado lo que definían como crisis y siempre en nombre del “restablecimiento del orden” volvieron al régimen representativo y democrático, que usaron hasta 1964, en que nuevamente lo congelaron, y los militares, para superar la “crisis” y restablecer el “orden” una vez más se instalaron en el poder»[33].

Hay países, y Brasil es uno de ellos, donde la figura política de un caudillo permea gran parte su historia. Desde los años treinta del siglo xx, Getúlio Vargas, para unos, dictador y para otros un caudillo populista, representa un antes y un después en la historia contemporánea de Brasil. Tildado de bonapartista, fascista, nacionalista o antiimperialista, no deja a nadie indiferente. Desde su aparición en la escena política en 1930 hasta su trágico final, suicidándose el 24 de agosto de 1954, pasando la promulgación de la constitución fascista del Estado Novo 1937-1945, y su triunfo electoral en 1950, es considerado uno de los «padres» del Brasil de hoy. En la actualidad, facilita explicar el país en direcciones encontradas, partiendo del consenso que pone el Estado Novo como punto de partida de la tradición del populismo posterior. Tradición que se presenta, según los principales sociólogos brasileños,

bajo los principios del nazifascismo: «La organización de tipo corporativo bajo el cual Vargas articuló la representación frente al Estado de las distintas clases, estaba inspirada en los moldes nazifascistas vigentes de la época, que sin duda despertaban la admiración del dictador criollo [...] concedió a la clase obrera una legislación laboral y una previsión social. Creando, también un nuevo sindicalismo amarillo a través del cual pasó a ejercer el control estatal sobre el movimiento obrero [...] El varguismo creó por lo tanto la tradición política del populismo en Brasil».

Sin duda hay muchas similitudes con otros dictadores de la época. Su simpatía con el nazifascismo le acerca a Francisco Franco en España, António de Oliveira Salazar en Portugal o Juan Domingo Perón en Argentina. Getúlio Vargas sufre su primer traspie en 1945, siendo derrocado por un golpe de Estado. Sin embargo, ello no lo apartó del poder. Seguirá manejando los hilos desde la tramoya. En este contexto, verán la luz dos partidos políticos, invención del propio Vargas. El Partido Social Democrático, comandado por su ministro de Guerra, el general, Enrico Gaspar Dutra, simpatizante nazi; y el segundo, el Partido Trabalhista Brasileño, liderado por Vargas. El Partido Social Democrático, agrupa los sectores conservadores agrarios, terratenientes y latifundistas, lo cual facilita el control del voto clientelar de campesinos y proletariado rural. El Partido Trabalhista Brasileño, funciona como un escaparate para difundir la obra del caudillo y controlar parte del aparato estatal.

Tras el golpe militar que destituye a Vargas, se produce un llamamiento a celebrar elecciones. Recordemos que fue un ritual que acompañó la doctrina anticomunista diseñada por la Casa Blanca. Sin censura de prensa, decretando la libertad de presos políticos y la inscripción de los partidos, se convocan elecciones presidenciales. El ganador será Enrico Gaspar Dutra, anterior ministro de Guerra de Vargas. Anticomunista confeso, entre sus primeras medidas estuvo declarar fuera de la ley al partido comunista en 1947. Bajo su mandato se crea la Academia Superior de Guerra, cuyos programas acaban siendo la base ideológica y política de la futura doctrina de la seguridad nacional e inspirando el golpe militar del 1 de abril de 1964.

El derribo del presidente João Goulart en 1964 expresa el devenir de la alianza entre la oligarquía y la burguesía desarrollista, construida en los años treinta, con los militares jugando el papel de gendarmes, cuando las clases populares irrumpen en la escena y ponen en cuestión el orden político. «Si observamos el proceso brasileño desde una perspectiva amplia el rasgo más significativo del periodo que se inicia en 1930 es el esfuerzo en la búsqueda de un compromiso entre la democracia formal y un control suficientemente extenso del poder por la oligarquía de base latifundista. El régimen federal, que prevaleció en las diversas constituciones promulgadas u otorgadas entre 1934 y 1966, permitió siempre que el control del parlamento permaneciese en manos de los grupos oligárquicos [...] A partir de los años cincuenta, cuando se acelera el proceso de industrialización, se hace evidente el desplazamiento del eje central de la política brasileña. El conflicto tradicional entre grupos oligárquicos que pretendían monopolizar el estado para su propio uso, y los grupos medios que esperaban la democracia formal, el instrumento de modernización de la sociedad brasileña, desaparece como fuerza social capaz de alimentar el proceso político [...] En la medida que los

movimientos de masas iban ganando autonomía, se modificaba el contenido y la forma del proceso político, pasando a un primer plano la problemática de las reformas. La propia resistencia que la oligarquía ofrecía en el parlamento creaba condiciones para que la politización y la movilización de las masas se intensificasen. De esta forma, la presión en el sentido de modernización institucional se ejercía por los propios canales de la política. Estaba así abierta la puerta al reformismo institucional. Fue el temor que esa puerta se ampliase demasiado rápidamente lo que llevó el pánico a la clase dirigente, que apeló a las fuerzas armadas a fin de que estas desempeñasen el papel de gendarme del *statu quo* social, cuya preservación pasará a exigir la eliminación de la democracia formal»[34].

El golpe de Estado del 1 de abril de 1964, asestado al gobierno democrático de João Goulart por las fuerzas armadas al mando del general Castelo Branco, se transforma en la imagen perfecta de la unidad existente entre modernización y autoritarismo en América Latina. Introduce el principio de «objetivos nacionales», espacio de poder donde toma cuerpo la doctrina de la seguridad nacional vinculada a combatir la amenaza exterior y el enemigo interno, visualizados como la URSS, el comunismo y la subversión. En ella, por primera vez, se practica la tortura sistemática, utilizando métodos y técnicas provenientes de las experiencias francesa, estadounidense, e israelí. Torturadores profesionales se convierten en instructores y se hacen cargo de los interrogatorios. Los servicios de inteligencia actúan poniendo en movimiento las estrategias de «guerra sucia».

Hasta 1985, los generales que son cabeza visible de la dictadura, Castelo Branco (1964-1966), Costa e Silva (1967-1969), Garrastazu Médici (1979-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) y Batista Figueiredo (1979-1985), actuaron en perfecta sintonía con terratenientes, oligarcas y la burguesía local. La alianza cívico-militar fue perfecta. El expansionismo brasileño y su poder emergente, hunde sus raíces en el golpe militar de 1964. Las primeras elecciones libres, no serán democráticas. El presidente será elegido por voto indirecto. Las fuerzas armadas seguirán controlando el proceso. «En Brasil, las fuerzas armadas han retenido el control sobre el principal servicio de inteligencia, el SNI, y sobre el secretariado general del Consejo de Seguridad Nacional. Estos son dos de los grupos administrativos más poderosos adjuntos a la Presidencia. El hecho de que un presidente civil utilice reiteradamente estas instituciones controladas por los militares contribuye a la “militarización” de la oficina de la presidencia. También ayuda a legitimar la participación regular de las fuerzas armadas en el manejo estatal del conflicto interno [...] No se ha hecho nada para reducir el control militar inicial sobre las partes del aparato estatal que manejan el conflicto interno. El ejecutivo tampoco ha hecho nada para alterar la doctrina militar de la seguridad nacional, o para modificar las creencias de las fuerzas armadas sobre su rol»[35]. Los militares brasileños quedarán libres de ser juzgados por crímenes de lesa humanidad. La historia de Brasil se llena de claroscuros.

Geopolítica, doctrina de la seguridad nacional y modernización autoritaria

En los años sesenta, las fuerzas armadas en América Latina y el Caribe protagonizan una revolución que no pasa desapercibida. Tendrán un protagonismo excepcional en la vida política participando de lleno en su modernización económica y social. Nada les fue ajeno.

La geopolítica les brindó el marco para reinterpretar su papel en el interior del Estado: «La concepción tradicional de las fronteras con “bordes nacionales”, es válida y correcta. Pero resulta insuficiente en el mundo contemporáneo, ya que excluye un ámbito cada día más interrelacionado con el mundo exterior. Nos referimos a la cultura nacional, verdadera frontera interior [...] y como tal exige, ser preservada, perfeccionada y desarrollada [...] La cultura nacional como frontera geopolítica es bidimensional pues presenta dos componentes: uno espiritual y otro material. Entre los factores del primero señalamos a la ciencia, lo moral, lo intelectual, estético, religión, tradición, modalidades sociopolíticas y estilo de vida. En los factores del segundo, la técnica, modos de producción y sistemas económicos»[36].

La Escuela Superior de Guerra de Brasil, antes mencionada, destaca en la elaboración del pensamiento geopolítico latinoamericano. Redefinida por el general Golbery do Couto e Silva como «doctrina de la seguridad nacional», hace del Estado «un organismo vivo, con intereses, instinto de conservación, la voluntad de crecer, la voluntad de vivir y la voluntad de poder»[37]. Así, las fuerzas armadas tienen la misión de perseguir objetivos nacionales a través de todas las actividades políticas, económicas, psicosociales y militares que formen las directrices gubernamentales. Su instrumento, el uso indiscriminado del poder nacional. Por consiguiente, la «política nacional», será considerada el conjunto de actividades que abarcan toda la vida de la nación en plano interno y externo.

La imagen de unas fuerzas armadas vinculadas a las estrategias de desarrollo les proporcionó la excusa adecuada para ganar presencia en la vida nacional. Las escuelas militares hicieron campañas de cooptación en medio de la guerra contrainsurgente. Estudiantes de bachillerato y universitarios son estimulados a dejar la vida civil e incorporarse a las escuelas de oficiales y suboficiales. Médicos, ingenieros, sociólogos, biólogos, abogados, economistas, matemáticos, químicos, etcétera, se deciden por los cuarteles. Ya no habría un distanciamiento entre militares y civiles. Los países requerían su presencia. Los necesitaban. Las fuerzas armadas eran una palanca para la transformación social. Es el nacimiento de la alianza cívico-militar capaz de ensamblar la estrategia anticomunista y desarticulación de las izquierdas. Nacida en los años sesenta proporciona argumentos legales que sirven en bandeja de plata y legitiman las dictaduras, cuando escuchan el llamado de socorro emitido por la sociedad contra el comunista que acecha y destruye los valores del Estado patrio.

Los militares se vuelven imprescindibles en todos los espacios de la vida nacional. Se construyen relatos épicos. Reciben honores y medallas. Todo forma parte de una estrategia, la construcción de un imaginario, en el cual, las fuerzas armadas se comprometen a defender los valores patrios y la nación, participando en los planes de desarrollo y modernización. Las fuerzas armadas se convierten en representación del «interés general» de la nación. Tienen metas y objetivos. Sus intervenciones no se producen en el vacío, ni son producto de mentes calenturientas. Sus acciones responden al rol protector asignado en la geopolítica de la seguridad nacional, para levantar el Estado militar.

Los «estados de seguridad nacional» forman parte del entramado construido en torno al nacimiento de la geopolítica. Sus orígenes no se encuentran en Golbery do Couto e Silva, sino en el alemán Karl Haushofer, creador del concepto. Su principio es retomado por la escuela latinoamericana, haciendo suyo el postulado sobre el cual levanta la doctrina. «La base científica del arte de la actuación política en la lucha a vida o muerte de los organismos estatales por el espacio vital»[\[38\]](#).

Osiris Villegas, general argentino, ubica su pensamiento en este plano de análisis, agregándole la tarea de luchar contra el enemigo comunista: «Al estudiar el proceso de adecuación de la infraestructura, en vista del país futuro, frente a una economía distorsionada e ineficiente, se descubren puntos vulnerables a la agresión económica y capaz de generar tensiones sociales e internacionales y servir de vehículo de corrientes ideológicas extremistas. Por otro lado, la subversión comunista con un pie en América y apoyada en cuantiosos recursos económicos puede aprovechar bajos estándares de vida para aumentar su esfera de acción en nuevos países. La propaganda, la infiltración en las más diversas instituciones (políticas, culturales, gremiales, universitarias, vecinales) y las guerrillas, de las cuales ya tuvimos algunos amagos en nuestro país y que han merodeado en nuestras fronteras, son algunas de las etapas que caracterizan dicha subversión. En tal sentido, por afectar el estilo de vida argentino y por tanto ser parte del interés nacional, la Seguridad Nacional, lleva implícito impedir que el comunismo pueda actuar impunemente en nuestro territorio»[\[39\]](#).

La coordinación regional de los mandos militares latinoamericanos dio fluidez a la doctrina de contención y lucha antsubversiva, unificando ideológicamente sus acciones como garantes del espacio hemisférico y retaguardia defensiva de la democracia. En esta lógica, el TIAR unifica las fuerzas armadas latinoamericanas y pone en evidencia la complicidad de intereses entre las compañías multinacionales, las clases dominantes y la política de seguridad hemisférica impulsada por el imperialismo estadounidense. La invasión de los marines a República Dominicana, en 1965, lo demuestra. Su objetivo es desarticular la insurrección popular encabezada por el coronel Francisco Alberto Caamaño, nombrado presidente de la República en medio de una lucha por reponer al presidente Juan Bosch, destituido en abril de 1963. Los Estados Unidos, utilizando la OEA y el TIAR, fomentan la creación de una fuerza Interamericana de Paz para sofocar el levantamiento popular. Trece países latinoamericanos, encabezados por Brasil, lo secundaron, siete de ellos mandaron tropas, el objetivo no podía ser otro, luchar contra el comunismo y «restaurar la paz y la democracia en República Dominicana». Juan Bosch, presidente de República Dominicana sentencia: «En Santo Domingo se desató el terror “anticomunista” que se había aplicado en Vietnam del Sur en los tiempos de Diem. En los días que siguieron a la intervención pentagonista en Santo Domingo se descubrió un cementerio de víctimas del terror. Según un estimado conservador, las matanzas de la parte norte de la capital dominicana, ocurridas en el mes de mayo, alcanzaron a unas 2.000. A esas matanzas se las llamó “operación limpieza”, hecha, al parecer con autorización de la OEA, por las tropas dominicanas bajo dirección norteamericana. Nunca se le dio publicidad a la ola de crímenes que se extendió por todo el país después de haber terminado la negociación entre el gobierno del coronel Caamaño y la OEA, esto es,

inmediatamente después que se estableció el gobierno provisional encabezado por el Dr. García Godoy. Esa ola de sangre seguía azotando el pequeño país antillano en agosto de 1967»[40].

El carácter intervencionista de las fuerzas armadas es de importancia trascendental, ya que son los ejércitos quienes se arrogaron la condición de juez y parte a la hora de valorar qué gobiernos caían bajo la consideración de «democráticos» y cuáles bajo el calificativo de «procomunistas» o «marxistas». El poder real de las fuerzas armadas se incrementó. Los generales miembros de las Juntas de Estado Mayor se presentan como verdaderos guardianes de la «civilización occidental». Sus mentes habían sido preparadas para asumir esta función redentora. Adoctrinados por Estados Unidos en zona del canal de Panamá, generaciones de oficiales de todos los países de América Latina pasan por las aulas de la tristemente famosa Escuela de las Américas. Allí tuvieron como lectura obligada títulos que no dejan lugar a dudas cual era el enemigo: *Así es el comunismo*, *Como funciona el partido comunista*, *El dominio del partido comunista*, *Conquista y colonización comunista*, *El dominio del partido comunista en Rusia*, *La respuesta de una nación al comunismo* (redactado por J. Edgar Hoover, exdirector del FBI), *Cómo logran y retienen el poder los comunistas*, *La democracia contra el comunismo*, *¿qué hacen los comunistas en libertad?* y *Como controla el comunismo las ideas de los pueblos*.

Los cursos, sesgados ideológicamente, están incorporados en los planes de estudio, las asignaturas y los seminarios para oficiales de información e inteligencia, cuya duración sobrepasaba los quince días. Las unidades didácticas expresan hacia donde se orienta la vocación de los jóvenes milites: «Comunismo versus Democracia». En el temario de Operaciones de Contrainsurgencia dirigido a tenientes y capitanes se incluye la asignatura «Introducción a la guerra especial» que comprende ítems como «Las doctrinas comunistas». Por último, en el curso destinado a los coroneles se incluía la unidad temática: «Ideología Comunista y objetivos nacionales». Tampoco quedan fuera los futuros policías militares. Para ellos, había una la asignatura básica, de título sugestivo: «La amenaza comunista»[41].

De esta guisa, las fuerzas armadas interiorizaron los lineamientos estratégicos diseñados por el Pentágono. En este itinerario, diseñado prolijamente, se contempla el apoyo *in situ*, además de facilitar el armamento y los pertrechos para cumplir tan destacables misiones. La dependencia del conglomerado industrial militar de Estados Unidos fue la puntilla que encadena, definitivamente, a las fuerzas armadas latinoamericana.

Así, originalmente los suministros a las fuerzas armadas latinoamericanas en el periodo de posguerra, dentro del Programa de Ayuda Militar, fueron donaciones. La venta se realizaba bajo otro epígrafe, ventas militares al extranjero. Ambos programas estaban destinados a fortalecer las defensas frente la agresión comunista. «[...] después del triunfo de la revolución cubana, la apreciación de Washington de la amenaza a la seguridad en Latinoamérica sufrió una rápida modificación. Cuando el presidente Kennedy asumió su cargo en 1961, los objetivos del Programa de Ayuda Militar y de Ventas de Armas al extranjero fueron completamente trastocados [...] Las bases para la ayuda militar a Latinoamérica cambiaron bruscamente de la defensa hemisférica a la seguridad interna, de la protección de costas y de

la acción bélica antisubmarina a la defensa contra la guerra de guerrillas comunista-castrista. El armamento pesado de contrainsurgencia (helicópteros, transportes blindados, aviones de apoyo cercano, etcétera) encabezaba ahora la lista de armamentos suministrados. [...] El secretario de defensa Robert McNamara, dijo al Congreso en 1967 que “nuestro objetivo primordial en Latinoamérica es ayudar, donde sea necesario, al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares nativas capaces proporcionar, en unión a la policía y otras fuerzas de seguridad, la necesaria seguridad interna”. El programa de ayuda del año fiscal de 1968, añadió “no proporcionara tanques ni artillería, ni cazabombarderos o barcos de guerra. Se hará hincapié en vehículos y helicópteros para la movilización interna y en equipo de comunicaciones que sirva para una mejor coordinación de los esfuerzos de seguridad dentro del país”»[42].

Con la Guerra Fría en pleno apogeo y la doctrina Truman vigente, la política militar exterior de los Estados Unidos hacia América Latina presentó dos fases: «La primera, desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, llega a 1961, cuando se instala en el gobierno estadounidense la administración demócrata presidida por John F. Kennedy. En ese lapso aquella política puso el acento en la defensa colectiva, fundada en la solidaridad continental, frente a un eventual ataque extracontinental. Tal doctrina permitió a los Estados Unidos lograr, en el plano político, la suscripción en 1947 del TIAR y, en el plano económico, la colocación en el mercado latinoamericano de una parte del material bélico estadounidense sobrante de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. En el segundo periodo, claramente definido a partir de 1961, en que los Estados Unidos inician una redefinición del papel que las fuerzas armadas latinoamericanas desempeñaban en el continente y en sus propios países, pretendiéndoseles asignar exclusivamente la misión de guardianes del orden interno»[43].

El ideal de una sociedad ordenada, libre de la amenaza comunista y sin el peligro que representaba el socialismo-marxista, se teorizó en el encuadre de la guerra total y el estructural-funcionalismo radical. Las reivindicaciones democráticas, nacidas a la luz de las luchas por la independencia económica, la soberanía política, serán demonizadas y consideradas parte de un plan desestabilizador urdido por la infiltración del marxismo-leninismo. «En este contexto es fácil comprender que los mecanismos de control social o de mantenimiento del orden social sean vistos en términos de una “cirugía social primitiva”. Las relaciones sociales y complejas y lentas deben estar ahora regidas por el principio fundamental de la eficiencia, en razón de objetivos superiores fijados jerárquicamente. Si el consenso es difícil de lograr, si la racionalidad democrática constituye un campo de juego de fuerzas, demasiado incontrolable, entonces hay que aplicar el “bisturí social”. Hay que aplicar herramientas de la guerra a la interacción de los colectivos sociales»[44].

Bajo este razonamiento, la frase atribuida a Henry Kissinger, al dictador Augusto Pinochet, «necesitábamos un cirujano y contratamos a un carnicero», cobra toda su fuerza. Y si hubiese dudas, es el propio dictador Augusto Pinochet quien lo aclara en su discurso de conmemoración del golpe en 1976: «Como otros países del mundo y especialmente América Latina, Chile ha recibido el embate del marxismo leninismo y ha decidido enfrentarlo y

combatirlo hasta su total derrota. Pero ante ello cabe hoy detenerse un instante a reflexionar sobre un problema capital: ¿en qué consiste exactamente este enemigo en el mundo de hoy? El marxismo no es una doctrina simplemente equivocada, como ha habido tantas en la historia. No, el marxismo es una doctrina intrínsecamente perversa. Es además una agresión permanente, hoy al servicio del imperialismo soviético». Los aplausos llenaron el recinto. Tres años habían pasado desde que otro de los golpistas, miembro de la Junta Militar, el comandante de la fuerza aérea, Gustavo Leigh, pronunciara su objetivo: «Tenía que erradicar el cáncer marxista de raíz».

Esta percepción generalizada entre miembros de las fuerzas armadas trajo consigo una interpretación maniquea: cualesquiera demanda política, social o económica se consideró un síntoma de infiltración comunista. Muchos gobiernos democráticos-burgueses fueron víctimas de golpes de Estado inducidos por tal visión apocalíptica. La acción conjunta de Estados Unidos y las burguesías criollas, amenazadas por un desborde popular no aceptaban reformas, ni cambios democráticos fuera de su control.

Hemos analizado la ascensión de Manuel Odría en Perú (1950), Gustavo Rojas Pinilla en Colombia (1953), Alfredo Stroessner en Paraguay (1954), Carlos Castillo Armas en Guatemala (1954), Oswaldo López Arellano en Honduras (1963) y nuevamente en Guatemala, impidiendo la elección de Arévalo en 1963. Igualmente la invasión a República Dominicana, tras el golpe de Estado que apartó a Juan Bosch del poder en 1963. La plaga de golpes de Estado se extiende hasta los años setenta del siglo xx. Pocos países se salvan. La doctrina de la seguridad nacional deja una secuela de dictaduras: Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.

La guerra interna abrió las puertas a la militarización de la sociedad. La seguridad se entendió como parte de una guerra donde la subversión y el comunismo roían las bases democráticas de las instituciones. Son las bases de una política que hoy sobrevive en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, o los movimientos antisistema.

La cuasi uniformidad –en el contenido y el discurso– de los golpes de Estado fue expresión de un fascismo criollo representativo del accionar político de los ejércitos latinoamericanos. Como vimos, educadas en la Escuela de las Américas y bajo el estricto control del Pentágono, promociones enteras de oficiales pasaron por sus aulas. Hasta 1975 se habían graduado en sus instalaciones: «33.147 alumnos en la USARSA, muchos de ellos ocuparon cargos en sus gobiernos. En octubre de 1973, más de 170 graduados eran jefes de gobierno, ministros comandantes, generales o directores de los departamentos de inteligencia de sus respectivos países»[\[45\]](#).

El Estado militar adquiere consistencia política. Las fuerzas armadas se posicionan ante la nueva tarea que el deber les impone. La frase del general Juan Carlos Onganía «no tengo plazos, sino objetivos», pronunciada al derrocar al presidente Humberto Illia en 1966, responde a un tipo de golpe en el cual las fuerzas armadas se consideran fundadoras de un orden social. No actúan para restaurar o reponer a las viejas oligarquías y las burguesías modernizadoras. Bajo la geopolítica de la frontera ideológica se plantean recomponer el mapa de las fuerzas vivas del Estado en su misión regeneradora. El marxismo, el comunismo

internacional y la subversión son el enemigo a combatir, amenazan la seguridad interna, a lo cual se suma la agresión extracontinental, ideológica, económica dirigida por la URSS.

La militarización del Estado supuso, como bien lo expresa Atilio Borón: «Una ruptura, y planteó la exigencia de distinguir estas modernas dictaduras militares latinoamericanas de las formas “clásicas” de intervención militar [...] En la situación actual de América Latina la intervención de las fuerzas armadas tiene un significado bien diferente: no se trata ahora del pronunciamiento de un caudillo militar sino de la propia institución castrense en su totalidad la que “ocupa” militarmente los aparatos de Estado proyectando su propia estructura jerárquica del poder sobre el escenario de la organización estatal. Aquí aparece entonces un fenómeno que nos parece inédito, a saber: *el surgimiento de las fuerzas armadas como el partido orgánico de la gran burguesía monopólica y sus fracciones aliadas afrontando un periodo de crisis hegemónica. Es pues la propia institución militar la que aparece como “el partido del orden” en un momento en que entran en crisis las diversas formas populistas con las cuales pretendió resolver, durante varias décadas, la quiebra del estado oligárquico.* La cuestión de la hegemonía burguesa es entonces resuelta provisionalmente por el capital monopólico internacional, que dirige una coalición que también incorpora a otros sectores de las clases dominantes y algunas capas de la pequeña burguesía. Por consiguiente, el “estado militar” pasa a ser el recurso mediante el cual se pone fin a un extenso periodo de crisis orgánica y se refunda la supremacía burguesa»[46].

La institución militar presenta metas políticas. Las fuerzas armadas han llegado para quedarse y cumplir un programa preestablecido. El orden institucional vigente lo consideran caduco. En su lugar deben levantar un modelo capaz de hacer frente a la amenaza de las izquierdas, el marxismo-socialista y el comunismo internacional. «La construcción de este nuevo orden es presentada como una tarea a larguísimo plazo, que ellos mismos definen como una revolución, que debe ser comandada por un gobierno militar-tecnocrático»[47].

En ocasiones, dicen actuar obligados ante el clamor del pueblo que pide angustiada su intervención salvadora. Pinochet declara en 1974: «Ustedes saben que el pueblo oraba por su salvación y que hoy se siente libre y apartado del mal» y en otro discurso: «Ustedes deben saber que el movimiento del 11 de septiembre fue especialmente dirigido a salvar la parte espiritual del país [...] porque estábamos cayendo en el marxismo materialista ateo donde se pierde lo más grande que tiene el hombre, que es la parte espiritual [...] Es así que quien analiza el pronunciamiento militar de 1973 y estudia causalmente cómo se produjo llega al convencimiento de que aquí estuvo presente la mano de Dios»[48].

Bresser Pereira, sociólogo brasileño, acuñará el concepto de «tecnoburocracia militar» para definir el sentido y papel que se arrogan las fuerzas armadas para justificar los golpes de Estado. «Los militares asumen el poder político no solo en nombre de su competencia militar, sino también en nombre de su competencia civil. Esto no significa que los grupos civiles no sean capaces de administrarse a sí mismos. En un país como Brasil, por ejemplo, la primera revolución militar del tipo que estamos analizando ocurrió en 1930. Pero los militares, en esa ocasión, restituyeron el poder a los civiles. En 1964, cuando el poder civil y el esquema político establecidos treinta y cuatro años atrás entraron en crisis y se produjo un vacío de

liderazgo civil en el país, los militares, ya plenamente tecnoburocráticos, asumieron el poder con ánimo de conservarlo»[\[49\]](#).

Nuevamente, Augusto Pinochet expone esta tesis con claridad meridiana en el discurso considerado el más importante de la dictadura, pronunciado en ocasión del Día de la Juventud, el 9 de julio de 1977, en Cerro Chacarillas, rodeado de sus incondicionales y en medio de la noche con banderas al viento y antorchas, al mejor estilo fascista, el dictador puso las cartas boca arriba: «Para un adecuado enfoque [...] es conveniente reiterar que el 11 de septiembre no significó solo el derrocamiento de un gobierno ilegítimo y fracasado, sino representó el término de un régimen político-institucional definitivamente agotado, y el consiguiente imperativo de construir uno nuevo [...] Estamos frente a una tarea que, por su naturaleza y envergadura debe ser gradual. De este modo, nos alejamos por igual de dos extremos: el del estancamiento, que más tarde o más temprano siempre conduce los procesos sociales a rupturas violentas, y el de la precipitación, que traería consigo la rápida destrucción de todo nuestro esfuerzo, el retorno del régimen anterior con sus mismos hombres y vicios y, muy pronto, un caos similar o peor al que vivimos durante el gobierno marxista. El proceso concebido en forma gradual contempla tres etapas: la recuperación, la de transición y la normalidad o consolidación. Dichas etapas se diferencian por el diverso papel que en ellas corresponde a las fuerzas armadas y de orden, y a la civilidad, por otro».

La modernización autoritaria se convirtió en parte del debate teórico y político. La discusión tuvo distintos matices. ¿Cuál era el carácter de las dictaduras? ¿La doctrina de la seguridad nacional reproducía la geopolítica del fascismo? ¿Las fuerzas armadas propugnaban un modelo económico específico? ¿Cabía la categoría de fascismo dependiente? ¿Qué tipo de relaciones sociales producían? Las ciencias sociales latinoamericanas en los años setenta y ochenta del siglo xx, se volcaron en satisfacer y responder dichas preguntas[\[50\]](#).

Las fuerzas armadas se hicieron cargo del «combate» contra el comunismo y la subversión y de paso, tomaron en sus manos las directrices de la política económica. Las experiencias golpistas en Brasil en 1964, en Argentina en 1966, y en Uruguay y Chile en 1973 originan la definición que caracteriza los regímenes políticos vinculados a la doctrina de la seguridad nacional como creadores del nuevo Estado autoritario burocrático. Tal definición fue propuesta por Guillermo O'Donnell: «El término “burocrático autoritario” (BA) no tiene virtud estética pero sirve para sugerir algunas de las características utilizables para delimitar un tipo de Estado que debe ser distinguido de otros, también autoritarios, que han sido mucho más estudiados –el autoritarismo tradicional, el populismo y el fascismo–. En América Latina el Estado BA surgió en la década de los sesenta en Brasil y Argentina, y algo más tarde en Uruguay y Chile [...] Las características definitorias del tipo BA son: a) las posiciones superiores de gobierno suelen ser ocupadas por personas que acceden a ellas luego de exitosas carreras en organizaciones complejas y altamente burocratizadas: fuerzas armadas, el Estado mismo, grandes empresas privadas; b) son sistemas de exclusión política en el sentido de que apuntan a cerrar canales de acceso al estado al sector popular y sus aliados, así como a desactivarlos políticamente, no solo mediante la represión sino también por medio del funcionamiento de controles verticales (corporativos) por parte del Estado sobre los

sindicatos; c) son sistemas de exclusión económica, en el sentido que reducen y postergan hacia un futuro no precisado las aspiraciones de participación económica del sector popular; d) son sistemas despolitizantes, en el sentido que pretenden reducir cuestiones sociales y políticas públicas a problemas “técnicos”, a dilucidar mediante interacciones entre las cúpulas de las grandes organizaciones arriba referidas; e) corresponden a una etapa de importantes transformaciones en los mecanismos de acumulación de sus sociedades, las que a su vez son parte de un proceso de “profundización” de un capitalismo periférico y dependiente, pero – también– dotado ya de una extensa industrialización»[51].

El proceso de transnacionalización y desnacionalización llevada a cabo por las dictaduras militares en los años 70 y 80, no siempre fue acompañado por la aplicación irrestricta de políticas neoliberales. Las dictaduras de los años sesenta se inscriben en la modernización autoritaria bajo patrones keynesianos. Brasil impulsó la participación del Estado en las políticas industrializadoras, acorde con su estrategia geopolítica de expansión del ideario nacionalista. Fue llamado «el milagro brasileño». Igual sucedió con las dictaduras de Juan Carlos Onganía en Argentina, o las preexistentes de Stroessner en Paraguay y Banzer en Bolivia. Fue la llegada de los «*Chicago boys*», impulsores ideológicos del golpe de Estado en Chile, quienes asumieron la tarea de alterar el modelo de desarrollo hegemónico conocido como sustitución de importaciones o crecimiento hacia adentro. Dejemos que sean ellos quienes hablen: «A contar de 1975 los economistas se despliegan en el gobierno y ocupan palancas de mando: todo se hace bajo la conducción del presidente de la República. Él es el que nombra, dirige, vigila y sanciona. Cabe preguntarse por la causa o las causas que determinan la actitud del presidente en favor de esta línea económica, apoyada por él hasta donde le ha sido posible políticamente. En los economistas con estudios en la Universidad de Chicago y en la Universidad Católica, así como gremialistas de la misma universidad que dirige Jaime Guzmán, se aprecia una línea intransigente de oposición a la Unidad Popular, al socialismo y a los valores, normas y prácticas que configuran el modelo chileno de los últimos cincuenta años. Forman una neodercha, una resurrección de principios inherentes al liberalismo, así como una reviviscencia de fórmulas autoritarias portalianas, a la que sus mentores atribuyen raíz hispana y monárquica [...] Estos comandos constituyen [...] la vanguardia que abre el camino al avance de la revolución nacional que preconiza Pinochet y que vive en el anhelo de las fuerzas armadas, tal vez inconsciente, revolución nacional –no necesariamente nacionalista– [...] No es fácil que este comando político, y sobre todo económico, surja de las fuerzas armadas originalmente. Los militares tienen otra misión [...] Son los civiles los encargados de quebrar prejuicios y remozar la política»[52].

Fue el comienzo de una nueva fase. El modelo chileno gana terreno. Privatizaciones, desregulaciones, preeminencia del capital privado en la asignación de recursos, flexibilización del mercado laboral, apertura financiera y comercial. Un nuevo marco institucional recibe la reforma neoliberal. Los años ochenta están marcados por su hegemonía. Para que esta estrategia diera sus frutos, se construyó una renovada alianza entre militares y civiles. Se atacó el poder de una parte de las burguesías nacidas al calor del desarrollismo. El mejor ejemplo de esta nueva realidad lo marcó la posición de la Democracia Cristiana

chilena. Primero, participando del golpe militar bajo el discurso antimarxista y luego, al ver cómo sus empresarios y dirigentes más señalados eran desplazados a la hora de articular las nuevas políticas económicas mostró sus discrepancias. Eso no fue óbice para que muchos de sus dirigentes se incorporaran a prestar servicios a la dictadura desde una postura apartidista. Su apoyo a la dictadura lo deja claro el expresidente Eduardo Frei Montalva en carta al presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana de fecha 8 de noviembre de 1973, es decir a dos meses del golpe: «Todos los chilenos, o al menos la inmensa mayoría estamos vitalmente interesados en que se restablezca rápidamente la democracia en Chile. Y para esto es necesario que el país salga del caos y, que en consecuencia el gobierno actual tenga éxito. Las fuerzas armadas –estamos convencidos– no actuaron por ambición. Su fracaso sería el fracaso del país y nos precipitaría a un callejón sin salida. Por eso los chilenos, en su inmensa mayoría, más allá de consideración partidista, quieren ayudar porque creen que esta es la condición para que se restablezca la paz y la libertad en Chile. Cuanto más pronto se destierre el odio y se recupere económicamente el país, más rápida será la salida»[\[53\]](#).

Orlando Letelier, exministro de Allende, asesinado en Washington por orden del dictador dentro de la Operación Cóndor, aclaró cuál era el sentido de esta misteriosa alianza: «Mientras los *Chicago boys* han proporcionado una apariencia de respetabilidad técnica a los sueños de *laissez faire* y a la codicia política de la oligarquía terrateniente y de la alta burguesía de monopolistas y especuladores financieros, los militares han usado la fuerza bruta requerida para su implementación. La represión de las mayorías y la “libertad económica” para un reducido número de grupos privilegiados son en Chile dos caras de una misma moneda»[\[54\]](#).

Desde entonces y hasta hoy, esta alianza se ha mantenido en Chile y el continente. Solo que las fuerzas armadas se han retirado a sus cuarteles de invierno como gendarmes del proceso. Los casos de Honduras y Paraguay son un ejemplo de lo expuesto. Donde las políticas neoliberales han sido derrotadas en las urnas, como en Venezuela, Bolivia y Ecuador, las burguesías gerenciales desplazadas del poder, con apoyo del imperialismo norteamericano y ahora las democracias europeas, fieles aliados de sus intereses, buscan su reversión apoyando procesos desestabilizadores.

Reformismo militar y golpes de Estado: Perú y Panamá

En tiempos del fascismo criollo y la doctrina de la seguridad nacional, emergen experiencias, *manu militari*, rupturistas. Son regímenes militares antiimperialistas, de corte marcadamente popular, reformistas y por qué no decirlo, con rasgos anticapitalistas. Sus gobiernos fueron contrarios a practicar la doctrina de la seguridad nacional, en su versión estadounidense, tamizada por la escuela brasileña. Su emergencia en América Latina, rompe la dinámica del golpismo subordinado a los intereses de la seguridad hemisférica de Estados Unidos. Bien es cierto que tuvieron claroscuros, pero hay una diferencia que impide homologarlos a sus primos hermanos. Son golpes de Estado que reivindican la apertura

política, la ampliación de los espacios de organización de la sociedad civil, rechazan la tortura, la detención arbitraria y sobre todo no practicaron la desaparición de opositores. Sus gobiernos no presentan un currículum fundado en la violación de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Tal vez estas cualidades sean suficientes para analizar brevemente su accionar. En 1968, dos países de la región, uno situado en el Cono Sur, Perú y otro en Centroamérica, Panamá, vivirán esta experiencia reformista.

En Perú, el régimen oligárquico creció entre dictaduras y gobiernos plutocráticos. Sin embargo, su dominio comienza a resquebrajarse a partir de los años cincuenta. En esta década se suceden los intentos de apertura política democrática: «La ascendente fracción industrial y los sectores medios, ampliados a partir de la expansión burocrática, educativa y en general urbana, significan una progresiva demanda de cambio que concluye dividiendo la escena en las opciones oligárquica y antioligárquica. Ello, si bien no producirá cambios en la forma de Estado durante el periodo 1950-1968, sí alterará el régimen político. La insurgencia de los grupos reformistas descansa en la dinamización de otras fuerzas sociales (como el movimiento campesino) y en tendencias estructurales de modernización de la economía, pero no serán suficientes los cambios en el régimen político y así, tras largo empate, la crisis se resolverá con una nueva intervención de las fuerzas armadas [...] De esta forma, el régimen oligárquico diseñado por y para el Estado oligárquico llega al punto máximo de la crisis. Expresa, en el deterioro de sus instituciones, no solo la lucha interburguesa sino la incapacidad de incorporar las fuerzas sociales en ascenso [...] Al tomar el poder la fuerza armada, en octubre de 1968, el régimen político sufre una variación sustancial [...] se inicia un periodo de transición que parte de la cancelación del Estado oligárquico»[\[55\]](#).

La dinámica del gobierno del general Velasco Alvarado viene definida por una de sus primeras medidas, las nacionalizaciones. Expulsa a las compañías multinacionales que monopolizan el sector estratégico de la economía. Se trata de la International Petroleum Company, filial de la Standard Oil. Su expulsión del territorio peruano provoca un revuelo en Estados Unidos. No tardó mucho su recién estrenado flamante presidente Richard Nixon (1969-1974) en declarar al gobierno militar de Velasco Alvarado como procomunista. Le fue declarada la guerra.

El entonces ministro de Energías y Minas de Perú, el general Jorge Fernández Maldonado, defiende la expulsión y el conjunto de medidas impulsadas contra las empresas norteamericanas expropiadas señalando que: «Su expulsión fue un acto de justicia revolucionaria, puesto que detentaba, sin título valedero alguno, los yacimientos que pertenecen al pueblo del Perú. Pero, luego vinieron otras realizaciones. La reforma agraria marcó el comienzo de la transformación de la sociedad peruana. Se inició con las haciendas azucareras de la costa, la propiedad de capitalistas poderosos y sectores ligados al imperialismo. Luego vino la reforma minera, haciendo revertir los yacimientos mantenidos como reservas estratégicas del imperialismo, al Estado peruano revolucionario para su explotación más conveniente. Enseguida vino la ley de industrias que creó la primera comunidad laboral. Se estableció la refinación y la comercialización, también por el Estado, de la harina y aceite de pescado. Se crearon nuevas comunidades laborales en el sector

minero, pesquero, de telecomunicaciones, electricidad y petróleo. La banca en su gran mayoría se encuentra con los resortes crediticios en manos del Estado [...] Se ha promulgado un estatuto de libertad de prensa a quienes sean atacados por la prensa reaccionaria su derecho a exigir rectificaciones y se estableció también el derecho que tienen los periodistas a expresar su opinión en columnas especiales, en cuanto difieran de la opinión de los empresarios periodísticos. Se ha ido pues a una auténtica libertad de prensa y no de empresa [...] Se han nacionalizado los servicios públicos esenciales, tales como la electricidad, las telecomunicaciones, la compañía de teléfonos y los ferrocarriles»[56].

En esta lógica, la revolución adquiere connotaciones nacionales. Procede a realizar la reforma agraria, postergada durante décadas, destruyendo el poder de los gamonales y distribuyendo las tierras en manos de los terratenientes a más 360.000 familias en forma de cooperativas. Asimismo, amplió el rol del Estado, desarrollando políticas públicas para fomentar la participación social popular de las clases trabajadoras. Para tal efecto se crea el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS). En su interior participarán organizaciones sociales de diferente índole, campesinos, trabajadores, estudiantes, intelectuales, Su nacimiento es analizado por Carlos Delgado uno de sus máximos impulsores: «Luego de producida la revolución, existían tres maneras de encarar el problema de la participación popular en el proceso revolucionario. Primero organizar un partido político oficial. A nuestro juicio, esto habría significado un error muy grande. La experiencia histórica de otros países en los cuales se han organizado partidos políticos oficiales es suficientemente desastrosa como para que esta alternativa hubiera sido preferida. Por lo tanto, la posibilidad de expresar políticamente la revolución a través de un partido oficial fue desechada. Segundo, hacer que la revolución se expresara políticamente a través de uno o más de uno de los partidos políticos tradicionales [...] era una alternativa fundamentalmente desechable. Desechados estos dos posibles caminos, solo quedaba uno tercero, el de aventurar una alternativa enteramente nueva que no se hubiera ensayado en ningún otro país ni en ningún otro proceso revolucionario. SINAMOS es esa tercera alternativa»[57].

El anticapitalismo será otra de las banderas izadas por la revolución, situando el proceso político en la tradición emancipadora latinoamericana, cuyo objetivo es lograr la plena soberanía nacional. Así, define el programa de gobierno la situación internacional del Perú: «Política exterior tímida y dependiente, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica; relaciones internacionales solo con países capitalistas; falta de conciencia del rol que le corresponde al Perú en el grupo de países del Tercer Mundo; falta de agresividad e iniciativa en la defensa de la doctrina de las 200 millas en el mar territorial; intercambio comercial condicionado a las presiones e intereses económicos extranjeros».

La experiencia peruana muestra sus virtudes al defender una actitud antidogmática como garantía de la libertad ideológica-política. Pero dejemos que sea el propio Velasco Alvarado, quien defina el alcance del proceso político: «En el caso de Perú, nuestra revolución se orienta a la creación de un sistema económico social distinto del que siempre existió entre nosotros. Para que este nuevo sistema pueda existir es necesario que el Perú deje de ser un país subdesarrollado y dependiente. Por eso luchamos contra el subdesarrollo y la dominación

extranjera. Y por eso nuestra revolución inevitablemente entraña una opción de carácter no capitalista. Porque fue dentro del capitalismo que históricamente se originaron nuestro subdesarrollo y nuestra dependencia del imperialismo. En consecuencia, ideológicamente la posición de la revolución peruana es incompatible con el mantenimiento del sistema capitalista en Perú»[58].

¿Por qué las fuerzas armadas peruanas se alejan de las políticas contrainsurgentes y anticomunistas de esos años? La respuesta se puede encontrar en la propia extracción de clase de quienes llevaron a cabo el proyecto revolucionario. Muchos miembros de la oficialidad provenían de las clases populares y los sectores medios desplazados. Sus expectativas se veían truncadas por la existencia de orden social oligárquico. Además, las fuerzas armadas habían sido el escudo represor utilizado una y mil veces contra el pueblo. Carlos Delgado, uno de los intelectuales más prestigiosos del Perú y principal apoyo del régimen reformista militar, da una explicación completa del cambio: «[...] existen varios elementos explicativos del cambio posicional de los Institutos Armados del Perú: las actividades desarrolladas en el Centro de Altos Estudios Militares, la creciente claridad con que la fuerza armada empezó a ver la inseparabilidad de los problemas del frente interno y los de la seguridad nacional; el abandono del apoliticismo castrense; la necesidad de comprender y resolver los problemas del país a partir de la convicción de que solo a través de la política podían ser resueltos; la dramatización de los problemas campesinos puestos en evidencia por todo el movimiento guerrillero; las convicciones de que la viabilidad del Perú como nación era incompatible con el mantenimiento de una estructura económico-social arcaica, primitiva, que privilegiaba a un grupo de gentes poderosas al mismo tiempo que marginaba a los sectores mayoritarios del país; el creciente agudizamiento de los problemas sociales y económicos del pueblo peruano; la comprobación de que los ricos fueran cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Todo ello contribuyó a lo largo de un periodo de varios lustros a que la fuerza armada, como institución, cambiara de posición y redefiniera su propio papel institucional»[59].

Lo anterior nos facilita comprender el Plan INCA, propuesta fundacional y programa de gobierno elaborado por las fuerzas armadas y dado a conocer el 28 de julio de 1974 con motivo del 153 aniversario de la Independencia del Perú. «Esta revolución será nacionalista, independiente y humanista. No obedecerá a esquemas o dogmas. Solo responderá a la realidad peruana.»

La dinámica política del proceso revolucionario peruano supuso, asimismo, un aporte en el ámbito de la geopolítica y estrategia de la seguridad nacional. Frente a la Academia de Guerra brasileña, el Centro de Altos Estudios Militares Peruanos produjo abundantes trabajos que desmitificaban «la doctrina de la seguridad nacional» como argumento para intervenir y derrocar gobiernos democráticos, acusados de infiltración comunista. Fue al tiempo una crítica mordaz a la visión estadounidense aplicada mecánicamente por las fuerzas armadas del continente. En esta faceta desmitificadora, tiene un papel destacado, el general Edgardo Mercado Jarrín, primer ministro y comandante en jefe del ejército durante el proceso revolucionario hasta 1975. En su obra *Seguridad, política y estrategia*, apunta: «El leitmotiv de las relaciones entre América Latina y los Estados Unidos era el de la seguridad de ese país.

[...] La seguridad de las grandes potencias no es la seguridad latinoamericana. La seguridad para nuestros pueblos, será el logro del desarrollo integral y autosostenido, en todas sus formas, y porque nuestro subdesarrollo no es un fenómeno local y nuestra decisión de superarlo irrevocable, los esfuerzos que se requiera, sea en el plano interno o en el internacional deberán ser emprendidos. La frustración no debe continuar siendo la principal característica de la mayoría de la humanidad y de América Latina»[60].

Huyendo del maniqueísmo anticomunista, Jarrín señala que es una cortina de humo para reprimir a los pueblos latinoamericanos, maniatando a los pueblos a una dependencia que ahoga e impide ejercer el derecho de autodeterminación y soberanía, condenándolos a un subdesarrollo estructural. «El anticomunismo es una actitud que no ha podido, ni podrá, llegar a constituirse en el interés general de los pueblos de América como objetivo continental [...] Los cambios y en general los procesos revolucionarios en América Latina, han puesto en evidencia que una posición anticomunista ha servido de justificación para adoptar y mantener en lo interno actitudes y posiciones conservadoras y en lo externo de pretexto para el establecimiento de cierto tipo de seguridad colectiva y el surgimiento de una embrionaria estrategia militar amparada en actitudes interesadas. El anticomunismo no se identifica con el interés nacional, ni con el interés latinoamericano, sino con intereses que defienden el orden tradicional que de ninguna manera significan la lucha por la justicia social o por un nuevo orden internacional»[61].

En proceso revolucionario peruano tuvo que sobrevivir en la convulsa América Latina del primer lustro de los años setenta. En 1973, los golpes de Estado en Uruguay y Chile marcan un punto de inflexión que afectó necesariamente a la continuidad de la revolución peruana. La derecha se rearmó y comenzó a contraatacar. Empresarios, oligarquía y militares articulados a los grupos políticos tradicionales se unieron para derrocar al general Velasco Alvarado.

En agosto de 1975, fruto de las presiones, una junta militar toma el relevo. Encabezada por el general Francisco Bermúdez, los generales reformistas son destituidos. Inmediatamente se procede a la desmovilización de SINAMOS y comienza la represión sobre las clases trabajadoras, los sindicatos, campesinos y estudiantes. Se prohíben las huelgas en los sectores estratégicos y se declara el estado de emergencia en 1976 para frenar y desarticular la respuesta del pueblo peruano a la contrarrevolución de Francisco Bermúdez. Las relaciones con EEUU son «normalizadas» y, al poco de andar la junta militar, se aplican los planes de ajuste del FMI. Entre 1975 y 1980 Bermúdez desmonta la revolución y, paradojas de la vida, entrega el poder al mismo presidente representante de la oligarquía destituido en 1968, Fernando Belaúnde Terry. La política antiimperialista, de no alineamiento, integración regional y apoyo a las luchas de liberación de los países del Tercer Mundo se trastocan en un nuevo ciclo de subordinación a los Estados Unidos. El sueño se torna pesadilla.

Mientras tanto, Panamá, un país de tópicos, cuyo origen se encuentra ligado a los intereses geopolíticos de EEUU, conocido por facilitar la unión de dos océanos, Pacífico y Atlántico, ser zona de paso entre la Cuarta y Sexta flota de la armada de Estados Unidos, se rebela. No olvidemos que en su territorio se sitúa la escuela de formación anticomunista y de guerra antisubversiva más importante del mundo, y que la zona del canal estaba administrada por

marines y autoridades militares norteamericanas. Ha sido, pues, un país celosamente custodiado por los Estados Unidos. En este contexto, jóvenes oficiales de la Guardia Nacional promueven y llevan a cabo un golpe de Estado cuyas proclamas y acciones le acercan a la experiencia peruana y la distancian de Brasil.

El 11 de octubre de 1968 es derrocado Arnulfo Arias Madrid, figura recurrente en la historia de Panamá. En tres ocasiones sería investido como presidente. Nunca acabó sus mandatos. En la primera no dura un año, siendo destituido y obligado a exiliarse. De formación anticomunista, católico conservador, creó su propio partido, cambiándole en tres ocasiones su nombre, de acuerdo sus necesidades. Primero, Nacional Revolucionario (1940), luego Revolucionario Auténtico (1949) y, por último, simplemente Panameñista (1968).

Para entender el significado del golpe de Estado de 1968, debemos retrotraernos a los años cuarenta del siglo pasado. Arnulfo Arias, etiquetado como un populista, nacionalista, anticomunista y racista, agitaba a conveniencia la mezcla según soplaban el viento a derecha o izquierda. En su primer mandato (1940-1941) llegó a prohibir la inmigración de chinos y negros al considerarlas razas ajenas a la cultura nacional. Para justificar tal medida, dijo que su presencia afectaba directamente la mejora biológica de la raza panameña. Regresará en 1949, siendo electo y destituido en 1951 por el Congreso, acusado de nepotismo y pillaje. En esta etapa se adueñó, entre otras propiedades, de la mayor finca de plantación de café del país, convirtiéndose en uno de los más grandes terratenientes. Despojado de sus derechos políticos acabó un tiempo en la cárcel.

En otro orden de cosas, hay que subrayar que hasta 1953, Panamá carece de fuerzas armadas. Su aparato militar represivo estaba compuesto por una policía militarizada. Era la manera que Estados Unidos tenía de mantener el control del país, siendo los marines quienes desempeñaban las funciones de represión mayor. José Antonio Remón Cantera, hombre fuerte de la policía en 1953, dará un golpe de mano, siendo el punto de inflexión que cambió la historia de Panamá. Derrocado Arnulfo Arias, se crea la Guardia Nacional. Su papel primigenio se ceñía a ejercer la represión política, sobre todo en las ciudades terminales del canal, donde el movimiento obrero era fuerte y arreciaban las huelgas y los conflictos sindicales. El periodo comprendido entre 1953 y 1968, se conoce como el tiempo de la «guardia pretoriana». Su rol, no lo olvidemos, se inscribe en el proyecto de la burguesía dependiente panameña. Sin olvidar que sus gobiernos se rigen por la política de seguridad hemisférica diseñada por Estados Unidos. «Para darle a las fuerzas armadas esa dignidad cargada de contenido político, Torrijos insistió en que debían divorciarse de los intereses de la oligarquía-imperialismo. Solo entonces podrán unirse “en segundas nupcias” con los intereses populares. “Es diabólico –decía– el talento de los explotadores que ha sabido armar al pueblo contra el pueblo mismo”. Ese es el papel que juegan las fuerzas armadas. Y el que deben jugar es el de “cambiar la dirección de sus fusiles”. Es decir cambiarse de bando»[\[62\]](#).

En este periodo de la «guardia pretoriana», se intercambian gobiernos civiles bajo la supervisión de Estados Unidos. «La intervención norteamericana evitó que la burguesía nacional, en pleno control del Estado a partir de 1952, buscara fórmulas de entendimiento con los sectores populares. La supresión de la participación democrática y la manipulación de los

torneos electorales se justificaban bajo el manto ideológico del anticomunismo. En la década de los sesenta, frente al reto representado por la revolución cubana, la represión fue complementada con un nuevo discurso»[63].

En pleno apogeo de la Guerra Fría, con la crisis cubana de los misiles y el bloqueo económico a la isla en 1963, el presidente estadounidense Lyndon Johnson y el panameño Roberto Chiari, firmarán los acuerdos que constituyen en el principio desencadenante de la gran oleada nacionalista posterior. Entre sus puntos, una reivindicación sentida por años por el pueblo panameño, poder izar la bandera en la zona del canal administrada por EEUU. La medida, celebrada con júbilo, entró en vigor el 1964. Su cumplimiento, sin embargo, no gustó a los marines, quienes mostraron su desacuerdo arriando la bandera y pisoteándola. Dicho acto de agravio motivó el levantamiento popular por la honra nacional. Estudiantes y trabajadores entraron a la zona del canal, enfrentándose a los marines y tratando de reponer la enseña en su mástil. Los soldados estadounidenses, sorprendidos, abrieron fuego con sus ametralladoras. El resultado, veintiún muertos y más de quinientos heridos. El nacionalismo panameño cobró carta de ciudadanía en esta acción reivindicativa.

«Sin duda alguna estos hechos fueron uno de los elementos que precipitaron el golpe de Estado de 1968; aunque muchas veces se haya recurrido a explicaciones unilaterales y simplistas, respecto a las causas que lo motivaron. En verdad el país vivía una crisis estructural del sistema político y social, que afectaba tanto al poder oligárquico como a la presencia colonial de Estados Unidos en el istmo. Este agotamiento del sistema oligárquico-imperialista en Panamá, era consecuencia de las luchas populares y de nuestros profundos anhelos de soberanía e independencia. Este es el significado histórico del 9 de enero de 1964»[64].

En este ir y venir, por enésima vez entra en escena Arnulfo Arias. Con un ambiente de fervor nacionalista, Arias levanta su bandera, facilitando su reelección en 1968. Sin embargo, su gobierno nace débil. La situación nacional que le aupó al poder le supuso realizar múltiples concesiones, apoyándose en una frágil alianza con la Guardia Nacional, que en los hechos era el sostenedor del presidente y su gobierno. Sabedor de sus límites para gobernar, decide romper el compromiso de no remover los mandos de la Guardia Nacional, destituyendo a todo alto mando de la Guardia Nacional. Tal decisión sella su acta de defunción política. Arnulfo Arias será derrocado el 11 de octubre de 1968. Su impulso lo llevó a refugiarse en la Zona del Canal y declarar que había sido víctima un golpe de Estado «pro-comunista».

Una junta, compuesta por oficiales jóvenes, asume el poder. Omar Torrijos, un coronel, es uno más de los miembros. Entrenado por Estados Unidos en la guerra antisubversiva, había participado en las acciones contrainsurgentes a fines de los años cincuenta y principios de los sesenta, en el cerro de Tute. Su presencia lentamente va ganado fuerza dentro de los oficiales que participaron del golpe. Su persona cobra relevancia en el año de 1969, cuando declara la necesidad urgente de refundar el país bajo la dirección del Movimiento Nuevo Panamá. En ese mismo instante, los acontecimientos se precipitan. El Pentágono, aprovechando un viaje de Omar Torrijos a México, el 13 de diciembre de 1969, prepara un contragolpe, apoyándose en algunos miembros de la junta militar y la oligarquía. La historia posterior fue como sigue:

Omar Torrijos, «junto con los militares y civiles que le acompañaron a México, logró alquilar una avioneta con la cual emprendió secretamente el regreso. Llegó a la capital de Chiriquí, al frente de cuya guarnición militar se hallaba el teniente coronel Manuel Antonio Noriega. Este se puso a sus órdenes y desde ese lugar se requirieron pronunciamientos de los jefes militares de otros destacamentos castrenses. Se confirmaron así las adhesiones y a partir de ese momento Torrijos emprendió, junto con sus tropas, el viaje por tierra a la capital»[65].

Así da comienzo la era Torrijos. El 16 de diciembre, nada más reasumir la comandancia de la Guardia Nacional y el gobierno, declara: «Ahora nadie podrá detener los principios democráticos de la gesta de octubre, porque las presiones a nuestro gobierno revolucionario no podrán detener la marcha sin límites de nuestras convicciones y principios republicanos, que tendrá como único objetivo el bienestar de todos los panameños, sin distinciones de credos ni de banderías políticas»[66].

El régimen *torrijista*, puede dividirse en cuatro etapas. Una primera con ribetes represivos, desde 1968 hasta 1972; otra de auge reformista, de 1972 a 1977; una tercera de expansión democrática inclusiva; y un último periodo, abierto con su muerte hasta la invasión de Estados Unidos, perpetrada el 20 de diciembre de 1989. El punto de inflexión fue la promulgación, en 1972, de la Nueva Constitución. Hecho que se traduce en la institucionalización del proceso, articulando nuevas formas de participación popular. En un primer momento, los partidos políticos, declarados ilegales, fueron relegados de su función canalizadora de las reivindicaciones de la sociedad civil. Sin embargo siguieron actuando a la luz pública, sin ser reprimidos o provocando exilio forzoso. Sus dirigentes se acomodaron a las nuevas circunstancias, hasta 1978, donde serán legalizados nuevamente.

«La cuestión política se zanjó a partir de una reestructuración original y sin precedentes de sectores del aparato estatal. La nueva Constitución de 1972 es producto de la elección directa, sin mediación, de los partidos políticos de 505 representantes de los 505 corregimientos de que consta la República. A la fuerza pública y a la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad correspondió garantizar la lealtad al nuevo régimen de los candidatos representantes y constituyentes, ya que ambas entidades públicas se encontraban presentes y ejerciendo su influencia a lo largo y ancho de la geografía del país. En tal virtud ninguna organización política, partidaria o no de la plutocracia, estaba en condiciones de disputarle al gobierno ningún sector importante de la nueva asamblea constituyente [...] Creó estructuras de poder popular originales como juntas comunales correspondientes a cada uno de los 505 corregimientos y las juntas locales, que podían ser formadas en cualquier vecindad donde se expresara la voluntad autogestora de las masas»[67].

En el orden interno, el gobierno de Omar Torrijos reformó el código de trabajo y seguridad laboral. Nacionalizó el sector de la electricidad. Inició una reforma agraria y expropió la filial de la United Fruit Company. En política internacional, normalizó las relaciones con Cuba y puso a la orden del día la recuperación de la zona del Canal, logrando en 1977 la firma de los tratados Torrijos-Carter que retornaba la propiedad del Canal en el año 2000 al pueblo panameño.

Se vinculó al Movimiento de No Alineados y desarrolló una política beligerante contra las

dictaduras del Cono Sur. Desde 1979, con el triunfo de la Revolución sandinista, se comprometió con los proyectos de paz regionales. Fue impulsor del grupo de mediación para la paz en Centroamérica, conocido como Contadora. El gobierno de Ronald Reagan lo consideró un peligro para los intereses estadounidenses en la región.

El retorno de los partidos políticos al escenario nacional y la convocatoria de elecciones en el nuevo marco constitucional, concluye con la creación en 1979, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Las circunstancias nacionales y regionales lo ameritan. Partido político de ideario nacionalista e influido por Torrijos, asume la función de unir las fuerzas populares y el movimiento de liberación nacional. Era el intento más serio de evitar el retorno de la derecha, liderada por un «rejuvenecido» Arnulfo Arias.

«En la coyuntura misma el PRD ha significado un hecho de importancia para el futuro del movimiento panameño de liberación nacional, en la medida que ha permitido privar a los aparatos políticos y civiles de los sectores oligárquicos tradicionales de la burguesía panameña de alguna de sus posibles bases sociales de apoyo en su lucha contra el Estado de transición. En efecto, dada la incapacidad objetiva de la izquierda panameña para captar ese sector intermedio del movimiento popular, el PRD significa, por su misma naturaleza, una mínima garantía inicial del mantenimiento del espacio político en el que esa izquierda podría aspirar a ganar fuerzas para el futuro. Pero es necesario reconocer que ese espacio abierto por necesidad a todas las fuerzas políticas del país, ha sido aprovechado en mucho mayor medida por la derecha oligárquica a través del Frente Nacional de Oposición (FRENO) y ahora la ADO (Alianza de Oposición), que aglutina a viejos y nuevos partidos derechistas y organismos patronales en torno al Partido Panameñista Auténtico, del anciano caudillo Arnulfo Arias, derrocado por los militares en 1968. Arias es, en efecto, el último de los caudillos de la oligarquía, dotado de prestigio desde posiciones de un nacionalismo con características racistas y expresiones ideológicas fascistoides»[\[68\]](#).

El proceso político abre las puertas a la elección presidencial. En 1978 se proclama ganador, por seis años, al jurista y candidato del PRD Arístides Royo. Su mandato será objeto de un hostigamiento continuo por parte de la administración norteamericana, sobre todo en los últimos tres años, etapa que confluye con el triunfo de la nueva derecha en Estados Unidos y el acceso de Ronald Reagan a la Casa Blanca en 1981. Su llegada al poder cambia la coyuntura de distensión creada bajo el mandato del demócrata James Carter. Omar Torrijos se transforma en el gran enemigo y culpable de todos los males de región. El *Documento de Santa Fe I* definió el gobierno de Panamá «como una dictadura de extrema izquierda». Unos meses más tarde, en julio de 1981, Omar Torrijos muere en un extraño accidente de aviación. Otro presidente latinoamericano, en esta ocasión el ecuatoriano Jaime Roldós, tendrá el mismo fatal destino un par de meses antes, un 24 de mayo su avión se desploma a tierra, muriendo en el acto. Curiosamente, también el *Documento de Santa Fe I*, consideraba la doctrina Roldós un peligro para restablecer la *pax americana*.

La administración Reagan dará un vuelco diseñando su estrategia de seguridad hacia América Latina. La doctrina de la seguridad nacional se complementa con las «guerras de baja intensidad». En plena ebullición de las luchas de liberación nacional en Centroamérica, entra

en juego un nuevo factor que redefine los conflictos regionales. No se trata solo de dar golpes de Estado, ahora se busca revertir procesos, apoyando la formación de ejércitos mercenarios, financiando la oposición de manera abierta y sin tapujos, y preparando nuevas invasiones a través de las fuerzas de despliegue rápido, que se unen a los marines. La primera acción que se llevó a cabo fue la invasión a la isla de Granada en octubre de 1983 y, un año más tarde, se da luz verde a la contrarrevolución en Nicaragua, apoyando la formación de un ejército mercenario: *la contra* por la vía de una doble financiación el narcotráfico y la venta de armas. Este operativo fue conocido como el escándalo Irán-Contra.

La muerte del general Omar Torrijos es el principio del fin de la revolución panameña. En 1984, las elecciones presidenciales dan ganador a Ardito Barleta, hombre débil y sin carácter, que, presionado, renuncia en favor de Eric del Valle, ambos ultraconservadores, anticomunistas y pronorteamericanos. La derecha recupera el poder perdido en 1968. Solo queda un escoyo a salvar, el hombre fuerte de la Guardia Nacional, Antonio Noriega. Para quitárselo de encima, la oligarquía, aprovechando la nulidad de los resultados de las elecciones del 7 de mayo de 1989, dictada por el Tribunal Electoral, llama abiertamente a la invasión. La Democracia Cristiana, la Iglesia católica y la oligarquía declaran a su candidato Guillermo Endara vencedor y piden la cabeza de Noriega. Estados Unidos no pierde el tiempo. Endara se autoproclama vencedor de las elecciones, acusando al general Antonio Noriega de narcotraficante y de financiar la a la guerrilla centroamericana. La noche del 19 de diciembre de 1989, tropas estadounidenses bombardean las principales ciudades de Panamá, cebándose en los barrios populares de la capital, y asesinan a más de 3.000 personas que resistieron con heroicidad la invasión. Como sucediese en República Dominicana en el año de 1965, la clase dominante panameña celebra la presencia de los marines y el ejército estadounidense. Guillermo Endara es proclamado presidente en la base Clayton, jurando el cargo ante oficiales norteamericanos. Las reformas iniciadas en 1968 bajo el gobierno de las fuerzas armadas panameñas, tocan a su fin. La Guerra Fría yacía moribunda. Nacen las guerras de baja intensidad.

Este apartado no podría concluir sin hacer una mínima referencia a la experiencia boliviana del general Juan José Torres. Su gobierno reformista militar va del 7 de octubre de 1970 al 21 de agosto de 1971. En ese breve espacio de tiempo, Juan José Torres emprendió un conjunto de medidas que le ubican en el terreno de los proyectos emancipadores antiimperialistas. Procedió a nacionalizar la gran minería, a crear el Banco de Desarrollo y a fundar la Corporación Estatal de Empresas Nacionales. Asimismo, en el campo cultural y educativo, potenció la educación pública y planificó campañas de alfabetización, transformando, igualmente, la enseñanza media y universitaria y destinando más fondos y ampliando el presupuesto ministerial. Por otro lado, se introdujeron cambios en la legislación laboral y se elevó el nivel de vida de la clase obrera, con subidas de sueldos y salarios desconocidas para Bolivia. En medio de los cambios, Estados Unidos y la plutocracia boliviana conspiran para acabar con la primavera reformista. La noche del 20 de agosto de 1971 todo está preparado. Al día siguiente, un general, educado en la mejor tradición anticomunista de la Escuela de las Américas, Hugo Banzer, se hace con el poder. Juan José

Torres se exilia en Argentina. Años más tarde, será asesinado siendo víctima de la Operación Cóndor en Buenos Aires el 2 de junio de 1976. Su instigador fue Hugo Banzer. En Argentina ya mandaba otro «flamante» dictador, Jorge Rafael Videla.

Las guerras de baja intensidad, última etapa de la Guerra Fría y el amanecer de la globalización

A fines de los años ochenta del siglo xx , en las esferas militares, se generaliza el concepto «guerra de baja intensidad» o «conflicto de baja intensidad». Su novedad alude a la modalidad de guerra utilizada para enfrentar los conflictos en el Tercer Mundo. Nacida como consecuencia del llamado «síndrome de Vietnam», la retirada total de las tropas estadounidenses de ese país en 1975, los estrategas militares inician una revisión de las formas de intervención en el Tercer Mundo. Su principio, la contención del comunismo deber ser llevada a cabo por fuerzas «nativas» aliadas, evitando así los altos costes en vidas humanas y un descontento interno que movilice a los grupos pacifistas. El Pentágono señala que se debe minimizar la intervención de sus tropas, tendiendo a fortalecer los ejércitos aliados, siendo, los encargados de llevar a cabo la misión de guerra contrainsurgente. El segundo cuestionamiento se refiere al gradualismo militar, el ataque debe ser frontal, directo y total. Lo contrario favorece al enemigo, acrecentando el ideario nacionalista, al contar con la población que lucha para rechazar las fuerzas de ocupación bajo la estrategia de liberación nacional. Esta acción militar de guerra fue utilizada por el ejército del Viet-Cong, en cuanto el gobierno de Estados Unidos y el pentágono encontraban resistencias políticas y sociales para el envío masivo de tropas a una guerra que veían lejana.

Una solución para contrarrestar la debilidad frente al enemigo fue aplicada durante la administración de James Carter. Durante su mandato se crean las fuerzas de despliegue rápido, entrenando tropas de combate y buscando que los contingentes den una solución expedita al conflicto, acudiendo al escenario de guerra de forma inmediata. El ejemplo de este tipo de actuación de las fuerzas de despliegue rápido lo tenemos en la invasión a la isla de Granada, en octubre de 1983, ya con la administración Reagan.

Las guerras de baja intensidad surgen como la alternativa dentro de las guerras regionales, con escenarios limitados y armamento de última generación no nuclear. Fue la doctrina oficial de la administración de Ronald Reagan durante su segundo mandato (1985-1989), para la contención del comunismo en América Latina y el Tercer Mundo.

La guerra de baja intensidad presenta tres principios articulados para resolver los conflictos, acordes a las nuevas necesidades, modificando el espacio, el tiempo y la fuerza: 1) el llamado *Rollback*, consistente en la posibilidad de revertir procesos revolucionarios triunfantes; 2) el desarrollo de la contrainsurgencia, utilizado cuando el enemigo desarrolla estrategias revolucionarias de liberación nacional; y 3) la lucha o enfrentamiento contra el terrorismo y el narcotráfico. Esta última dimensión destaca sobre las dos anteriores, por primera vez el terrorismo y el narcotráfico son concebidos como una «amenaza» a la

seguridad nacional de Estados Unidos. Su enunciado abre las puertas a la integración de las fuerzas armadas en la lucha contra el llamado crimen organizado, cuya responsabilidad, hasta ese momento, recaía exclusivamente en organismos estatales, de inteligencia civil y cuerpos de policía. Bajo estos tres principios, el espacio de guerra se modifica, siendo el lugar de operaciones militares el conjunto de la nación. Asimismo, el tiempo de guerra se difumina, prolongándose hasta el infinito, la guerra no se resuelve en términos militares.

El primer escenario, la reversión de procesos, implica sostener e impulsar como eje central del esfuerzo de guerra la creación de fuerzas militares compuestas por connacionales. Los Estados Unidos, se comprometieron, en esta lógica, a prestar el apoyo necesario en armamento, inteligencia y tecnología, tanto como en lo referente al financiamiento. La creación de fuerzas contrarrevolucionarias es la opción más utilizada. Nicaragua, en Centroamérica fue un caso ejemplar.

En la segunda modalidad, la guerra contrainsurgente, se busca evitar que el gobierno aliado caiga en manos del enemigo y sea derrotado política y militarmente. En este sentido los esfuerzos están destinados a fortalecer las fuerzas armadas nativas, dotándolas de material imprescindible para enfrentar la lucha contrainsurgente.

El tercer y último escenario se centra en impedir que actos terroristas puedan afectar la seguridad nacional. Desde el ataque a las Torres Gemelas podemos observar cómo este escenario gana enteros. Igualmente, al incluir en esta dimensión la lucha contra el crimen organizado, identificado como narcotráfico, se favorece la militarización de países como México o Colombia, donde las fuerzas armadas patrullan continuamente, día y noche, las ciudades y pueblos, siendo su presencia, parte del paisaje natural.

Las guerras de baja intensidad han dado pie a nuevos golpes de Estado, sin necesidad de tener que recurrir al asalto de los palacios presidenciales. La lucha contra un enemigo que se muestra gelatinoso, sin contornos fijos, y que ya no es solo una amenaza ideológico-política, abre la guerra a un campo peligroso, ya que define el campo de actuación como la sociedad en su totalidad. Las fuerzas armadas se adueñan de la sociedad, sin abandonar los cuarteles y sin tomar el poder. No lo necesitan, ellos son el poder[69].

El espacio-tiempo de la guerra es total, no se permiten concesiones. Las acciones están definidas por los objetivos globales. Una especie de totalitarismo invertido emerge tras las guerras de baja intensidad. Tomada como doctrina oficial de los Estados Unidos y siendo uno de sus primeros impulsores Henry Kissinger, entre sus difusores destacan Caspar Weinberger, secretario de defensa y George Shultz, secretario de Estado en el gobierno de Ronald Reagan. Durante las distintas administraciones republicanas y demócratas, incluida la de Barack Obama, la doctrina ha sido reforzada. Uno de sus divulgadores en el terreno político y de las relaciones internacionales fue el ideólogo, miembro del Consejo de seguridad Nacional, Samuel P. Huntington. No por casualidad sus obras son el vademécum en las universidades de casi todo el mundo. Huntington, no olvidemos, fue uno de los grandes estrategas durante la Guerra de Vietnam, apoyó los bombardeos B-52 y el uso de napalm sobre la población civil de Vietnam del Norte, así como la instalación de las «aldeas estratégicas» de exterminio de la población norvietnamita.

En la actualidad, la estrategia de guerras de baja intensidad está vigente en los países latinoamericanos, aplicando sus dimensiones en función del problema. En Venezuela, Ecuador y Bolivia, se practica el principio de reversión de procesos. Con éxito ya se pudo realizar en Honduras y Paraguay, potenciando sendos golpes de Estado, definidos como constitucionales o de guante blanco. La lucha contra el narcotráfico y el terrorismo se desarrolla en México, Colombia o Perú. Igualmente, la guerra contrainsurgente tiene su concreción en Colombia y México.

Como nueva guerra total dentro de los conflictos de baja intensidad, el caso mexicano se aúpa al primer puesto. Así, en su territorio se practica la guerra contrainsurgente: «Los tres últimos gobiernos mexicanos, incluido el de Vicente Fox, han actuado contra la lucha indígena con una estrategia de contrainsurgencia, basada en la presencia masiva del ejército y la utilización de fuerzas paramilitares con el objetivo de desgastar al movimiento insurgente y desarticular sus bases de apoyo. El paramilitarismo se convirtió en una forma continuada de desgaste de las fuerzas insurgentes. Con base en diferentes tácticas de guerra irregular se pretende pasar del control de la población indígena, a su aniquilamiento y posterior ocupación de sus territorios»[\[70\]](#).

En segundo lugar, se practica la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia común y la inseguridad ciudadana según establece el guión de las guerras de baja intensidad. «La tesis reaganiana de considerar el tráfico de drogas como un asunto de seguridad nacional, establecida en 1986, logró imponer un cierto esquema y determinadas categorías de percepción independientemente de las características históricas y estructurales del fenómeno del tráfico de drogas en los distintos países. En primer lugar, parece generalizar que lo que es válido para Estados Unidos también lo es para el resto del mundo bajo su influencia. En segundo, el discurso dominante concibe el surgimiento del tráfico y los traficantes como una actividad y como agentes sociales necesariamente ajenos a las estructuras del poder político en todo tiempo y lugar [...] En tercero, el enfoque jurídico y policiaco con el que se inicia la era moderna de las prohibiciones de ciertos fármacos en Estados Unidos, a partir de 1914, se ve reforzado hoy en día con la participación directa, abierta y legítima de los militares en los mandos de dirección y operativos del combate antidrogas. El ejército es por excelencia la institución que salvaguarda la seguridad nacional y si se establece como dogma de observancia universal que el tráfico de drogas es una amenaza para esta, entonces de allí deriva el corolario lógico de la presencia militar activa, su necesidad [...], en cuarto, el entrenamiento del personal militar de los Estados Unidos que asumen la misma visión y establecen convenios de cooperación con Estados Unidos es proporcionado por el ejército de este país. Los cursos de preparación están diseñados simultáneamente para la lucha contrainsurgente y el combate al tráfico de drogas»[\[71\]](#).

El 5 de diciembre de 2006, el hoy expresidente Felipe Calderón subrayó que su país se encontraba en guerra, una guerra cuyo enemigo conceptualizó como «la delincuencia organizada». Un año más tarde, el 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con personal naval, utilizó en cuatro ocasiones el término guerra para definir el Estado de la nación: «La sociedad reconoce de manera importante el papel de nuestros marinos en la guerra

que mi gobierno encabeza contra la inseguridad [...] La lealtad y eficacia de las fuerzas armadas, son una de las más poderosas armas en la guerra que libramos contra ella [...] Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que esta sería una lucha de largo aliento [...], así son precisamente las guerras [...] y el 12 de septiembre de 2008, durante la ceremonia de apertura y clausura de Cursos del Sistema Educativo Militar, subrayó que: “Hoy nuestro país libra un aguerra muy distinta a la que afrontaron los insurgentes de 1810, una guerra distinta a la que afrontaron todos los cadetes del Colegio Militar hace 161 años [...] por eso en esta guerra contra la delincuencia [...] es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente la guerra a los enemigos de México [...] esta guerra la vamos a ganar”»[72].

En enero de 2011, el subcomandante insurgente Marcos del EZLN, en intercambio epistolar con el filósofo Luis Villoro sobre ética y política, redacta su primera misiva haciendo hincapié en el tipo de guerra planteada por el Estado Federal contra «la delincuencia organizada». Su reflexión la tituló: *Apuntes sobre las guerras*. En ella desarrolla los objetivos de la guerra total posmoderna, señalando que: «No son las que ponen en el terreno armas más sofisticadas [...], sino las que son llevadas a terrenos donde la calidad y cantidad del poder militar no es el factor dominante [...] Las guerras ahora no se conforman con conquistar un territorio y recibir tributo de la fuerza vencida. En la etapa actual del capitalismo es preciso destruir el territorio conquistado y despoblarlo, es decir, destruir su tejido social. Hablo de la aniquilación de todo lo que da cohesión a una sociedad. Pero no se detiene ahí la guerra de arriba. De manera simultánea a la destrucción y el despoblamiento, se opera la reconstrucción de ese territorio y el reordenamiento de su tejido social, pero ahora con otra lógica, otro método, otros actores, otro objetivo. En suma las guerras imponen una nueva geografía»[73].

La «guerra contra el crimen organizado» es fomentada por el poder y los Estados Unidos; en México, impregna todos los espacios de la vida cotidiana. Las fuerzas armadas están presentes en las calles, los centros comerciales, son visibles a los ojos del ciudadano que se atemoriza, se aísla, se vuelve huraño, desconfiado, y se considera indefenso. Ya no le extraña oír sirenas de coches policía, compartir espacios de esparcimiento y ocio con soldados armados de metralletas de grueso calibre y chalecos antibalas. Su último refugio, la casa, también es invadida con redadas y patadas en la puerta. La policía y el ejército gozan de impunidad para romper la privacidad sin más explicaciones que buscar narcotraficantes.

En esta guerra cambian las reglas. La seguridad, se dice, no es posible garantizarla al 100 por 100. En cualquier momento se puede ser víctima de un secuestro exprés, motivo de una violación o recibir una petición de extorsión. Proliferan los infanticidios o feminicidios. Ningún sector se encuentra a salvo. El exsecretario de México pone al descubierto las cifras: «De diciembre de 2006 al final de 2010 se contabilizaron 34.612 crímenes, de los cuales 30.913 son casos señalados como “ejecuciones”; 3.153 son denominados como “enfrentamientos” y 544 están en el apartado “homicidios-agresiones”». La respuesta, más policía en las calles, como si la solución fuese aumentar el número de soldados por habitantes. Los conflictos de baja intensidad cambian la dinámica política y social, se hostiga a la ciudadanía hasta licuarla en la nada. Para lograr tan estimable fin se arguye a la inseguridad

ciudadana para aumentar el presupuesto en seguridad.

«En los primeros cuatro años de la “guerra contra el crimen organizado” (2007-2010), las principales entidades gubernamentales encargadas (secretaría de la Defensa Nacional –es decir: ejército y fuerza aérea–, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública) recibieron del presupuesto de Egresos de la Federación una cantidad superior a los 366.000 millones de pesos (unos 30.000 millones de dólares). Las 4 dependencias gubernamentales federales recibieron en 2007 más de 71.000 millones de pesos; en 2008 más de 80.000 millones; en 2009 más de 113.000 millones y en 2010 fueron más de 102 millones de pesos. A eso habrá que sumar los más de 121.000 millones de pesos (unos 10.000 millones de dólares) que recibirán en este año de 2011”[74].

Sin duda, al hacerlo, se consigue que unos pocos se lucren en la guerra contra «el crimen organizado». Siempre hay beneficiarios. Los altos mandos incrementan sueldos. Estados Unidos, ve cómo el complejo industrial-militar consigue pingües réditos suministrando el arsenal necesario para hacer frente a un enemigo que está en todas partes y en ninguna. No olvidemos que el objetivo es destruir la cohesión social, los elementos que determinan la identidad nacional.

«Lo que hay es una imposición, por la fuerza de las armas, del miedo como imagen colectiva, de la incertidumbre y la vulnerabilidad como espejos en los que estos colectivos se reflejan». Con tal perspectiva, la pregunta salta inmediatamente: «¿Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de “sálvese quien pueda”?» La respuesta es simple: «De esta guerra no solo van a resultar miles de muertos... y jugosas ganancias económicas. También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente»[75].

La unión entre guerras de baja intensidad, reversión de procesos, desarticulación social, redimensiona la figura del enemigo interno. Mientras más difuso sea su figura, el enemigo a destruir se agiganta. El cierre de espacios democráticos es el objetivo deseado. Ya nada es lo que era. Los golpes de Estado no requieren de las botas militares. La sociedad entera se ha convertido en un escenario de guerra.

[1] Véase Discurso de Harry Truman ante el Congreso de EEUU, Washington, 12 de marzo de 1947.

[2] Stephen Ambrose, *Hacia el poder global. La política exterior norteamericana desde 1938 hasta Reagan*, Buenos Aires, Grupo Editorial latinoamericano, 1992, p. 113.

[3] Golbery do Couto e Silva, *Geopolítica do Brasil*, Rio de Janeiro, Livraria José Olimpo Editora, p. 53.

[4] Michel Klare y Nancy Stein, *Armas y poder en América Latina*, México, Editorial ERA, 1978, p. 34.

[5] Pablo González Casanova, *Los militares y la política en América Latina*, México, Editorial Océano, 1988, pp. 23-24.

[6] Golbery do Couto e Silva, *op. cit.*, pp. 198-199.

[7] Joseph Comblin, *El poder militar en América Latina*, Salamanca, Sígueme, 1978, p. 79.

[8] Citado por Joan Garcés, *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*, cit., p. 93.

[9] Véase Gregorio Selser, *El guatemalazo. La primera guerra sucia*, Buenos Aires, Ediciones Iguazú, 1961.

[10] Susanne Jonas Bodenheimer, *Guatemala: plan piloto para el continente*, San José de Costa Rica, Editorial Educa, 1981, pp. 36-37.

[11] Mario Posas y Rafael Del Cid, *La construcción del sector público y del Estado nacional en Honduras. 1876-*

1979, San José de Costa Rica, Editorial Educa, 1983, p. 109.

[12] Véase Honduras, *Fuerzas armadas 1988. Contrainsurgencia interna y disuasión regional*, México, Publicación del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de Honduras, s/f.

[13] Leticia Salomón, *Militarismo y reformismo en Honduras*, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 1982, p. 43.

[14] *Ibidem*, p. 182.

[15] Omar Díaz de Arce, «El Paraguay Contemporáneo», en Pablo González Casanova (comp.), *América Latina: historia de Medio Siglo*, México, Siglo XXI de México, 1977, vol. I, p. 358.

[16] Carlos María Lezcano, «El régimen militar de Alfredo Stroessner. Fuerzas Armadas y política en Paraguay 1954-1989», *Revista Síntesis* 10 (enero-abril 1990), Madrid, p. 170.

[17] Paul Lewis, «Paraguay, 1930-1990», en Leslie Bethell (ed.), *Historia de América Latina*, Barcelona, Crítica, 2002, vol. 15, p. 206.

[18] Jacobo Schifter, *La fase oculta de la guerra civil en Costa Rica*, San José de Costa Rica, Editorial Educa, 1981, p. 73.

[19] Susanne Jonas Bodenheimer, *La ideología social demócrata en Costa Rica*, San José de Costa Rica, Editorial Educa, 1984, p. 54.

[20] Véase Jacobo Schifter, *Costa Rica 1948. Análisis de documentos confidenciales del Departamento de Estado*, San José de Costa Rica, Editorial Educa, 1982. Del mismo autor: *La fase oculta de la guerra civil en Costa Rica*, San José de Costa Rica, Editorial Educa, 1981.

[21] Daniel Pécaut, *Orden y Violencia: Colombia 1930-1954*, Bogotá, Siglo XXI, 1987, vol. II, p. 532.

[22] Julio Cotler, «Perú: estado oligárquico y reformismo militar», en Pablo González Casanova (coord.), *América Latina, Historia de medio siglo*, México, Siglo XXI de México, 1977, pp. 389-390.

[23] Silvia Sigal y Eliseo Verón, «Perón: discurso político e ideología», en Alain Rouquié (comp.), *Argentina Hoy*, México, Siglo XXI de México, 21982, p. 188.

[24] Cristian Buchrucker, *Nacionalismo y Peronismo. La Argentina en la crisis ideológica mundial 1927-1955*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1987. Citas de Juan Domingo Perón, pp. 330-331.

[25] René Zabaleta Mercado, *Clases sociales y conocimiento*, La Paz, Editorial Los Amigos del Libro, 1988, pp. 46-47.

[26] René Zabaleta Mercado, «Las masas en noviembre», en René Zabaleta Mercado (comp.), *Bolivia Hoy*, México, Siglo XXI de México, 1983, p. 16.

[27] W. W. Rostow, *Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no comunista*, Madrid, Ministerios de Trabajo y Seguridad Social, 1992, pp. 220 y ss.

[28] André Gunder Frank, *América Latina: subdesarrollo o revolución*, México, Editorial ERA, 21976, pp. 42-43.

[29] José María Velasco Ibarra, *Una antología de sus textos*, Selección e introducción Enrique Ayala Mora, México, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 357.

[30] Enrique Ayala Mora, *Resumen de Historia del Ecuador*, Quito, Corporación Editora Nacional, 32008, p. 111.

[31] Jaime Astudillo Romero, *Mito y realidad de la seguridad nacional en el Ecuador*, Cuenca, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, 1981, p. 61.

[32] Agustín Cueva, *El proceso de dominación política en el Ecuador*, Quito, Editorial Planeta, 1997, p. 68.

[33] L. A. Costa Pinto, *Nacionalismo y militarismo*, México, Siglo XXI de México, 31974, p. 56.

[34] Celso Furtado, «Brasil de la República oligárquica al estado militar», en *Brasil Hoy*, México, Editorial Siglo XXI de México, 41975, pp. 13 y ss.

[35] Alfred Stepan, *Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado*, Buenos Aires, Planeta, 1988, pp. 165-166.

[36] General Juan Enrique Guglielmelli, *Geopolítica del Cono Sur*, Buenos Aires, El cid campeador, 1979, p. 111.

[37] Golbery do Couto e Silva, *op. cit.*, p. 17.

[38] Definición citada por Antonio Cavalla, *La geopolítica y el fascismo dependiente*, México, Ediciones Casa Chile, 1977, p. 13.

[39] Guillermo Osiris Villegas, *Políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad nacional*, Buenos Aires, Editorial Pleamar, 1969, pp. 106 y 107.

[40] Juan Bosch, *El pentagonismo. Sustituto del imperialismo*, Madrid, Gaudiana de Publicaciones, 1968, p. 110.

[41] Álvaro Briones, *Economía política del fascismo dependiente*, México, Siglo XXI de México, 1978, pp. 302-303.

[42] Michael T. Klare y Nancy Stein, *Armas y poder militar en América Latina*, México, Editorial ERA, 1978, p. 35.

[43] Horacio Veneroni, *Estados Unidos y las fuerzas armadas de América Latina. La dependencia militar*, Buenos

Aires, Ediciones Periferia, 1973, p. 74.

[44] Ignacio Balbontín Arteaga, «Las posibles consecuencias...», cit., p. 87.

[45] Michael T. Klare y Nancy Stein, *Armas y poder en América Latina*, cit., p. 121.

[46] Atilio Borón, *Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina*, Buenos Aires, Ediciones FLACSO, 2004, pp. 80-81 (cursivas en el original).

[47] L. A. Costa Pinto, *Nacionalismo y militarismo*, México, Siglo XXI de México, 1974, p. 111.

[48] Todas las frases del dictador Pinochet están tomadas del excelente texto de: Humberto Lagos Schuffeneger, *El general Pinochet y el mesianismo político*, Santiago de Chile, Editorial LOM, 2001.

[49] L. C. Bresser Pereira, *Ideología y tecnoburocracia*, Buenos Aires, Paidós, 1975, p. 74.

[50] En este debate sobresalen obras colectivas como: *El control Político en el Cono Sur*, México, Siglo XXI de México, 1978; Virgilio Beltrán (coord.), *El papel político y social de las fuerzas armadas en América Latina*, Caracas, Monte Ávila, 1970; Augusto Varas (coord.), *La autonomía militar en América Latina*, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1988; Antonio Cavalla (comp.), *Geopolítica y Seguridad Nacional en América*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1979; y entre las obras de autor: Joseph Comblin, *El poder militar en América Latina*, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1978; Alain Rouquié, *El Estado Militar en América Latina*, México, Siglo XXI de México, 1984; Mario Esteban Carranza, *Fuerzas armadas y estados de excepción en América Latina*, México, Siglo XXI de México, 1978; Alfred Stepan, *Repensando a los militares en política. Cono Sur: un análisis comparado*, Buenos Aires, Editorial Planeta, 1988. Destacando el señero ensayo de Guillermo O'Donnell, *Modernización y autoritarismo*, Buenos Aires, Paidós, 1972.

[51] Guillermo O'Donnell, «Reflexiones sobre las tendencias de cambio del Estado burocrático-autoritario», *Revista Mexicana de Sociología* 1 (1977), pp. 13 y 14.

[52] Arturo Fontaine Aldunate, *Los economistas y el Presidente Pinochet*, Santiago de Chile, Editorial Zig-Zag, 1988, pp. 103-104.

[53] «Carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor», en VVAA, *Documentos del siglo xx chileno*, Santiago de Chile, Editorial Sudamericana, 2001.

[54] Orlando Letelier: *el que lo advirtió. Los Chicago boys en Chile*, Santiago de Chile, Editorial LOM, 2011, p. 32.

[55] Henry García, *El ocaso de la oligarquía*, Buenos Aires, El Cid Editor, 1979, pp. 224 y ss.

[56] VVAA, *Perú: Documentos fundamentales del proceso revolucionario*, Buenos Aires, Ciencia Nueva, 1973, pp. 88 y ss.

[57] Carlos Delgado, *Revolución Peruana. Autonomía y deslindes*, Lima, Libros de Contratiempo, 1975, pp. 146-147.

[58] General Juan Velasco Alvarado, entrevista *Revista Visao*, op. cit., p. 22.

[59] Carlos Delgado Olivera, *Testimonios de Lucha*, Lima, Ediciones Peisa, Biblioteca Peruana, 1973, pp. 114 y ss.

[60] Edgardo Mercado Jarrín, *Seguridad, política y estrategia*, Buenos Aires, Schapire Editor, Colección Mira, 1975, p. 173.

[61] Edgardo Mercado Jarrín, op. cit., pp. 184 y 185.

[62] José de Jesús Martínez, *Mi general Torrijos*, Buenos Aires, Editorial Contrapunto, 1987, p. 36.

[63] Marco Gandásegui, Jr., *La democracia en Panamá*, Panamá, Cela, 21998, p. 41.

[64] Víctor Ávila, *Panamá: luchas sociales y afirmación nacional*, Panamá, Ediciones Cela, 1998, p. 72.

[65] Gregorio Selser, *Erase un país a un canal pegado*, México, Universidad Obrera de 1989, p. 111.

[66] Luis Guanani, «Panamá: la Guardia Nacional», *Revista Tareas* 1 (junio-octubre 1974), p. 68.

[67] Ricaurte Soler, *Panamá: historia de una crisis*, México, Siglo XXI de México, 1989, p. 82.

[68] Guillermo Castro y Ricaurte Soler, «Panamá: del Estado torrijista a la restauración oligárquica», en Pablo González Casanova, *El estado en América Latina. Teoría y Práctica*, México, Siglo XXI de México, 1990, p. 491.

[69] Para un análisis de los orígenes teóricos de las guerras y conflictos de baja intensidad pueden consultarse: VVAA, *Centroamérica. La guerra de Baja Intensidad*, San José de Costa Rica, Ediciones CRIES-DEI, 1987; y Lilia Bermúdez, *Guerra de Baja intensidad. Reagan contra Centroamérica*, México, Siglo XXI de México, 1987. Para su desarrollo e impulso en la dinámica del control del espacio interno, tras los atentados de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York, véase Sheldon Wolin, *Democracia. S.A. La democracia dirigida y el fantasma del totalitarismo invertido*, Buenos Aires, Katz, 2008.

[70] Gilberto López y Rivas, *Autonomías. Democracia o contrainsurgencia*, México, Editorial ERA, 2004, p. 9.

[71] Luis Astorga, *Seguridad, traficantes y militares. El poder en la sombra*, México Tusquets, 2007, p. 16.

[72] Citado por Subcomandante Insurgente Marcos en «Apuntes sobre las Guerras», *Revista Rebelión* 9/76, p. 38.

[73] *Ibidem*, p. 33.

[74]*Ibidem*, p. 35.

[75]*Ibidem*, p. 41.

Capítulo IV

El nuevo golpismo

«Los empresarios se lavaron las manos. Nos dijeron: “hagan lo que tengan que hacer”, y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron “se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil o diez mil más”!»

Jorge Rafael Videla. Dictador argentino.

Las fuerzas armadas tras la Guerra Fría, deudas pendientes

No hubo respiro. Al finalizar la Guerra Fría, el neoliberalismo llevaba décadas funcionando. La caída del Muro aceleró las reformas. La agenda se vio fortalecida gracias a la ideología de la globalización. El peligro nuclear se desvanecía poco a poco. Sin embargo, Estados Unidos necesitaba mostrar su poderío. Había salido triunfante y no deseaba compartir con nadie su hegemonía. Se impuso el unilateralismo en las relaciones internacionales. Naciones Unidas era un estorbo tal y como fue concebida tras la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra del Golfo (1990-1991) cambio por completo el escenario de las relaciones internacionales. No hubo lugar al multilateralismo soñado. Las Naciones Unidas apoyaron los deseos de invasión a Irak con la excusa de la entrada de tropas iraquíes en Kuwait. Los países aliados se plegaron al llamado estadounidense apoyando la operación «Tormenta del Desierto».

La socialdemocracia se veía triunfante. Primero como aliado de los Estados Unidos en su política de acoso y derribo de los países del Este y, en segundo lugar, como gestora de reformas neoliberales. El socialismo-marxista y las izquierdas anticapitalistas habían sufrido una dura derrota.

En América Latina, la salida de las dictaduras se producía lentamente. Desde mediados de los años ochenta los procesos de transición se generalizan. El peligro comunista había sido abortado y solo restaba darle una salida decorosa a las fuerzas armadas. El primer país en salir de la noche oscura será Argentina. Sus causas fueron bien conocidas: la derrota frente a Gran Bretaña en la Guerra de Las Malvinas en 1982. La humillación sufrida fue el caldo de cultivo para el retorno a los cuarteles. En 1983, las primeras elecciones libres dan el triunfo al candidato radical Raúl Alfonsín. Con él se inicia el Juicio a las Juntas, proceso como se conoció la imputación por crímenes de lesa humanidad cometidos por las tres juntas militares en el periodo autodenominado de «reorganización nacional». Los responsables recibieron condenas dispares y algunos fueron absueltos. Fue un proceso que destapó el horror de las torturas y puso en evidencia la existencia de un plan preconcebido para provocar la eliminación física, aplicar tormentos inhumanos y mantener en cautiverio a las personas en la lucha contra el terrorismo. Fue allí donde el fiscal Julio César Strassera pronuncio su alegato final: «Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino: nunca más». En 1990,

el presidente Carlos Menen concederá un indulto espurio que será derogado nuevamente en 2006.

Protagonistas de excepción, las fuerzas armadas habían desempeñado el papel garante del orden social bajo la bandera de *luchar contra el marxismo y la subversión comunista*. Las clases dominantes y el capital transnacional no pusieron reparos a los métodos que se utilizaban para conseguirlo. Los militares actuaron con total autonomía. Para no caer en un vacío legal se les llamó, eufemísticamente, prerrogativas militares. Dichas prerrogativas cubrían todo el abanico de las instituciones civiles del Estado. No hubo límite a las actuaciones de las fuerzas armadas cuando se trato de la guerra sucia. La tortura, los vuelos de la muerte, las violaciones a mujeres, hombres y niños, los secuestros, los robos de bebés, las mutilaciones y los asesinatos, jactándose de provocar la desaparición de ciudadanos, cuyos cuerpos siguen hoy sin ser recuperados, completan la lista grotesca de horrores. La «guerra sucia», avalada por las fuerzas políticas de la derecha latinoamericana, bajo la protección de los Estados Unidos, dejó mal parado a los instigadores civiles de las dictaduras militares. Fue difícil explicar y menos comprender el grado de sadismo con el que se practicaban las sesiones de tortura y seguir ignorando a sus cómplices.

Abiertos los procesos de transición, se debían saldar deudas y recortar las prerrogativas militares. Era necesario pasar página aminorando costes en la institución militar. En los diálogos de la transición, las fuerzas armadas controlaron los tiempos y definieron las agendas. Salvo en Argentina, el problema de los derechos humanos fue tratado de forma lateral, haciendo abstracción de los crímenes de lesa humanidad cometidos. Para evitar caer en una condena política y social, y para salvaguardarse de recibir elevadas penas de cárcel o cadena perpetua, en Argentina se optó por crear una falsa guerra. Igual que en Chile el Plan Z, explicitado en la introducción de este ensayo, las fuerzas armadas recurrieron a la doctrina de los dos demonios. Ellos o nosotros. Salvar la civilización occidental del comunismo tenía un precio. No se les podía echar en cara cumplir su deber con celo y eficacia.

Las fuerzas armadas negociaron su salida. Las transiciones y los procesos de paz, fuesen en el Cono Sur o Centroamérica, pusieron en el orden del día leyes de amnistía para militares imputados de torturas, asesinatos y desapariciones. La fórmula se encontró en el concepto de «obediencia debida». Sirvió para dar carpetazo a las violaciones de los derechos humanos cometidos por oficiales, suboficiales y rangos subalternos.

En Uruguay se encontró una fórmula que dejó contento a la mayoría. La firma del Pacto del Club Naval en 1984 selló el retorno a la institucionalidad civil y dejó libre de polvo y paja a las fuerzas armadas de cualquier delito cometido en función de su deber. El coronel Caraballo, uno de los participantes del pacto, sentenciaba en el discurso oficial: «No tememos al futuro porque tenemos la conciencia tranquila de las medidas que se tuvieron que tomar y ejecutar, algunas difíciles de aceptar, fueron tomadas con el fin superior de la defensa de nuestra patria y tampoco vacilaremos en reiterarlas si la seguridad del país lo exige». La respuesta a tal muestra de vivir en la impunidad perpetua, correspondió al investido presidente Julio María Sanguinetti: «[...] si hubo amnistía para los dirigentes guerrilleros no estaría mal que también la hubiese para represores que también se habrían excedido en el cometido de sus funciones».

En el año 1986, con una nomenclatura rimbombante, el parlamento uruguayo aprueba por mayoría la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, exonerando definitivamente a los militares que hubiesen participado directa o indirectamente en la violación de derechos humanos durante los años de dictadura cívico-militar. En 1989, la presión popular obligó a realizar un referéndum para derogar la ley de impunidad. Los dos grandes partidos, Blanco y Colorado, unieron sus esfuerzos en la deshonrosa tarea de impedir tal acción. La petición fue derrotada por un escaso margen de votos. Los militares uruguayos podían estar tranquilos. Y lo estuvieron hasta el año 2012. El gobierno del Frente Amplio, encabezado por su presidente José Mujica, ha logrado, en parte, deshacer los acuerdos que blindaban a los militares, abriendo la puerta a futuros juicios contra miembros de las fuerzas armadas implicados en crímenes de lesa humanidad.

Otra salida recurrente fue pactar la entrega de chivos expiatorios. Las fuerzas armadas debían sacrificar a los torturadores más señalados. Así evitaban caer en el bochorno de la impunidad y el descrédito. Lo han hecho a regañadientes, convencidas de haber traicionado a sus compañeros de armas. Sin embargo, con esta medida han puesto fuera de peligro la honra castrense, al fin y al cabo, que era lo que se protegía. En esta entrega «voluntaria», la transición fue benévola cuando no generosa; las nuevas autoridades políticas procedieron a llamar a retiro a generales, comandantes y militares implicados en delitos de sangre. Como premio, se les jubiló con el mayor rango posible que permitían las ordenanzas.

Las alianzas cívico-militares urdidas en las dictaduras cumplieron la tarea de lavar la cara a las fuerzas armadas. Las elites políticas, los empresarios y las burguesías que participaron y se enriquecieron, mientras los uniformados hacían el trabajo sucio, les devolvieron el favor, maniatando al poder judicial. Una clase política indigna aprobará con distintos nombres, las conocidas leyes de «Punto Final».

El regreso a los cuarteles se realiza sin grandes bajas. Consensuado en una agenda oculta, los tribunales militares tendrán prioridad para enjuiciar a sus correligionarios imputados de crímenes de lesa humanidad. La justicia civil se verá impotente para juzgar. La impunidad ha sido la norma sobre la cual se asentaron los procesos de transición: «En efecto, según nos demuestra la reiterada experiencia de las transiciones que siguen a las dictaduras militares, la impunidad total o parcial de los represores y de los más caracterizados golpistas suele constituir, desgraciadamente, parte del precio a pagar por la recuperación de la democracia. Así ha sido, sin ir más lejos, en todos los países del Cono Sur. Más aún: hay que subrayar el hecho de que la Argentina es el país donde la impunidad ha sido menor: el país que más lejos ha llegado en el castigo a los culpables. Ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, lograron jamás en su regreso a la democracia, tras sus respectivas dictaduras militares, nada similar, ni mínimamente parecido a lo logrado por la Argentina en este terreno. Frente a la impunidad general o prácticamente absoluta conseguida por los represores de los años setenta en todos esos países y en otros, la democracia argentina consiguió acumular un aplastante volumen de pruebas, acusar judicialmente, procesar, llevar a juicio, presentar centenares de testimonios, y finalmente sentenciar y condenar a algunos de los máximos responsables del más temible poder militar que el continente americano haya conocido en el presente siglo»[\[1\]](#).

En la mayoría de los países que sufrieron la noche oscura de las dictaduras, se acumularon testimonios, pruebas y documentación sobre violaciones de los derechos humanos. En Chile, se registraron dos informes. El primero, realizado en 1990 por la denominada Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación, su resultado será conocido como «Informe Rettig». En él, se llegó al deshonroso acuerdo de consignar solo a los ciudadanos muertos y asesinados, consecuencia de la violencia del Estado ejercida por agentes de las fuerzas armadas, desde el mismo día 11 de septiembre de 1973. Recoge un total de 2.279 casos. El segundo fue elaborado en 2003. Su labor amplió su campo de actuación hacia aquellas personas que habían sufrido torturas. Su nombre: Comisión sobre Prisión Política y Tortura. Igual que el anterior será divulgado como «Informe Valech». En él se comprueban y relatan más de 40.000 casos de torturas y violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, para darnos cuenta del alcance de la impunidad de las fuerzas armadas y personajes confesos de torturas y desapariciones en Chile, el «Informe Valech» no realizó una publicación completa de las declaraciones y testimonios de las víctimas y miembros de las fuerzas armadas que prestaron declaración, para no afectar el honor de militares en activo implicados. El presidente Ricardo Lagos señaló que los documentos tendrían el estatuto de secreto de Estado por un periodo de cincuenta años. En Argentina, por el contrario, el informe «Nunca Más», prologado por el escritor Ernesto Sábato, dio muestra cabal de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante las juntas militares desde 1976. En este caso, han servido para detener, enjuiciar y condenar a los culpables. Es la excepción que confirma la regla.

Durante los años setenta, las dictaduras militares actuaron de manera concertada. Esta acción conjunta recibió el nombre de Operación Cóndor, red cuyo objetivo era hacer desaparecer militantes de izquierdas que se encontraran en cualquier país perteneciente a la alianza. Urdida en Santiago de Chile en 1975, fue la demostración de la racionalidad con la cual se aplicó la doctrina de la seguridad nacional en los países de la región. Constituido por Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina, Chile y Uruguay, sus huellas se pueden rastrear gracias a la acción del juez José Agustín Fernández y su colaborador Martín Alameda, quienes hallaron de manera fortuita, en la comisaría de Lambaré, Asunción, Paraguay, en diciembre de 1992, los conocidos «Archivos del Terror». En ellos se detalla la estrategia para vigilar, detener, torturar, trasladar y hacer desaparecer a militantes de la izquierda política latinoamericana. Desde 1975, según consta en los archivos del terror, fueron asesinadas 50.000 personas, 30.000 desaparecieron y más de 400.000 sufrieron torturas o prisión.

«A partir de de 1976 el comando central del terrorismo de Estado vio cómo surgía un poderoso competidor –a los servicios de contrainsurgencia norteamericano– el Cóndor. A diferencia del poder paramilitar estadounidense, el Cóndor no reconocía ningún tipo de limitaciones: no estaba sujeto a controles de un gobierno representativo, tenía capacidad para involucrar a toda la superestructura, y ni siquiera tenía que justificar, hacia adentro, que el terrorismo de Estado se convirtiera en un fin en sí mismo. Ambas estructuras utilizaban los mismos criterios de funcionamiento, apelaban a la misma mano de obra, expandían los mismos métodos y obtenían financiamiento de los mismos fondos; pero el Cóndor podía llegar a conquistar espacios vedados, como se vio en el caso de los cubanos anticastristas y como se

confirmó con agentes de la CIA, que al final no sabían para quién trabajaban y en qué estrategia operaban»[2].

En la Operación Cóndor, participaron de forma esporádica las fuerzas armadas de países como Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador. Este terrorismo de Estado global tiene como antecedente la colaboración entre Chile y Argentina para asesinar al ex-general en jefe de las fuerzas armadas chilenas, exiliado en Argentina, Carlos Prats, y su compañera, Sofía Cuthbert, el 30 de septiembre de 1974. Dentro de la Operación Cóndor también fue perpetrado el asesinato, el 21 de septiembre de 1976, de Orlando Letelier, exministro de Interior de Chile del gobierno de Salvador Allende, exiliado en Estados Unidos, y de su secretaria norteamericana Ronnie Moffit; el asesinato del general boliviano, Juan José Torres en Buenos Aires en 1976; y los tristemente conocidos «vuelos de la muerte», consistentes en tirar desde helicópteros a los detenidos, previo abrirles en canal el estómago para evitar que los cuerpos emergieran posteriormente a la superficie. Los datos apuntan a un total de 30.000, los casos contabilizados y comprobados de personas que fueron torturadas, repatriadas y hechas desaparecer por los servicios de inteligencia pertenecientes a la Operación Cóndor.

Entre las operaciones del plan Cóndor, que tuvieron una mayor repercusión en los medios de comunicación, fue el «Caso de los 119». Se trata de la confección de una lista correspondiente a 119 militantes de izquierdas, secuestrados, torturados y asesinados por la DINA, Servicio de Inteligencia chilena, a los cuales la dictadura chilena situó en el exterior, considerándolos víctimas de luchas intestinas o caídos en combate mientras desarrollaban actividades subversivas. Su objetivo, bajar la presión social ejercida por los familiares de presos y detenidos desaparecidos solicitando información sobre los lugares donde se encontraban detenidos. En otras palabras, que estas 119 personas nunca habían estado detenidas, torturados o asesinados en Chile por las fuerzas armadas, por el contrario se encontraban prófugas y fuera del país. Para dar veracidad a su versión, editaron dos efímeros periódicos, uno en Argentina, *Lea* y otro en Brasil, *O Dia*. Ambos matutinos publicaron sendos titulares que copaban toda la Portada, hablando de una refriega entre terroristas, subversivos e izquierdistas. En su interior extensos artículos y fotos del hecho que lo corroboraban. La noticia fue recogida por la prensa latinoamericana y reproducida casi instantáneamente. Pendientes de nuevas entregas, se esperaba que ambos periódicos continuasen dando información sobre los acontecimientos relatados la víspera. Cuál será la sorpresa que al día siguiente no fue posible encontrarlos en los quiscos. Habían desaparecido, interrumpiendo abruptamente su edición. Pero su efímera publicación fue suficiente para apoyar y dar por bueno el relato oficial de los gobiernos implicados. Años más tarde, la versión oficial construida sobre la información de estos dos periódicos fue desmontada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, evidenciando que fue un montaje preparado en el interior de la Operación Cóndor. Las 119 personas efectivamente fueron asesinadas por oficiales de la DINA en los centros de tortura de la dictadura chilena.

Entre tanto, el proceso de reformas neoliberales adquirió un ritmo frenético. Las fuerzas armadas habían cumplido a la perfección su papel garante en la lucha anticomunista. Superado el riesgo de una revolución, los amantes del neoliberalismo iniciaron un trabajo no exento de

estíercol. El escritor peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Octavio Paz, mostraban su satisfacción por el retorno a la «civilidad» y la posibilidad de construir un neoliberalismo en libertad, escollo que le quedaba por superar para ser aceptado como la solución al subdesarrollo. Recuperar la democracia servía para instaurar un nuevo orden, bajo el dogma del libre mercado y la libertad de elegir. América Latina saldría del túnel del «tercermundismo» abrazando sin temor la revolución neoliberal.

«Esta revolución significa reforma y perfeccionamiento de nuestro sistema democrático y el establecimiento, en vez del capitalismo mercantilista que tenemos, del capitalismo a secas, es decir, aquel que se asienta en la propiedad privada y el mercado competitivo y es eminentemente popular. Sobre esto hay que ser claros: el liberalismo es inseparable del sistema democrático –como régimen civil, de poderes independientes, libertades públicas, pluralismo político, derechos humanos garantizados y elecciones– y el mercado libre como sistema para la asignación de los recursos y la creación de riqueza»[3].

Al interior del liberalismo, las fuerzas armadas, concluido los procesos de transición, se les encomendará un nuevo rol a desempeñar. La seguridad hemisférica. Ya no será el enemigo comunista, derrotado estratégicamente, quien ocupe el papel central de las operaciones. Ahora, el rostro del enemigo se hará coincidir con terroristas, narcotraficantes, mafias del crimen organizado, narcoguerrillas y residuos comunistas. La globalización neoliberal inaugura enemigos: los antisistema. La amenaza está en otro lugar. Así lo hace saber un destacado miembro del *establishment* al servicio del Departamento de Estado norteamericano: «Un hemisferio democrático con economías modernas y abiertas significa un hemisferio estable. Sin embargo, las amenazas a las instituciones y economías democráticas –tales como la agresión, coerción, insurgencias, terrorismo y tráfico ilícito de drogas– deben ser enfrentadas. La cooperación entre los países de la región es el mejor método para combatir esas amenazas. Dentro de esta estructura, los acuerdos para el control de armas, una reestructuración apropiada de las fuerzas nacionales, medidas que crean confianza y una plena adhesión a los acuerdos internacionales, pueden hacer que este hemisferio sea un lugar más seguro y próspero. Igualmente, la coordinación multilateral entre países [...] en el área anti-narcóticos puede lograr que el programa nacional de cada país sea tanto más efectivo [...] Si logramos redefinir la seguridad nacional en las formas descritas [...] permítanme dejar claro que los militares continuarán desempeñando un papel primordial en salvaguardar la seguridad nacional. Sin embargo, además de proteger de la agresión directa, deben lidiar con las crecientes amenazas [...] el terrorismo, el narcotráfico y se necesitan configurar estrategias y políticas para combatir efectivamente estas amenazas»[4].

Los años noventa del siglo xx fueron años de refundación del orden político. La guerra sucia no tenía sentido bajo los parámetros de la amenaza comunista. Las acciones encubiertas, diseñadas por el Pentágono en los años sesenta para desestabilizar, resultaban extemporáneas. Desde los años ochenta, Estados Unidos opta por la financiación legal. Las guerras de baja intensidad se llevan a cabo con beneplácito de su poder legislativo. Fueron 5 los millones de dólares, aprobados por la administración Reagan para la creación de un ejército mercenario, destinado a derrocar el gobierno sandinista en Nicaragua. Luego han seguido Afganistán, Irak,

Libia, Siria, Túnez o Egipto.

Desmantelado el enemigo comunista y la subversión, la política de lucha antiterrorista, contra las mafias y el crimen organizado de la droga se considera parte de la estrategia global para la estabilidad, paz y seguridad mundial. Las fuerzas armadas, quedó dicho, asumen un rol protagonista. Sin tanto aspaviento disfrutaban de los operativos conjuntos, bajo la atenta mirada y supervisión de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos (DEA). Su accionar en América Latina cuenta con la anuencia de los gobiernos, lo cual conlleva una sustancial pérdida de soberanía, en cuanto se renuncia a practicar una política de seguridad al margen de la diseñada por la Casa Blanca y el Pentágono.

La lucha antisubversiva se trastoca en lucha contra los centros de producción, elaboración de cocaína, plantaciones de marihuana y amapola. En algunos países, Colombia y Perú, se habla de la unidad entre campesinos productores de coca, guerrillas y narcotraficantes, para justificar las acciones armadas y las matanzas a población civil. Las fuerzas armadas no descansan, hoy tienen mucho trabajo pendiente. Curiosamente, la antesala de estas operaciones tuvo lugar en México bajo la denominación de Operación Cóndor entre 1975 y 1978 «el primer ensayo en el continente americano de una estrategia antidroga dirigida por militares. Luego seguiría Colombia, con la Operación Fulminante (1978-1980), centrada en la destrucción de cultivos de marihuana en la Guajira, durante la administración del presidente Julio César Turbay Ayala, quien declaró que la economía de la droga significaba “una amenaza para la seguridad nacional”. En 1989, el presidente Bush anunció la Iniciativa Andina para destruir el suministro de cocaína de los países productores (Perú, Bolivia y Colombia). Se trató de un plan que empleó un poco más de dos millones de dólares en cinco años, una parte para la ayuda económica y casi la mitad para apoyo militar y policiaco. Posteriormente, a partir del año 2000, vendría el Plan Colombia»[\[5\]](#).

Para justificar la invasión de Panamá, Estados Unidos montó la operación Causa Justa. Era la excusa perfecta, junto con el fraude electoral, para acusar al Comandante de las fuerzas armadas de Panamá, Manuel Antonio Noriega, de narcotráfico y financiar la insurgencia en la región.

En Centroamérica, países cuyas fuerzas armadas han sido pertrechadas por Estados Unidos para revertir los procesos de liberación nacional durante los años ochenta, quedaron intactas. No hubo expulsiones, ni reforma en sus ordenanzas. Refractarios a los cambios, sus mandos salen impolutos de la guerra contra el comunismo y la subversión. Los procesos de transición, conocidos como Procesos de Paz y Negociación, en Guatemala y El Salvador fundamentalmente, están precedidos por la derrota estratégica de las fuerzas insurgentes. Hoy, las fuerzas armadas de la región, actúan bajo la llamada directa del poder político constituido. Cansados por los muchos años de guerra interna y la actividad antisubversiva, han dejado la primera línea de fuego. Se conforman con recibir parabienes y dedicarse a la lucha contra el narcotráfico, que le deja pingües beneficios.

El golpe de Estado en Honduras, del 28 de junio de 2009, contra su presidente, Manuel Zelaya, militante del partido liberal, representa esta nueva modalidad de actuación de las fuerzas armadas. Son los eufemísticamente llamados golpes de Estado constitucionales. Así se

camufla la acción de los militares con un barniz legal. Se redacta un edicto judicial declarando ilegítima las acciones del presidente. Situado fuera del orden constitucional, puede ser destituido. Los militares se limitan a cumplir la orden emanada de la Corte Suprema hondureña. Se trata de restaurar y no asumir el poder directamente. Son los guardianes que apoyan la acción del poder político. Es el nuevo marco de las relaciones cívico-militares. Detenido en su casa, el presidente Manuel Zelaya será expulsado del país, formándose un gobierno interino encabezado por el presidente del congreso Roberto Micheletti. La represión hace acto de presencia. Para evitar el rechazo internacional, la persecución política se ejerce de forma pautada. El asesinato de dirigentes, líderes políticos y sindicales, periodistas e intelectuales pertenecientes a las organizaciones populares se hace de forma selectiva por los aparatos de seguridad del Estado. En definitiva, las fuerzas armadas hondureñas no actuaron de *motu proprio*, ni usurparon el poder político, lo hicieron a petición del poder legislativo y judicial. Tras celebrar un paripé de elecciones, Porfirio Lobo, el presidente bastardo, ha permitido que los asesinatos y la represión se sigan ejerciendo.

Otro caso similar ha sido la destitución del presidente de Paraguay, Fernando Lugo, aprobada por la Cámara de Diputados en junio de 2012. Igualmente, las fuerzas armadas se convierten en actores dependientes del poder político y reciben las órdenes de golpistas civiles. El golpe de Estado no requiere de tanques en las calles, ni asaltar palacios de gobierno, ni tampoco se hace necesario ilegalizar los partidos políticos. Mucho menos escandalosos y sin tanto «derramamiento de sangre», las fuerzas armadas cumplen la orden de revertir procesos democráticos y revolucionarios nacidos de las urnas y legitimados en procesos electorales transparentes.

Durante la primera década del siglo XXI, las fuerzas armadas latinoamericanas parecen asumir un papel subordinado en el marco del orden neoliberal. Sin embargo, los ruidos de sables y los procesos desestabilizadores no han dejado de producirse donde el neoliberalismo es cuestionado.

Desde el ataque al Pentágono y las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, las fuerzas armadas latinoamericanas se han plegado, como antaño, a la doctrina de la seguridad nacional, a la nueva estrategia diseñada por el imperialismo estadounidense en su lucha contra el terrorismo internacional encarnado en sujetos religiosos, mafiosos o políticos antisistema. El terrorismo se convierte en un cajón de sastre. Un día cualquiera, una organización política, hasta ese momento considerada un ejemplo de virtud democrática, puede caer en desgracia, ser perseguida y sus militantes detenidos, torturados y etiquetados como agentes del mal. Otro tanto sucede con la lista de países considerados terroristas, igual que se entra se sale. Es decir no hay patrones que apoyen un decálogo internacional que facilite la definición de país u organización terrorista. Se está al albur político de los Estados Unidos y sus aliados que pueden, aleatoriamente considerar cuáles caen en la categoría y cuáles son excluidos.

En América Latina, las fuerzas armadas, salvo excepciones, han preferido recibir las lisonjas y los reconocimientos de las empresas transnacionales, las burguesías locales y los organismos internacionales, a cambio de entregar la soberanía del territorio que dicen

defender. Hoy los países se encuentran intervenidos. Quienes mandan y ejercen el poder real son las grandes compañías transnacionales, las sociedades financieras y las nuevas plutocracias, que han decidido entregar su territorio para ser despojado de sus riquezas naturales, convirtiendo a los ciudadanos en cipayos y los países en neocolonias.

La técnica del golpe de Estado: el asalto al poder

En América Latina encontramos los dos tipos contemporáneos de golpes de Estado, cívico-militares y militares. En ambos figuran las fuerzas armadas, la institución por antonomasia capaz de garantizar el éxito operativo del asalto al poder. Su papel, hemos visto, puede ser protagónico o situarse en un perfil bajo. Sin un grupo que avale *les coups d'État* es muy probable que la acción fracase. El poder legislativo es el territorio idóneo para promover la desestabilización. Igualmente, el poder el judicial cumple una función básica, proporcionar los argumentos legales para justificarlos. Una sola declaración, deslegitimando al poder ejecutivo, puede ser suficiente. También el financiamiento y el apoyo del orden económico. Empresarios, banqueros, conglomerados transnacionales de telecomunicaciones, armamento, alimentación o minero-extractivas suma. Asimismo, la participación de un sector de la sociedad civil, encabezado por periodistas, académicos, clérigos, actores, puede inclinar la balanza de la opinión pública. Los medios de comunicación social, prensa, radio, televisión hacen lo suyo en esta dirección. Y por último el factor exterior, el apoyo de las potencias amigas y sus gobiernos facilitando el uso de sus servicios de inteligencia y contrainformación. En conclusión, un golpe de Estado, si quiere tener éxito, debe ser concebido minuciosamente, sin dejar a la improvisación ningún posible. Cuando ello ocurre, las posibilidades de fracaso se elevan. Desde luego juegan imprevistos. Una mala planificación puede dar al traste el operativo. En ocasiones, el golpe militar compromete a una rama o parte de ella, aviación, marina o ejército de tierra. Sus ejecutores buscan sumar al resto de compañeros de armas. La más de las veces estos intentos han resultado en un fracaso.

El asalto al poder ha sido una constante en la historia política. No hace falta poner ejemplos, desde el Imperio romano hasta nuestros días nos encontramos con dicha realidad. Sin embargo, la técnica del golpe de Estado ve la luz a partir de la articulación del Estado moderno. Es en ese instante, cuando el Estado se convierte en una institución, cuyo rasgo distintivo, tener el monopolio legítimo del uso de la violencia, le hace ser objeto de deseo. Mientras el príncipe encarnaba el Estado, el golpe de Estado fue un procedimiento legítimo para conservarlo. Gabriel Naudé, en *Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado*, ensayo publicado en 1639, aclara: «Los golpes de Estado son acciones audaces y extraordinarias que los príncipes se ven obligados a ejecutar en el acometimiento de las empresas difíciles y rayanas en la desesperación, contra el derecho común y sin guardar ningún orden ni forma de justicia, arriesgando el interés de los particulares por el bien general»^[6]. La única condición que alega no podía ser rota, se tenían que mantener en secreto hasta el momento de llevarlas a cabo. «Los golpes de Estado encierran, sin embargo, la misma

justicia y equidad que atribuimos a las “máximas” y a la “razón de Estado”, aunque en estas sí esté permitida su publicación antes de ponerlas en práctica, mientras que la regla principal de los “golpes” es mantenerlos en secreto hasta su término»[7]. Igualmente, Naudé habla al príncipe, no a los conspiradores, no es un ensayo destinado a derrocar al príncipe. El golpe de Estado lo interpreta como el arte del príncipe para mantener su poder, razón suficiente para aconsejar su uso de manera extraordinaria y prudente, agotando todas las vías previas existentes: «Es menester retardar o cuando menos, no precipitar este tipo de ejecuciones, masticarlas y rumiarlas en el espíritu, traer a la imaginación todos los posibles medios para esquivarlas y, si no puede ser, suavizarlas y hacerlas llevaderas»[8].

Ahora bien, si la técnica del Golpe de Estado incorpora la posibilidad de reemplazar a los inquilinos del poder y no solo reforzarlos, el abanico se abre de manera exponencial. Es la alternativa propuesta por Curzio Malaparte que sitúa los golpes de Estado entre lo que denomina catilinarios de derecha e izquierda. Así, los golpes de Estado aparecen como alternativas revolucionarias o reaccionarias frente al Estado. Se trataría de una acción destinada a tomar el Estado. Escrito en 1931, aun cuando era miembro del partido fascista, su interpretación, criticando a Hitler y Mussolini, supuso la expulsión del partido y la cárcel.

Su teoría, ampliamente difundida, considera la Revolución rusa una de las variantes posibles de uso de la técnica del golpe de Estado, la insurreccional. Aparecen junto a ella, los *putsch* de Bonaparte, Hitler, Mussolini, Pilsudski o Primo de Rivera. Veamos su argumento: «En casi todos los países, al lado de los partidos que manifiestan su decisión de defender el Estado parlamentario y de practicar una política de equilibrio interior, es decir liberal y democrática, hay partidos que plantean el problema del Estado en el terreno revolucionario: son los partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, los catilinarios de la derecha temen el desorden. Acusan al gobierno de debilidad, de incapacidad, de irresponsabilidad. Defienden la necesidad de una sólida organización del Estado, de un control severo de toda la vida política, social y económica. Son idólatras del Estado, los partidarios de un Estado absoluto. En un Estado centralizador, autoritario, antiliberal, antidemocrático es donde ven la única garantía de orden y libertad, el único dique contra el peligro comunista. “Todo en el Estado; nada fuera del Estado, nada contra el Estado” afirma Mussolini. Los catilinarios de la izquierda apuntan a la conquista del Estado para instaurar la dictadura de los obreros y de campesinos “Allí donde hay libertad, no hay Estado”, afirma Lenin»[9].

Podemos discrepar de esta versión, al equiparar Malaparte, una revolución con un golpe de Estado, situando en el mismo plano de análisis argumentos que refuerzan el Estado capitalista, como el fascismo y el nazismo, complementarios a la racionalidad burguesa de explotación y acumulación de capital, con la vía insurreccional de ruptura del orden capitalista. No se puede homologar tipo de Estado con forma de gobierno o régimen político. El fascismo en una forma de gobierno dentro del Estado capitalista. La revolución socialista conlleva la superación del Estado capitalista. Es allí donde Malaparte se confunde. Sin embargo, y a pesar de no coincidir con Malaparte en esta perspectiva, podemos compartir su afirmación genérica, los golpes de Estado constituyen una opción para reforzar o sustituir a los productores del orden social.

Es en este sentido donde los nuevos golpes de Estado en América Latina cobran importancia. Se trata de acciones destinadas a sustituir los productores del orden social, modificando la dirección de los procesos constituyentes nacidos de la crisis neoliberal. Es donde se produce un cambio en el poder político, modificando la correlación de fuerzas y viéndose la oligarquía y las burguesías gerenciales desplazada de sus centros habituales de control y decisión, donde se orquestan y patrocinan golpes de Estado para revertir el proceso de reformas sociales de carácter democrático y popular. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Honduras o Paraguay han sido víctimas de esta estrategia.

En Venezuela, un sector de las fuerzas armadas, en colaboración con los empresarios y los partidos tradicionales desplazados del poder desde 1998, se alzó contra el Jefe de Estado en abril de 2002. No tuvieron éxito. Con el presidente Hugo Chávez secuestrado, el pueblo organiza su defensa y al cabo de tres días, la movilización popular, unida a sectores mayoritarios y leales de las fuerzas armadas, logra la liberación de Hugo Chávez, consiguiendo su retorno al palacio presidencial de Miraflores. Los alzados civiles y militares serán juzgados. Sin embargo, la derecha, no cesa en el empeño. Siempre que tiene posibilidades y cuenta con el respaldo internacional busca desestabilizar, creando una situación de caos interno que haga viable su estrategia golpista. La más reciente, en abril de 2013, tras las últimas elecciones presidenciales que dieron el triunfo por escasa mayoría (el 2 por 100) al candidato sucesor de Hugo Chávez, Nicolás Maduro. La derecha ha creado un escenario de inseguridad, llamando a la desobediencia y planteando la ilegitimidad del nuevo presidente, amparándose en un inexistente fraude en el voto electrónico. Se trata de un pulso que busca desquiciar el orden social y otorgar un punto de apoyo para otra intentona golpista que atraiga a sectores sociales descontentos, y sobre todo a un grupo consistente de militares que rompan la unidad y el compromiso con la revolución bolivariana.

En Bolivia, un proceso desestabilizador hace que el gobierno constitucional del presidente Evo Morales esté sometido a un continuo ruido de sables, llamando al golpe de Estado para restituir a la plutocracia. Su política de nacionalizaciones cuestiona el poder de las transnacionales. En 2006 nacionaliza las minas de estaño de Huanuni; en 2007, la empresa de telecomunicaciones ENTEL; en 2008, expropia REPSOL-YPF y, ese mismo año, adquiere el 100 por 100 de la compañía Logística de Hidrocarburos; en 2010 el gobierno se hace con la propiedad de cuatro compañías eléctricas: Corani, Guaracachi, Villa Hermosa y Fuerza Eléctrica de Cochabamba. El ejercicio de la soberanía no es plato de buen gusto. Al igual que sucediera en Chile en 1971 tras la nacionalización de cobre, las empresas expropiadas comienzan sus maniobras para derrocar el gobierno, buscando cómplices nacionales, y los hay. El presidente Evo Morales ha denunciado varias asonadas, las más importantes en 2010 y en 2012. En este plan, se encuentran lazos entre los viejos partidos de la derecha, la socialdemocracia, empresarios y grupos de ultraderecha. Las fuerzas armadas han sido tocadas y se les considera un puntal para tener el éxito. De ahí la necesidad de comprometerlas con los procesos de cambio y modificar su visión enquistada en querer ser juez y parte de todo proceso político. La reforma interna de sus mandos y las nuevas políticas han variado su posición e impedido, por el momento, que los intereses golpistas hayan tenido

éxito en el corto plazo. Pero las relaciones entre el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las fuerzas armadas son conflictivas, al estar educadas en la lucha antissubversiva desde los años sesenta del siglo xx. En Ecuador, el presidente Rafael Correa sufre los embates del golpismo reaccionario. Como siempre, se busca la renuncia o, si no es posible, el magnicidio. El 30 de septiembre de 2010, Rafael Correa, será secuestrado durante tres horas, sufriendo una tentativa de asesinato. La asonada no logra el apoyo de las fuerzas armadas. Aunque tampoco las relaciones entre el poder civil y el militar pasan por un buen momento. Las fuerzas armadas ecuatorianas han jugado, como en Bolivia, un papel decisivo en la vida política del país. Educados en el anticomunismo y sometidas a un continuo bombardeo ideológico contra el socialismo-marxista, ven con recelo cualquier alternativa de izquierdas y popular. La derecha lo sabe y siempre recurre a dicha opción, adjetivar el gobierno de antipatriótico y disolvente de la identidad nacional, para agitar el malestar entre las fuerzas armadas. En el intento frustrado de 2010 se comprobó la participación del excoronel de Estado Mayor y expresidente Lucio Gutiérrez, que ya tenía experiencia en golpes de Estado, al derrocar en el año 2000 a Jamil Mahuad. Su presencia no era casual, más allá de sus intereses personales, buscaba arrastrar a un sector de los militares, dividiendo a las fuerzas armadas y haciendo posible el golpe. La derecha y un sector de las organizaciones indígenas, Pachakutik, se habían sumado. Resultó curioso que mientras se mantenía secuestrado al presidente, la representante en la Asamblea, de Pachakutik, Lourdes Tibán, llamó a constituir un frente nacional y a la destitución del presidente Rafael Correa. El intento, por quienes urdieron la trama, tendría como punto de partida un motín policial reivindicando un aumento de sueldos y salarios. Sin embargo el objetivo era acabar con la «revolución ciudadana». Al igual que sucediera en Venezuela en abril de 2002, el pueblo ecuatoriano salió en defensa de su presidente.

El siguiente caso fue el de Paraguay, en 2012. En esta ocasión, los golpistas sí tienen éxito. Se destituye al presidente Fernando Lugo y se articula un paripé de juicio sumarísimo, en una rocambolesca y complicada trama desestabilizadora. Los motivos, responsabilizar al presidente Fernando Lugo de la matanza campesina de Canindeyú, acaecida en 15 de junio de 2012. El Congreso Nacional y el Poder Judicial, en manos de la derecha reaccionaria, justificarán la destitución y juicio exprés. Un apaño destinado a satisfacer a la comunidad internacional. Las fuerzas armadas se retraen, no tienen participación directa, se mantienen en los alrededores y esperan instrucciones, aunque están informadas y son conscientes de la maniobra, la cual apoyan. El presidente Fernando Lugo, en un mensaje dirigido al pueblo paraguayo a un mes de su destitución señalaba: «Los que dieron el golpe fueron políticos conservadores que querían 50 millones de dólares para sus operadores políticos a través de la justicia electoral. Los mismos que esperan esconderse del juicio popular en las listas sábanas de los partidos conservadores. Quienes impulsaron el golpe son los que quieren concretar el negocio con la multinacional Río Tinto Alcán, traicionando la soberanía energética de nuestro país y los intereses de nuestra nación. Aquellos que estuvieron con el golpe son los que se han lucrado con un modelo de país para pocos, donde el destino de nuestra gente era la emigración, por eso inmediatamente anunciaron que no implantarían el impuesto a la soja [...]

Detrás del golpe estuvieron aquellos sectores que anhelan la pseudo-integración promovida por los negocios ilícitos y la narcopolítica».

El gobierno del presidente Lugo será, lamentablemente, un gobierno efímero, cuyas reformas democráticas ponen en peligro los intereses de las multinacionales y cuestionan las tradicionales estructuras de poder. Hoy, todo vuelve a la normalidad. Tras la crisis viene la calma. El 21 de abril se celebraron las elecciones presidenciales, cuyo resultado no puede ser más significativo, han dado el triunfo a Horacio Cartes, empresario, banquero y terrateniente, educado en colegios privados y religiosos y en Estados Unidos. De regreso a Paraguay en 1989, se une al Partido del dictador Alfredo Stroessner, el Colorado. Hoy gobierna en su nombre.

En los casos anteriores encontramos bastantes ejemplos de golpe de Estado cívico-militar. En esta modalidad han intervenido empresas transnacionales, lobbies de presión, el Departamento de Estado Norteamericano y los servicios de espionaje y contrainteligencia. Si bien han sido cuestionados por organismos internacionales de carácter regional como UNASUR, CELAC y ALBA, sus quejas no han servido para restituir en el poder a los presidentes legítimos destituidos en los casos de Honduras y Paraguay.

Otra de las características que presentan estos golpes militares «de guante blanco» o «institucionales» ha sido en el campo de la violación de los derechos humanos, es decir, han optado por represión selectiva, evitando ser acusados de crímenes de lesa humanidad. Han sido contadas las víctimas y pocos los exiliados. Lo cual supone un aprendizaje por parte de quienes proyectan sus estrategias. Las variantes se cruzan y cada vez son más las instituciones y grupos de presión inmersos en las asonadas golpistas.

Hoy, se dibuja otro mapa de los golpes de Estado, aquel que se produce sin destitución de autoridad legítima. Basta con doblegar voluntades. Organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE o la OMC pueden ahogar y estrangular a gobiernos que se nieguen a cumplir sus programas de ajuste. Asimismo, las empresas transnacionales, tras las privatizaciones, son las propietarias de los principales servicios comunitarios como la luz, los transportes, el agua o las telecomunicaciones y pueden presionar en este sentido. La puesta en marcha de megaproyectos, presas hidroeléctricas, plantaciones de soja, minería extractiva, están vinculados a estas prácticas espúreas. Monsanto, la multinacional de la soja, los transgénicos y los químicos agroindustriales, jugó un papel destacado, como hemos apuntado, en la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo.

Los medios de comunicación pueden coadyuvar a crear un clima de incertidumbre y favorecer un golpe de Estado. Son, de hecho, parte de la estrategia global. El caso de Chile entre 1970-1973 y Venezuela en 2002, son claros exponentes de lo dicho. En los dos, la prensa construyó una realidad ficticia para apoyar la intervención militar. La unidad cívico-militar suele dar buenos resultados. Los medios de comunicación no constituyen un cuarto poder, forman parte de las grandes empresas transnacionales cuyos intereses no son la defensa de la libertad de prensa o información. Hoy en día se articulan al entramado oligopólico del complejo industrial-militar del capitalismo.

Otros actores relevantes capaces de provocar un terremoto político son los bancos de

inversión. Goldman Sachs, tiene poder suficiente para destituir, cambiar o comprar gobiernos. Ya lo demostró en Grecia. Las grandes empresas y el capital financiero pueden provocar un pánico bursátil y cambiar una decisión política, provocando un golpe de Estado silencioso. Las agencias de calificación de riesgo, entidades privadas como Moody's, Standard & Poor y Fitch son perfectos agentes desestabilizadores, y actúan como oligopolio y obedecen a sus mezquinos intereses. Igual aplican triple AAA como restan vocal, si el país o la entidad no se someten a su designio. Los gobiernos tecnócratas surgidos en Italia, Grecia y la idea de propagarlos por el espacio europeo, son otro tipo de golpe de Estado. Presidentes electos por instituciones financieras, al margen de las urnas. La narcopolítica también está presente. Con este nombre se presenta la alianza entre el crimen organizado y los partidos tradicionales. Ellos quitan y ponen presidentes. Saben a quiénes pagan, cuáles son los gobernadores, senadores, diputados, jueces, alcaldes y militares que han recibido sus dineros. Constituyen parte de un gobierno estable y permanente en los contornos de la política formal. El caso paradigmático de político ligado a la narcopolítica es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Pero también han sido acusados los presidentes de Costa Rica y México.

La sociedad política está contra las cuerdas. El mantenimiento de gobiernos democráticos, cuyos programas cuestionen y pongan en duda el quehacer de este gran complejo transnacional, está en peligro. Pueden sufrir la técnica del golpe de Estado. El proceso de involución democrática que ha dejado el poder en manos de especuladores, banqueros sin escrúpulos, empresarios avariciosos y políticos corruptos son los máximos beneficiarios de un golpe de Estado silencioso. Todos comparten el mismo objetivo, mantener el poder y aumentar ganancias. Cada uno juega su papel.

La visión tradicional de los golpes de Estado en América Latina ha pasado a mejor vida, pero siguen en la agenda de las clases dominantes latinoamericanas, que nunca han desaparecido. Ahora su recurso puede ser dilatado en el tiempo y realizarse sin «excesivo» coste político. Las fuerzas armadas no requieren al menos por el momento, implantar el terror. Los golpes exclusivamente militares, perpetrados por la gran autonomía concedida a las fuerzas armadas en tiempos de Guerra Fría desaparecen, ceden su lugar a los golpes constitucionales, más limpios y efectivos.

Existe en América Latina otra forma de mantenerse en el poder que ha sido conceptualizada como autogolpe. El caso más representativo de esta estrategia lo llevó a cabo Alberto Fujimori en Perú en abril de 1992. Amparándose en los artículos 227 y 228 de la Constitución vigente de 1979, disolvió el Congreso, suspendió las garantías constitucionales y declaró nula la carta magna, convocando un proceso constituyente que le permitiera concentrar más poder en su persona. Las fuerzas armadas peruanas asistieron impasibles, o mejor aún avalaron con su «neutralidad» el autogolpe, a pesar que el vicepresidente en funciones, Máximo San Román, llamó abiertamente a los militares a un golpe de Estado. Curiosamente, en momentos en que se articulaba la política de guerras de baja intensidad y la lucha contra el terrorismo, Estados Unidos no condenó y la OEA tampoco hizo una protesta formal. Inmediatamente Fujimori convocó un referéndum que ganó mayoritariamente. Tuvo éxito. En 1993 fue nombrado, bajo una nueva constitución, presidente constitucional del Perú.

El siglo XXI vive en medio de golpes de Estado menos traumáticos, casi imperceptibles a los ojos de las grandes mayorías sociales. Será difícil observar, lo hemos señalado con anterioridad, carros de combate en la calle, aviones bombardeando o declaraciones rimbombantes de carácter mesiánico enquistadas en la ideología del anticomunismo o la fobia al socialismo-marxista. Y seguramente será más improbable tener noticias de militares golpistas que deciden tomar las sedes parlamentarias, secuestrar a diputados y senadores, y con un pliego de peticiones en la mano, solicitar gobiernos de salvación nacional y un compromiso histórico bajo su dirección. Por ser casi invisibles, hay que estar alerta a los golpes de Estado de los mercados, cuyos efectos son igualmente desastrosos para la democracia y los ciudadanos como los descritos en este ensayo.

[1] Prudencio García, *El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las juntas militares*, Madrid, Alianza Editorial, 1995, p. 429.

[2] Samuel Blixio, *El vientre del Cóndor. Del archivo del terror al caso Berríos*, Montevideo, Ediciones de Brecha, 1995, p. 190.

[3] Mario Vargas llosa, «América Latina y la opción liberal», en Barry Levine (comp.), *El desafío neoliberal. El fin del tercermundismo en América Latina*, Bogotá, Editorial Norma, 1992, p. 29.

[4] Alejandro Wolff, «La política de los Estados Unidos en el campo de la seguridad hemisférica», en VVAA, *El Espacio: nueva frontera para la cooperación hemisférica*, Santiago de Chile, Ediciones FLACSO, s/f., pp. 36-37.

[5] Luis Astorga, *Seguridad, traficantes y militares*, cit., p. 12.

[6] Gabriel Naudé, *Consideraciones políticas sobre los golpes de Estado*, Madrid, Editorial, Tecnos, 2011, p. 82.

[7] *Ibidem*, p. 83.

[8] *Ibidem*, p. 101.

[9] Curzio Malaparte, *Técnica del golpe de Estado*, Barcelona, José Janes editor, 1958, p. 6.

A modo de epílogo

Este ensayo ha querido describir y presentar de manera sucinta los golpes de Estado que en América Latina han condicionado la vida política, impidiendo la mayoría de las ocasiones el establecimiento de regímenes democráticos, plurales y alternativos al capitalismo dependiente. Han sido muchas las ocasiones frustradas, las esperanzas rotas y los sueños que han terminado en una pesadilla.

No he buscado hacer mención explícita de los múltiples horrores que acompañaron el establecimiento de dictaduras militares, pero fueron tiempos de oscuridad. El miedo se adueñó de la vida cotidiana. Hubo quienes vivieron largos años negando ser hijos, esposas o esposos de detenidos desaparecidos. Eran apestados sociales. Incluso, para protegerse, se prefirió construir una historia donde los abuelos relataban a sus nietos que sus progenitores se habían marchado al exterior. Otros negaron haber sufrido torturas, haber sido violadas o detenidos. Se rompió con el pasado. Se trató de proteger a los más cercanos. También fueron momentos de solidaridad, compañerismo y afectos. La represión dejó al descubierto hasta dónde puede llegar la obsesión contra la izquierda, el socialismo-marxista. Sus militantes fueron considerados, al decir de los torturadores, animales que no merecían ninguna consideración. En la desnudez de la tortura nunca perdieron la dignidad, eso les hizo fuertes y resistieron. Son los sobrevivientes. Pero hubo quienes, sin sufrir la tortura física, sufrieron la traición y la tortura psicológica. Debieron negar su historia para sobrevivir. La sociedad entera sufrió la persecución y enfermó, hasta el extremo de no reconocer los hechos. Nadie quiere ser responsable. Unos se escudan en la Guerra Fría, otros en su debilidad de carácter y otros simplemente callan o se justifican. Países enteros, como Chile, viven en una mentira. Hoy sigue vigente la Constitución de la dictadura aprobada en 1980, en medio de la sangría humana. En otros casos, directamente se pide el perdón y se fomenta el olvido. Ahí está el peligro. Por ello es necesario mantener en alto la necesidad de justicia, de imputar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, de acabar con la impunidad. En definitiva, de asumir las responsabilidades políticas. Tener valentía y no escudarse en la cobardía de leyes de amnistía o perdones espurios.

Memorias. Testimonio de un soldado, escrito por el general Carlos Prats, es un libro de lectura imprescindible. Supera las 600 páginas con letra menuda. Es la historia de una vida dedicada a las fuerzas armadas, desde la juventud. El texto es la historia de un hombre que vivió con pasión cada una de sus vocaciones. La literatura, la diplomática, la política, lo familiar y sobre todo su pasión, la militar. Es un libro donde se reflejan dudas y una visión de la política chilena en tanto militar y más adelante como general en jefe de las fuerzas armadas. Sobresale el estilo literario, escritura clara y, por encima de todo, un conocimiento erudito de la historia de Chile. Es la visión de un militar constitucionalista, apegado a la legalidad y respetuoso del mandato salido de las urnas. Pero en la lectura, hay algo que no cuadra, se destila un marcado antimarxismo y un temor al comunismo.

Ambas circunstancias marcaron su visión de Chile, al menos hasta el triunfo de la Unidad Popular. Pero en los tres años de gobierno popular cambió radicalmente su percepción. Asumió que ni comunistas ni marxistas eran enemigos de Chile. Sus elogios al presidente Allende, cuyo primer encuentro se produce a pocos días de su nombramiento en el entierro de su compañero de armas, René Schneider, asesinado en octubre de 1970, son desde luego dignos de militar cabal.

Carlos Prats amó a su pueblo y entendió que el gobierno de la Unidad Popular estaba comprometido con dicho ideal. Allí nació su lealtad con la vía chilena al socialismo y su presidente, Salvador Allende. No escatimó elogios a la Unidad Popular, ni puso en duda el patriotismo de Luis Corvalán, secretario general del Partido Comunista chileno. Sin embargo, su educación, enmarcada en la Guerra Fría, en el discurso antisubversivo, anticomunista, de miedo y terror, le hicieron dudar. Cualquier proceso político que portase banderas rojas y declamase palabras como imperialismo, reforma agraria, nacionalizaciones o Cuba, levantaba suspicacias.

La grandeza del general Prats radica en su capacidad para *desaprender*, darse cuenta de la maniquea visión presentada por la doctrina de la seguridad nacional. Fue un militar, sí, pero no un golpista. Tampoco un conspirador, ni un traidor. Por consiguiente, reunía todos los requisitos para ser odiado por la derecha chilena y sus correligionarios fascistas. Ellos sí, prendidos del anticomunismo visceral, pensaban en asesinar, desestabilizar y eliminar todo aquello que oliese a democracia, no digamos socialismo. Tras el golpe, exiliado en Buenos Aires, será asesinado cumpliendo órdenes de Pinochet.

No fue el único caso de militar constitucionalista. En América Latina han existido y existen militares que defienden una política de desarrollo democrático, participativo, popular y antiimperialista. No cabe duda han sido una minoría, pero sus nombres resaltan como vidas ejemplares. Liber Seregni en Uruguay, Jacobo Arbenz en Guatemala, apodado «soldado del pueblo»; Edgardo Mercado Jarrín en Perú, Juan José Torres en Bolivia o el ecuatoriano Richelieu Levoyer. Todos, con trayectorias límpidas, apegadas a una carrera militar donde sobresalen sus sueños de lograr la independencia nacional, soberanía política y emancipación de los pueblos latinoamericanos.

De una generación de militares democráticos, salió, en los años ochenta del siglo xx, la propuesta de crear la Organización de Militares por la Integración y Democracia de América Latina y el Caribe (OMIDELAC). Fundada en 1986, se constituyó en la respuesta latinoamericana a la doctrina de la seguridad nacional, la injerencia de Estados Unidos y violación de los derechos humanos cometidos sus «compañeros» de armas. Su programa actual incluye el principio de no intervención y la necesidad de lograr el desarrollo económico con justicia social, en paz y estabilidad democrática. Muchos de ellos han sufrido atentados, otros han sido torturados, asesinados, vilipendiados y separados de las filas. No por ello han dejado de batallar. Son soldados demócratas que denunciaron las torturas, que alzaron la voz para evitar los golpes de Estado, que acudieron a las familias para informar sobre los detenidos y prestaron auxilio a las víctimas.

Sí, hay *otros militares*. Pero sus historias se han invisibilizado. Existe una deuda con ellos.

¿Cómo entender el envío de las cartas del general de la fuerza aérea, Alberto Arturo Bachelet, muerto en la tortura, remitidas a su mujer por alguno de sus custodios? En medio de las sesiones de tortura, hubo soldados que se revelaron, pagaron su osadía. Serían igualmente torturados y expulsados de sus filas.

En la sociedad civil nos encontramos con estadistas, políticos honestos, cuya utopía democrática ha sido servir al país bajo las banderas de la autodeterminación, la soberanía y el anticapitalismo. Cuando han gobernado, las clases populares han sido las grandes protagonistas, impulsando la cultura, las letras, las artes y la dignidad emana de hombres y mujeres. Los programas de salud, educación, construcción de viviendas, trabajo digno, la identidad del pueblo, fueron reforzados. Los nombres sobran. También han sido víctimas y están sometidos a campañas de acoso y derribo. Han sufrido conspiraciones, atentados y, en algunos casos, han sido asesinados.

Vendepatrias han urdido las acciones desestabilizadoras para evitar el avance social de los pueblos de «Nuestra América». Coaligados con militares golpistas, llenos de odio, inquina y sobretodo anticomunismo, han emprendido golpes de Estado, frenando las aspiraciones de democracia y libertad de millones de ciudadanos que claman por ella. Las fuerzas armadas, salvo excepciones, no han estado a la altura de su cometido. Han preferido una posición subordinada y ser la mano ejecutora de las empresas transnacionales, los grupos económicos plutocráticos y las oligarquías terratenientes. Hoy ocupan un lugar secundario en el reparto, pero no por ello han dejado de mantener su ideología anticomunista. Se siguen considerando salvadores de la patria, pero lo hacen en conversaciones privadas, bajo cuerda. De vez en cuando se escapa algún desliz. Pero conspiran y se sienten seguros con sus aliados naturales. Saben que no sufrirán bajas. La prueba de fuego, muchos de quienes empuñaron las armas contra el pueblo, siendo jóvenes oficiales, hoy son capitanes generales, coroneles o generales de estado mayor. Los enemigos están entre nosotros, señalaba Fidel Castro, en su viaje a Chile, teniendo como edecán a un tal Augusto Pinochet. Los golpes de Estado se han reestructurado en el siglo XXI. Presentan otra cara, más «amable», sin tanta parafernalia castrense. Sin embargo, fracasarían si tras ellos no existiese el beneplácito de las fuerzas armadas. Son un poder fáctico. El nuevo golpismo está en marcha y en muchos países ha triunfado. No solo en América Latina, en Europa, Asia, África y Oceanía.

Si la finalidad de los golpes es torcer la voluntad de un pueblo, suprimir derechos y libertades, recibir órdenes del exterior y asumir los postulados de organismos internacionales, bancos, troikas, transnacionales y del complejo industrial-militar, sin rechistar, el golpe constitucional triunfa sin disparar un solo tiro. Ese es el peligro al que nos enfrentamos. Desenmascararlos es labor de todos aquellos que se sientan comprometidos con la libertad, la justicia social, la democracia y el socialismo.

Breve cronología de golpes de Estado en América Latina^[1]

Argentina

- 1930 – El general José Félix Uriburu derroca al presidente Hipólito Yrigoyen. Se inicia la *década infame*, caracterizada por el fraude electoral y la represión política.
- 1943 – *Revolución del '43*. Los generales Arturo Rawson, Pedro Ramírez y Edelmiro Farrell derrocan al presidente Ramón Castillo.
- 1955 – *Revolución Libertadora*. Los generales Eduardo Lonardi y Pedro Aramburu y el almirante Isaac Rojas derrocan al presidente Juan Domingo Perón, que se exilia en Paraguay. Comienza la persecución contra el Peronismo, con fusilamientos, torturas y represión política incluidos.
- 1966 – *Revolución Argentina*. El general Juan Carlos Onganía derroca al presidente Arturo Illia. Illia es expulsado de la Casa de Gobierno mediante el uso de policías antidisturbios.
- 1976 – *Proceso de Reorganización Nacional*. El teniente general Jorge Videla, el almirante general Emilio Massera y el brigadier general Orlando Agosti derrocan a la presidente María Estela Martínez de Perón.

Bolivia

- 1920 – Con apoyo militar, el Partido Republicano derroca al presidente José Gutiérrez Guerra. Bautista Saavedra Mallea asume la presidencia.
- 1930 – Un golpe de Estado destituye al presidente Hernando Siles Reyes y nombra provisoriamente al general Carlos Blanco Galindo. Se inicia un periodo turbulento de presidencias efímeras.
- 1936 – El presidente José Luis Tejada Sorzano es derrocado por el mayor Germán Busch Becerra, reemplazado a su vez por el coronel David Toro-Ruilova.
- 1943 – Sublevación militar contra al general Enrique Peñaranda (elegido en elecciones fraudulentas) lleva al poder al general Gualberto Villarroel López.
- 1946 – Un levantamiento popular hace caer al gobierno de Villarroel López. Este es asesinado. Su cadáver es arrastrado por las calles y colgado.
- 1951 – *El Mamertazo*. Ante el creciente apoyo popular recibido por el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el presidente Mamerto Urriolagoitia ejecuta un «autogolpe» y entrega el poder a una junta militar encabezada por el general Hugo Ballivián Rojas.
- 1964 – El general René Barrientos Ortuño, dirige un golpe de Estado contra el presidente Víctor Paz Estenssoro.
- 1969 – El general Ovando derroca al presidente Luis Adolfo Siles Salinas.

- 1970 – El general Juan José Torres realiza golpe de Estado.
- 1971 – Golpe de Estado del general Hugo Banzer Suárez. Viraje a la ultraderecha.
- 1980 – *El Golpe de la Cocaína*. Apoyado por la CIA, por la dictadura argentina. Financiado por el narcotráfico, el coronel Luis García Meza derroca al frágil gobierno de la presidenta Lidia Gueiler Tejada. Comienza una etapa de persecuciones políticas, torturas y represión.

Brasil

- 1930 – Una junta militar derroca al presidente Washington Luís Pereira de Sousa. El ganador de las elecciones –Julio Prestes– no llega a asumir. La junta militar triunfante nombra presidente a Getúlio Vargas.
- 1964 – Un golpe militar apoyado y financiado por Estados Unidos destituye al presidente João Goulart. La dictadura, responsable de numerosos asesinatos y persecuciones políticas, fundará su propio partido político (la *Aliança Renovadora Nacional*, ARENA) y se extenderá hasta 1985.

Chile

- 1925 – Golpe de Estado.
- 1932 – *República Socialista de Chile*.
- 1938 – *Matanza del Seguro Obrero*. Intento golpista del Movimiento Nacional-Socialista de Chile.
- 1969 – *Tacnazo*. Levantamiento militar en el regimiento de Tacna. Detención del cabecilla, general Roberto Viaux.
- 1973 – Golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet. Suicidio del presidente Salvador Allende. La dictadura militar en el poder se retira en 1990, dejando un saldo de más de tres mil desaparecidos, decenas de miles de presos políticos y otros tantos exiliados.

Colombia

- 1944 – Intento de golpe de Estado contra el presidente Alfonso López Pumarejo.
- 1949 – El presidente Mariano Ospina Pérez cierra el Congreso y adopta medidas de corte dictatorial.
- 1953 – El general Gustavo Rojas Pinilla derroca al presidente Laureano Gómez, que seguía la línea autoritaria de Ospina Pérez.

Costa Rica

1917 – Federico Tinoco derroca al presidente González Flores.

1948 – José Figueres Ferrer se alza en armas contra el gobierno del presidente Teodoro Picado Michalski.

Cuba

1902 – El presidente Tomás Estrada Palma es desplazado de su cargo por el gobierno estadounidense. Las intervenciones militares estadounidense tutelan y dirigen la llamada república neocolonial.

1933 – *Sublevación de los Sargentos*. El presidente Gerardo Machado fuerza una reelección. Es derrocado por una sublevación militar dirigida por Fulgencio Batista.

1952 – Batista asume personalmente el poder, derrocando al presidente Carlos Prío Socarrás. Se abre un periodo dictatorial y sangriento.

1959 – Triunfo de la *Revolución Cubana*. El dictador se exilia en la República Dominicana, lleva consigo una fortuna cercana a los cien millones de dólares.

1962 – *Invasión de Bahía de Cochinos*. Tropas de mercenarios, –apoyados, financiados y entrenados por la CIA y las Fuerzas Armadas Estadounidenses– invaden Cuba. Los invasores son vencidos y capturados.

Ecuador

1906 – Como consecuencia de la *Revolución Liberal* (1895) el general Eloy Alfaro derroca al presidente Lizardo García y se autotitula *Jefe Supremo*.

1911 – *La Hoguera Bárbara*. Golpe de Estado contra el presidente Eloy Alfaro. Asesinado junto a familiares y aliados.

1925 – *Revolución de los Militares Jóvenes*. Sublevación militar contra el presidente Gonzalo Córdova Rivera.

1972 – *El Carnavalazo*. El general Guillermo Rodríguez Lara, Jefe del Ejército, destituye al presidente José María Velasco Ibarra.

1976 – Un triunvirato militar (formado por el almirante Alfredo Poveda y los generales Guillermo Durán y Luis Leoro Franco) reemplaza al general Rodríguez Lara.

2005 – *Rebelión de los Forajidos*. El presidente Lucio Gutiérrez deja su cargo a causa de las presiones por parte de las Fuerzas Armadas, el Congreso y un amplio movimiento civil de protesta.

El Salvador

1931 – El presidente Arturo Araujo es derrocado por un levantamiento oligárquico-militar. Se crea el Directorio Cívico, el general Maximiliano Hernández Martínez, reprime el *Levantamiento Campesino* de 1932. Veinticinco mil muertos. gobernará hasta 1944.

1944-1979 – Periodo de presidencias provisionales, en su mayoría encabezadas por militares.

Guatemala

1898 – José María Reina Barrios, presidente es asesinado. El Ministro de Gobernación y Justicia, Manuel Estrada Cabrera, se autodenomina presidente. Ejerce hasta 1920.

1920 – Levantamiento popular, el Congreso declara «insano» y destituye a Estrada Cabrera

1930 – Una sublevación militar depone y asesina al presidente Baudilio Palma. El general Manuel Orellana Contreras se autoproclama presidente.

1931 – El presidente Jorge Ubico Castañeda asume poderes dictatoriales. Se mantendrá en el poder hasta 1944.

1944 – El general Federico Ponce Vaidés sustituye a Ubico.

1954 – El coronel Carlos Castillo Armas –establecido en Honduras– derroca al presidente Jacobo Arbenz, apoyado por Estados Unidos, mediante la Operación *PBSUCCESS*, organizada por la CIA.

1963 – El general José Miguel Ydígoras es derrocado mediante un levantamiento militar dirigido por el general Enrique Peralta, que asume la presidencia.

1963-1986 – Periodo de dictaduras militares consecutivamente sustituidas.

1993 – *Serranazo*. El presidente Jorge Serrano Elías disuelve el Congreso.

Haití

1941 – El presidente Elie Lescot es derrocado por un levantamiento militar. Franck Lavaud asume la presidencia. Se inicia un periodo de gobiernos interinos o provisionales.

1964 – El presidente François *Papa Doc* Duvalier se autotitula «presidente vitalicio», nombra sucesor a su hijo, Jean-Claude. Comienza una dictadura sangrienta, apoyada en los grupos de choque gubernamentales (los Voluntarios para la Seguridad Nacional, *Tonton Macoutes*) dura hasta 1986.

1986 – El general Henri Namphy lidera un golpe de Estado palaciego contra Jean-Claude *Baby Doc* Duvalier, instalando el «Duvalierismo sin Duvalier».

1988 – El general Namphy es pasado a retiro por el presidente Leslie Manigat. Namphy rechaza la medida y derroca a Manigat.

1988 – El general Prosper Avril derroca, a su vez, al general Namphy.

- 1991 – El general Raoul Cédras –apoyado por el gobierno estadounidense– derroca al presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido elegido democráticamente ese mismo año. Aristide se exilia en Caracas y –posteriormente– en Washington, D.C. Cédras instala una férrea dictadura militar.
- 1994 – Estados Unidos despliega la Operación *Uphold Democracy* («Democracia Duradera») –reglamentada mediante la Resolución 940 del Consejo de Seguridad de la ONU– que restituye (*sic*) a Aristide en el gobierno.

Honduras

- 1924 – El presidente Rafael López Gutiérrez decide permanecer en el poder. Con el apoyo de la United Fruit Company y del presidente Calvin Coolidge, el general Tiburcio Carías Andino destituye al presidente López. Se nombra presidente provisional al general Vicente Tosta Carrasco.
- 1956 – Una sublevación militar derroca al presidente Julio Lozano Díaz. Se instaura un triunvirato compuesto por el general Roque Rodríguez, el coronel Héctor Caraccioli y el mayor Roberto Gálvez Barnes (hijo del expresidente Juan Manuel Gálvez).
- 1963 – El general Oswaldo López Arellano derroca al presidente Ramón Villeda Morales. Gobernara hasta 1971 y en el periodo 1972-1975. Militares ocuparán la presidencia del país hasta 1982.
- 2009 – El presidente Manuel Zelaya Rosales es depuesto por orden del Congreso, ejecutada por las Fuerzas Armadas. Zelaya se refugia en la embajada de Brasil. El presidente del Congreso –Roberto Micheletti– asume la presidencia *de facto*.

México

- 1876 – El general Porfirio Díaz desconoce lo previsto en el «Plan de Tuxtepec». Gobernará hasta 1911.
- 1910 – Se inicia la revolución mexicana.
- 1913 – El presidente Francisco Madero es asesinado por fuerzas del general Victoriano Huerta, que toma el poder con apoyo estadounidense.
- 1917 – El general Venustiano Carranza es elegido presidente, desconociendo los tres mandatos anteriores, emanados de la Convención de Aguascalientes (conferencia entre militares y gobernadores, en plena Revolución mexicana). Presionado por la oposición, abandona la presidencia y es asesinado por las fuerzas del general Álvaro Obregón.

Nicaragua

- 1893 – *Revolución Liberal*. Se instala junta de gobierno integrada por Zelaya, Ortiz, Francisco Baca y Pedro Balladares.
- 1936 – El general Anastasio Somoza García derroca al presidente Juan Bautista Sacasa. Somoza gobernará Nicaragua entre 1937 y 1956.
- 1956 – Magnicidio contra Somoza García, toma el poder su hijo, Luis Somoza Debayle.
- 1967 – Anastasio Somoza Debayle, en el poder hasta 1979.
- 1979 – Triunfo de la *Revolución Sandinista*. El Frente Sandinista de Liberación Nacional derroca a Anastasio Somoza Debayle.

Panamá

- 1941 – Un levantamiento militar destituye al presidente Arnulfo Arias Madrid.
- 1968 – Oficiales, liderados por el mayor Boris Martínez, derrocan –nuevamente– al presidente Arias. Los líderes más relevantes del *Proceso Revolucionario Militar* serán los generales Omar Torrijos Herrera (gobernando durante el periodo 1969-1981) y el general Manuel Noriega (1983-1989).
- 1989 – Estados Unidos invade Panamá. Una fuerza militar estadounidense despliega la Operación *Just Cause* («Causa Justa») y destituye al general Manuel Noriega. Guillermo Endara presta juramento en la base militar estadounidense de Fort Clayton.

Paraguay

- 1904 – *Pacto del Pilcomayo*.
- 1908 – Insurrección militar derroca al presidente Benigno Ferreira.
- 1912 – Golpe de Estado contra el presidente Liberato Marcial Rojas. Asume el poder un triunvirato encabezado por los generales Alfredo Aponte, Mario Uscher y Marcos Caballero Cudas.
- 1936 – El general Rafael Franco derroca al presidente Eusebio Ayala.
- 1936-1954 – Periodo de gobiernos civiles y dictaduras militares.
- 1954 – El general Alfredo Stroessner asume la Presidencia. Se reelige en 1958, 1963, 1968, 1973, 1978, 1983 y 1988.
- 1989 – El general Andrés Rodríguez –consuegro de Stroessner– da un golpe de estado.
- 2012 – El presidente Fernando Lugo es destituido por una farsa de juicio político sumarísimo. La maniobra es desconocida por los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay y Mercosur.

Perú

- 1948 – *Ochenio de Manuel Odría*. El general Manuel Odría derroca al presidente José Luis Bustamante y Rivero. La dictadura se extiende hasta 1956.
- 1968 – *Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armada*, dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, derroca a Fernando Belaúnde Terry.
- 1975 – *Tacnazo*. Relevo militar dentro del *Gobierno Revolucionario*. El general Francisco Morales Bermúdez derroca al general Velasco Alvarado y gobierna hasta 1980.
- 1992 – El presidente Alberto Fujimori disuelve el Congreso y asume plenos poderes, mediante la creación del *Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional*.

República Dominicana

- 1902 – Insurrección militar encabezada por el general Horacio Vásquez Lajara derroca al presidente Juan Isidro Jiménez.
- 1903 – El general Alejandro Woss y Gil derroca al presidente Horacio Vásquez.
- 1903 – Apoyado por el gobierno de Estados Unidos, el general y sacerdote Carlos Morales Languasco destituye al fugaz presidente Woss.
- 1916 – Al resistir las presiones estadounidenses. Por orden del presidente Woodrow Wilson, la República Dominicana queda oficialmente ocupada por fuerzas militares estadounidenses.
- 1930 – Rafael Leónidas Trujillo toma el control del país, gobernando –directa e indirectamente– hasta 1961. Se calcula que este periodo deja un saldo de unos cincuenta mil muertos.
- 1963 – El coronel Elías Wessin y Wessin encabeza un golpe de Estado que destituye al presidente Juan Bosch.
- 1965 – Una insurrección militar –al mando del coronel Francisco Alberto Caamaño– reclama la restitución del presidente Bosch en el poder. Estados Unidos envía cuarenta y dos mil infantes de marina, a fin de evitar una «invasión comunista» en el país. Comienza un periodo marcado por la presencia del antiguo político *trujillista* Joaquín Balaguer, que ocupará la presidencia (mediante elecciones fraudulentas) en los periodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996.

Uruguay

- 1933 – El presidente Gabriel Terra –apoyado por los sectores conservadores católicos– provoca un «autogolpe». disuelve ambas cámaras legislativas. Terra es apoyado por la Policía y el Cuerpo de Bomberos. Gobernará hasta 1938.
- 1941 – Nuevo «autogolpe». El presidente Alfredo Baldomir (cuñado del presidente Terra y Jefe de Policía durante el golpe de estado de 1933) restablece las garantías abolidas por el presidente anterior.

1973 – Las fuerzas armadas llamadas por Juan María Bordaberry, dan golpe de Estado. La dictadura gobernará, mediante presidentes-títeres, hasta 1985.

Venezuela

1908 – El general Juan Vicente Gómez derroca al presidente Cipriano Castro.

1945 – *Revolución de Octubre*. Una alianza entre las fuerzas armadas y el partido Acción Democrática derroca al presidente Isaías Medina en instala a Rómulo Betancourt en el poder.

1948 – Una junta militar integrada por los generales Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez derroca al presidente Rómulo Gallegos.

1958 – Una junta militar encabezada por el vicealmirante Wolfgang Larrazábal derroca al dictador Marcos Pérez Jiménez.

1992 – Levantamiento militar fallido, encabezado por el teniente coronel Hugo Chávez.

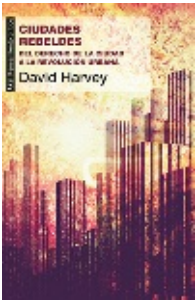
2002 – Sublevación cívico-militar. Asume la presidencia el dirigente empresarial Pedro Carmona Estanga, fracasa. El presidente constitucional Hugo Chávez Frías, reasume la presidencia.

[1] Cronología realizada en colaboración con Eduardo Fort.

Bibliografía mínima

- BELTRÁN, V. R., *El papel político y social de las fuerzas armadas en América Latina*, Caracas, Editorial Monte Ávila, 1970.
- BORÓN, A., *Estado, capitalismo y democracia en América Latina*, Buenos Aires, Ediciones CLACSO, 2003.
- CAVALLA, A., *Geopolítica del fascismo dependiente*, México, Ediciones Casa de Chile, 1977.
- COMBLIN, J., *El poder militar en América Latina*, Salamanca, Sígueme, 1978.
- COSTA PINTO, L. A., *Nacionalismo y militarismo*, México, Editorial Siglo XXI de México, 1974.
- DINGES, J., *Operación Cóndor. Una década de terrorismo internacional en el Cono Sur*, Santiago Chile, Ediciones B, 2004.
- GARCÉS, J. E., *Soberanos e intervenidos. Estrategias globales, americanos y españoles*, Madrid, Siglo XXI de España, 2012.
- GARCÍA, P., *El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las juntas militares*, Madrid, Alianza Editorial, 1995.
- GOLBERY DO COUTO E SILVA, A. (general), *Geopolítica do Brasil*, Río de Janeiro, José Olympio, 1967.
- MALAPARTE, C., *Técnica del golpe de Estado*, Barcelona, José Janés editor, 1958.
- MARTÍN BARÓ, I. (selección), *Psicología social de la guerra*, San Salvador, Ediciones UCA, 1990.
- MERCADO JARRÍN, E., *Seguridad, Política, Estrategia*, Lima, Schapire editor, 1974.
- O'DONNELL, G., *Modernización y autoritarismo*, Buenos Aires, Paidós, 1972.
- PRATS GONZÁLEZ, C., *Memorias. Testimonio de un soldado*, Santiago, Ediciones Pehuén, 1985.
- ROUQUIÉ, A., *El estado militar en América Latina*, México, Editorial Siglo XXI de México, 1984.
- STEPAN, A., *Brasil: Los militares y la política*, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1974.
- TAPIA VALDES, J., *El terrorismo de estado. La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur*, México, Editorial Nueva Imagen, 1980.
- VARAS, A. (coord), *La autonomía Militar en América Latina*, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1988.
- VENERONI, H., *Estados Unidos y las fuerzas armadas de América Latina. La dependencia militar*, Buenos Aires, Ediciones Periferia, 1973.

AKAL / Otros títulos publicados



[CIUDADES REBELDES](#)

David Harvey

978-84-460-3862-7



[EL AÑO QUE SOÑAMOS PELIGROSAMENTE](#)

Slavoj Žižek

978-84-460-3849-8



[VIVIENDO EN EL FINAL DE LOS TIEMPOS](#)

Slavoj Žižek

978-84-460-3811-5



[LA INVENCION DEL PUEBLO JUDÍO](#)

Shlomo Sand

978-84-460-3810-8